



2007

3

2007

Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo



REVISTA DE
**ESTUDIOS
REGIONALES**
Y MERCADO DE TRABAJO



ISSN 1669 9084



COMITÉ EDITORIAL

COORDINADOR NACIONAL DE SIMEL

AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Agustín Salvia

Instituto de Investigaciones

“Gino Germani”

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

CUYO Jorge Olguín

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Económico-Sociales

Universidad Nacional de San Luis

LA PLATA Amalia Eguía

Centro Interdisciplinario de Metodología de la Investigación Social (CIMECS), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP

NOA María Elena Marcoleri

Instituto de Investigaciones en

Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Jujuy

PAMPEANA Nora Luc Prugent

Instituto de Investigaciones Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

y Estadística

Universidad Nacional de Rosario

NEA Ana María Pérez

Centro de Estudios Sociales-Rectorado

Universidad Nacional del Nordeste

PATAGONIA María Rosa Cicciari

Unidad Académica Caleta Olivia

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

CONVENIO SIMEL-CEUR Elsa Laurelli

Centro de Estudios Urbanos Regionales

CONICET

CONSEJO HONORARIO

Jean Rêvel Mouroz (Francia)

Elsa Laurelli (Argentina)

Richard Sennett (Reino Unido)

Pierre Veltz (Francia)

Alian Lipietz (Francia)

Claudio Egler (Brasil)

Alejandro Rofman (Argentina)

DIRECTORA DE LA REVISTA

NODO-NOA

María Elena Marcoleri

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Jujuy

COORDINADORA EDITORIAL

Marta Panaia

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”,

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de

Buenos Aires

SIMEL

El Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) tiene por objetivo apoyar la planificación de políticas públicas y privadas en materia de trabajo y empleo, a través de la provisión y difusión de estudios sobre la dinámica de los mercados laborales regionales y su impacto a nivel socioeconómico. El SIMEL está conformado por una Red Interuniversitaria de centros de investigación de Universidades Nacionales de las diferentes regiones del país que estudian la problemática económica y sociolaboral de sus respectivas áreas de influencia. Los estudios y los datos reunidos por cada uno de los nodos participantes se encuentran disponibles para su consulta y aprovechamiento.

Sede SIMEL - Coordinación

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”

J. E. Uriburu 950 6to piso, (1114) Ciudad de Buenos Aires.

E-mail : simel@fsoc.uba.ar | www.simel.edu.ar

CEUR

El Centro de Estudios Urbano Regionales (CEUR) es un centro interdisciplinario de investigación, docencia y asistencia técnica fundado en 1961 y asociado desde el 2003 al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus líneas de trabajo se orientan a estudiar los diversos problemas vinculados al desarrollo urbano y regional de Argentina y América Latina, en el contexto de procesos de orden mundial. Su plantel de investigadores ha ido transfiriendo a la sociedad los resultados de sus trabajos, a través de tareas docentes, seminarios y publicaciones.

Sede CEUR

Saavedra 15 6to piso, Ciudad de Buenos Aires- Argentina

E-mail: ceur@fibertel.com.ar

www.conicet.gov.ar/web/ceur/index.php

EDITOR RESPONSABLE

CIPSA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL AMBIENTE

Matheu 649, 2° piso, depto 10, Ciudad de Buenos Aires

NÚMERO 3

AÑO 2007

ÍNDICE

Recuperación económica y precariedad laboral en la Argentina. Una mirada regional	3
<i>Laura Golovanevsky y Jorge Paz</i>	
Transformaciones en el empleo y el territorio: el caso San Luis	33
<i>Mónica Bussetti</i>	
Jóvenes excluidos: límites y alcances de las políticas públicas de inclusión social a través de la capacitación laboral	51
<i>Agustín Salvia y Ianina Tuñón</i>	
Competitividad y desarrollo tecnológico en la región cordobesa de Río Cuarto. Las pequeñas y medianas empresas y la participación de los ingenieros	69
<i>Vanina Inés Simone</i>	
El mercado de trabajo en el Gran La Plata durante los años noventa	93
<i>Amalia Eguía y Juan Ignacio Piovani</i>	
Los cambios en el proceso de producción de algodón en el Chaco en las últimas décadas y sus consecuencias en las condiciones de vida de minifundistas y trabajadores vinculados	111
<i>Inés Liliana García</i>	
Características de la estructura ocupacional en la Región NEA en el período 2003-2006	135
<i>Blanca Sobol</i>	
Economía, desocupación y pobreza en Catamarca y Tucumán (1980-2002) ...	157
<i>Ariel Osatinsky</i>	
San Luis: del empleo industrial al refugio estatal. Cambios y desplazamientos en la estructura ocupacional	179
<i>Mónica Páez</i>	
La pobreza: en el encuentro del ordenamiento territorial y la lucha contra la desertificación	191
<i>Elena Abraham, Elsa Laurelli, Elma Montaña, Gabriela Pastor y Laura María Torres</i>	
Hacia una transformación económica de la Patagonia Austral. La actividad turística en la nueva dinámica productiva y su impacto en el empleo	211
<i>Daniel Schinelli y Carlos Vacca</i>	

Diseño y producción gráfica:

Beatriz Burecovics

Leticia Stivel

Impresión:

CyS Impresiones Offset

Dirección Nacional del Derecho de Autor,

Expte. 490712

Queda hecho el depósito que marca la ley N° 11.723

ISSN 1669-9084

Registro de Propiedad Intelectual en trámite

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

Diciembre de 2006

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PRECARIEDAD LABORAL EN LA ARGENTINA. UNA MIRADA REGIONAL

*Laura Golovanevsky
Jorge Paz*

INTRODUCCIÓN

Luego de una larga recesión iniciada en 1998, entre fines de 2001 y principios de 2002 la economía argentina sufrió una de las crisis más graves de su historia. El Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 16% en el período que va desde enero de 2001 al mismo mes de 2002. Como reflejo de esta retracción, el mercado de trabajo también registró indicadores con valores verdaderamente inusitados: niveles de desempleo abierto muy elevados, una igualmente elevada subocupación visible y una fuerte precariedad de las ocupaciones asalariadas.

Después de que pasara lo más agudo de la crisis, y junto con un cambio de rumbo en la política económica, se empezó a observar una fuerte y sostenida recuperación. Durante el período 2003-2006 el PBI creció a una velocidad pocas veces registrada en la historia económica del país y por un tiempo verdaderamente prolongado: a lo largo de casi cuatro años se alcanzaron tasas anuales de crecimiento en muchos casos superiores al 10%. Este panorama, como sucedió durante el período recesivo –aunque con signo opuesto–, tuvo su correlato en el mercado laboral. Uno de los indicadores tradicionales que expresan este proceso es la tasa de desocupación, la cual cayó de un 20,4% en el primer trimestre de 2003 a 9,8% en el primer trimestre de 2007. Otros indicadores de empleo muestran idéntico comportamiento. Por ejemplo, en los mismos períodos la tasa de subocupación pasó del 17,7% al 9,3%. Y es posible seguir proporcionando valores que, como estos, indican una importante recuperación del mercado laboral.

Sin embargo, y a pesar de los vaivenes del ciclo económico, todavía son pocos los estudios que analizan el efecto de la recuperación reciente sobre el mercado de trabajo. En este sentido, la presente investigación se concentra en el período 2003-2006, intentando aportar evidencia empírica para responder a

Los autores agradecen los comentarios de un árbitro anónimo a una versión anterior del presente trabajo.

Laura Golovanevsky pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de Jujuy.

Jorge Paz pertenece al conicet y a la Universidad Nacional de Salta.

los siguientes interrogantes: ¿Cómo impactó la última recuperación económica en la precariedad laboral en la Argentina? Ese impacto, ¿tuvo simetría regional o fue más notorio en algunas regiones que en otras? Si la simetría no se observó, entonces, ¿cuáles fueron las regiones en las que la precariedad disminuyó más, si es que lo hizo? ¿Cuáles fueron las principales razones del cambio?

Para responder a estas preguntas se usan datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) y el análisis se centra en variables referidas a la precariedad de los puestos de trabajo, medida como el registro de la fuerza de trabajo. Se computan indicadores descriptivos por región estadística y luego se descompone la fuente de los cambios registrados, con el propósito explícito de detectar un efecto región en las diferencias encontradas. En el siguiente apartado se revisan los antecedentes referidos a la temática central de este trabajo. A continuación, desde una perspectiva teórica, se discuten algunas de las variables que se utilizarán. Luego, se explica la metodología aplicada. Finalmente, se presentan los principales resultados.

ANTECEDENTES

Estudios previos, realizados poco tiempo después de iniciada la reciente recuperación (por ejemplo, Beccaria, Esquivel y Mauricio, 2005), muestran que los indicadores del mercado laboral arrojaban hacia 2004 cifras similares a las registradas en 1998, año en el cual finalizó la última expansión previa a la gran crisis 2001-2002. Al respecto, Salvia, Fraguaglia y Metlika (2005) se preguntan cómo está afectando la presente recuperación económica al funcionamiento del mercado de trabajo, en términos de calidad del empleo y estructura de la desocupación. Para dar respuesta a estos interrogantes, parten de la hipótesis de que el mercado de trabajo está segmentado y elaboran una serie de categorías ocupacionales de empleo y desempleo que permiten abordar el análisis de un modo alternativo al tradicional. Identifican así dos segmentos en relación con los ocupados y dos en relación con los desocupados, a saber: empleos en el sector primario,¹ empleos en el segmento secundario,² desempleo reciente³ y desempleo estructural.⁴

1 Considerando como tales a los que se realizan “en el segmento más moderno y dinámico del mercado de trabajo, siendo los mismos de alta calidad por contar con estabilidad, ingresos por sobre los mínimos de subsistencia, aportes a la seguridad social y protección legal” (Salvia, Fraguaglia y Metlika, 2005, p. 13). Dentro de estos, diferencian empleos plenos y parciales.

2 Definen como tales a los que se desarrollan “en el segmento más atrasado, escasamente regulado y más competitivo del mercado de trabajo”; en general, se trata de empleos “sin protección legal ni social, trabajos con ingresos por debajo de las necesidades de subsistencia, o incluso, subocupaciones que se desarrollan en el marco de los programas de empleo público” (Salvia, Fraguaglia y Metlika, 2005, p. 13). En este caso diferencian entre empleos precarios, trabajos de indigencia y empleos asistidos.

3 Incluye a quienes registran menor tiempo de desempleo (tengan o no experiencia laboral previa).

4 Se refiere a los desocupados con mayor tiempo de desempleo o bien a los desalentados.

Utilizando microdatos de la EPHC para el período que va desde el tercer trimestre de 2003 al primer trimestre de 2005 para el total de aglomerados urbanos del país, estos autores concluyen que, si bien el crecimiento persistente y elevado del PBI dio un fuerte impulso a la demanda laboral, el empuje inicial parece haberse diluido, hecho que se explica, en gran medida, por la caída en la elasticidad empleo-producto. Esta última, en la medida en que el efecto inicial va reduciéndose, parece acercarse a los niveles históricos usuales en la estructura productiva argentina.

Entre los principales resultados de este estudio figura tanto la constatación de la reducción de la importancia relativa de los empleos en el segmento secundario (del 43% al 40%), como la del incremento en la participación del empleo en el denominado segmento primario del mercado de trabajo (del 38% al 45%). Al crecer el empleo en el segmento primario, estaría reduciéndose el subempleo de calidad y el desempleo de tipo más friccional, pero, como contrapartida de esto, “la participación relativa del desempleo estructural, el desaliento y el empleo precario casi no varió” (Salvia, Fraguiglia y Metlika, 2005, p. 14). Pese a la evolución favorable de los niveles de empleo y desempleo, la persistencia del desempleo estructural y de problemas laborales particularmente en el segmento secundario lleva a concluir que no se trata de problemas transitorios, ni que podrán ser resueltos sólo por el crecimiento económico. Esto último resulta particularmente importante en el contexto de la presente investigación.

En el mismo sentido, Marticorena (2005) encuentra que la recuperación de la economía, si bien impacta en el nivel de ocupación, no resuelve el carácter estructural del desempleo, a la vez que crece la precariedad.

Beccaria, Esquivel y Mauricio (2005) consideran que la dificultad de reducir los niveles de precariedad registrados durante la recuperación económica posterior a 2002 se debe al fuerte crecimiento que había registrado este fenómeno en la década de los noventa. Estos autores encuentran que, a pesar de la falta de dinamismo en la creación de empleos de calidad, se produjo un restablecimiento en términos de empleo y de ingresos de los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad. Reconocen, además, que el tiempo que se requiere para disminuir los niveles de precariedad vigentes es mucho más extenso que el período examinado por ellos en esa investigación.

PRECARIEDAD LABORAL: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA⁵

Existen distintas definiciones de precariedad laboral, pero, en general, todas ellas tienen un aspecto en común: enfatizan la inestabilidad y la carencia de protección social.⁶ Existen también distintas formas de contratación que dan

⁵ Este apartado se basa en Golovanevsky, 2006.

⁶ Beccaria, Carpio y Orsatti (1999) caracterizan a la precariedad laboral por los siguientes aspectos: falta de

lugar a condiciones de precariedad laboral: contratos temporarios en el sector privado, contratos a través de agencias de colocación, período de prueba, programas públicos de empleo, trabajo a domicilio y subcontratación (Beccaria, Carpio y Orsatti, 1999). En general, todas estas formas que asume la relación laboral se hicieron más frecuentes en la Argentina durante los años noventa.

Si bien se tiende a contemplar el trabajo regular estable asalariado como seguro y a considerar otras formas de trabajo como precarias en la medida en que se desvían de esta norma, se debe considerar que existen varias dimensiones dentro de la precariedad. La primera tiene que ver con el grado de certidumbre de la continuidad del trabajo: son precarios aquellos trabajos que tienen un horizonte a corto plazo o cuyo riesgo de pérdida es elevado. La segunda dimensión se vincula con el control sobre el trabajo: cuanto menos controle el trabajador las condiciones laborales, los salarios o el ritmo de trabajo (ya sea individual o colectivamente) más inseguro y más precario será el trabajo. Una tercera dimensión tiene que ver con la protección, tanto en términos de cobertura social como de lucha contra la discriminación, contra los despidos improcedentes o contra las condiciones de trabajo inadecuadas. La cuarta y última –pero no por ello menos importante– incorpora la cuestión de los ingresos, teniendo en cuenta los trabajos con bajas remuneraciones, asociados a la pobreza y a la inserción social insegura, y la variabilidad de los ingresos (Rodgers, 1989).

Identificar las formas precarias de trabajo no es una tarea sencilla, puesto que, como acabamos de ver, el concepto de precariedad incorpora múltiples elementos que, en ocasiones, pueden llevarlo, inclusive, a resultar ambiguo. Por ejemplo, un trabajo inestable no necesariamente tiene que ser precario. Aquí entran también en juego las regulaciones nacionales vigentes en cada caso. Empleos temporarios y a tiempo parcial, e inclusive el empleo en el servicio doméstico, suelen excluir legalmente a los trabajadores de algunos o todos los beneficios sociales (Marshall, 1992). Justamente, en los trabajos precarios los diferentes factores se combinan, dando lugar a que los límites del concepto sean, en alguna medida, arbitrarios.

El carácter precario de las relaciones laborales, además de estar asociado a ingresos y niveles de productividad más bajos, implica que el trabajador carece de protección cuando abandona el mercado de trabajo –al enfermarse o envejecer– y de acceso a los mecanismos de sindicalización y negociación colectiva para asegurar el ejercicio de sus derechos laborales fundamentales (Neffa y Pérez, 1999). También implica la existencia de condiciones laborales tales como una mayor intensidad y extensión –muchas veces autoimpuestas– de la jornada

contrato o contrato a corto plazo; inexistencia de aportes al sistema de seguridad social; empleador no fácilmente identificable; lugar de trabajo que no coincide con el domicilio del empleador; negociación individual del ingreso, sin referencia a la negociación colectiva; no percepción de beneficios sociales de la ocupación, como aguinaldo, vacaciones, asignaciones familiares, etc.; carencia de afiliación sindical y condiciones de higiene y seguridad poco satisfactorias.

de trabajo (Sala, Golovanevsky y Marcoleri, 2002). Desde la óptica de la seguridad social basada en el modelo bismarckiano, esta forma de ajuste del mercado de trabajo incrementa la exclusión social tanto presente como futura.

La cuestión de la precariedad aparece vinculada al debate sobre flexibilización laboral. Las mayores presiones competitivas entre las empresas y, en algunos casos, la incapacidad de estas para adaptarse por otras vías llevan a trasladar estas presiones al mercado de trabajo. Las empresas que respetan las normas legales vigentes se ven en peores condiciones para competir que las que no lo hacen, y esto genera un incentivo hacia el uso de formas irregulares de empleo. Por otro lado, el deseo de evitar los costos de la protección social no es nuevo; lo que ocurre es que, en condiciones de alto desempleo y debilitamiento sindical, este deseo es más fácil de llevar a la práctica. Más aún, una perspectiva histórica permite aseverar que las formas de trabajo precario rara vez han estado ausentes de los sistemas de empleo asalariado (Rodgers, 1989).

La desprotección social que implica el trabajo “en negro” no sólo afecta a los trabajadores que dejan de gozar de los beneficios sociales sino que también produce serios problemas de financiamiento en todo el sistema de seguridad social. Los menores ingresos reducen la calidad de las prestaciones brindadas. Además, debido al menor número de afiliados, los sindicatos pierden poder de negociación, lo cual incrementa los niveles de desprotección de los asalariados.

Además de la falta de aportes jubilatorios entre los asalariados, se deben considerar las características particulares del sector cuentapropista, que tradicionalmente presenta menores niveles de cobertura (Roca y Moreno, 1999). En muchos casos, el trabajo por cuenta propia se incluye en las clasificaciones en el rubro de trabajo atípico, pero se debe tener en cuenta la gran heterogeneidad existente dentro de esta categoría. Así, por ejemplo, se detectan situaciones en las que el cuentapropismo está encubriendo en realidad relaciones asalariadas, con lo cual, de esta forma, el empleador evita los costos de la protección social.

De esta manera, se conforma un amplio segmento de población en condiciones de vulnerabilidad, con muy bajos niveles de cobertura de beneficios sociales básicos y con una perspectiva de escasos o nulos ingresos cuando se retire del mercado de trabajo.

LA PRECARIEDAD LABORAL ANTES DE LA RECUPERACIÓN⁷

En este trabajo se tomará como indicador de precariedad del puesto laboral la falta de descuentos –o aportes– jubilatorios. El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) realizado en noviembre de 2001 permite formarse una idea bien clara de las disparidades existentes en la Argentina en lo que a aportes ju-

7 Este apartado se basa parcialmente en Golovanevsky, 2006.

bilatorios se refiere. Hacia esa fecha, seis de cada diez ocupados hacía aportes o tenía descuentos jubilatorios, aunque con marcadas diferencias tanto entre jurisdicciones como entre categorías ocupacionales.⁸ Así, por ejemplo, en el Nordeste Argentino (NEA), registraban aportes menos de la mitad de los ocupados (47,7%) y en el Noroeste Argentino (NOA), un poco más de la mitad (50,4%). El valor máximo correspondía a la Patagonia, donde alrededor de dos tercios de los ocupados hacía aportes. Por su parte, las diferencias según categorías ocupacionales mostraban que la mejor situación relativa en cuanto a descuentos o aportes jubilatorios era la de quienes trabajaban como obreros o empleados, con siete de cada diez asalariados (véase el Cuadro 1 en el Anexo I).

Por su parte, alrededor de las dos terceras partes de los patrones declaraban hacer aportes jubilatorios, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia los aportes se reducían a cerca de uno de cada tres de ellos. Peor aún era la situación de los trabajadores familiares: sólo el 30% recibía remuneración y aproximadamente la cuarta parte de ese porcentaje tenía aportes jubilatorios. Dentro de las distintas categorías ocupacionales también se observaban grandes diferencias regionales, lo que se vincula a las estructuras económicas propias de cada provincia. Así, alrededor del 80% de los obreros o empleados de Santa Cruz y Tierra del Fuego tenían descuentos jubilatorios, mientras que en Misiones, Formosa y Córdoba, por ejemplo, se registraba un tercio de obreros o empleados que carecía de descuentos jubilatorios. En la Región Metropolitana a las tres cuartas partes de los obreros se les realizaban dichos descuentos; esta alta proporción se explica, en gran medida, por el empleo privado en el segmento de firmas de mayor tamaño.

La fotografía que proporciona el censo se puede complementar con un examen de la trayectoria que siguió la precariedad laboral en los años previos al período bajo análisis. Dicho indicador se analiza según regiones, sexo, grupos de edad y años de instrucción. Cabe aclarar que la fuente de datos utilizada en esta sección (SITEAL-IIPE) incluye también en la categoría de asalariados precarios a los beneficiarios de planes de empleo, por lo que, además de las diferencias usuales entre el CNPV y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cabría esperar discrepancias adicionales atribuibles a ese criterio. Por otro lado, por esa misma razón la precariedad de los asalariados resulta sobreestimada.⁹

8 Se debe tener en cuenta que, en el caso de los asalariados, son los censados quienes manifiestan si tienen descuentos jubilatorios, lo que no indica necesariamente que tales descuentos sean en efecto aportados por sus empleadores.

9 Al comparar la información con las cifras de empleo no registrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (Cuadro 1.1.118 de sus estadísticas accesibles *on line*), las diferencias son mínimas. En cambio, sí se observan diferencias importantes con las estimaciones de Marshall (2003), que se incorporan en el Cuadro 2 del Anexo con fines comparativos, y que excluyen beneficiarios de planes de empleo y servicio doméstico. De allí se puede concluir que la inclusión de los beneficiarios de planes sociales y del servicio doméstico como asalariados implica una sobreestimación de la precariedad laboral de los asalariados de casi seis puntos porcentuales en los años 2000 y 2001 y de algo más de diez puntos en los años 2002 y 2003.

La precariedad laboral crece en todo el período para el total país, pasando de aproximadamente un tercio de los asalariados hacia 1996 a casi el 45% en 2003 (Cuadro 2).¹⁰ Pese a las reducciones en los aportes patronales y a la oferta de contratos temporarios más flexibles a partir de la reforma laboral de 1995, el empleo no protegido siguió creciendo durante la segunda mitad de los noventa, y también durante la incipiente recuperación de finales de 2002 y todo el año 2003 (Marshall, 2004).

Entre las estrategias para reducir costos laborales, Marshall (2004) señala comportamientos diferenciales según el tamaño de las empresas. Mientras que las firmas medianas y grandes apelaron a los contratos flexibles surgidos a partir de 1995,¹¹ las empresas más pequeñas recurrieron directamente, y de manera creciente, al empleo no protegido. Para el año 2003, en el sector de firmas más pequeñas más del 70% de empleados asalariados no estaba registrado en el sistema de seguridad social, frente al 33% en las firmas medianas y al 14% en las firmas grandes. Como consecuencia de esto, las microfirmas, que en 2003 representaban el 33% del empleo en el sector privado, explicaban el 54% de empleados sin protección (Marshall, 2004). Al parecer, parte de este fenómeno se debe a que las microempresas surgieron en muchos casos como resultado del proceso de subcontratación y externalización en ciertos sectores (por ejemplo, en empresas públicas privatizadas, especialmente del sector energético y de telecomunicaciones).

Al focalizarnos sobre la precariedad laboral y definirla como falta de descuentos jubilatorios, ponemos el énfasis en un aspecto de las transgresiones a las leyes laborales. Pero la no registración no es el único tipo de violación de dichas leyes. El problema es la falta de control y la negligencia por parte de la policía del trabajo así como las bajas penalidades por incumplimiento. Todos estos han sido rasgos característicos de la administración laboral en la Argentina. Una muestra es el escaso número de inspectores que poseen los organismos de control: en el año 2000, aproximadamente un inspector por cada 14 mil trabajadores, considerando inspectores federales y provinciales (Marshall, 2004). Además, los controles suelen hacerse sobre las empresas ya registradas y dejan de lado a quienes directamente llevan a cabo actividades sin ningún tipo de inscripción en los organismos pertinentes, con lo cual generan situaciones de competencia desleal y permiten que el incumplimiento más flagrante persista sin inconvenientes.¹²

10 En las encuestas en hogares la participación en grandes firmas y en el sector público resulta sobreestimada porque dichas encuestas son exclusivamente urbanas y en las zonas rurales hay poca presencia de grandes empresas y de empleados del sector público (Gasparini, 2005).

11 Bertranou, Grushka y Rofman (2001) también vinculan el crecimiento de la proporción de asalariados sin descuentos jubilatorios al incremento de las denominadas modalidades promovidas, impulsadas durante los noventa para combatir el desempleo.

12 Un caso prototípico podría ser el de las ferias o similares, que evitan las inspecciones mediante el simple expediente de levantar los puestos cuando se presenta algún tipo de control. En algunos casos, lejos de tratarse de vendedores ambulantes que obtienen así su diaria supervivencia, aparecen involucrados agentes económicos de peso que por esta vía comercializan productos que no tendrían cabida en circuitos más

En definitiva, el empleo no protegido creció, independientemente de los cambios en las regulaciones legales y en los costos laborales no salariales e independientemente también de la evolución del nivel de actividad económica.¹³ La crisis 2001-2002 parece haber sido el detonante de un crecimiento aún más acelerado de la precariedad. En particular, hacia 2002 en el NOA y el NEA algo más de la mitad de los asalariados estaba empleada en condiciones precarias.

Asimismo, se aprecian fuertes diferenciales de precariedad según diversas características de los trabajadores. Así, se puede ver que es mayor entre las mujeres y que las diferencias según el género se agudizaron con el comienzo de la recesión en 1998. También varía por grupos de edad: los jóvenes de entre 15 y 24 años son quienes sufren mayores niveles de precariedad. En algunas regiones, como la Pampeana, el NOA y el NEA, el grupo etario de entre 35 y 49 años experimentó marcados incrementos de la desprotección, mayores que el que se observa en los trabajadores más jóvenes.

Una variable que muestra fuertes diferencias de precariedad es la educación. La falta de aportes jubilatorios se correlaciona con los años de instrucción: a menos años de educación, mayor desprotección. La precariedad laboral llega a triplicarse entre quienes tienen hasta 5 años de instrucción respecto de la de quienes tienen 13 años o más. En el marco de una desprotección creciente, en el cual ni la prolongada escolaridad ha quedado afuera de este fenómeno, el grupo de asalariados con 10 a 12 años de instrucción fue el que sufrió la mayor precarización: entre 1995 y 2003 los asalariados sin descuentos jubilatorios en ese grupo se duplicaron. En la región NEA el proceso reviste tal gravedad que entre 2001 y 2003 el porcentaje de asalariados precarios pasó del 67% al 85% entre quienes tenían hasta 5 años de instrucción. En esta región, incluso los asalariados con 13 años y más de instrucción vieron duplicarse los niveles de desprotección entre 1995 y 2003. Peor aún resultó la situación de este grupo en la Patagonia, donde el porcentaje de asalariados de ese sector sin descuentos jubilatorios pasó del 6% en 1995 al 17% en 2003. Es decir, no sólo la mayor educación no garantizó a los trabajadores que quedaran afuera del proceso de precarización, sino que en algunas regiones el grupo con ese nivel de instrucción vio crecer su desprotección más que el resto (tal vez por partir de niveles de protección mucho más elevados).

Paz (2004) encuentra que los niveles más elevados de desprotección corresponden a trabajadores jóvenes, a personas con bajo nivel educativo, a quienes trabajan en el servicio doméstico y en el sector informal¹⁴ y a quienes provienen de estratos sociales bajos. Esta sería la paradoja de la protección social: está me-

formales (manteniendo a su vez trabajadores en situación irregular). El caso de La Salada, en Buenos Aires, parece ser un buen ejemplo en este sentido.

¹³ Paz (2004) encuentra resultados en el mismo sentido, con paneles de EPH, entre 1995 y 2002. En ese período la tasa de protección social entre los asalariados se redujo del 59,6% al 50,7 por ciento.

¹⁴ Definido de acuerdo con la metodología de López y Monza (1995).

nos difundida entre los grupos que más requieren de ella, sea por su nivel de ingresos, sea por su mayor probabilidad de tener una inserción laboral inestable o de transitar por numerosos episodios de desempleo a lo largo de su vida activa.

Además de considerar la incidencia de la desprotección, Paz (2004) analiza su duración media. Y encuentra que en gran medida el aumento en la desprotección responde a cambios en la duración media; es decir, no se debe a un mayor ingreso de trabajadores a ese estado sino a una pronunciada reducción en la tasa de salida de los empleos desprotegidos: mientras que hacia 1995 un tercio de los trabajadores en dichos empleos había conseguido seis meses después salir de esa situación y pasar a empleos protegidos, hacia 2002 esto ocurría sólo para un 15% de los trabajadores. A esto se agrega que el comportamiento de las tasas de entrada y de salida de la desprotección parece haberse independizado del ciclo económico.

Gasparini (2005), basándose en una metodología de descomposiciones microeconómicas, analiza si los cambios en la tasa promedio de desprotección se deben a cambios en la estructura del empleo o a cambios en el interior de cada grupo. Según este estudio, ser varón incrementa la probabilidad de tener acceso a una jubilación, probabilidad que también crece con la edad y con el nivel educativo del trabajador. También es más probable el acceso a una jubilación para quien trabaja en empresas grandes o en el sector público y para quien tiene mayor antigüedad en el empleo, mientras que tener un empleo *part time* reduce esa probabilidad. Finalmente, al descomponer la reducción de 8,3% en el porcentaje de asalariados con descuentos jubilatorios entre 1992 y 2001, Gasparini (2005) encuentra que menos de un punto se explica por cambios en la estructura del empleo. Es decir, el fenómeno más fuerte ha sido el de un movimiento generalizado hacia la desprotección.

LA PRECARIEDAD LABORAL LUEGO DE LA RECUPERACIÓN

Para evaluar la evolución reciente de la precariedad laboral y sus diferencias regionales, se recurrió a los indicadores disponibles en la principal fuente de datos de este estudio, la Encuesta Permanente de Hogares en su modalidad Continua (EPHC). No se realizan aquí comparaciones entre los niveles registrados por la EPH en sus dos modalidades, Puntual (EPHP) y Continua (EPHC), porque los cambios metodológicos implementados en este programa impiden cotejarlas de manera directa. Tratando de superar estas dificultades, Lépore, Roca, Schachtel y Schleser (2006) realizan lo que denominan una “armonización” de ambas series a fin de ganar comparabilidad, con datos del Aglomerado Gran Buenos Aires para el período 1990-2005, restringiendo su análisis al empleo privado.¹⁵

15 Entre los principales cambios que afectan a la medición del empleo asalariado, Lépore, Roca, Schachtel y Schleser (2006, p. 129) mencionan “la modificación del criterio de medición de la condición de actividad,

Observan que la tasa de empleo no registrado “armonizado” crece en el período 1991-1994, con un descenso en octubre de 1994 y, luego, con un crecimiento cada vez mayor, hasta que se ubica en octubre de 1998 en el 38,4% (lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto a octubre de 1994) y se estabiliza, después, en torno a ese valor. Con la salida de la convertibilidad, el no registro crece nuevamente y alcanza el 43,2% hacia el cuarto trimestre de 2004. A partir de ese momento, comienza la evolución descendente, que llega en el cuarto trimestre de 2005 a una tasa de 39,8%, un valor cercano al de los últimos cinco años de la convertibilidad. Por lo tanto, la comparación intertemporal de la serie armonizada parece suministrar evidencia de que la situación reciente del no registro se acercaría a los valores de la segunda mitad de los años noventa. Pero, a diferencia de lo que ocurría en aquel momento, la reducción en el empleo no registrado ahora se estaría produciendo en el marco de un proceso de creación de empleo, un promisorio indicio de lo que podría ser un punto de inflexión en la tendencia que muestra el registro del empleo asalariado en el sector privado desde los comienzos de la década de los noventa. De todos modos, se requiere un mayor número de observaciones para convalidar esta conclusión.

Retomando el análisis que es objeto de esta investigación, en esta sección se ha considerado conveniente trabajar sólo con asalariados entre los 25 y 59 años de edad, por la importancia que este grupo tiene sobre el bienestar de la sociedad como un todo. Resulta necesario aclarar que la elección de este segmento de la población no surge de ningún prejuicio sino de la observación empírica realizada en numerosos trabajos previos que permite establecer una elevada participación de ese segmento etario de asalariados en el ingreso total de los hogares (véase, por ejemplo, Geldstein, 1997).

La precariedad ha descendido ostensiblemente entre 2003 y 2006, desde el 44,2% en el cuarto trimestre de 2003 al 38% en el cuarto trimestre de 2006. Como se puede ver en el Gráfico 1 (Anexo II de Gráficos), esta reducción fue más marcada entre las mujeres que entre los hombres –aunque se puede observar que las mujeres registran tasas sistemáticamente más elevadas que las de

permitiendo la recuperación de formas ocultas de ocupación, la modificación del criterio de clasificación ocupacional de los trabajadores del servicio doméstico, la modificación del criterio de clasificación ocupacional de los trabajadores por cuenta propia que trabajan para un solo cliente, la modificación del criterio de clasificación de la categoría ocupacional de los trabajadores en relación de dependencia que no perciben salario, y la modificación del criterio de identificación de la condición de registro de los trabajadores asalariados en la seguridad social”. Por ello, para la armonización, esos autores realizaron los siguientes ajustes: “excluir de la población asalariada relevada por ambas encuestas a los ocupados en el servicio doméstico, excluir de la población asalariada relevada por la modalidad ‘continua’ a los ocupados identificados mediante las preguntas de rescate de actividades no visualizadas como trabajo, excluir de la población asalariada relevada por la modalidad ‘continua’ a los ocupados autoidentificados como trabajadores por cuenta propia que trabajan para un solo cliente, excluir de la población asalariada relevada por la modalidad ‘continua’ a los trabajadores que no perciben salario, y clasificar como ‘asalariados registrados’ a los asalariados relevados por la modalidad continua que declaran no tener descuento jubilatorio pero que realizan aportes provisionales por su cuenta y gozan de algún beneficio laboral” (Lépre, Roca, Schachtel y Schleser, 2006, p. 130).

los hombres—. Resulta llamativo, además, que entre el tercer trimestre de 2004 y el mismo trimestre de 2005 y entre el cuarto trimestre de 2005 y el mismo trimestre de 2006, mientras que la precariedad laboral en los varones muestra “ondas” descendentes la de las mujeres presenta “ondas” crecientes. Parecería que la expansión económica, en un marco de creación generalizada de puestos de trabajo, generara mejores empleos para varones que para mujeres.

Al enfocar la cuestión de la precariedad laboral resurge la problemática de los “empleos asistidos” –ya referida en la nota al pie 9–. Si los beneficiarios de planes de empleo son considerados ocupados, la precariedad laboral resulta sobreestimada. Por otro lado, según la EPHC, el total de beneficiarios de planes de empleo para el cuarto trimestre de 2005 era de 440.618, lo que constituye aproximadamente una tercera parte del casi un millón y medio que registraba el Ministerio de Trabajo (véase www.trabajo.gov.ar). Esta discrepancia ya ha sido observada por diversos autores, entre otros, Pautassi (2004), quien menciona diversos factores como posibles causantes de la misma, a saber, la cobertura (urbana y concentrada en los grandes núcleos), la calidad de los registros, el error muestral, la subdeclaración de los beneficiarios y –aspecto que en este trabajo se considera como causa principal– la mayor concentración de beneficiarios en áreas menos pobladas, no cubiertas por la encuesta.¹⁶

Si bien la incidencia de los planes de empleo en el empleo total se revela decreciente, no se puede dejar de lado su análisis, teniendo en cuenta que, como se observa más adelante, precisamente es esta caída la que parece colaborar significativamente en reducir la precariedad del empleo (considerando a quienes reciben planes de empleo y realizan una contraprestación como asalariados precarios, no registrados o sin descuento jubilatorio). En suma, hay divergencias entre la tasa de precariedad llamada aquí “bruta” y la “corregida” que surge de considerar como no ocupado a todo aquel que declara el plan de empleo como su ocupación principal.

Entonces, si se considera la tasa bruta se concluye que, como ya se indicó, la precariedad disminuyó del 44,6% al 38% (casi 7 puntos porcentuales). Pero, si se computa la tasa corregida, la reducción en los niveles de precariedad sería bastante menor: del 39,8% al 36,8% (3 puntos porcentuales) (véase el

16 Por ejemplo, Sala y Golovanevsky (2005), estudiando los criterios de asignación de los Planes Trabajar en Jujuy durante 1996-1997, concluyen que ni la pobreza ni la desocupación fueron los principios que guiaron la distribución de la asistencia, sino que la misma fluyó mayoritariamente, en términos relativos, a las localidades más pequeñas (en las zonas de la Quebrada y la Puna de la provincia). Si bien se trata de un plan social diferente a los actuales, el trabajo citado muestra un caso concreto en el cual la distribución de la ayuda estuvo sesgada hacia las zonas menos pobladas y, por ende, no alcanzadas por la cobertura de la EPH. En aquel momento, Sala y Golovanevsky (2005) especulaban con que el motivo de esta distribución podía tener que ver con el clientelismo político: la asistencia se orientaba a aquellas áreas con conductas electorales más previsibles o controlables, en el marco del peculiar sistema electoral encarnado en la Ley de Lemas. En este sentido, las localidades más pequeñas –que resultaron ser, proporcionalmente, las más beneficiadas– eran capaces de garantizar la disciplina electoral en una medida imposible de alcanzar en los aglomerados de mayor tamaño.

Gráfico 2). Esto sugiere que el proceso de blanqueo del empleo está operando con más fuerza en los puestos a los que accedieron los beneficiarios de los planes sociales, mientras que el resto de los ocupados resulta más insensible a la reactivación económica. Este resultado permite plantear la existencia de dos formas de precariedad: la proveniente de los planes sociales y la genuina, la de los puestos de trabajo no promovidos. En este sentido, la observación de Marshall (2003) sobre los efectos de la inclusión de los planes de empleo en la medición de la precariedad resulta confirmada.

Las diferencias regionales

A diferencia de las demás regiones del país, el NOA presenta un nivel de precariedad comparativamente elevado. Si bien entre 2003 y 2006 la precariedad cayó, el ritmo de esa reducción fue diferente en las diversas regiones; en particular, la precariedad bruta disminuyó más en el NOA que en el resto del país, aunque se debe tener presente que el nivel del que partió esa región era mucho más elevado que el del resto del país.¹⁷

La tasa de precariedad corregida (esto es, sin considerar los beneficiarios de planes de empleo) da cuenta de una fuerte caída en todos los aglomerados, y en especial en el NOA: casi 10 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2006. Claro que, debido a las fluctuaciones de esa tasa en el período (véase el Gráfico 3), sería conveniente computar el cambio considerando más bien niveles semestrales o anuales. Procediendo de esta manera surge que sigue siendo la región del NOA la que experimentó los descensos más marcados: entre el segundo semestre de 2003 e igual período de 2006 la tasa de precariedad corregida cayó en 6,1 puntos porcentuales, *versus* 3,2 puntos porcentuales de caída para el total de las regiones (incluido el NOA), mientras que entre 2003 y 2006 (años) la caída de la precariedad del NOA fue de 5,7 puntos porcentuales, contra 3 puntos porcentuales del promedio del país. También se puede ver que el nivel de precariedad es muy parecido en las demás regiones del país.

A pesar de los logros alcanzados en la reducción de la precariedad, persisten aún importantes brechas entre el NOA y las otras regiones del país. A fin de proporcionar una idea de esas disparidades de niveles de precariedad, el Gráfico 4 muestra la diferencia en puntos porcentuales de las tasas corregidas de precariedad entre el NOA y la región de Cuyo (la que registra el valor más bajo de todas las incluidas en el análisis¹⁸), entre el primer semestre de 2003 y el primer

17 Es necesario aclarar que se trabaja aquí con los datos disponibles en las denominada Base Usuario trimestrales, las que contienen datos sólo de las regiones estadísticas NOA, Cuyo, Pampeana y Gran Buenos Aires (GBA).

18 Aunque es también la que registra mayor variabilidad en los niveles de precariedad, en relación con el GBA y la región Pampeana.

semestre de 2006. Nótese que, si bien se aprecia una caída, la diferencia está lejos de anularse por completo.

Un indicador particularmente importante para evaluar el impacto de la evolución económica global sobre el mercado de trabajo es la elasticidad empleo-producto, que muestra el cambio en el nivel de empleo como consecuencia de un cambio de un 1% en el PBI. En el Cuadro 3 se presentan las elasticidades empleo-producto para un conjunto de dimensiones relevantes en el análisis del empleo: el volumen de empleo propiamente dicho, el empleo asalariado, la precariedad bruta y la corregida.

Se esperaba encontrar, *ex ante*, elasticidades positivas para los dos primeros casos y negativas para los dos últimos, y que, además, la precariedad corregida fuera mayor en valor absoluto que la bruta. Tal expectativa se debe al hecho de que el empleo “genuino” (no asistido) debería reaccionar más frente al crecimiento del producto que el empleo total (que incluye a los planes), mientras que el crecimiento debería tender a remover más al núcleo duro del empleo en negro que al creado por los planes sociales.

En general, la previsión de elasticidad positiva empleo total-producto y de elasticidad también positiva empleo asalariado-producto se cumple, aunque con una tendencia decreciente (dentro de una evolución bastante volátil). Se puede decir que, frente a los cambios en el producto, ha reaccionado más el empleo asalariado que el empleo total.

En cambio, la elasticidad de la precariedad laboral frente a cambios en el producto toma el esperado valor negativo sólo en algunos períodos, en particular desde el II 2004/ II 2005 para la precariedad bruta, y en sólo dos casos para la precariedad corregida. Es decir, el crecimiento del producto ha generado caídas en la precariedad laboral si se considera a los beneficiarios de planes sociales como asalariados precarios. Al quitarlos de esa categoría, la precariedad laboral parece haber sido inclusive procíclica (aumento del producto y aumento de la precariedad), reforzando las conclusiones de Marshall (2004) para el período previo.

El análisis de las elasticidades, pero desagregando por regiones –esto es, de las denominadas aquí pseudo-elasticidades¹⁹ muestra algunos resultados diferentes a los del total del país (Cuadro 4). En relación con las elasticidades-empleo (tanto total como asalariado), el NOA diverge ampliamente de las restantes regiones, con valores negativos para varios de los períodos analizados. Es decir que en dicha región el crecimiento del PBI no fue siempre acompañado por crecimiento del empleo (total y asalariado) sino que en algunos períodos el

19 Se denominan aquí “pseudo-elasticidades” porque no se compara el cambio en el empleo –o en la precariedad– con el cambio en el producto bruto regional correspondiente, como debería ser, sino con el cambio en el PBI (total país), por no contar, para el período analizado, con datos actualizados de los productos geográficos.

empleo disminuyó. Si esto se correlaciona con el aumento del producto bruto de la región, estaría mostrando fuertes incrementos en los niveles de productividad de la mano de obra y/o crecimiento de la relación capital/trabajo en esta economía regional.

Al estudiar las “seudo-elasticidades” de la precariedad laboral (bruta y corregida) por regiones en relación con el producto, nuevamente el NOA emerge como un caso diferencial. La elasticidad precariedad bruta-producto es positiva para casi todos los períodos analizados (a mayor producto, mayor precariedad “bruta”), mientras que al tomar la precariedad “corregida” (sin considerar al empleo asistido como empleo) durante la mitad del período analizado la pseudo-elasticidad resulta negativa. En este caso, entonces, la precariedad responde procíclicamente al incluir los planes sociales como asalariados precarios, mientras que toma una conducta más parecida a la esperada al focalizarnos en los asalariados “no promovidos”. A diferencia de lo observado para el total país, en el NOA el crecimiento del producto, luego de una espera previa, sí parece haber servido para generar reducciones en los niveles de precariedad.

A continuación se realiza un análisis condicional, tratando de explicar el origen de las diferencias regionales recién estudiadas en relación con la precariedad laboral.

ANÁLISIS CONDICIONAL

La estructura de los determinantes más profundos de la precariedad laboral varía fuertemente entre regiones, lo que provoca, presumiblemente, diferentes resultados en las tasas respectivas. Se sabe, por ejemplo, que la baja educación acrecienta las probabilidades de que el trabajador se desempeñe en puestos precarios. Y se sabe, también, que las regiones difieren tres sí, entre otras cosas, por el nivel educativo de su población.

En este sentido, en la presente sección se evalúan las brechas regionales en el empleo precario, estimando varias regresiones con el fin de controlar la variabilidad espacial de los factores determinantes de esos fenómenos. Adicionalmente, este apartado se propone responder al siguiente interrogante: los diferenciales entre regiones observados en las tasas de precariedad laboral, ¿se deben a disparidades regionales de los factores que determinan esa tasa o a algún “efecto región” puro y no explicable por esos determinantes? Será necesario entonces revisar, para el período en su conjunto, las diferencias regionales en la estructura de la población activa en general y de la población ocupada en particular. Eso es lo que se hace en primer lugar. Luego, se controlan estos factores, estimando regresiones para la probabilidad de estar empleado precariamente, incluyendo a la región como variable más importante. Por último, se computan tasas de precariedad laboral con el propósito de descomponer la estructura de las diferencias: las debidas a las características de los individuos (personales y familiares), las que

se deben a la estructura productiva (más relacionada con el puesto de trabajo) y las debidas a factores inobservables regionales.

Análisis descriptivo de las disparidades de dotación entre regiones

Se han distinguido dos grandes grupos de determinantes de la situación laboral de las personas: por un lado, las que provienen de sus características personales y familiares; por el otro, las que tienen su origen en la estructura productiva y que, por lo general, no dependen de decisiones individuales.

De los determinantes que conforman el grupo de características personales y familiares se van a considerar (dada su disponibilidad en la fuente con la que se trabaja): edad, género, educación, posición en el hogar y estado civil (o, más precisamente, presencia de pareja).

Por su parte, de los determinantes ligados al aparato productivo se seleccionaron: la rama de actividad, el grado de calificación de la tarea y el tamaño del establecimiento. También se incluyeron en el análisis variables representativas del momento en el cual se captura la situación del individuo: trimestre y año al que corresponde la ventana de observación.²⁰

En el Cuadro 5 se muestra la relación existente entre los promedios de estas variables calculados para el NOA y para el resto de las regiones. Se incluye en ese cuadro también (Columna 1) el tipo de relación entre estas variables y la probabilidad que tiene un individuo de desempeñarse en un empleo precario, resumida en un signo.²¹ Así, por ejemplo, el ser jefe de hogar reduce la probabilidad de tener un empleo precario (Columna 1, signo negativo), y la población del NOA tiene relativamente menos población con ese atributo que el resto de las regiones (Columna 2, signo negativo). El asterisco de la columna 3 indica que la diferencia de promedios entre el NOA y el resto es, como se dijo, muy amplia (o estadísticamente significativa).

Las categorías con resultado positivo –es decir, con mayor promedio en el NOA que en el resto de las regiones– que impactan negativamente en la precariedad son, en el caso del NOA: el género de los ocupados (más hombres), tener entre 13 y 16 años de instrucción, tener entre 45 y 54 años de edad, estar ocupado en la agricultura, el comercio y la administración pública y tener una ocupación con calificación técnica (8 en total, véase el Cuadro 5). Por su parte, en 14 de las 24 variables que impactan negativamente en la precariedad, el NOA aparece te-

20 A las variables referidas a las características personales y familiares se las agrupa en el colectivo representado por la matriz “F”. Los determinantes ligados al aparato productivo son subsumidos en una matriz denominada “ψ”. El conjunto “Γ” comprende las variables representativas del momento de captura de la información (trimestre y año). Esta información será necesaria más adelante para interpretar los resultados econométricos que se exponen.

21 Estos signos provienen de los parámetros de una regresión *probit* con el empleo precario como variable dependiente y las variables independientes mencionadas en el texto.

niendo menos dotación que el resto de las regiones: ser jefe de hogar y tener una pareja (estar casado o unido), tener primaria completa, secundaria completa o instrucción universitaria, encontrarse entre los 30 y 34, 40 y 44 o 55 años y más, trabajar en la industria, hoteles y transporte o finanzas e inmuebles, trabajar en un establecimiento de más de 100 empleados y tener calificación operativa.

Es decir, las estructuras demográfica y económica del NOA operan en un sentido pro-precariedad: la población del NOA es más joven, menos instruida, con menos jefes de hogar y con una estructura productiva desfavorable en este sentido; precisamente, son estos grupos los más propensos a desempeñarse en empleos precarios.

La tarea ahora será, entonces, evaluar y cuantificar hasta qué punto las diferencias en las tasas de precariedad del NOA con respecto a las demás regiones del país responden a estos o a otros factores (analizados bajo el subtítulo *La descomposición de la brecha regional*).

Resultados del análisis multivariado

Existen muchas maneras de aislar el efecto de todas las variables analizadas en el apartado anterior y evaluar, entonces, si persiste la diferencia de precariedad entre el NOA y el resto de las regiones. En esta investigación se ha optado por generar un análisis de regresión²² y se trabajó con dos indicadores de precariedad: la medida “bruta” –que incluye los planes de empleo– y la “corregida” –que los excluye–.

En el Cuadro 6 se resume el resultado de dicho análisis. Figura allí la brecha estimada para cada medida, el desvío de la estimación y la media muestral del período. Por ejemplo: en 2004 había 10 puntos porcentuales (0,101) de diferencia entre la precariedad del NOA y la del resto (situándose, según el desvío, entre 7,7 puntos porcentuales como mínimo y 12,4 como máximo). Además, la precariedad ascendía al 38,5% en ese año (0,385).

22 Se han corrido varias regresiones con la especificación siguiente:

$$P(Y=1) = \beta_0 + \beta_1 \text{REGIÓN}_i + I P_i + S \psi_i + T \Gamma_i \quad [1]$$

donde P es algún indicador de empleo: empleo en negro o precario –definido como el grupo de asalariados a los que no se les hacen descuentos jubilatorios– y empleo en negro excluidos los planes de empleo (denominado aquí precario corregido); y donde REGIÓN es una *dummy* que asume los valores: Noroeste (NOA), Cuyo y Pampeana, las cuatro regiones que son relevadas en las EPHC trimestrales. Por su parte, F, ψ y Γ tienen el significado indicado en la nota al pie 20. Los β , I, S y T son parámetros a estimar, siendo β_1 el más importante para los objetivos de este apartado, puesto que es el que refleja el valor que asume la brecha de precariedad entre cada región y el resto, libre del efecto de los demás determinantes considerados aquí. En la Tabla 5 del Anexo figura el valor obtenido de β_1 cuando $\text{REGIÓN}=\text{NOA}=1$, porque es el único de todos que arrojó valores significativos, respecto de todas las regiones consideradas, en el sentido de una precariedad mayor.

Como se puede ver también en el Cuadro 6, ese diferencial, que podría denominarse “puro”, disminuyó a la mitad entre los años considerados. Esta caída de la diferencia regional acompaña al proceso global de caída de la precariedad captada por las medias muestrales respectivas. Llama la atención que la brecha de precariedad bruta cae menos que la precariedad corregida (neta de planes). Esto está indicando que el núcleo más duro de la precariedad laboral estuvo disminuyendo en el NOA más de lo que lo vino haciendo en el GBA; o bien, que el ritmo de creación de puestos “buenos” vino siendo más fuerte en el NOA que en el GBA, como se había observado anteriormente. Es esta una conclusión de gran importancia.

Cabe aclarar nuevamente que, en este caso, el efecto región está limpio de variables perturbadoras. Las regresiones igualaron el nivel educativo de la población, su estructura por edad y sexo y la constitución hogareña, como también el trimestre bajo análisis, de manera tal que no se puede decir que dicho diferencial en precariedad está determinado por el menor nivel educativo, por la mayor juventud relativa ni por la mayor presencia de cónyuges e hijos en los mercados laborales del NOA. Hay algo que la hace distinta a las demás regiones en términos de sus niveles de empleo en general y de precariedad en particular y que no está explicado por las estructuras demográfica y productiva.

La descomposición de la brecha regional

En este apartado se procede a descomponer la brecha de precariedad observada entre el NOA y el resto de las regiones. Se mencionó ya que la brecha puede obedecer a determinantes individuales o familiares o bien originarse en la estructura productiva en la que se inserta laboralmente la población. Se indicó también –en el apartado anterior– que, aun igualando esos determinantes (se entiende que estadísticamente), persiste una importante brecha de precariedad. Esta sería la brecha no explicada por ninguno de los factores anteriores. Las preguntas que pretendemos responder en esta apartado son las siguientes: a) ¿qué porcentaje es explicable por estos factores y qué porcentaje queda sin explicar?; b) de la parte explicada, ¿qué proporción puede adjudicarse a factores individuales (por ejemplo, a diferencias en educación) y qué proporción a factores ligados a la estructura productiva (por ejemplo, diferencias de calidad en el puesto)?²³

23 El análisis estadístico a partir del cual se intenta responder a estas preguntas se basa en la descomposición de la brecha observada:

$$R^- - R^+ = \text{Brecha observada} \quad [2]$$

la cual parte de relacionar dos variables: X, que corresponde a algún activo con el que cuentan los individuos o las familias; y R, que estaría representando algún resultado en el mercado laboral, tal como el nivel de precariedad. Por ejemplo, X podría representar la educación y R la probabilidad de un individuo de insertarse precariamente en el mercado de trabajo, la que, como toda probabilidad, tiene un máximo en 1 y un mínimo en 0. Como se sabe, la mayor educación aumenta las chances de conseguir empleo en general y empleos de

En el Cuadro 7 se muestran posibles respuestas al primero de estos interrogantes. Se compara en él el nivel de precariedad del NOA con el de cada una de las regiones analizadas. Así se puede ver que más de la mitad de la brecha total entre la precariedad del NOA y la de Cuyo, la totalidad de la brecha entre el NOA y la región Pampeana y $3/4$ de la diferencia entre el NOA y el GBA responden a factores no observados por los datos disponibles. Es lo que se denominó aquí “efecto región”. Algo similar ocurre con la precariedad corregida.

De la información contenida en el Cuadro 6 se infiere también que, en términos de dotación, las regiones NOA y Cuyo son más disímiles o bien que, curiosamente, las regiones Pampeana y GBA son más parecidas al NOA. Esto surge por el relativamente escaso poder de la matriz de dotaciones para explicar diferencias entre el NOA y las regiones Pampeana y GBA y por el poder explicativo relativamente mayor obtenido de los porcentajes debidos a diferentes dotaciones.

En el Cuadro 8 se proporciona una respuesta al segundo interrogante. Allí se aprecia que, en el total “explicado”, los determinantes de mayor peso son los que tienen que ver con el puesto de trabajo (con excepción de la Región Pampeana). Esto quiere decir que son las características de la ubicación laboral

buena calidad en particular, por lo que existiría entre X y R una relación de tipo inversa.

Si se modifica en algo la extensión de las unidades de análisis, X podría representar la dotación educativa de toda una región y R su tasa de precariedad laboral, asumiendo cierto riesgo de caer en la denominada falacia del nivel equivocado. En este esquema se está suponiendo que existe una dotación que se denomina X, por simplicidad, que al aumentar, hace disminuir la probabilidad de estar ocupado en un empleo precario (esta X puede ser $-$ y efectivamente es $-$ un vector). Se supone, asimismo, que hay dos regiones que se diferencian entre sí por la cantidad de dotación X: una región que tiene más X (X^+) que otra (X^-). Lo que dicta la intuición es que, al computar R, arrojará que la región con menor X (X^-) tendrá una R más elevada que aquella otra con X más elevado (X^+): $R^- > R^+$. Esa diferencia positiva es la que en [2] se denomina “brecha observada”. Ahora se debe pensar en términos hipotéticos lo siguiente: ¿qué sucedería si a la región “ $-$ ” se la provee de la dotación correspondiente a “ $+$ ”? Si toda la diferencia entre “ $-$ ” y “ $+$ ” se debe a las diferencias en X, entonces la brecha debe desaparecer. Esta diferencia es la que en [4] se denomina brecha debida al “efecto dotación”. Si no desaparece completamente, el residuo de esa diferencia obedecerá a factores diferentes, que pueden estar dados por dotaciones no observadas o por diferencias en la capacidad de convertir esas dotaciones en “capacidad para funcionar”, para emplear un término de Sen (1999). Eso es lo que en [3] se denomina un “efecto región” (por carecer de una denominación más adecuada). También podría llamarse diferencia “intra” o simplemente “residuo”.

$$R^- - R^+ X_- = \text{Efecto región} \quad [3]$$

$$R^+ X_+ - R^+ = \text{Efecto dotación} \quad [4]$$

Es decir, la brecha observada es igual a la suma del efecto región más el efecto dotación, lo que se puede comprobar fácilmente: la suma de las ecuaciones [3] y [4] da como resultado la ecuación [2]. Estas ecuaciones permiten, entonces, descomponer la brecha observada en una parte explicada por la región y otra parte explicada por la dotación. Se debe recordar que esa dotación está formada por características individuales y por las particularidades del puesto ocupado por el individuo.

Una vez obtenidas, estas porciones pueden expresarse en términos proporcionales o porcentuales. Entonces, la proporción de la brecha observada explicada por las dotaciones diferentes de X entre regiones viene dada por $[4]/[2]$, mientras que el residuo, la parte no explicada por dotaciones, está dado por $[3]/[2]$.

—más que las características individuales— las que propenden a hacer del NOA una región con más precariedad laboral. Las consecuencias que esto encierra para las políticas públicas son sumamente importantes: según estos hallazgos, todas las medidas dirigidas a disminuir la incidencia de la precariedad en las regiones con menos ventajas relativas deben concentrarse en el aparato productivo más que en las características de la población —como educación, edad, condición de jefe de hogar, etcétera— a la que esas políticas se destinan.

CONCLUSIONES

Este trabajo se propuso responder a un conjunto de preguntas relativas al impacto de la reciente recuperación económica sobre la precariedad laboral en la Argentina. En primer lugar, se puede concluir que la precariedad ha descendido ostensiblemente entre 2003 y 2006 (casi siete puntos porcentuales), con una reducción más marcada entre las mujeres que entre los hombres (aunque las tasas de precariedad de las primeras son sistemáticamente más elevadas). Esta conclusión se relativiza cuando se excluye del total de ocupados a quienes son beneficiarios de planes de empleo. En ese caso, la tasa de precariedad “corregida” se redujo prácticamente en la mitad de lo que había disminuido la tasa de precariedad “bruta”, lo que sugiere que el proceso de transformación de empleos precarios en empleos de calidad estaría operando con más fuerza en los puestos a los que accedieron los beneficiarios de los planes sociales, mientras que el resto de los ocupados resulta más insensible a la reactivación económica. Es por ello que surge como hipótesis la existencia de dos formas de precariedad: la proveniente de los planes sociales y la genuina, la de los puestos de trabajo que no incluyen a los beneficiarios de planes de empleo. Ambas parecen mostrar diferentes dinámicas en el período bajo análisis.

En segundo lugar, al evaluar si el impacto de la reactivación económica sobre la precariedad laboral tuvo simetría regional, se concluye que la precariedad (tanto bruta como corregida) disminuyó más en el NOA que en el resto del país, aunque el nivel de partida de esta región fue mucho más elevado que el del resto. A pesar de esto, persisten aún importantes brechas entre el NOA y las otras regiones del país.

En tercer lugar, la elasticidad empleo total-producto y la elasticidad empleo asalariado-producto observadas son positivas, aunque con una tendencia decreciente (en el marco de una evolución temporal muy volátil). Al comparar ambas elasticidades entre sí se concluye que el empleo asalariado ha sido más reactivo que el empleo total frente a los cambios en el producto.

Se calculó también la elasticidad de la precariedad laboral frente a cambios en el producto. Se esperaba que el crecimiento económico diera lugar a una elasticidad negativa. Sin embargo, esto no fue así, y el crecimiento del producto, en general, fue acompañado por caídas en la precariedad laboral corregida, pero

no en la bruta. En este último caso, la precariedad laboral parece haber sido inclusive procíclica (aumento del producto y aumento de la precariedad).

El análisis de las elasticidades desagregado por regiones muestra nuevamente divergencias, especialmente entre el NOA y otras regiones del país. En dicha región no siempre el crecimiento del PBI se acompañó por un crecimiento del empleo (total y asalariado) sino que en algunos períodos el empleo disminuyó. Por otro lado, las “seudo-elasticidades” de la precariedad laboral (bruta y corregida) en relación con el producto son también diferenciales en el NOA: el crecimiento del producto, luego de una espera previa, sí parece haber servido para generar reducciones en los niveles de precariedad en esa región.

Del análisis condicional se desprende que el NOA fue la única región con una precariedad significativamente mayor que el resto de las regiones incluidas en el estudio. También se constató que ese diferencial disminuyó a la mitad entre 2003 y 2006. Es llamativo que la brecha de precariedad bruta haya caído menos que la precariedad corregida (neta de planes). Esto estaría indicando que el núcleo más duro de la precariedad laboral estuvo disminuyendo en el NOA más de lo que vino haciéndolo en GBA.

Al tratar de entender el porqué de este comportamiento diferente del NOA, se observa que las estructuras demográfica y económica de esa región operan en un sentido pro-precariedad: la población es más joven, menos instruida, con menos jefes de hogar y con una estructura productiva desfavorable; son estos los grupos más propensos a desempeñarse en empleos precarios. Al igualar “económicamente” las dotaciones de las diferentes regiones, igualmente sigue existiendo un efecto diferencial para el NOA.

También se pudo observar que buena parte de la brecha total entre la precariedad, tanto bruta como corregida, del NOA y del resto de las regiones responde a factores no observados por los datos disponibles (“efecto región”). En cuanto a la dimensión de esa brecha que puede explicarse por “dotaciones”, se observó que las que dan cuenta de la mayor parte de la misma son las de demanda (las correspondientes al puesto). Esto quiere decir que son los puestos de trabajo más que las características individuales los que hacen las mayores diferencias.

BIBLIOGRAFÍA

BECCARIA, Luis, Jorge CARPIO y Álvaro ORSATTI (1999), “Argentina: informalidad laboral en el nuevo modelo económico”, en Jorge CARPIO, Emilio KLEIN e Irene NOVACOVSKY (comps.), *Informalidad y exclusión social*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT.

BECCARIA, Luis, Valeria ESQUIVEL y Roxana MAURIZIO (2005), “Empleo, salarios y equidad durante la recuperación reciente en la Argentina”, en *Desarrollo Económico*, 45 (178), Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social, pp. 235-262.

BERTRANOU, Fabio, Carlos GRUSHKA y Rafael ROFMAN (2001), “Evolución reciente de la cobertura previsional en Argentina”, en Fabio BERTRANOU (ed.), *Cobertura previsional en Argentina, Brasil y Chile*, Santiago de Chile, OIT.

GASPARINI, Leonardo (2005), *Protección Social y Empleo en América Latina: Estudio sobre la base de Encuestas de Hogares*, Documento de Trabajo n°17, La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata.

GELDSTEIN, Rosa (1997), *Mujeres Jefas de Hogar. Familia, pobreza y género*, Buenos Aires, Cuadernos de UNICEF.

GOLOVANEVSKY, Laura (2006), *Vulnerabilidad y transmisión intergeneracional de la pobreza. Un abordaje cuantitativo para Argentina en el siglo XXI*, tesis defendida para acceder al título de Doctor en Economía, UBA, Buenos Aires.

LÉPORE, Eduardo, Emilia ROCA, Lila SCHACHTEL y Diego SCHLESER, “Evolución del empleo registrado y no registrado durante el período 1990-2005”, en *Trabajo, ocupación y empleo 2003-2006*, Serie Estudios/5, Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

LÓPEZ, Néstor y Alfredo MONZA (1995), “Un intento de estimación del sector informal urbano en la Argentina”, en *Desarrollo Económico* n° 139, vol. 35, Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social.

MARSHALL, Adriana (1992), *Circumventing labour protection: non-standard employment in Argentina and Peru*, Research Series n° 88, Ginebra, International Institute for Labour Studies, OIT.

----- (2003), “Empleo ‘no registrado’ en la Argentina: estudio de sus salarios relativos”, trabajo preparado para la OIT en el marco del Proyecto “Enfrentando los Retos al Trabajo Decente en la Crisis Argentina”.

----- (2004), *Labour market policies and regulations in Argentina, Brazil and Mexico: Programmes and impacts*, Employment Analysis Unit, Employment Strategy Papers n°13, Ginebra, ILO, OIT, marzo.

MARTICORENA, Clara (2005), "Precariedad laboral y caída salarial. El mercado de trabajo en la Argentina post convertibilidad", trabajo presentado en el 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

NEFFA, Julio y Pablo PÉREZ (1999), "La exclusión a través del mercado de trabajo de los trabajadores pertenecientes a las familias de menores ingresos. Una panorámica en la Argentina de los 90", trabajo presentado ante el XXII Congreso ALAS, Concepción, Chile.

PAUTASSI, Laura (2004), "Beneficios y beneficiarias: análisis del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de Argentina", en M. VALENZUELA (ed.), *Políticas de empleo para superar la pobreza*, Argentina, Lima, OIT.

PAZ, Jorge (2004), "Argentina: dinámica de la protección social y el mercado laboral, 1995-2002", en Fabio BERTRANOU (ed.), *Protección Social y Mercado Laboral*, Santiago de Chile, OIT.

ROCA, Emilia y Juan Martín MORENO (1999), "El trabajo no registrado y la exclusión de la seguridad social", en Jorge CARPIO, Emilio KLEIN e Irene NOVACOVSKY (comps.), *Informalidad...* ob. cit.

RODGERS, Gerry (1989), "El debate sobre el trabajo precario en Europa Occidental", en G. y J. RODGERS, *Precarious Jobs in Labour Market Regulation*, Ginebra, OIT.

SALA, Gabriela y Laura GOLOVANEVSKY (2005), "El Programa Trabajar en Jujuy: una mirada posible", en *Población y Sociedad*, vol. 10-II, San Miguel de Tucumán, Fundación Yocavil.

SALA, Gabriela, Laura GOLOVANEVSKY y María Elena MARCOLERI (2002), "Vulnerabilidad en el NOA en los noventa", trabajo presentado en las VII Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, octubre.

SALVIA, Agustín, Luciana FRAGUGLIA y Úrsula METLIKA (2005), "¿Una mejor calidad ocupacional en los mercados laborales de la Argentina post devaluación?", en *Laboratorio*, año 7, n° 17/18, pp. 11-19.

ANEXO I. CUADROS

Cuadro 1. Ocupados (%) que tienen descuentos (o aportes) jubilatorios según jurisdicción de residencia por categoría de la ocupación. Noviembre de 2001

Jurisdicción	Total	Asalariados (1)	Independientes (1)	Patrones (1)	Trabajadores Familiares (2)
Total país	60,3	68,9 72	31,3 21	63,9 6	24,4 1
Región Metropolitana	67,6	74,3 74	41,5 19	71,4 6	32,2 1
Ciudad de Bs. As.	74,1	79,3 71	55,5 20	79,1 8	38,5 1
24 Partidos del GBA	64,4	72,0 75	34,0 18	66,2 5	29,0 1
Región Pampeana	59,3	67,3 69	33,6 21	64,0 8	23,2 1
Resto Pcia. Bs. As.	61,8	69,2 71	35,5 19	64,2 9	24,3 1
Córdoba	53,5	62,8 66	28,9 25	61,1 7	19,4 1
Entre Ríos	59,5	67,4 71	33,5 22	66,6 7	21,6 1
La Pampa	55,7	62,7 69	32,7 21	60,2 9	21,2 1
Santa Fe	61,6	69,0 69	37,0 21	66,0 9	26,8 1
Noroeste (NOA)	50,4	62,4 72	14,4 23	50,5 3	14,2 1
Catamarca	59,9	71,2 77	17,9 19	54,3 3	17,4 1
Jujuy	51,6	64,2 73	13,5 23	49,3 3	11,6 1
La Rioja	60,3	70,5 79	17,2 17	49,8 3	15,9 1
Salta	46,5	59,1 69	13,5 26	52,4 4	12,2 1
Santiago del Estero	42,8	56,0 68	10,0 27	44,2 4	13,1 1
Tucumán	51,7	62,3 74	17,1 22	52,1 4	17,3 1
Nordeste (NEA)	47,7	60,3 68	16,9 26	45,7 5	17,5 1
Corrientes	46,8	58,2 70	15,0 24	48,8 4	18,0 1
Chaco	45,5	57,1 68	15,6 25	41,1 6	13,7 1
Formosa	47,0	64,5 67	8,1 28	38,0 4	13,8 1
Misiones	51,2	63,9 65	23,6 29	51,5 5	22,4 1
Región Cuyo	54,2	64,1 73	21,7 21	51,3 5	19,0 1
Mendoza	54,9	64,8 72	23,8 22	52,9 5	21,0 1
San Juan	51,4	61,0 76	17,0 20	44,8 4	16,5 1
San Luis	56,0	66,5 74	19,2 20	52,2 5	14,0 1
Patagonia	67,0	74,8 78	33,3 16	64,8 5	24,5 1
Chubut	69,1	77,2 77	35,0 17	67,9 5	27,1 1
Neuquén	65,3	72,8 78	31,5 17	68,1 5	21,4 1
Río Negro	61,8	70,2 74	31,6 18	57,7 6	21,7 1
Santa Cruz	74,3	80,4 83	35,8 12	69,1 4	27,8 1
Tierra del Fuego	75,1	81,0 82	39,4 13	78,1 4	40,5 1

(1) Peso (en %) de la categoría ocupacional correspondiente sobre el total de ocupados

(2) Con remuneración

Fuente: Construcción propia según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Censo Nacional de Población.

**Cuadro 2. Porcentaje de trabajadores precarios por región según año.
Años 1995 a 2003**

Jurisdicción	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total País	29,0	32,0	34,5	37,8	38,2	38,4	38,6	44,0	44,8
Total País (*)	--	--	--	--	--	32,6	32,5	33,2	34,0
Metropolitana	29,6	33,0	34,6	37,2	37,9	38,0	38,2	42,8	43,9
Pampeana	25,0	28,5	33,1	36,5	35,4	37,4	38,4	44,3	44,3
NOA	34,2	33,7	39,1	43,3	45,5	44,4	44,3	52,5	51,9
NEA	27,8	31,2	37,2	42,7	42,1	42,5	40,9	51,2	53,7
Cuyo	34,9	34,1	35,5	41,9	42,9	40,3	39,2	43,5	45,1
Patagonia	20,4	22,5	24,6	28,6	27,4	27,1	27,8	32,8	32,9

Notas: (*) Estimaciones tomadas de Marshall (2003), basadas en EPHP, que excluyen servicio doméstico y beneficiarios de planes de empleo. Año 2000 a 2002 corresponden a la onda mayo de la Encuesta Permanente de Hogares, modalidad puntual (EPHP); 2003 onda mayo.

Fuente: IYPE - UNESCO/OEI sobre la base de Argentina Urbano-Encuesta Permanente de Hogares Puntual (EPHP) del INDEC. En *Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina*, <http://www.siteal.iipe-oei.org>.

Cuadro 3. Elasticidades empleo-producto y precariedad-producto

Períodos comparados	Empleo Total	Asalariados	Precariedad	
			Bruta	Corregida
2004-III/2003-III	0,78	0,89	0,36	0,55
2004-IV/2003-IV	0,70	0,78	0,69	1,20
2005-I/2004-I	0,19	0,33	0,27	1,19
2005-II/2004-II	0,01	-0,07	-0,23	0,05
2005-III/2004-III	0,12	0,10	-0,40	0,28
2005-IV/2005-IV	0,24	0,29	-0,45	0,26
2006-I/2005-I	0,47	0,56	-0,51	-0,26
2006-II/2005-II	0,84	1,15	-0,06	0,70
2006-III/2005-III	0,25	0,59	-0,29	0,17
2006-IV/2005-IV	0,19	0,37	-0,51	-0,04

Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, Cuentas Nacionales y EPHC.

Cuadro 4. Seudo-elasticidades, según regiones

Región/Periodos	Empleo	Asalariados	Precariedad	
			Bruta	Corregida
GBA				
2004-III/2003-III	0,83	0,97	0,28	0,33
2004-IV/2003-IV	0,85	0,89	1,04	1,52
2005-I/2004-I	0,18	0,28	1,27	1,13
2005-II/2004-II	0,03	-0,08	-5,48	-0,03
2005-III/2004-III	0,03	-0,01	-15,57	0,32
2005-IV/2005-IV	0,19	0,16	-3,38	0,06
2006-I/2005-I	0,56	0,65	-0,56	-0,09
2006-II/2005-II	0,89	1,20	-0,03	0,83
2006-III/2005-III	0,20	0,54	-0,89	0,21
2006-IV/2005-IV	0,21	0,49	-0,66	0,22
NOA				
2004-III/2003-III	0,13	0,58	1,82	1,07
2004-IV/2003-IV	0,31	0,72	1,27	0,57
2005-I/2004-I	-0,92	-0,33	0,51	0,87
2005-II/2004-II	0,46	0,69	2,10	1,86
2005-III/2004-III	0,63	1,15	1,66	1,84
2005-IV/2005-IV	-0,23	-0,50	5,34	-0,43
2006-I/2005-I	0,61	0,50	-2,88	-2,01
2006-II/2005-II	-0,18	-0,08	10,74	-1,20
2006-III/2005-III	-0,65	-1,11	3,74	-1,51
2006-IV/2005-IV	-0,06	-0,25	40,96	-1,45
Cuyo				
2004-III/2003-III	1,32	0,85	1,88	2,41
2004-IV/2003-IV	1,37	1,13	0,18	0,13
2005-I/2004-I	0,31	-0,09	-4,99	-1,24
2005-II/2004-II	-0,25	-0,48	7,05	-1,85
2005-III/2004-III	0,10	0,11	-15,56	-1,39
2005-IV/2005-IV	0,07	0,09	10,37	1,56
2006-I/2005-I	0,46	0,45	-0,52	0,14
2006-II/2005-II	0,73	1,56	3,23	2,70
2006-III/2005-III	0,28	0,91	1,68	1,12
2006-IV/2005-IV	0,19	0,46	-5,10	-0,47
PAMPEANA				
2004-III/2003-III	0,62	0,68	0,71	0,89
2004-IV/2003-IV	0,14	0,34	1,21	0,51
2005-I/2004-I	0,39	0,72	2,66	2,15
2005-II/2004-II	-0,07	-0,06	4,78	0,51
2005-III/2004-III	0,34	0,33	-0,62	0,27
2005-IV/2005-IV	0,54	0,94	0,28	0,87
2006-I/2005-I	0,16	0,30	-6,23	-0,56
2006-II/2005-II	0,91	1,12	-0,22	0,25
2006-III/2005-III	0,57	1,03	-0,61	0,20
2006-IV/2005-IV	0,15	0,08	-8,26	-0,58

Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, Cuentas Nacionales y EPHC.

Cuadro 5. Impactos sobre la precariedad y los salarios de diversas variables y diferencias regionales entre el NOA y el resto de las Regiones Estadísticas de la Argentina

Variables	Regresión Probit (1)	Diferencia de medias muestrales (2)	Significación de la diferencia (3)
INDIVIDUALES			
Hombre	-	+	*
Jefe	-	-	*
Cónyuge	+	-	*
Pareja	-	-	*
EDUCACIÓN (AÑOS)			
7	-	-	*
8-11	-	=	
12	-	-	*
13-16	-	+	***
17 y +	-	-	*
EDAD			
30-34	-	-	*
35-39	-	=	*
40-44	-	-	*
45-49	-	+	*
50-54	-	+	*
55-59	-	-	*
RAMA			
Agricultura	-	+	*
Industria	-	-	*
Construcción	Ns	+	*
Comercio	-	+	*
Hoteles y transporte	-	-	*
Finanzas e Inmuebles	-	-	*
Administración Pública	-	+	*
TAMAÑO ESTABLECIMIENTO			
1-5	+	+	*
6-10	+	=	
11-40	Ns	+	*
41-100	-	=	
101-500	-	-	**
CALIFICACIÓN TAREA			
Profesional	+	-	*
Técnica	-	+	*
Operativa	-	-	*

Notas: En la columna (1) se muestran los signos de los parámetros estimados de una regresión probit con los microdatos de todas las regiones del país incluidas en la Base Usuarios de la EPHC. La columna (2) es el resultado de comparar medias muestrales de la variable correspondiente. Un + implica que la variable es mayor en el NOA que en el resto. Interpretación similar para el signo menos y el igual. Se contrastó la hipótesis nula de igualdad de medias entre el promedio del NOA y del resto de las regiones en cada variable. Se rechaza la hipótesis de igualdad al: * 1%, ** 5%, ***10% (columna (3)). En los casos en que dice "=" y que no figura asterisco no se rechaza la igualdad. Ns: parámetro no significativamente distinto de cero.

Fuente: Construcción propia con datos de la EPHC.

Cuadro 6. Brecha del NOA con respecto al GBA y otros parámetros de interés

Años/Parámetro	Bruta	Precariedad	Corregida
2004			
Coeficiente	0,101*		0,073*
Desvío estándar	(0,024)		(0,025)
Media muestral	0,385		0,332
2005			
Coeficiente	0,095*		0,081*
Desvío estándar	(0,023)		(0,023)
Media muestral	0,357		0,321
2006			
Coeficiente	0,052*		0,044**
Desvío estándar	(0,022)		(0,022)
Media muestral	0,317		0,293

Notas: Los controles incluidos en las regresiones son: edad, género, posición en el hogar, presencia de pareja, trimestre de la ventana de observación, rama de actividad, calificación requerida por la tarea y tamaño del establecimiento. Las otras regiones incluidas en las regresiones son: Cuyo y Pampeana. Un asterisco (*) indica que puede rechazarse la hipótesis de igualdad a cero del parámetro estimado, al 1% de confianza. El doble asterisco (**) al 5%.

Fuente: Construcción propia.

Cuadro 7. Descomposición de las brechas regionales, 2003-2006

Efectos NOA versus	Cuyo	Pampeana	GBA
Precariedad	100,0	100,0	100,0
No explicada	56,7	105,1	75,5
Explicada	43,3	-5,1	25,5
Precariedad corregida	100,0	100,0	100,0
No explicada	50,1	110,7	82,8
Explicada	49,9	-10,7	17,2

Fuente: Construcción propia sobre la base de la EPHC, período 2003-2006.

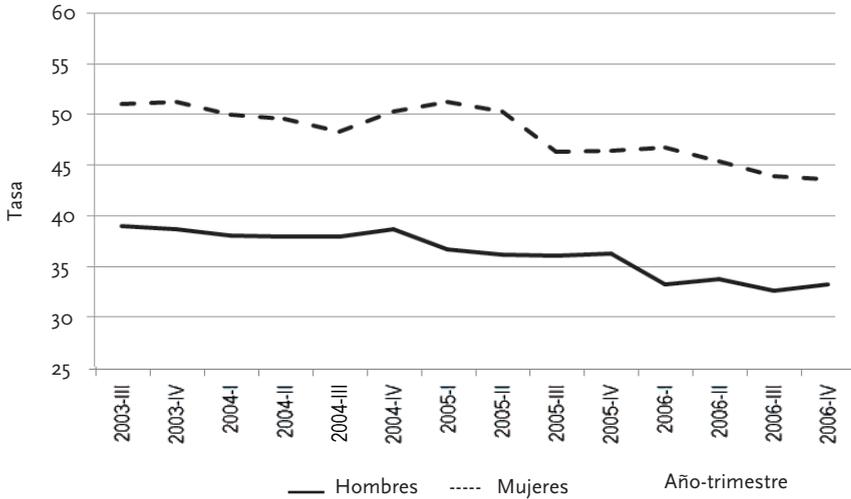
Cuadro 8. Descomposición de las brechas regionales, 2003-2006

Efectos NOA versus	Cuyo	Pampeana	GBA
Precariedad	100,0	100,0	100,0
No explicada	56,7	105,1	75,5
Explicada por características:	43,3	-5,1	25,5
Personales	12,7	11,3	1,6
Estructura productiva	31,4	-14,6	23,5
Precariedad corregida	100,0	100,0	100,0
No explicada	50,1	111,7	82,8
Explicada por características:	49,9	-11,7	17,2
Personales	7,6	4,8	-0,4
Estructura productiva	42,7	-14,4	17,9

Fuente: Construcción propia sobre la base de la EPHC, período 2003-2006. La suma de "Explicada por características personales" y "Explicada por estructura productiva" no da 1. El ejercicio consistió en hacer variar primero sólo los factores individuales y luego sólo los factores ligados al puesto. Los efectos, en consecuencia, no son sumativos.

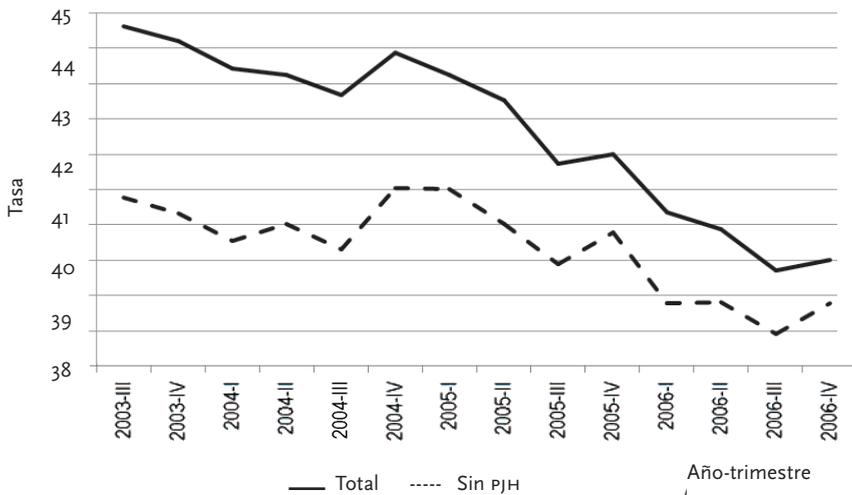
ANEXO II. GRÁFICOS

Gráfico 1. Tasa de precariedad laboral según género 2003-III a 2006-IV



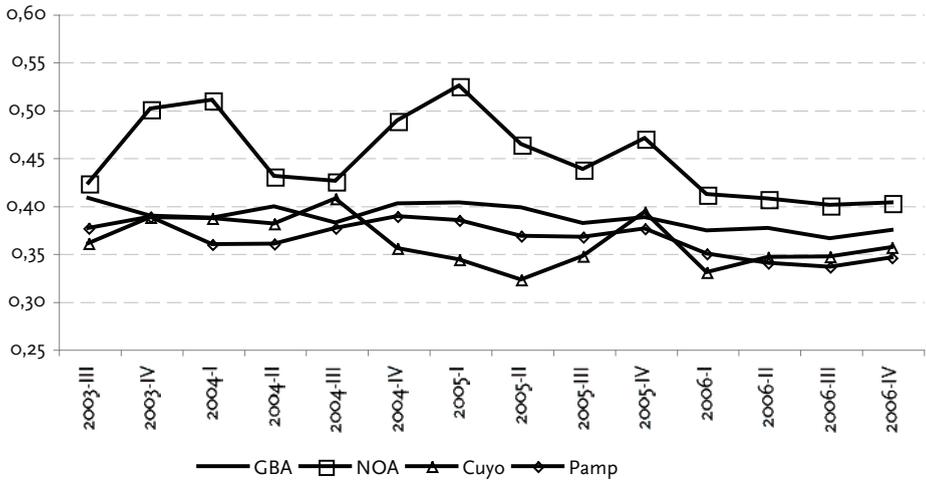
Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, EPHC.

Gráfico 2. Tasa de precariedad laboral con y sin planes sociales



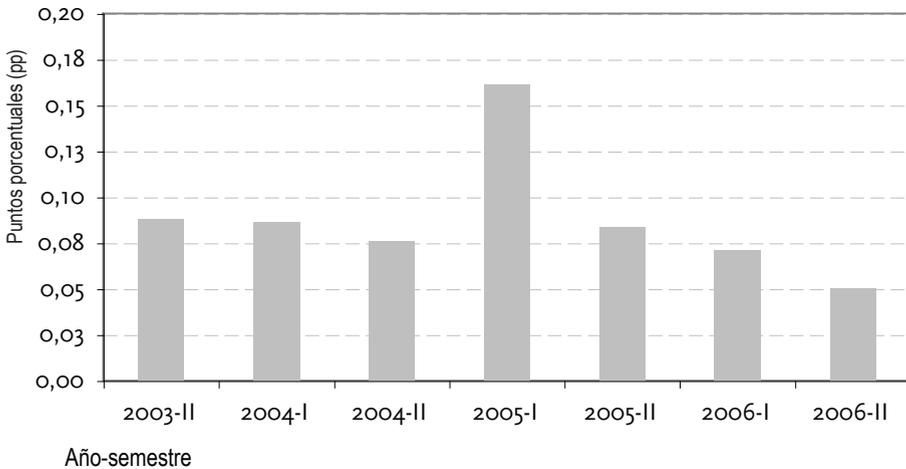
Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, EPHC.

Gráfico 3. Tasa de precariedad corregida según región 2003-III a 2006-IV



Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, EPHC.

Gráfico 4. Brecha de precariedad laboral NOA versus Cuyo, 2003-2006



Nota: La comparación se hace con región Cuyo por ser la tasa más baja del país.

Fuente: Construcción propia con datos del INDEC, EPHC.

RESUMEN

Luego de la profunda crisis experimentada entre fines de 2001 y principios de 2003, la economía argentina registró una fuerte y sostenida recuperación. Este panorama tuvo su correlato en el mercado laboral: mientras que la evolución de sus indicadores para el período precedente (1998 a 2003) llevó a que la escasez de trabajo y de puestos de calidad fuera la temática central de las discusiones relacionadas con cuestiones sociales y políticas de principios de este siglo en la Argentina, el nuevo escenario plantea, creemos, nuevas preguntas y nuevos debates. En este sentido, el presente trabajo pretende aportar evidencia empírica a los interrogantes siguientes: ¿Cómo impactó la última recuperación económica en la precariedad laboral y el no registro en la Argentina? ¿Ese impacto fue similar para todas las regiones? Si no fue así, entonces: ¿cuáles fueron las regiones en las que la precariedad y el no registro disminuyó más? ¿Cuáles fueron las principales razones del cambio?

El análisis se realiza con datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, con énfasis en el enfoque regional y utilizando descomposiciones microeconómicas de los cambios registrados. Entre las principales conclusiones se destaca que la precariedad laboral se redujo en el período bajo estudio, pero casi la mitad de esta reducción desaparece cuando no se computa a los beneficiarios de planes de empleo como asalariados. La precariedad laboral disminuyó más en el NOA que en el resto del país, aunque el nivel de partida de esta región fue mucho más elevado que el resto. Finalmente, la elasticidad empleo total-producto y la elasticidad empleo asalariado-producto observadas son positivas, aunque con una tendencia decreciente. Sorprendentemente, la elasticidad de la precariedad laboral frente a cambios en el producto parece haber sido procíclica a nivel país, con el NOA comportándose de manera diferencial.

ABSTRACT

After the deep crisis the economy went through between the end of year 2001 and the beginning of year 2003, it then registered a strong and sustained recovery. This events also affected the labor market. In previous years (1998-2003) the evolution of labor market indicators led to the fact that jobs shortage, especially good quality employment, turned to be the main subject in debates related to social and political matters in Argentina at the beginning of XXI century. The new situation puts forth new questions and new debates. Therefore, this paper aims to contribute with some evidence to the following questions: How did the recent economic recovery affect labor precariousness and lack of register in Argentina? Were these effects similar to all regions? If it wasn't that way, which were the regions where precariousness and lack of register fell more? Which were the main reasons for these changes?

The analysis was based on data from new Household Survey, with emphasis on regional perspective and using microeconomic decomposition of the observed changes. We concluded that labor precariousness went down in the period under study, but almost half this reduction disappears when those people assisted with employment "plans" are not computed as workers. Labor precariousness fell more in northwest of the country than in the rest of it, but the level of precariousness in this region was higher than in the rest of the country at the beginning of the period. Finally, the elasticity of both total employment and wage earner employment to GDP was positive, though with a tendency to fall. Surprisingly, the elasticity of labor precariousness to changes in GDP seemed to have been procycle (growth of GDP and growth of precariousness) in the country as a whole, with the northwest region showing a different behaviour.

PALABRAS CLAVE

REACTIVACIÓN
 PRECARIEDAD LABORAL
 REGIONES
 ELASTICIDAD EMPLEO-PRODUCTO

KEY WORDS

RECOVERY
 LABOR PRECARIOUSNESS
 REGIONS
 GDP ELASTICITY

TRANSFORMACIONES EN EL EMPLEO Y EL TERRITORIO: EL CASO SAN LUIS

Mónica Bussetti

Los procesos económicos y sociales producen efectos territoriales. Cada territorio se ve afectado por estos procesos de manera específica y distintiva según su historia productiva y de acuerdo con las prácticas y estrategias de los diferentes agentes sociales involucrados en la gestión de los cambios. Si bien las transformaciones que ocurren en cada territorio se enmarcan en un conjunto de *tendencias globales* que sirven de contexto a las diversas *respuestas*, en algunos casos estas sólo se pueden comprender adecuadamente teniendo en cuenta las características distintivas del territorio considerado.

En la provincia de San Luis, a lo largo de las últimas dos décadas, la producción del territorio estuvo signada por las transformaciones que ocurrieron a partir de la puesta en marcha de los planes nacionales de promoción industrial, que afectaron a todas las dimensiones de la vida social. En efecto, esta nueva situación no sólo cambió la orientación productiva de la provincia, sino que impactó también sobre los comportamientos individuales y familiares que, a nivel agregado, determinan el nivel y las fluctuaciones de la dinámica demográfica.

Particularmente, se verificó un desplazamiento poblacional hacia los parques industriales de los principales centros urbanos de la provincia y, consecuentemente, un despoblamiento de las áreas rurales. De esta manera, la industrialización tuvo una nueva expresión territorial, que conformó nuevos paisajes de segregación y nuevas formas de exclusión.

A mediados de la década de 1990, al llegar a su fin los beneficios promocionales, una serie de políticas públicas encaminadas a la búsqueda de otros perfiles productivos generaron sus respectivos impactos sobre la organización territorial.

Este trabajo propone un análisis de esos procesos, tomando especialmente en cuenta que las transformaciones en el empleo y el territorio se impactan mutuamente. Vale decir: las transformaciones en la competitividad territorial se expresan en problemas de empleo y en el mercado de trabajo, y los cambios en el empleo generan fuertes cambios en la perspectiva de un área territorial.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Economía, población y territorio están íntimamente relacionados. Por un lado, la población es la base del sistema productivo; por otro, esa población realiza una serie de actividades en un determinado territorio, lo cual deriva en usos diferenciales del suelo que, a su vez, traen aparejada una serie de consecuencias económicas.

Si bien no existe una relación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico, en general las expansiones económicas implican un aumento de la población en ese territorio; a su vez, como señala Méndez: “el volumen de población existente en un área y sus características (estructura por edades y sexos, nivel de cualificación profesional, capacidad adquisitiva, exigencias salariales, etc.) incide también atrayendo o repeliendo la implantación de empresas en relación con los respectivos costes de producción y el mercado potencial de consumo existente, la flexibilidad de la oferta de trabajo, etc. Así, una región densamente ocupada por una población con elevada capacidad adquisitiva favorecerá la instalación, tanto de empresas industriales orientadas a cubrir la demanda de bienes manufacturados, como de comercios y servicios públicos y privados (sanitarios, culturales, de esparcimiento...), e incluso podrá favorecer una intensificación de las actividades agrarias ante los incentivos generados por un mercado consumidor amplio y seguro. De igual modo, la oferta de mano de obra cualificada podrá atraer la localización de empresas tecnológicamente avanzadas, en tanto las áreas que cuenten con grandes contingentes de población escasamente cualificada y con niveles salariales reducidos se convertirán en idóneas para aquellas otras que realizan tareas de carácter repetitivo y producen bienes estandarizados, al poder abaratar sustancialmente los costes de fabricación” (Méndez, 1988, pp. 25-26).

Así, la industrialización ha sido considerada como causa originaria del desarrollo económico, como condición de posibilidad para la generación de este círculo virtuoso capaz de generar mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población y, al mismo tiempo, de sostener en el tiempo esas mejoras mediante su propia dinámica.

Esta concepción –quizá simplificada– estuvo en el origen de las leyes de promoción industrial, cuyos principales objetivos fueron “alentar el desarrollo regional procurando una equilibrada instalación de industrias en el interior del país” y “facilitar el traslado de industrias ubicadas en zonas de alta concentración urbana”.

Como consecuencia, el régimen de promoción se dirigió preferentemente a las áreas consideradas *periféricas* y que no habían logrado generar las condiciones de posibilidad para alcanzar un grado de desarrollo similar al de las zonas *centrales*. Esta caracterización contiene una doble connotación: las áreas beneficiadas se consideraban periféricas en cuanto a su escaso desarrollo económico y, al mismo tiempo, se sitúan geográficamente alejadas de los grandes centros urbanos.¹

En términos generales, las medidas promocionales incluían: exenciones de tributos nacionales y de derechos de importación para bienes de capital o insumos, establecimiento temporario de restricciones a la importación de bienes similares a los que se fueran a producir, facilidades para la adquisición de bienes de propiedad del Estado e incentivos a la exportación de los bienes producidos.

La autoridad de aplicación establecida por esa ley para el sistema de promoción industrial era la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.

En 1982 se sancionó la Ley 22.702, que hacía extensivos a las provincias de Catamarca y San Luis los beneficios promocionales acordados por la Ley 22.021 a La Rioja.

Este nuevo instrumento legal incorporaba dos elementos novedosos con respecto al régimen original. Por un lado, establecía como autoridades de aplicación a los gobiernos provinciales para los proyectos que implicaran inversiones medianas o pequeñas.² Por otro lado, eximía a las empresas radicadas y a sus proveedores de la tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 15 años.³

De esta manera, la promoción industrial llegó a San Luis como una de las últimas acciones de envergadura en la estrategia de sustitución de importaciones, especialmente dirigida a elevar el nivel de desarrollo relativo de las provincias más pobres del país.

1 El Artículo 3 de la Ley 21.608 señala que “Los regímenes regionales determinarán la promoción de las distintas áreas geográficas, teniendo especialmente en cuenta sus distancias en relación con los centros consumidores y proveedores y otros factores socioeconómicos que hacen a la localización de las actividades industriales, a fin de procurar el crecimiento equilibrado del país”.

2 La Ley 22.702 establece los montos de las inversiones en “pesos” de la época, cuyo valor es complejo precisar debido a los procesos inflacionarios sufridos desde entonces.

3 Posteriormente, la Ley 23.614 derogó los sistemas de promoción establecidos por las leyes dictadas durante los gobiernos de facto y los reemplazó por un único sistema de promoción industrial para todo el país. Para el caso específico de las industrias radicadas en la provincia de San Luis, esta nueva ley dispuso algunas restricciones a la vigencia de los beneficios y estableció que la liberación del IVA no podría superar el 80 por ciento.

IMPACTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS LEYES DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

En la década de 1980, a partir de la puesta en práctica del régimen de promoción industrial, se comenzó a observar en la provincia de San Luis procesos que, en las zonas tradicionalmente industriales del país, habían tenido lugar unas décadas antes.

En términos generales, esas modificaciones podrían resumirse teniendo en cuenta lo que Molina y Rodríguez (1990) (citados por Del Amo Benito, 2005) sostienen para las fases iniciales de la revolución industrial:

- *Transformaciones económicas*: modificaciones en los métodos de producción, desarrollo de sectores industriales nuevos, modificaciones en la estructura del trabajo y en el sistema financiero, crecimiento del producto, de la renta, del consumo, de la inversión; la agricultura es reemplazada por la industria como fuente principal de riqueza.

- *Transformaciones sociales*: cambios demográficos, fuerte concentración de obreros en las ciudades y junto a los centros industriales emergentes (un incipiente proletariado industrial).

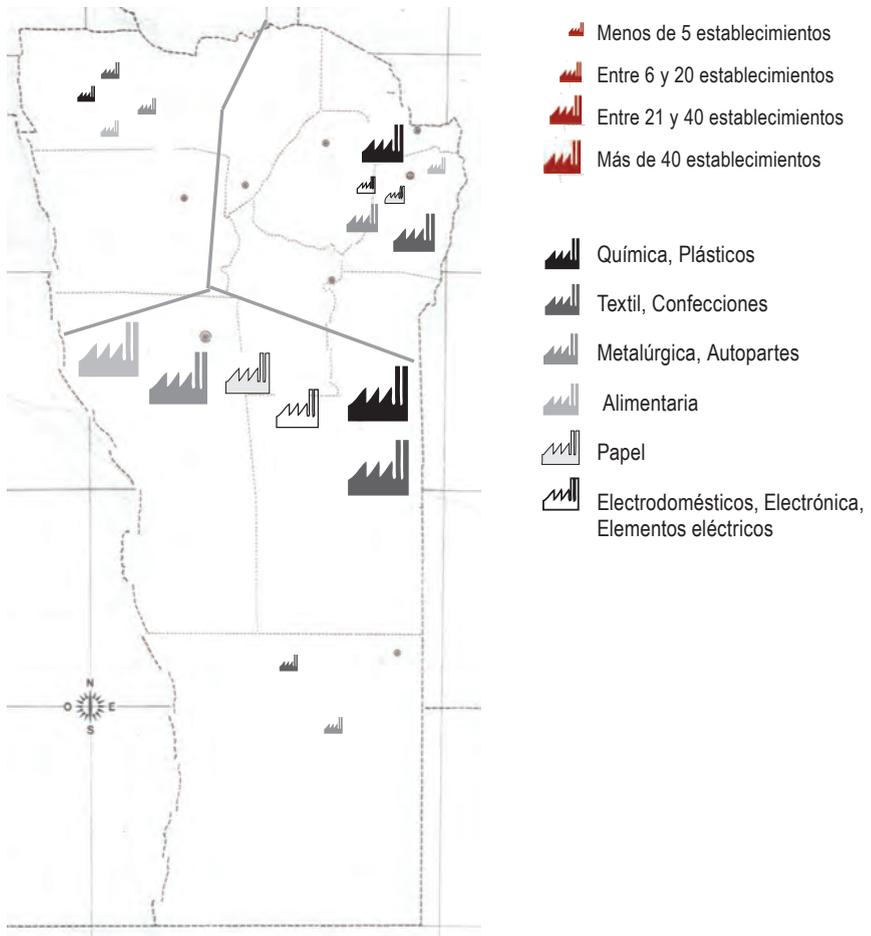
- *Transformaciones espaciales*: fenómenos de concentración ligados a la localización de las industrias y a los servicios derivados. La acumulación del capital y de empleo en puntos específicos incide en la movilidad demográfica y se conforman grandes aglomeraciones humanas. Las ciudades se erigen en centros de atracción, con el papel de agentes organizadores del espacio.

La forma en que estas modificaciones se expresaron en San Luis se puede advertir claramente si se toma en cuenta que, a partir de la implementación de los beneficios promocionales, la provincia se convirtió en un polo de atracción y la cantidad de industrias que se radicaron superó ampliamente a la cantidad de radicaciones logradas por otras provincias incluidas en el régimen de promoción. De esta manera, el parque industrial provincial se transformó en el segundo en importancia en la región de Cuyo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), publicados en un estudio acerca de las aglomeraciones industriales planificadas existentes en el país, a principios de los años 90 había cuatro parques industriales en la provincia de San Luis que alojaban un total de 333 establecimientos.

Dentro del territorio provincial, el asentamiento de industrias se produjo mayoritariamente en las áreas cercanas a las dos ciudades principales, San Luis y Villa Mercedes, como puede observarse en la Figura 1, donde se presenta un resumen de la localización de las empresas radicadas divididas en las principales ramas (Bussetti, 2006).

Figura 1. Ubicación de industrias radicadas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FUNIF Y MECON.

Fueron diversos los factores que incidieron en esa localización: además de las potenciales ventajas derivadas de su ubicación sobre el eje de la Ruta Nacional N° 7, influyeron la disponibilidad de servicios –agua, luz, gas, por ejemplo– así como la existencia de una mayor cantidad de población proveedora de mano de obra para las industrias. Todo ello tendió a acentuar las desigualdades regionales pues concentró las nuevas fuentes de trabajo en los departamentos más poblados y marginó al resto. Vale decir, si bien en términos generales, el régimen de promoción favoreció la relocalización de empresas industriales en el interior del país, las consecuencias que se pudieron advertir en el interior de la provincia fueron bastante menos alentadoras.

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS

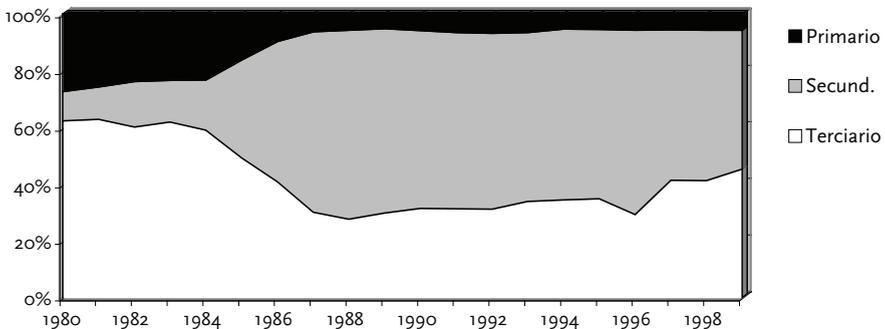
Como consecuencia de la gran cantidad de industrias radicadas, el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial acusó considerables impactos, tanto en su composición por sectores de la producción como en cuanto a los montos de lo producido.

De hecho, el sector primario generaba casi el 30% del PBG en los inicios de los planes de promoción y comenzó a perder participación hasta estancarse en alrededor del 5% hacia finales de la década de 1980.

El sector secundario pasó de generar el 10% a representar más del 66% del PBG en 1989 y, al final de la segunda década, se situó en casi el 50%. El sector terciario, por su parte, era responsable de más del 60% del PBG a comienzos de la década de 1980. Sin embargo, a partir de la vigencia del régimen de promoción industrial, se produjo un trasvase hacia el sector secundario. Como consecuencia, con el auge de la industria el sector servicios llegó a su mínimo histórico: 27%. Más adelante, sin embargo, recuperó terreno hasta ubicarse, hacia el final de la década de 1990, en alrededor del 40% del PBG.

El Gráfico 1 proporciona una muestra de la dimensión del impacto de los planes de promoción sobre la estructura económica de la provincia.

Gráfico 1. Participación relativa de los sectores en el PBG provincial



Fuente: Elaboración propia según datos de la Dirección de Estadística y Censos, San Luis- INDEC.

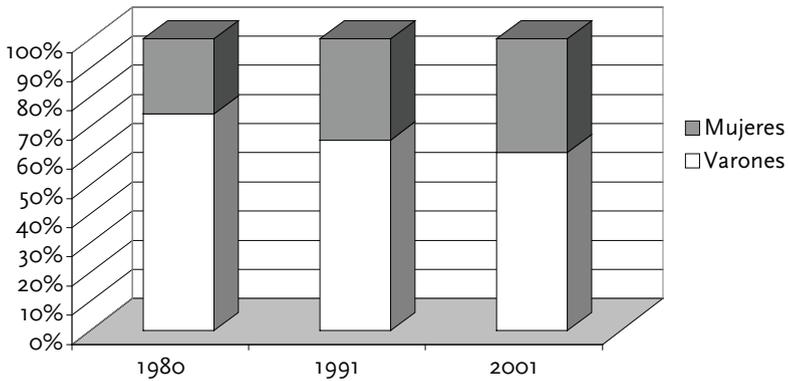
En lo que hace a la magnitud del PBG, entre 1980 y 1999 su monto total se incrementó 4,6 veces. Particularmente, el sector industrial llegó a multiplicar por veintiocho su valor de partida de la serie, hasta convertirse en el principal sector de generación de riqueza provincial (Páez, Olguín y Bussetti, 2000).

MERCADO LABORAL

Obviamente, estos procesos impactaron profundamente sobre el mercado laboral de la provincia: resulta particularmente significativo el hecho de que entre 1980 y 2001 la Población Económicamente Activa (PEA) creció más del 25 por ciento.

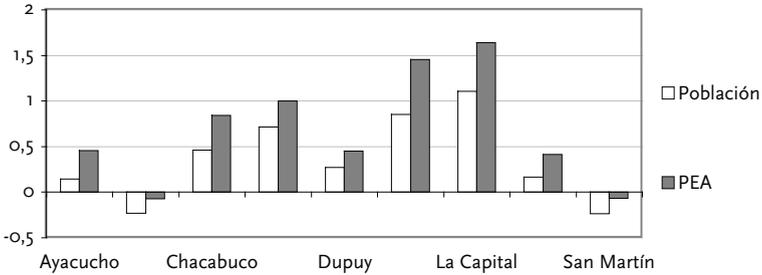
Este incremento se vio fuertemente potenciado por la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral. Este fenómeno, si bien se corresponde con una tendencia general, ha mostrado en San Luis una magnitud más acentuada, a partir de que muchas industrias comenzaron a demandar mano de obra femenina con distintos grados de calificación. Como consecuencia, la tasa de actividad femenina pasó de poco menos del 25% a casi el 50 por ciento.

Gráfico 2. Población económicamente activa por sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de Censos Nacionales-INDEC.

Lógicamente, la distribución geográfica de la PEA siguió el eje marcado por las principales localizaciones industriales: el 80% de la PEA provincial se concentra en los departamentos Capital y Pedernera –en los cuales, por lo demás, junto con los departamentos de Junín, Ayacucho y Chacabuco, fue donde más creció la PEA en el período analizado.

Gráfico 3. Evolución de la población y la PEA por departamento. 1980-2001.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos Nacionales-INDEC.

El incremento en las tasas de actividad puede ser positivo si es que esas personas que ingresan al mercado laboral consiguen una ocupación. Si no es así, una salida masiva al mercado laboral también se puede considerar como una estrategia de supervivencia familiar para tratar de compensar la pérdida de ingresos derivada de la desocupación del jefe de familia. En la provincia de San Luis, la situación registrada por el Censo de 1991 podría asimilarse a una situación de bonanza: aun con el incremento de la tasa de actividad, la tasa de empleo era alta y la de desocupación muy baja (4,4%).

Sin embargo, esa situación se modifica sustancialmente en la medición del Censo de 2001: cae la tasa de empleo en 7,7 puntos porcentuales (pp) y la tasa de desocupación se incrementa en 22,3 pp, llegando casi al 27 por ciento.

Considerando los distintos departamentos, el que registraba en ese momento la menor tasa de desocupación era Dupuy, situado en el sur provincial y con una orientación marcadamente agrícola y ganadera. Llamativamente, los índices eran mayores en los departamentos con mayor número de industrias radicadas y que, por lo tanto, parecerían haber sido más afectados por la pérdida de empleo industrial. Esto se evidencia particularmente en el caso de la Capital, que en 2001 registraba el valor más alto de desocupación: 29% (Bussetti, 2005).

TRANSFORMACIONES SOCIODEMOGRÁFICAS

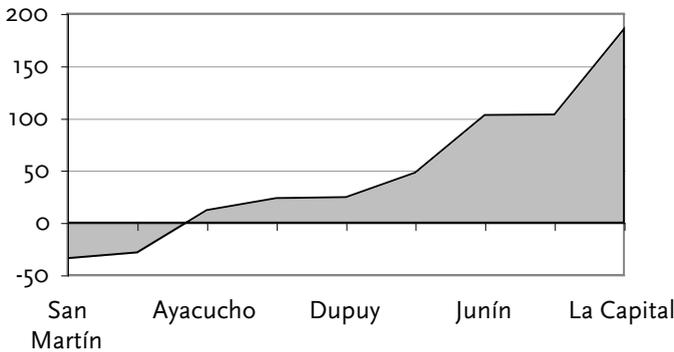
Este proceso de modificación de la estructura económica de la provincia trajo aparejadas profundas transformaciones sociodemográficas que afectaron tanto a la dinámica (crecimiento vegetativo y migratorio) como a la estructura de la población (composición biológica, población activa).

En primer lugar, se produjeron fuertes trasvases de mano de obra desde el medio rural hacia las principales ciudades y zonas industriales, lo cual ocasionó un rápido aumento de población en las áreas receptoras.

Así, mientras varios departamentos no aumentaron e incluso perdieron población, los departamentos Capital y Pedernera –donde, como se señaló, se sitúa la mayor parte de las industrias– incrementaron entre el 40 y el 50% su población entre 1980 y 1991. En la siguiente década, estos departamentos mostraron también un crecimiento importante: casi el 40% en la Capital y más del 20% en Pedernera.

Si se toman en cuenta las variaciones ocurridas a partir de 1980, se observa que, mientras que los departamentos más alejados de los parques industriales llegaron a perder más del 20% de población, el departamento Capital duplicó la cantidad de habitantes y el departamento Pedernera aumentó su población en 70%. De esta manera, a veinte años del comienzo de los planes de radicación industrial, más de dos tercios de la población de San Luis se ha radicado en las ciudades donde se sitúan los parques industriales.

Gráfico 4. Evolución de la población por departamento. 1970-2001



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Censos Nacionales-INDEC

En otras palabras, si bien entre 1970 y 2001 la provincia duplicó su población, este crecimiento no fue simétrico ni homogéneo: mientras que en la Capital la población se triplicó, en los departamentos Junín y Pedernera se duplicó y en otros departamentos cayó más del 30 por ciento.

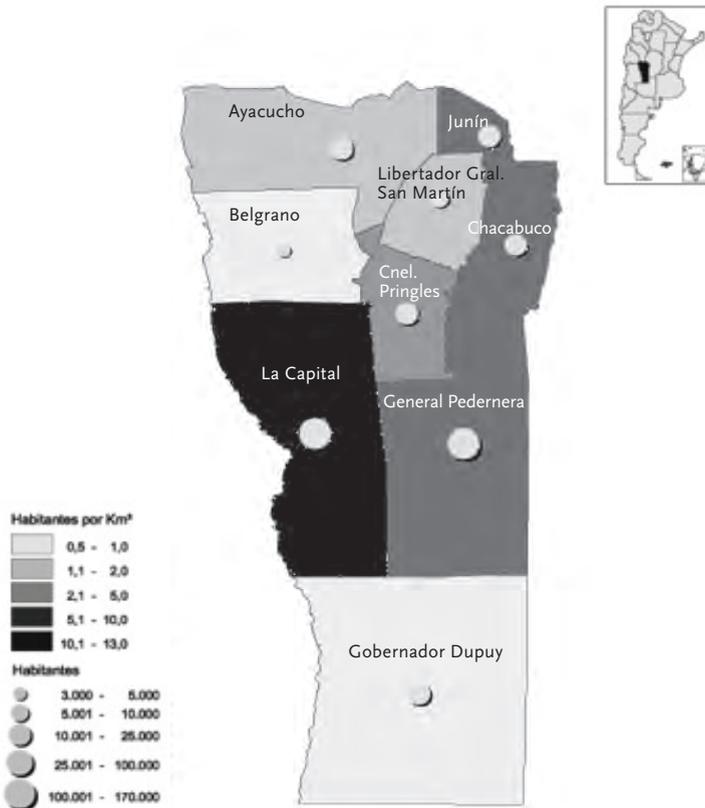
Estos datos confirman el *éxodo rural*: un despoblamiento de las regiones más alejadas y menos favorecidas por la radicación de industrias y un movimiento poblacional orientado hacia los parques industriales de la provincia.⁴

4 El departamento Junín representa un caso atípico: si bien también se vio favorecido por la radicación de industrias, posee una zona turística de importancia en la Villa de Merlo y sus alrededores. Esto ha llevado a que el grueso de la población migrante que se asentó en la zona –particularmente a partir de la década de 1990– lo haya hecho atraída por las posibilidades de desarrollo turístico.

Además, este proceso se vio enriquecido por la llegada de numerosos migrantes provenientes de otras provincias, probablemente atraídos por las expectativas de mejorar su situación laboral y sus ingresos. En efecto, a finales de la década de 1990, alrededor del 60% de la PEA se componía de migrantes, vale decir, población de más de 14 y menos de 49 años de edad que se traslada por expectativas o causas laborales (Olguín, Páez, Bussetti, 2002).

Como consecuencia del aumento de la población, en San Luis se modificó también la relación población/superficie. La tasa de densidad poblacional creció desde el 2,4 de los años 70 hasta el 3,7 en 1991, para llegar a 4,8 habitantes por km² en 2001. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para modificar la situación de San Luis de ser una de las provincias más despobladas de Argentina, ya que la densidad a nivel país asciende a 13 habitantes por km².

Figura 2. Densidad y volumen de la población según departamento, año 2001



TRANSFORMACIONES ESPACIALES

La radicación de industrias implica cambios importantes en los usos del suelo: superficies destinadas a la producción agrícola ganadera que se convierten en espacios destinados a la producción industrial, aumento de la superficie residencial, construcción de infraestructura y ampliación de redes de servicios (rutas, caminos, tendido eléctrico y telefónico, gas, agua, etc.), etcétera.

En efecto, si bien en San Luis el porcentaje total de población radicada en localidades urbanas –más de 2.000 habitantes– continúa siendo inferior al correspondiente para el total nacional, cabe resaltar que es a partir de finales de la década de 1970 cuando se registran las variaciones más significativas en la provincia, como se desprende del Cuadro 1.

Cuadro 1. Tasa de urbanización

Año Censal	Tasa de urbanización (%)	
	Total del país	San Luis
1947	62,2	39,1
1960	72,0	51,8
1970	79,0	57,3
1980	83,0	70,0
1991	87,2	81,1

Fuente: Dirección de Estadística y Censos, San Luis –INDEC.

En las dos ciudades en cuya periferia se situaron los parques industriales es donde la mancha urbana crece considerablemente, lo cual genera también conflictos por los usos del suelo, tanto entre el sector agrario y el industrial como entre el industrial y de servicios y el residencial.

El resultado es que: se reduce la superficie dedicada a actividades agroganaderas en provecho de la superficie urbana-industrial, disminuye el número de explotaciones agrarias, se modifica la dimensión de las parcelas y su morfología, comienza un tipo de actividad agrícola o ganadera a tiempo compartido con otras actividades en la periferia de las principales ciudades.

El aumento de población implica también un incremento en las necesidades de consumo, con lo cual se observa en la periferia urbana un progresivo establecimiento de centros comerciales mayoristas y minoristas y de instalaciones de apoyo o servicios para la producción industrial.

Al final de la primera década de promoción industrial, se evidencia también un deterioro del medioambiente debido a la proliferación de vertederos incontrolados y a sistemas de disposición final de residuos industriales altamente contaminantes. Al mismo tiempo, el espacio se ve degradado por la construcción cada vez más densa de infraestructura vial, edilicia, el tendido y/o ampliación de redes eléctricas, etcétera.

Como se señaló, fue en particular en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes donde la trama urbana se extendió y densificó considerablemente y avanzó sobre superficies rurales. Este proceso no sólo se debió a la necesidad de contar con mayores superficies destinadas al uso residencial, sino que fue favorecido en gran medida por los planes de construcción de viviendas del gobierno de la provincia.

En efecto, a partir de fondos nacionales provenientes del FONAVI, el gobierno provincial encaró una fuerte política de construcción de viviendas económicas. Los cómodos planes de pago estaban diseñados precisamente para favorecer el acceso de los sectores populares.

Estos planes de vivienda contribuyeron a satisfacer las necesidades habitacionales tanto de los sanluisenses como de los que habían migrado atraídos por las oportunidades laborales derivadas de la radicación de industrias, pero lo hicieron profundizando las disparidades territoriales, como puede observarse en la Figura 3.

Figura 3. Ubicación de viviendas construidas



Si bien, como es lógico, las dos ciudades principales requerían una mayor cantidad de viviendas, la disparidad con respecto al resto de los centros urbanos de la provincia fue tan notoria que implicó favorecer nuevamente el traslado de habitantes del interior hacia esas dos ciudades, atraídos no sólo por expectativas laborales sino también por la posibilidad de acceder a un plan de vivienda.

Por lo tanto, se advierte claramente que la industrialización tuvo una nueva expresión territorial, que conformó nuevos paisajes de segregación y nuevas formas de exclusión. Como consecuencia, cambió la forma de inserción de las distintas áreas provinciales y se constituyeron espacios ganadores y perdedores de dinámica, de empleo, de calidad de vida.

Claramente, las regiones “ganadoras” fueron las situadas alrededor del eje marcado por la Ruta Nacional N° 7, donde se asentó la mayor parte de las industrias. En menor medida, también resultó beneficiada la región noreste, aunque en este caso se debió a una expansión no planificada de la actividad turística. El resto del territorio provincial fue notorio “perdedor” en este proceso.

Ahora bien, las políticas públicas provinciales, lejos de orientarse a atenuar estas desigualdades, tendieron más bien a profundizarlas.

LA BÚSQUEDA DE NUEVOS PERFILES PRODUCTIVOS

Hacia finales de la década de 1990, con el final de la promoción industrial a la vista, el Estado puso en marcha una serie de medidas encaminadas a fomentar el desarrollo agrícola. Con ellas se pretendía, por un lado, generar opciones alternativas de empleo e ingresos en áreas alejadas del corredor de la Ruta N° 7, y, por otro y consecuentemente, atenuar las disparidades territoriales.

Particularmente, la Ley de Fomento de las Inversiones y Desarrollo (N° 5.236) planteaba una instancia fundacional e inédita para la provincia: el reparto de tierras.

En efecto, a partir de unas 70.000 hectáreas adquiridas por el Estado de San Luis en el sur de la provincia, se diseñó el Plan Pioneros del Siglo XXI, que tenía como objetivo “poblar productivamente regiones con escasa o nula densidad poblacional”.

Para ello, se implementaban *colonias productivas*. A cada *pionero* beneficiado se le garantizaba acceso a un lote de 200 hectáreas con financiación de hasta 15 años, planes de vivienda con financiación de 30 años, servicios e infraestructura de agua, gas, luz, educación, salud, seguridad y accesos viales.

La Ley 5.236 entró en vigencia en el año 2001, y estaba previsto que la primera de esas colonias comenzara sus actividades en 2002. Para ello, el gobierno provincial desplegó una importante campaña de difusión, que dio como resultado un alto número de inscriptos (Bussetti, 2003).

Sin embargo, actualmente, el único signo visible de la “Colonia Productiva” se reduce a un cartel a la vera de la Ruta Nacional N° 148, ya que el estudio de factibilidad realizado –con posterioridad– determinó que el proyecto mostraba falencias importantes:

- *Suelos*: la provincia planeaba poner en producción 44.000 hectáreas. Sin embargo, los estudios determinaron que los suelos “son arenosos y de origen eólico, frágiles y muy susceptibles a la erosión” y, por lo tanto, sólo manejables con riego.
- *Agua*: el agua en la zona es un recurso escaso. La disponibilidad de agua para riego implica, entre otras cosas, la necesidad de construir al menos 80 pozos profundos.
- *Aptitud para la agricultura*: en la zona se cultiva –en forma extensiva– maíz, sorgo, girasol y –más recientemente– soja. El Plan planeaba incorporar cultivos no tradicionales, como arándanos, y en pequeñas superficies (no más de 20 hectáreas).
- *Aptitud para la ganadería*: en San Luis, las superficies que se destinan para la cría de bovinos son muy grandes, ya que el recurso forrajero que se utiliza principalmente son los pastizales naturales, de calidad variable. En la zona de asentamiento prevista, 200 hectáreas podrían dar sustento a menos de veinte animales.
- *Obras*: teniendo en cuenta que la zona está despoblada, el plan inicial preveía que la provincia construiría centros educativos y de salud, edificios para policía y bomberos, un centro comunal, un Centro de Servicios a la Producción y uno de Producción y Capacitación, 250 viviendas, más de 400 kilómetros de caminos y más de 650 kilómetros de alambrados.

La importancia asignada por el gobierno provincial a este Plan se advierte cuando se analiza la distribución de recursos: la mayor parte de los fondos destinados a la promoción y recuperación del sector primario se transfirieron al Plan Pioneros. Pero, a pesar de la transferencia de recursos, en 2003 se hizo evidente que la viabilidad de tan ambicioso plan estaba seriamente cuestionada. Frente a esto, se dejó sin efecto el límite de 200 hectáreas que se había fijado para cada parcela familiar y se abrió la posibilidad de ingresar como beneficiarios a “inversores que se comprometan a desarrollar actividades afines a la producción agropecuaria”.

Evidentemente, la puesta en producción de tierras y el asentamiento de familias podrían haber contribuido a movilizar la zona y a atenuar su dependencia de los centros urbanos. Sin embargo, y pese a los montos asignados, el Plan

Pioneros no derivó en medidas concretas que llevaran a mejorar la situación del territorio donde se preveía establecer la Colonia Productiva.

Con posterioridad a la devaluación del peso y con el consiguiente cambio de escenario para las exportaciones agrícolas, las actividades primarias han cobrado un nuevo auge en la provincia. Si bien esto ha implicado un proceso movilizador de los recursos en las zonas agrícolas, no parece hasta el momento una alternativa viable con miras a atenuar las desigualdades territoriales: la tecnificación y profesionalización de la agricultura traen como consecuencia que los productores dejen de demandar mano de obra local y prefieran, en cambio, contratar con empresas de los principales centros urbanos (o de otras provincias).

Al mismo tiempo, no se debe dejar de lado en el análisis un factor derivado del éxodo rural antes mencionado: quienes migraron a las ciudades podrían ver el retorno a los pueblos como un retroceso que los aleja de las ventajas de la vida urbana y de las posibilidades de acceso a los bienes –tanto de consumo como de salud, seguridad y demás– que se asocian con dicha vida.

A MODO DE BALANCE

En la provincia de San Luis el Estado ha sido históricamente el principal proveedor de empleo, tanto dentro de la función pública propiamente dicha como a través de planes sociales de empleo o de asistencia.⁵

La fuerte presencia del aparato estatal se ha evidenciado también mediante la puesta en marcha de los planes nacionales de promoción industrial, los cuales implicaron múltiples transformaciones que afectaron todas las dimensiones de la vida social.

En particular, se verificó un desplazamiento poblacional hacia los parques industriales de los principales centros urbanos de la provincia y un consecuente desdoblamiento de las áreas rurales. De esta manera, la industrialización tuvo otra expresión territorial, que conformó nuevos paisajes de segregación y nuevas formas de exclusión.

Estos procesos impactaron profundamente sobre el mercado laboral de la provincia: entre 1980 y 2001 la Población Económicamente Activa (PEA) creció más del 25%; pero su distribución marca las diferencias territoriales en el mercado de trabajo: el 80% se concentra en los departamentos Capital y Pedernera.

La caída de los beneficios promocionales y un escenario nacional e internacional de crisis implicaron para la provincia fuertes desequilibrios en el

5 Esta situación se ha profundizado en los últimos años, si bien existieron planes de empleo desde la década de 1990. A partir del año 2003 se puso en marcha el Plan de Inclusión Social, que brinda ingresos a casi la mitad de la PEA provincial.

mercado de trabajo y la consolidación de escenarios de pobreza, marginalidad e informalidad.

Las políticas públicas provinciales, lejos de orientarse a atenuar las desigualdades resultantes de estos procesos, tendieron más bien a profundizarlas. Por otro lado, algunas iniciativas para mitigarlas no llegaron a concretarse. Con todo, debemos subrayar que es precisamente en el espacio de las políticas públicas donde se deben y se pueden tomar las acciones necesarias para reducir las disparidades regionales, a través de la generación de iniciativas “geográficamente diferenciadas” que permitan aprovechar los recursos, saberes y características de cada espacio para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

BIBLIOGRAFÍA

BUSSETTI, Mónica (2003), “¿Reforma agraria en San Luis?”, ponencia presentada ante las III Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas-UBA.

----- (2005), “San Luis: cambios en el aparato productivo y nuevas formas de organización territorial”, III Seminario Internacional “La interdisciplina en el Ordenamiento Territorial”, UNCuyo, Mendoza, CD-ROM ISBN 987-1024-25-8.

----- (2006), *Impactos de la globalización en el mercado laboral de la provincia de San Luis (Argentina)*, Tesis de Maestría, Universidad Internacional de Andalucía, N° de inventario Biblioteca FICES-UNSL: 14409.

BUSSETTI, Mónica y M. GUTVAY (2002), “¿Volver a las raíces? San Luis y el retorno al agro”, ponencia presentada ante el VI Congreso Latinoamericano de Sociología Rural-ALASRU-Porto Alegre.

DEL AMO BENITO, Roberto (2005), *Transformaciones económicas y cambios sociodemográficos en el espacio de conurbación Tarragona-Reus (1960-1996)*, Tesis Doctoral TDX-0421105-134153-URV, España.

MÉNDEZ, Ricardo (1988), “El espacio de la geografía humana”, en R. PUYOL, J. ESTÉBANEZ y R. MÉNDEZ, *Geografía humana*, Madrid, Cátedra, cap.I.

Ministerio de Economía (MECON), Dirección Nacional de Programación Económica y Regional (DNPER), Parques Industriales, <http://www.mecon.gov.ar/index/cofi/ParquesI.html>

MOLINA IBÁÑEZ, M. y A. RODRÍGUEZ POSE (1990), “Las actividades industriales: fundamento de la dualidad desarrollo-subdesarrollo”, en R. PUYOL (edit.), *Geografía Humana*, Madrid, Ed. Pirámide.

OLGUÍN, J., M. PÁEZ y M. BUSSETTI (2002), “El impacto de las migraciones en el deterioro de la situación laboral de San Luis”, ponencia presentada ante

RESUMEN

Los procesos económicos y sociales producen efectos territoriales. Cada territorio expresa dichos procesos de manera específica y distintiva de acuerdo con su historia productiva y con las prácticas y estrategias de los diferentes agentes sociales involucrados en la gestión de los cambios. Si bien estos procesos se enmarcan en un conjunto de tendencias globales que sirven de contexto a las diversas respuestas, en algunos casos estas sólo pueden comprenderse adecuadamente teniendo en cuenta las características distintivas del territorio particular. En la Provincia de San Luis, a lo largo de las últimas dos décadas, la producción del territorio estuvo signada por las transformaciones ocurridas a partir de la puesta en marcha de los planes nacionales de promoción industrial, que afectaron a todas las dimensiones de la vida social. En efecto, esta nueva situación no sólo cambió la orientación productiva de la provincia, sino que impactó también sobre los comportamientos individuales y familiares que, a nivel agregado, determinan el nivel y las fluctuaciones de la dinámica demográfica.

Particularmente, se verificó un desplazamiento poblacional hacia los parques industriales de los principales centros urbanos de la provincia y, consecuentemente, un despoblamiento de las áreas rurales. De esta manera, la industrialización tuvo una nueva expresión territorial, que conformó nuevos paisajes de segregación y nuevas formas de exclusión. A mediados de la década de 1990, frente a la finalización de los beneficios promocionales, se implementó una serie de políticas públicas, encaminadas a la búsqueda de nuevos perfiles productivos, que generaron nuevos impactos sobre la organización territorial. Este trabajo propone un análisis de esos procesos, tomando especialmente en cuenta que las transformaciones en el empleo y el territorio se impactan mutuamente. Vale decir: las transformaciones en la competitividad territorial se expresan en problemas de empleo y de mercado de trabajo y, a su vez, los cambios en el empleo generan fuertes cambios en la perspectiva de un área territorial.

ABSTRACT

The economic and social processes produce territorial effects. Every territory deals with these processes in specific and distinctive ways, according with its productive history and the practices and strategies of the social agents involved in the management of changes. Though the processes of change that take place in every territory are set in some global trends that contextualize the diverse answers, in some cases the answers only can be adequately understood taking in count the distinctive characteristics in each territory.

In San Luis' province, along the last two decades, the production of the territory was sealed by the transformations happened when some national plans of industrial promotion started. This affected all the dimensions of the social life.

In fact, this new situation not only changed the productive orientation of the province, but struck also on individual and familiar behaviours that, in an

aggregate level, determine the level and fluctuations of demographic dynamics.

Particularly, a population displacement happened towards the industrial parks of the principal urban centers of the province and, as a consequence, rural areas lost population. Hereby, the industrialization had a new territorial expression, which shaped new landscapes of segregation and new forms of exclusion.

In the middle of the decade of 1990, promotional benefits ceased, and a series of public politics, directed promote new productive profiles, generated new impacts on territorial organization.

This work proposes an analysis of these processes, taking specially in count that transformations in employment and territory are overawed mutually. In another words: the transformations in territorial competitiveness express on problems of employment and labour market, and the changes in the employment generate strong changes in the perspective of a territorial area.

PALABRAS CLAVE

EMPLEO
TERRITORIO
INDUSTRIALIZACIÓN

KEY WORDS

EMPLOYMENT
TERRITORY
INDUSTRIALIZATION

JÓVENES EXCLUIDOS: LÍMITES Y ALCANCES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL

*Agustín Salvia
Ilanina Tuñón*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los jóvenes de baja instrucción se ven expuestos a tasas más elevadas de desempleo y precariedad en el trabajo que los adultos en iguales condiciones e, incluso, que los jóvenes con mayor preparación. Pero, si bien es cierto que las mayores dificultades que enfrentan estos sectores para ingresar al mercado laboral se hacen presentes tanto en las economías desarrolladas como en las economías subdesarrolladas, es en estas últimas en donde el problema adquiere mayor alcance y valor cualitativo: ser joven pobre en un país pobre no constituye sólo un factor de riesgo de desempleo o de precariedad laboral, sino también de discriminación, de marginalidad social y de desafiliación institucional.

En este marco, cabe preguntarse: en el caso argentino, ¿en qué medida las políticas orientadas a superar estas dificultades aciertan en el diagnóstico y constituyen una efectiva respuesta a los problemas de afiliación e inclusión social de los jóvenes con déficit educativo y laboral? En particular, esta cuestión se refiere a aquellos programas de capacitación y formación para el trabajo diri-

El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Urgencia Social UBACYT S708 "Jóvenes excluidos: políticas activas de inclusión social a través del trabajo y la capacitación comunitaria", bajo la dirección de Agustín Salvia, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani (UBA). Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Montevideo, 18 al 20 de abril de 2007.

Agustín Salvia es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e Investigador del Instituto Gino Germani (UBA), CONICET e Investigador Jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Departamento de Investigación Institucional de la UCA. E-mail: agsalvia@mail.retina.ar .

Ilanina Tuñón es Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora en el marco del Programa de Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigación Gino Germani (UBA). E-mail: itunon@mail.retina.ar.

gidos a jóvenes pobres, los cuales, en general, están financiados por organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, que mantienen un importante desarrollo y una amplia presencia institucional. Ahora bien, la pregunta que hemos planteado no se puede responder tomando como criterio de evaluación los propósitos del gobierno o los contenidos curriculares de los programas. Al mismo tiempo, si bien la cuantificación y el monitoreo sistemático, tanto del problema como de los resultados de gestión de las acciones, resultan tareas necesarias para este cometido, tampoco resuelven el interrogante de en qué medida las acciones de formación laboral producen o no mejoras efectivas en la inserción de los jóvenes. En cualquier caso, sólo la constitución y posterior comparación de un grupo de control que presente idénticas características a un grupo de beneficiarios (estadísticamente similar al grupo de intervención) permite efectivamente evaluar en qué medida las intervenciones del gobierno tienen el efecto buscado.

Siguiendo esta premisa, como parte de un programa de investigación que estudia la problemática de inclusión juvenil a nivel general, se decidió realizar un estudio de impacto de un programa gubernamental de capacitación laboral en oficios especialmente dirigido a una población de *jóvenes pobres que no estudian*.¹ Dicho programa tenía como propósito mejorar la *empleabilidad* de los beneficiarios, por lo cual la investigación consideró la necesidad y factibilidad de realizar un experimento social a los efectos de evaluar este objetivo medido en términos de inserción laboral entre otros resultados, tanto buscados como no esperados pero de interés en materia de inclusión social. La población objeto de estudio se focalizó en jóvenes de entre 18 y 25 años que no estudiaban, miembros de núcleos familiares que residen en áreas con alta concentración de pobreza en un municipio del conurbano bonaerense.

El municipio donde se realizó el estudio es limítrofe a la Ciudad de Buenos Aires y se lo reconoce dotado políticamente de una “buena” capacidad de gestión institucional. Este municipio abarca un área residencial considerada como típica de “clase media”, si bien, al mismo tiempo, cuenta con nuevos y antiguos asentamientos precarios y algunos barrios con alta concentración de pobreza socioeconómica. El experimento se desarrolló entre marzo de 2005 y julio de 2006 (16 meses), mientras que las acciones de capacitación del programa tuvieron lugar entre junio y diciembre del primer año (6-7 meses) y se ajustaron a los contenidos y a las pautas nacionales del Programa, el cual estuvo a cargo de una unidad ejecutora especializada a nivel nacional. En el plano local, las ac-

1 El Programa Nacional de Inclusión Juvenil, “Programa Incluir”, a cargo de la Dirección General de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se propuso impulsar acciones tendientes a incrementar la participación de los jóvenes en procesos donde desarrollaran competencias a partir de sus conocimientos y cualidades personales, apuntando a su inserción y permanencia en el mercado laboral y al asociativismo como herramienta necesaria para generar redes sociales que contribuyan a una participación ciudadana activa en la comunidad. Se trató de un Programa gratuito que contó con una cobertura en concepto de viáticos de transporte para aquellos beneficiarios que lo solicitaban (www.juventud.gov.ar/institucional.htm).

ciones de capacitación fueron ejecutadas a través de una organización no gubernamental –que concursó para tal efecto–, a la vez que la coordinación general recayó sobre el área municipal relacionada con los temas sociales de juventud.

Contra lo que cabría esperar, este estudio no busca relevar los resultados del experimento, sino informar sobre algunos procesos sociales que tuvieron lugar durante la realización del mismo. Tales procesos resultan relevantes en dos sentidos: a) dan cuenta de la importancia de las condiciones generales de vida de los jóvenes “pobres” para lograr un adecuado acceso a los beneficios que ofrecen estos programas (muy posiblemente extensibles a otras acciones o políticas sociales); y b) explican las limitaciones metodológicas que presenta el experimento –al menos desde la perspectiva de sus supuestos iniciales– para poder evaluar el efectivo impacto de las acciones de capacitación implementadas por el gobierno.

A tal efecto, el trabajo hace un análisis de los condicionamientos sociales que interfieren en las trayectorias de los jóvenes asignados al experimento para acceder, aceptar y finalizar de manera exitosa una capacitación laboral específica, mientras que el grupo de control continúa su vida “normal”. Más concretamente, el presente trabajo responde a los siguientes interrogantes: en primer lugar, ¿cuáles son los factores que determinan que jóvenes de similar condición social rechacen o acepten, participen y finalicen o deserten de un programa de capacitación de las características señaladas?; y, en segundo lugar, ¿en qué medida, como producto de tales factores, el grupo asignado al experimento continúa siendo, al final del proceso, estadísticamente similar al grupo de control?

Estas cuestiones se plantearon y desarrollaron partiendo de datos primarios construidos sobre una encuesta de línea de base realizada en marzo del 2005 y una segunda encuesta que se llevó a cabo seis meses después de finalizadas las acciones de capacitación, en julio de 2006. El análisis se hace para la población de jóvenes que se entrevistó en ambos relevamientos.

CARACTERÍSTICAS DE BASE Y DESGASTE

Como se señaló, el objetivo general de la investigación fue medir el efecto de las acciones de capacitación en oficios emprendidas por el Programa Nacional de Inclusión Juvenil (Programa Incluir), en adelante el Programa, sobre las oportunidades de inclusión social de jóvenes pobres.

El diseño de la muestra avanzó sobre la selección de jóvenes “elegibles” –jóvenes desocupados o subocupados entre 18 y 25 años que no asistían a un establecimiento escolar–. Para ello se identificaron, en primer lugar, las unidades residenciales (manzana-radio) con más de 25% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), a partir de lo cual se distribuyeron de manera aleato-

ria los puntos muestrales entre un grupo experimental y un grupo de control.² En los puntos residenciales seleccionados para formar el grupo de control se visitaron las viviendas, se informó a los jóvenes elegibles sobre los cursos de capacitación del Programa y se los consultó sobre su interés y acuerdo en seguir cursos de capacitación laboral en oficios. En caso afirmativo, se hizo la entrevista de base y se los asignó al grupo correspondiente. En la otra mitad de las zonas, se procedió de igual manera, aunque, en caso de acuerdo por parte de los jóvenes, se procedió a realizar una preinscripción de los mismos. En todas las zonas se entrevistó una cuota residual de jóvenes que rechazaron la posibilidad de recibir capacitación, es decir, se formó un grupo no aleatorio de no interesados en tomar los cursos ofrecidos. El diseño se completó con la inscripción definitiva de los preinscriptos en el marco de los procedimientos formales establecidos por el Programa. Entre el momento de la inscripción en el Programa –última semana de marzo de 2005– y el comienzo de los cursos de capacitación –mediados de julio de 2005– transcurrieron casi cuatro meses. Esta demora en el comienzo de los cursos fue un factor fundamental de desaliento y desmotivación. En muchos casos, los jóvenes ya habían iniciado alguna actividad (laboral o educativa), y en otros, olvidaron la existencia del Programa y la capacitación ofrecida.³

Los jóvenes objeto de esta investigación, tal como mencionamos, comparten un espacio residencial con alta propensión a experimentar pobreza estructural (véase el Cuadro 1). El 81% de los jóvenes relevados residían en hogares cuyo principal sostén de familia no superaba la educación media incompleta, el 58% se encontraba en igual condición educativa y sólo el 42% había finalizado la educación media. Asimismo, el 79% de los jóvenes o bien trabajaba (55%) o bien buscaba un empleo (24%). Sólo el 12% de estos jóvenes mantenía otras formas de inclusión social a través de la participación en organizaciones o de voluntariados en instituciones sociales o empresas sin un salario. Casi la mitad de los jóvenes expresó confianza en encontrar un empleo o un mejor empleo. La mayoría de estos jóvenes (84%) eran solteros, el 16% estaba casado o unido y el 27% ya tenía hijos. La media de edad de estos jóvenes era de 20 años y 6 meses y el 59% eran mujeres.

Del total de 980 jóvenes inicialmente entrevistados que no estudiaban, todos ellos residentes en áreas pobres, se logró reentrevistar en la segunda medición al 53% de los casos del grupo experimental (309 casos), al 48% del grupo de control (133 casos) y al 50% del grupo que rechazó la oferta de capacitación (61 casos). Como es fácil advertir, la muestra de los grupos experimentó un proceso de desgaste. En el caso específico del grupo experimental, ese proceso resultó de mayor magnitud porque sólo algo más de la mitad de los jóvenes convocados a

2 Véase el procedimiento seguido en el diseño de la muestra en el informe de avance UBACYT S.708: "Jóvenes excluidos: políticas activas de inclusión social a través del trabajo y la capacitación comunitaria", bajo la dirección de Agustín Salvia.

3 Monitoreo telefónico realizado sobre muestra de jóvenes seleccionados para formar el grupo experimental en el mes de agosto de 2005. Véase el informe de avance UBACYT S.708, ob. cit.

participar del Programa (59%) efectivizaron su inscripción en el mismo y de ellos el 19% no comenzó, el 17% desertó y sólo el 22% finalizó la capacitación.

Un efecto de este proceso es la conformación en el interior del grupo experimental de al menos tres grupos diferentes de jóvenes según su posibilidades de respuesta a los desafíos de la capacitación: a) los jóvenes que aceptaron pero no se inscribieron, b) los que lo hicieron pero desertaron en el proceso, y c) aquellos que lograron finalizar el proceso de entrenamiento laboral. Si bien el desgaste de la muestra asociado a la reentrevista no evidencia sesgos de selección entre el grupo experimental y el grupo de control, esto no ocurre en las otras fases del proceso de intervención (véase el Cuadro 2). Dada la asignación original, el desgaste de la muestra impactó con mayor fuerza en el interior del grupo experimental dependiendo de atributos como el estado civil, la tenencia de hijos y el nivel educativo previamente alcanzado. Se evidenció una mayor probabilidad de desgaste entre los jóvenes casados o unidos y con hijos, mientras que, por el contrario, la probabilidad de permanecer en el grupo experimental fue mayor para los jóvenes solteros, sin hijos y con mayor nivel educativo.

Frente a estos procesos, cabe preguntarse: ¿qué condiciones sociales explican estos diferentes comportamientos o resultados en materia de trayectorias personales? Y, por otra parte, de confirmarse un sesgo por desgaste entre el grupo experimental y el grupo de control, ¿cuál es el método que se debe seguir para emparejar los grupos del estudio, tomando como parámetro los jóvenes que finalizaron la capacitación?

Por último, hay que señalar que el grupo de jóvenes que rechazaron la posibilidad de capacitarse se diferencia del grupo experimental tanto en el nivel educativo como en la situación ocupacional y en el grado de participación social: tienen menor nivel educativo, presentan menor nivel de desocupación, mayor inactividad y no suelen participar en organizaciones sociales.

Cuadro 1. Estadística descriptiva de la encuesta de base

		Grupo rechazo	Grupo control	Grupo experimental			Total
				Total	No finalizó	Finalizó	
Edad	Media	20,86	20,68	20,69	20,65	20,82	20,71
Sexo	Mujer	59,0%	58,7%	59,2%	58,8%	60,9%	59,1%
Estado civil	Soltero	83,6%	83,5%	84,8%	82,5%	92,8%	84,3%
Tenencia de hijos	Tiene hijos	23,0%	29,8%	27,2%	32,1%	10,1%	27,3%
Nivel educativo	Primaria incompleto	6,6%	2,5%	4,5%	5,4%	1,4%	4,3%
	Prim. comp. Sec. incomp.	54,1%	51,2%	54,4%	56,3%	47,8%	53,6%
	Secundario completo	39,3%	46,3%	41,1%	38,3%	50,7%	42,2%
Nivel educ. del PSH	Primaria incompleto	11,5%	19,0%	15,2%	15,0%	15,9%	15,7%
	Prim. comp. Sec. incomp.	75,4%	62,0%	64,1%	64,6%	62,3%	65,0%
	Secundario completo	13,1%	19,0%	20,7%	20,4%	21,7%	19,3%
Situac. ocupacional	Activo	70,5%	78,5%	80,6%	79,6%	84,1%	78,8%
	Ocupado	55,7%	57,0%	54,0%	52,9%	58,0%	55,0%
	Desocupado	14,8%	21,5%	26,5%	26,7%	26,1%	23,8%
Participación social	Participa	3,3%	10,7%	14,9%	13,3%	20,3%	12,4%
Nivel de confianza*	Mucha/bastante confianza	41,0%	43,8%	51,8%	49,6%	59,4%	48,5%
Totales		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		(61)	(133)	(309)	(240)	(69)	(503)

*en la posibilidad de encontrar un empleo o mejor empleo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de base del Proyecto UBACYT 708, IIGG-UBA y el Municipio de Morón. Base: 503 jóvenes entre 18 y 25 años residentes en radios censales del Partido de Morón con alta propensión a sufrir pobreza estructural.

Cuadro 2. Resultados de las pruebas de hipótesis de diferencias de medias o proporciones entre los grupos de estudio

Variables		Dif.: Asignación vs. Grupo experimental (p-valor)		Dif.: Asignación vs. Grupo control (p-valor)		Dif.: Asignación vs. Grupo experimental que no finalizó (p-valor)	
		Grupo rechazo	Grupo control	Grupo exp. que no finalizó	Grupo exp. que finalizó	Grupo exp. que finalizó	Grupo exp. que finalizó
Edad	Media	0,60	0,98	0,91	0,69	0,61	
Sexo	Mujer	0,97	0,91	0,99	0,76	0,75	
Estado civil	Soltero	0,82	0,74	0,81	0,04	0,03	
Tenencia de hijos	Tiene hijos	0,48	0,60	0,65	0,00	0,00	
Nivel educativo	Primario incompleto	0,55	0,26	0,15	0,61	0,16	
	Prim. comp. Sec. inc.	0,96	0,56	0,37	0,65	0,21	
	Secundario completo	0,80	0,33	0,15	0,55	0,06	
Nivel educ. del PSH	Primaria incompleto	0,41	0,35	0,34	0,59	0,84	
	Prim. comp. Sec. inc.	0,07	0,68	0,63	0,96	0,73	
	Secundario completo	0,12	0,69	0,75	0,65	0,81	
Situac. ocupacional	Activo	0,11	0,63	0,81	0,34	0,41	
	Ocupado	0,81	0,57	0,46	0,90	0,45	
	Desocupado	0,02	0,26	0,27	0,48	0,92	
Particip. social	Participa	0,00	0,23	0,47	0,09	0,15	
Nivel de confianza*	Mucha/bastante confianza	0,12	0,13	0,30	0,03	0,15	

*en la posibilidad de encontrar un empleo o mejor empleo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de base del Proyecto UBACYT 708, IIGG-UBA y el Municipio de Morón. Base: 503 jóvenes entre 18 y 25 años residentes en radios censales del Partido de Morón con alta propensión a sufrir pobreza estructural.

JÓVENES EXCLUIDOS: PROPENSIÓN Y RESISTENCIA A RECIBIR CAPACITACIÓN LABORAL

Una primera aproximación al análisis de los resultados permite reconocer, a partir de los diversos momentos o fases de desarrollo del Programa, diferentes grupos de jóvenes: 1) los jóvenes que rechazaron la posibilidad de inscribirse; 2) los jóvenes del grupo experimental que la aceptaron pero no se inscribieron; 3) los jóvenes que se inscribieron pero que no iniciaron o que abandonaron la capacitación; y 4) los jóvenes que aceptaron, se inscribieron y finalizaron el entrenamiento laboral.

En este marco, cabe preguntarse cuáles son los factores que determinan y/o condicionan que ese segmento de jóvenes, en condiciones iniciales similares respecto del resto de la población en estudio, participen en este Programa. Para poder analizar con mayor claridad la asociación de determinados factores con estos procesos de propensión o resistencia, optamos por la utilización de mode-

los de regresión logística. Por lo tanto, a los fines de este análisis, se distinguió entre grupos de jóvenes y se trabajaron tres modelos de regresión:

a) entre quienes se inscribieron en el programa de capacitación y aquellos que rechazaron la posibilidad de hacerlo, se analizó la probabilidad de rechazar inscribirse respecto de inscribirse;

b) entre aquellos jóvenes que se inscribieron en el programa de capacitación y aquellos que no lo hicieron –estando todos ellos informados y habiendo expresado su intención de participar del mismo–, se analizó la probabilidad de inscribirse en el Programa respecto de no inscribirse; y

c) entre aquellos que participaron del programa y finalizaron el proceso de capacitación y quienes desertaron, se analizó la probabilidad de inscribirse y finalizar una capacitación respecto de desertar.

Las variables explicativas incluidas en los modelos fueron:

- variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, tenencia de hijos, nivel educativo, nivel educativo del jefe de hogar;
- variables socioocupacionales: tener un empleo, buscar empleo; y
- variables de participación social y actitudes.⁴

a) Factores asociados al rechazo a participar del Programa

El modelo de estimación de la probabilidad de rechazar la posibilidad de recibir capacitación frente a la probabilidad de no hacerlo presenta un porcentaje de casos correctamente estimados del 63,2%. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de este modelo logístico señalan las siguientes situaciones como factores asociados a la propensión a rechazar una propuesta de capacitación en oficios: la situación ocupacional, la participación social, el nivel de confianza en la posibilidad de encontrar un empleo o mejor empleo y las interacciones entre el sexo, el estado civil y la situación ocupacional de los jóvenes (véase el Cuadro 3). El modelo finalmente ajustado describe la incidencia de los siguientes efectos relevantes:

- Ser inactivo es significativo como factor determinante del rechazo a participar de una propuesta de capacitación en oficios, aunque no siempre ser activo implica lo contrario.
- La interacción sexo, estado civil y situación ocupacional muestra que los varones casados y las jóvenes mujeres con una ocupación tienen más probabilidades de rechazar la capacitación que las mujeres solteras o casadas y los varones solteros desocupados. Es decir, estos últimos son los más predispuestos a aceptarla.

4 Véase en Cuadro A.1. del Anexo el detalle de las variables incluidas en los modelos de regresión logística.

- Los jóvenes que no confían en la posibilidad de encontrar un empleo o un mejor empleo presentan más probabilidades de rechazar una propuesta de capacitación que aquellos que confían en la posibilidad de encontrar un empleo.
- Los jóvenes que no participan de organizaciones sociales tienen más probabilidad de rechazar una propuesta de capacitación que los jóvenes que suelen tener vida social activa a través de la pertenencia y/o voluntariado en organizaciones sociales.

Cuadro 3. Factores de rechazo a participar del Programa. Jóvenes entre 18 y 25 años de edad residentes en zonas urbanas con alta propensión a sufrir pobreza estructural. Argentina, 2004

Variable dependiente:
Rechazaron capacitarse
Aceptaron capacitarse *

	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Condición de Actividad						
Activo	-1,370	0,483	8,028	1	0,005	0,254
Inactivo*						
Interacción sexo, estado civil y condición de actividad						
Varón casado y ocupado	2,094	0,840	6,209	1	0,013	8,116
Resto de la población*						
Interacción estado civil y condición de actividad						
Soltero/a y ocupado/a	0,888	0,453	3,845	1	0,050	2,431
Resto de la población *						
Confianza en encontrar un empleo o mejor empleo						
Mucha/ bastante confianza	-0,611	0,323	3,584	1	0,058	0,543
Poca/nada confianza*						
Participación social						
Participa	-1,474	0,746	3,898	1	0,048	0,229
No participa*						
Constante	-0,873	0,304	8,260	1	0,004	0,418

*Categoría de comparación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de base del Proyecto UBACyT 708, IIGG-UBA y el Municipio de Morón.

b) Factores asociados a la inscripción al Programa

El modelo de estimación de la probabilidad de inscribirse en el Programa frente a la probabilidad de no hacerlo presenta un porcentaje de casos correctamente estimados del 57,9%. Los resultados obtenidos a partir del ajuste de un modelo logístico permiten reconocer como factores asociados a la propensión a inscribirse en el Programa: la edad, la tenencia de hijos y las interacciones entre condición de actividad y estado civil, y condición de actividad y nivel educativo (véase el Cuadro 4). El modelo finalmente ajustado describe la incidencia de los siguientes efectos relevantes:

- La edad: el efecto de la variable edad resulta positivo e indica que cada año adicional aumenta el momio de inscribirse en el Programa.
- Los jóvenes activos, aquellos que trabajan y buscan empleo o que están desocupados y buscan empleo, tienen más motivación a inscribirse que los inactivos o aquellos que solamente trabajan. Sin embargo, entre estos últimos hay una excepción: también aceptan inscribirse los jóvenes ocupados con educación primaria incompleta (seguramente con una inserción laboral más precaria).
- El estado civil tiene un efecto significativo en tanto las y los jóvenes solteros con educación media completa o superior presentan mayor propensión a inscribirse en el Programa. Al mismo tiempo, los jóvenes con responsabilidad familiar que tienen hijos presentan menor probabilidad de inscribirse que los jóvenes sin hijos.

Cuadro 4. Factores que inciden en la probabilidad de que un joven se inscriba en el Programa. Jóvenes entre 18 y 25 años de edad residentes en zonas urbanas con alta propensión a sufrir pobreza estructural. Argentina, 2004

Variable dependiente:

Inscriptos

*No inscriptos**

	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Condición de actividad						
Busca empleo	0,556	0,300	3,443	1	0,064	1,744
Ocupado que busca empleo	0,620	0,290	4,558	1	0,033	1,859
Resto de ocupados e inactivos*						
Interacción condición de actividad y educación						
Ocupado con educación primaria incompleta o menor	1,682	1,122	2,247	1	0,134	5,376
Interacción estado civil y educación						
Soltero/a con secundario comp. o más	0,458	0,269	2,912	1	0,088	1,581
Tenencia de hijos						
Tiene hijos	-0,524	0,299	3,07	1	0,080	0,590
No tiene hijos*						
Edad						
Constante	0,148	0,055	7,320	1	0,007	1,160
	-3,106	1,153	7,257	1	0,007	0,045

*Categoría de comparación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de base del Proyecto UBACYT 708, IIGG-UBA y el Municipio de Morón.

c) Factores asociados a la finalización exitosa en el Programa

El modelo de estimación de la probabilidad de finalizar los cursos muestra un buen ajuste de los datos, ya que el porcentaje de casos correctamente estimados es del 65,9%. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de un modelo logístico permiten reconocer como factores asociados a la propensión a finalizar un proceso de capacitación: tenencia de hijos, participación social, confianza en la posibilidad de encontrar un empleo o mejor empleo y la interacción entre tenencia de hijos, sexo y nivel educativo (véase el Cuadro 5). El modelo finalmente ajustado muestra la incidencia de los siguientes efectos relevantes:

- Los jóvenes que no tienen hijos tienen más probabilidad de terminar un proceso de capacitación que los jóvenes que tienen hijos. Sin embargo, esta probabilidad, incluso con hijos, es mayor en las jóvenes mujeres con estudios secundarios completos que entre otros jóvenes con hijos.
- Los jóvenes que trabajan como voluntarios en organizaciones o empresas sin un salario tienen mayores probabilidades de terminar un proceso de capacitación que aquellos jóvenes que no lo hacen.

- Los jóvenes que confían en la posibilidad de encontrar un empleo o un mejor empleo presentan más probabilidades de terminar un curso de capacitación que aquellos jóvenes que no confía en dicha posibilidad.

Cuadro 5. Factores que inciden en la probabilidad de finalizar el Programa. Jóvenes entre 18 y 25 años de edad residentes en zonas urbanas con alta propensión a sufrir pobreza estructural. Argentina, 2004

Variable dependiente:

Finalizar el proceso de capacitación

*Desertar del proceso de capacitación **

	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Tenencia de hijos						
Tiene hijos	-1,717	0,572	9,022	1	003	0,180
No tiene hijos*						
Interacción tenencia de hijos, sexo y nivel educativo						
Mujer con hijos y estudios secund. compl. o más	2,193	1,350	2,639	1	0,104	8,96
Resto de la población*						
Participación social						
Participar	2,072	1,095	3,584	1	0,058	7,94
No participar*						
Confianza en encontrar un empleo o mejor empleo						
Mucha/bastante confianza	0,688	0,391	3,091	1	0,079	1,989
Poca/nada confianza*						
Constante	0,006	0,292	0,000	1	0,983	1,006

*Categoría de comparación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta de base del Proyecto UBACYT 708, IIGG-UBA y el Municipio de Morón.

SÍNTESIS DE RESULTADOS

El presente trabajo resume algunos de los avances de investigación del Proyecto de Urgencia Social UBACYT S.708 “Jóvenes excluidos: políticas activas de inclusión social a través del trabajo y la capacitación comunitaria”, el cual se desarrolla en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

El Programa Nacional de Inclusión Juvenil dependiente de la Dirección Nacional de Juventud tomó la decisión de impulsar acciones tendientes a incrementar la participación de los jóvenes en procesos donde desarrollen competencias a partir de sus conocimientos y cualidades personales, “apuntando a su inserción y permanencia en el mercado laboral como herramienta necesaria para generar redes sociales que contribuyan a una participación ciudadana activa en la comunidad”. Para tal efecto, desarrolló y financió acciones de capacitación

laboral en oficios dirigidas a jóvenes de 18 a 25 años en situación de pobreza, desocupados o subocupados que no estudian, con bajo nivel de escolaridad y/o baja calificación laboral (Programa Incluir, 2005).

El proyecto de investigación mencionado se propuso realizar una evaluación de impacto de este Programa. En función de este objetivo se implementó una encuesta de línea de base a jóvenes elegibles del mismo, residentes en áreas urbanas con alta concentración de pobreza. Si bien el procedimiento de selección buscó igualar de manera “aleatoria” a los jóvenes asignados a cada grupo, los jóvenes asignados al grupo experimental fueron preinscriptos al Programa en el momento de la encuesta, mientras que los jóvenes asignados al grupo control sólo fueron informados sobre el Programa a modo de estímulo para así medir su predisposición a participar del mismo. Esta diversidad inicial probablemente explica las diferencias –aunque estadísticamente no significativas– que se observan entre el grupo control y experimental, especialmente la mayor confianza de los integrantes de este último en la posibilidad de encontrar un empleo o un mejor empleo.

Sin embargo, el principal problema observado durante el experimento no fue la asignación aleatoria de casos a los grupos de comparación, sino el desgaste selectivo experimentado por la muestra producido por las propias acciones de intervención del Programa, especialmente en el grupo experimental en el que sólo 69 jóvenes lograron finalizar la capacitación. Como hemos analizado, el desgaste que experimenta este grupo se relaciona con variables como la situación ocupacional, el estado civil, la tenencia de hijos y el nivel educativo alcanzado: fue más probable el desgaste entre los jóvenes casados o unidos y con hijos mientras que, por el contrario, entre los jóvenes solteros, sin hijos y con mayor nivel educativo fue mayor la probabilidad de permanecer en ese grupo. Esto, en principio, nos indica las dificultades que tuvo el Programa para retener a los jóvenes más vulnerables por sus responsabilidades familiares y su nivel educativo.

Este proceso evidencia la imposibilidad de aplicar el experimento sobre la base de sus supuestos iniciales y, a la vez, plantea el desafío metodológico de ajustar las poblaciones de estudio con el fin de poder evaluar el impacto real de las acciones de capacitación, aunque más no sea sobre el grupo que finalizó esa capacitación. Por otra parte, nos enfrenta a la posibilidad de evaluar situaciones por demás relevantes: ¿qué aspectos determinaron que los jóvenes del estudio se inscribieran en este Programa?; ¿qué otros factores llevaron a que no se hayan inscripto aun queriendo hacerlo?; ¿qué determinó que algunos jóvenes logran transitar por el proceso de capacitación y que otros tuvieron que desertar? A estas preguntas antepone un interrogante fundamental que tiene que ver con el diseño original: ¿qué determinó el rechazo a oportunidades gratuitas e incentivadas de capacitación?

A partir de estos hallazgos, el presente trabajo busca subrayar la relevancia de algunos factores sociales que intervienen en los procesos de selección

de beneficiarios pobres para su inclusión en programas de capacitación laboral o en otras políticas de orden social y que no siempre tienen en cuenta quienes diseñan o ejecutan estas acciones. En tal sentido, se intentó destacar la importancia de considerar las condiciones generales de vida de los jóvenes de sectores vulnerables para lograr un adecuado acceso a los beneficios que ofrecen estos programas. Los modelos de regresión logística nos ayudan a encontrar respuestas a las preguntas planteadas. Los jóvenes entre 18 y 25 años, miembros de núcleos familiares que residen en áreas con alta concentración de pobreza presentan una mayor resistencia a participar de un programa de capacitación en oficios cuando tienen una ocupación, si son solteros –de ambos sexos– o varones casados, si no buscan empleo activamente, no confían en encontrar un empleo o un mejor empleo, y no participan de organizaciones sociales. Mientras que los que presentan mayor propensión a inscribirse en un programa de capacitación son aquellos jóvenes que trabajan y buscan empleo activamente, no tienen hijos, son solteros y han alcanzado una educación media completa o, incluso con una educación baja, se encuentran integrados al mundo del trabajo. Por último, finalizan el proceso de capacitación los jóvenes que no tienen hijos, que participan en organizaciones sociales a través de algún tipo de voluntariado y que confían en la posibilidad de encontrar un empleo o un mejor empleo. Para estos jóvenes la responsabilidad familiar (tener hijos) es un factor que limita la propensión a la capacitación laboral y el éxito en este proceso, que sólo es sobrellevado por las jóvenes mujeres con mayor nivel educativo.

En definitiva, los resultados presentados ofrecen clara evidencia sobre una serie de procesos sociales que tienden a afectar la inclusión de los jóvenes en las acciones que el Estado propone, precisamente, para su supuesta inclusión. Los jóvenes que logran aprovechar cabalmente la oportunidad son los jóvenes más integrados, activos en lo ocupacional, con mayor nivel educativo y que mantienen otro tipo de inclusión en organizaciones de la sociedad civil que no son la escuela, ni el mundo del trabajo. Las responsabilidades familiares en contexto de pobreza constituyen un límite para el desarrollo de competencias y para la inclusión socio-ocupacional. Esto configura, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental que el diseño de políticas públicas debiera incorporar.

ANEXO

Cuadro A.1. Variables consideradas en los modelos de regresión

Variables	Definición operativa
<i>Variables dependientes</i>	
Rechazo de la capacitación	0. Inscriptos 1. Rechazo
Inscripción en los cursos	0. No inscriptos 1. Inscriptos
Finalización del curso	0. Deserción 1. Finalización
<i>Variables independientes</i>	
Edad	Métrica
Sexo	0. Mujer 1. Varón
Estado civil	0. Casado / Unido 1. Soltero
Tenencia de hijos	0. No tiene hijos 1. Tiene hijos
Máximo nivel educativo alcanzado	0. Hasta Primario incompleto 1. Primario completo/Secundario incompleto
Máximo nivel educativo alcanzado	0. Hasta Secundario incompleto 1. Secundario completo y más
Máximo nivel educativo alcanzado por el principal sostén del hogar	2. Hasta Primario incompleto 3. Primario completo/Secundario incompleto
Máximo nivel educativo alcanzado por el principal sostén del hogar	2. Hasta Secundario incompleto 3. Secundario completo y más
Población Económicamente Activa	0. Inactivo 1. Activo
Tiene un empleo actualmente	0. No tiene 1. Si tiene
Buscar un empleo activamente	2. No buscar empleo 3. Buscar empleo
Confianza en poder encontrar un empleo o un mejor empleo	0. Poca / nada confianza 1. Mucha / bastante confianza
Participación social: (participa de alguna organización, institución o grupo juvenil (grupos deportivos, religiosos, políticos, artísticos, etc.) y/o trabaja como voluntario para una organización/empresa sin salario	0. No 1. Sí

BIBLIOGRAFÍA

ABDALA, E. (2004), *Manual para la Evaluación de Impacto en programas de Formación para Jóvenes*, Montevideo, CINTERFOR.

GALAZO, E., M. RAVALLION y A. SALVIA (2004), "Assisting the Transition from Workfare to Work: A Randomized Experiment", en *Industrial & Labor Relations Review*, vol. 58, n°1.

PROGRAMA INCLUIR (2005), *Documento de trabajo*, Buenos Aires, Proyecto Nacional de Inclusión Juvenil, Dirección Nacional de Juventud (DINAJU), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

SALVIA, A. (dir.) (2005), "Informe de Avance Proyecto UBACYT de Urgencia Social (708): 'Jóvenes excluidos: políticas activas de inclusión social a través del trabajo y la capacitación comunitaria'", Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

SALVIA, A. e I. TUÑÓN (2003), *Los jóvenes trabajadores frente a la educación, el desempleo y el deterioro social en la Argentina*, Buenos Aires, Friedrich Ebert Stiftung.

SALVIA, A. e I. TUÑÓN (2006), "Los jóvenes y el mundo del trabajo en la Argentina actual", en *Revista Encrucijadas*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires (UBA).

SALVIA, A., E. PHILIPP, I. TUÑÓN y V. CHÉBEZ (2003), "Evaluación de impacto de los Talleres de apoyo a la búsqueda de empleo del Ministerio de Trabajo", en *Revista Laboratorio*, Año 4, (2° época), n° 11/12, verano/otoño.

----- (2006), "Los jóvenes pobres como objeto de políticas públicas. ¿Una oportunidad para la inclusión social o un derrotero de manipulación y frustraciones?", ponencia presentada en el 3° Congreso Nacional de Políticas Sociales, Observatorio Social, Buenos Aires, 18, 19 y 20 de octubre.

RESUMEN

Las dificultades que actualmente enfrentan los jóvenes para ingresar a la vida adulta se hacen presentes tanto en el contexto de economías desarrolladas como subdesarrolladas. Pero en estas últimas, el problema adquiere mayor extensión, constituye un factor de riesgo relativo de desempleo, de discriminación y de desafiliación socio-institucional. ¿Es este, en efecto, un problema general o cabe relativizarlo a grupos específicos de la juventud? En este caso, ¿quiénes son los jóvenes que están más expuestos a tales privaciones? En el marco de un diagnóstico controvertido, cabe preguntarse: ¿cuál es el sentido y el alcance de las políticas públicas que intentan dar respuesta a este problema en la Argentina? ¿Cuál es su pertinencia y eficacia? A estas preguntas, buscamos responder con una investigación cuasi-experimental que evalúa el impacto del Programa Incluir –acciones de capacitación en oficios– sobre las oportunidades de afiliación socio-laboral de jóvenes excluidos en el Partido de Morón, Buenos Aires.

Abstract

The difficulties that at the moment the youths face to enter to the mature life they become present so much in the context of economies developed as underdeveloped. But in these last ones, the problem acquires bigger extension, it constitutes a factor of relative risk of unemployment, and discrimination. Is this indeed a general problem or does it fit relative to the youth's specific groups? In such a case, who are the youths that are more exposed to such privations? In the mark of a controversial diagnosis, it is necessary to wonder: which is the sense and the reach of the public politicians that they try to give answer to this problem in the Argentina? Which is it their relevancy and effectiveness? To these questions, we look for to respond with a quasi-experimental investigation that evaluates the impact of the Program Incluir –training actions in occupations–, on the opportunities of youths'partner-labor affiliation excluded in the Party of Moron, Buenos Aires.

PALABRAS CLAVE

JUVENTUD
EXCLUSIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
INSERCIÓN OCUPACIONAL

KEY WORDS

YOUTH
EXCLUSION
PUBLIC POLITICS
OCCUPATIONAL INSERT

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA REGIÓN CORDOBESA DE RÍO CUARTO. LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS

Vanina Inés Simone

INTRODUCCIÓN

El escenario de cambios económicos, sociales y políticos abierto en nuestro país a mediados de los años setenta se profundizó en los noventa con programas de estabilización y ajuste, sintetizados en procesos de apertura, privatización y desregulación. Este contexto implicó profundas transformaciones para los sectores industriales y para las empresas.

Existe consenso entre distintos autores, como Katz, Azpiazu y Nochteff, en que los breves ciclos económicos por los que atraviesa nuestro país inducen a incesantes transformaciones estructurales. Dada su intermitencia, estos ciclos no permiten una recuperación planificada y propician cierta vulnerabilidad de los sectores industriales (Katz, 1996; Azpiazu y Nochteff, 1994).

Al mismo tiempo, el nuevo contexto global plantea desafíos relevantes para la producción y comercialización de bienes y servicios. La intensificación de las transacciones comerciales alrededor del globo, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los constantes avances en la producción de conocimiento científico y tecnológico, las variadas prácticas empresariales posibilitadas por la fragmentación de las distintas fases de fabricación, el acortamiento de la vida útil de los productos, la difusión de renovadas técnicas organizacionales, entre otros, son cambios que, de una u otra manera, afectan a todos los sectores e inciden sobre el conjunto de las actividades independientemente de que se trate de grandes o pequeñas empresas.

El presente estudio profundiza algunos ejes de investigación que he analizado en documentos de trabajo publicados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esos trabajos también han participado Verónica Competelli, Amalia Tasca y María Eugenia San Martín.

Vanina Inés Simone es Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Proyecto UBACYT S056. Maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo-FSOC-UBA.

Sin embargo, a pesar de que dichas transformaciones marcan tendencias en cuanto a la organización de la producción, a la conformación de los mercados, al desarrollo tecnológico y a las modalidades empresariales de competitividad, se trata de grandes pautas cuya aplicación está signada por muchos condicionantes concretos. El trabajo de investigación que proponemos muestra que, dentro de un abanico de posibilidades, caben opciones diversas de búsqueda de competitividad y mejoramiento de la capacidad tecnológica.

En este sentido, algunas de las preguntas que nos guiaron fueron las siguientes: ¿Qué decisiones y proyectos adoptan las empresas para mantenerse en el mercado o para mejorar su competitividad? ¿Adónde se dirigen las inversiones? ¿Se requiere el conocimiento o el potencial científico y técnico de los ingenieros y los grupos de investigación de las universidades? ¿Se puede pensar que dichas decisiones marcan rumbos diferentes que incentivarían o, por el contrario, desanimarían desarrollos tecnológicos autónomos? ¿Cuáles son los factores que diferenciarían a dichas firmas de las otras? ¿Qué criterios de análisis y clasificación se podrían utilizar para comprender y caracterizar sus transformaciones en el tiempo?

En función de estos interrogantes, un aporte importante de nuestro trabajo ha sido la inclusión de una dimensión de análisis sobre las perspectivas, los proyectos y los planes de cambio y de transformación que las firmas están llevando a cabo o han realizado en los dos últimos años.¹ De esta manera, podemos estudiar a las firmas no sólo a partir de su estructura y capacidad actual sino también en función de su planificación en el corto y mediano plazo, con una mirada hacia adelante. Es decir, podemos indagar si tienen proyectos en curso, identificar cuáles son, por qué los planearon, en qué áreas de la empresa se localizan, cómo los están implementando, qué tipo de conocimientos y *expertise* demandan, etcétera.

Mirar e indagar hacia delante brinda la posibilidad de analizar las transformaciones desde el momento en que se proyectan o planean, pues es en ese momento donde se diseñan las políticas empresarias que luego tendrán consecuencias en el tipo de desarrollo tecnológico y en la producción de conocimiento e innovación local. Las decisiones que se toman hoy marcarán el futuro de los próximos cinco o diez años (Castillo, de las Alas-Pumariño, del Bono, Fernández, Galán y Santos, 2000, p. 28).

La base empírica de este trabajo está conformada por treinta y tres empresas de la región cordobesa de Río Cuarto, zona que se caracteriza por el predominio de actividades agropecuarias.² Estas empresas son fundamentalmente

1 No se tuvieron en cuenta en este análisis las declaraciones sobre proyectos que no estaban en marcha en el momento de la visita (independientemente de su etapa de ejecución). Los proyectos y planes de cambio a los que nos referimos se constataron mediante el trabajo de campo que se llevó a cabo *in situ* en las empresas.

2 Corresponde a una muestra calculada sobre la base de establecimientos productivos registrados por la

PYMES³ (un total de veintinueve) dedicadas a la actividad manufacturera, y las de mayor peso son aquellas ligadas al sector agroindustrial, a la industria de la alimentación y a la metalmecánica.

Entre las firmas del sector de alimentación y bebidas, se visitaron industrias cárnicas, lácteas, molineras, procesadoras de maní, elaboradoras de alimento balanceado para animales, una empresa que fabrica variedades de café y otros insumos y una elaboradora de gaseosas. Entre las pertenecientes a la metalmecánica, se incluyeron rectificadoras de motores y fabricantes de accesorios para automóviles, carrocerías, maquinaria para el agro y sus repuestos, maquinaria para la industria láctea, construcciones metálicas para uso estructural y generadores de energía. Además, se visitaron dos empresas elaboradoras de productos minerales no metálicos, que fabrican mosaicos, bloques de cemento y premoldeados.

Una vez seleccionados los casos, el trabajo de campo se diseñó desde una perspectiva cualitativa con el objeto de profundizar en las transformaciones que sufren dimensiones tales como: la estructura de la empresa, la organización de la producción, los aspectos tecnológicos y organizacionales, la gestión de la calidad, las políticas de personal y la función y tareas que cumplen los ingenieros. La recolección de la información en las empresas se llevó a cabo mediante las técnicas de observación y entrevistas a los dueños de las empresas, a gerentes, a jefes de planta y a profesionales encargados del área de calidad.⁴

El presente documento consta de tres partes. En la primera, se desarrolla nuestro esquema de análisis y las principales concepciones teóricas de las que nos hemos nutrido para elaborarlo. En la segunda, se analizan los casos según dicho esquema y sus transformaciones con posterioridad a la crisis 2001/2002, diferenciando cuatro orientaciones de búsqueda de competitividad y su relación con la participación de los ingenieros y el tipo de desarrollo tecnológico que delinean. Por último, en la tercera parte se profundiza en los resultados y en su relación con algunas líneas de pensamiento que aportan a la comprensión de la articulación entre ciencia, tecnología e industria.

Cámara de Comercio e Industria de la región.

3 Si bien existen varios parámetros para evaluar qué es una PYME, tales como la facturación anual según el sector al que pertenecen y la cantidad de ocupados, en este análisis, el tamaño de las firmas se ha determinado a partir de la cantidad de ocupados, de acuerdo con las declaraciones brindadas por los mismos entrevistados. Siguiendo el criterio de Gutman (1999) y el de Kantis, Carmona y Ascua (2000), se consideran pequeñas empresas aquellas que declaran tener entre 6 y 50 ocupados y empresas medianas a aquellas que tienen entre 51 y 200 ocupados.

4 El trabajo de campo que conforma la base de datos sobre empresas fue realizado por Vanina Simone, Amalia Tasca y Verónica Campetelli, del equipo de Monitoreo de Inserción de Graduados del PAITE (UBA), y por Analía Chiecher y Paola Verónica Paoloni, integrantes del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, durante el último trimestre del año 2004 y el primero del año 2005.

COMPETITIVIDAD Y CAMBIO TECNOLÓGICO EN LAS PYMES. ALGUNAS APROXIMACIONES A NUESTRO ESQUEMA DE ANÁLISIS

En primer lugar, debemos señalar que la conceptualización de empresa que retomamos en este trabajo se aleja de la estilización de la empresa neoclásica, que actuaría como un autómatas desprovisto de hábitos y rutinas propios de comportamiento. Por el contrario, consideramos a la empresa como una organización social, con estructura y senderos de aprendizaje idiosincrásicos, con percepciones diferenciadas de la realidad y con estrategias distintas de mercado. A diferencia de la tradición neoclásica que se rige por la empresa representativa, la cual siempre sabe lo que puede y debe hacer y siempre elige lo que más le conviene, la literatura llamada no convencional brinda alternativas de análisis para comprender y captar una realidad más compleja y heterogénea. En esta línea se ubican los aportes provenientes de las vertientes estructuralistas, como pueden ser los de Simon y Chandler, y, por otra parte, los de distintos autores neoschumpeterianos como Freeman, Dosi, Boyer. Para estas visiones, las distintas estructuras empresariales y las diferentes estrategias y procesos de aprendizaje de cada firma cumplen un papel central a la hora de ver el comportamiento de una actividad productiva determinada y su conducta innovativa (Katz, 2000).

En este sentido, numerosos estudios⁵ han descripto y problematizado la creciente complejidad –entendida como multiplicidad de dimensiones– que deben “sintetizar” actualmente las firmas a la hora de lograr ventajas competitivas y mejorar su capacidad tecnológica en el nuevo contexto. A los factores macroeconómicos y sectoriales se agregan factores intangibles que se construyen a partir de competencias endógenas y de la articulación con otros agentes (Boscherini y Yoguel, 2000, p. 132). Los procesos de innovación tecnológica y organizacional, las exigencias de calidad, la logística, las capacidades de adaptación y flexibilidad, el aprendizaje constante, la relevancia de “aprehender” y rutinizarse los saberes tácitos construidos en el colectivo de trabajo y la conformación de redes con las organizaciones del entorno son algunos de los elementos que construyen las nuevas *performances* competitivas.

Para poder lograr una mayor competitividad, la firma puede recurrir a diversos instrumentos como mejorar la gestión financiera, disponer de activos tales como una mayor capacidad innovadora en materia de nuevos productos y procesos de producción, lograr un aumento de la productividad de la mano de obra y del capital mayor que el de sus competidores, reducir sus costos a través

5 Me refiero a los estudios recientes sobre empresas que ponen el acento en las dimensiones intensivas en el uso del conocimiento y en las capacidades de articulación entre distintos actores sociales en un territorio, en lugar de basar su competitividad en la explotación de los recursos naturales o la mano de obra barata. Sin embargo, en estos estudios resulta difícil separarse de los casos “exitosos” (Emilia Romagna, Silicon Valley) y de su carácter de “buen recetario” para cualquiera que quiera ponerlos en práctica, y encontrar, en cambio, perspectivas que incluyan análisis históricos, desarrollos industriales dependientes y desiguales, concentración y transnacionalización de la producción, etc., de suma importancia para comprender nuestra realidad productiva.

de una mayor integración vertical (reduciendo los costos de transacción) o, en otros casos, por medio de una descentralización de la producción en el país (subcontratación) o a través de inversiones o licencias en el exterior (Chudnovsky y Porta, 1990, p. 9).

Según la diferenciación que hace Kosacoff de las conductas de las empresas, las estrategias empresarias de competitividad pueden ser de dos tipos: hay empresas que implementan conductas de tipo “ofensivo” que muestran desempeños notables en los intentos por alcanzar niveles de productividad similares a los internacionales, anticipando escenarios; y hay empresas que tienen conductas de tipo “defensivo”, que ponen de relieve la insuficiencia de los esfuerzos para cerrar la brecha de productividad y muestran, por lo tanto, la vigencia de muchas restricciones, dificultades y carencias (Kosacoff, 1998).

De acuerdo con esta distinción, la mayoría de las empresas de nuestro estudio pueden caracterizarse por desarrollar estrategias más ligadas al tipo “defensivo” y responder a los rasgos generales que han definido a las PYMES en nuestro país.

Los rasgos predominantes de las pequeñas y medianas empresas, antes del proceso de apertura y reformas estructurales de los años noventa, pueden resumirse en los siguientes: centralización de la gestión en la figura del dueño, inserción externa poco significativa, amplio *mix* de producción, escasa especialización productiva, reducida cooperación con otras firmas, escasa relevancia de las actividades de innovación y reducido nivel de inversión. A esto debe sumarse la situación particular de dificultad de acceso a los instrumentos de apoyo (Kosacoff y López, 2000). Estos rasgos generales, de acuerdo con la evidencia empírica analizada en el presente estudio, no pierden su pertinencia a la hora de caracterizar a la mayoría de las PYMES de la región en la primera década del siglo XXI.

Desde comienzos de los noventa el conjunto de empresas estuvo expuesto a cambios estructurales y a procesos de globalización y de integración que afectaron a todos los sectores de actividad. La creciente incertidumbre de los mercados y la velocidad de los avances tecnológicos y organizacionales aumentaron la presión competitiva y presionaron a las firmas a encarar cambios que, en muchos casos, fueron más allá de un reajuste en su trayectoria de crecimiento previo, en otros, significó un repliegue con fines de supervivencia y, en los más extremos, implicó directamente su extinción.

La dificultad de definir una estrategia en el proceso de transformación económica abarca al conjunto de PYMES, independientemente de su especialización en actividades agropecuarias, industriales y de servicios. Los cambios tecnológicos y organizacionales recientes se están difundiendo por todo el tejido productivo. La gestión del cambio de las empresas se da simultáneamente con una creciente concentración y segmentación de los mercados que replantea el tamaño mínimo de las unidades productivas y la identificación de una mayor diferenciación en la producción de bienes y servicios (Kosacoff y López, 2000).

Las pequeñas y medianas empresas de nuestro estudio son, en su mayoría, de una antigüedad mayor a quince años, es decir, son empresas que atravesaron la profundización de las reformas estructurales de la década del noventa, aunque con diferentes impactos a nivel sectorial: los sectores basados en la explotación de recursos naturales se vieron favorecidos por la apertura externa, mejorando su inserción en el comercio mundial; en cambio, los sectores productores de bienes de capital y de uso intensivo de servicios de ingeniería e investigación y desarrollo quedaron más desprotegidos. De acuerdo con ello, en la región estudiada hemos observado que, en general, las empresas que lograron subsistir son las que acompañaron a la actividad agropecuaria y agroindustrial (Simone, Campetelli y Tasca, 2006). Además, son en su mayoría de desarrollo “independiente”, es decir, que no se desenvuelven como subcontratistas de firmas de mayor tamaño, ni forman parte de redes productivas.

En este sentido, nos preguntamos si, en los años posteriores a la crisis del año 2002, estas empresas han proyectado y efectivamente implementado cambios tecnológicos tanto a nivel de ingeniería de producto, como de proceso y organización del trabajo. A partir de los distintos grados y áreas de reestructuración, modernización e innovación, se las puede ubicar o bien en la senda de la adaptación (en continuidad con los años anteriores) o bien en caminos de crecimiento que, a su vez, se bifurcan entre aquellos motorizados por actividades de investigación e innovación y aquellos que diversifican sus unidades de negocio a partir de la incorporación de diseño y tecnología extranjeros. Es decir que, mientras que en el primer caso se desarrollan actividades de mantenimiento y de ingeniería adaptativa, en el segundo camino, en cambio, se observan dos formas de desarrollo de la capacidad tecnológica: la primera fortalece la acumulación de aprendizaje tecnológico y hace uso intensivo de la ingeniería y talento local y la segunda, por el contrario, desalienta las posibilidades de desarrollo autónomo y acentúa la delegación de las fases de fabricación intensivas en conocimientos en los países industrializados centrales.

El trabajo de investigación ha permitido observar que las transformaciones tecnológicas implementadas por las firmas en vías de modernización no se realizan uniformemente en todas las áreas de la empresa. Con el fin de evaluar e identificar estas transformaciones en función de los objetivos del trabajo, se han distinguido dos grandes áreas de incumbencia de la ingeniería en el interior de las empresas: la primera corresponde a las actividades de investigación y desarrollo, ingeniería y diseño de productos, ensayos, prototipos y formulación de especificaciones; la segunda abarca la actividad netamente productiva y está compuesta a su vez por tres subáreas: la ingeniería de planta, la de procesos o industrial y la de control de calidad. A continuación se definen las tres subáreas teniendo en cuenta las funciones del profesional que trabaja en las mismas:

- *Ingeniería de planta:* comprende la instalación o la construcción y mantenimiento de todas las instalaciones relacionadas con la actividad productiva. También abarca la participación en su diseño y selección. Específicamente,

supone la responsabilidad de la operación de las instalaciones de los servicios auxiliares.

- *Ingeniería industrial*: se ocupa de la definición de los procesos de fabricación y del estudio de la dinámica del funcionamiento de la fábrica a los efectos de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.
- *Control de calidad*: implica el control del cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto final. La responsabilidad de esta subárea se extiende a los insumos recibidos y a los productos en proceso de fabricación.

Además de indagar acerca de las áreas donde se realizan los cambios, se han analizado los distintos tipos de implementación, sus alcances y las metas a cumplir con dichas transformaciones. Los caminos que se plantean las empresas para llevar adelante sus proyectos de modernización tecnológica van desde la compra de maquinaria y equipo a la tercerización de servicios de ingeniería y consultoría o a desarrollos innovativos en espacios de investigación propios.

La forma elegida para llevar a cabo los proyectos también está ligada, por un lado, a las posibilidades y decisiones de asociación con otros actores (firmas locales y extranjeras y centros de generación de conocimiento e instituciones públicas de fomento a la producción) y, por otro, a modalidades más aisladas de crecimiento, que implican conductas empresariales de tipo individualista y, por consiguiente, empresas más replegadas sobre sí mismas. En términos de Boscherini y Yoguel, la decisión de cómo enfrentar los desafíos y llevar adelante proyectos de cambio está relacionada con la capacidad innovativa y con la generación de ventajas competitivas, aspectos que, en el nuevo escenario económico-competitivo, asumen características sistémicas de interdependencia y articulación con la trama productiva y los sistemas institucionales del entorno. Desde esta perspectiva, estas capacidades están influidas por la complejidad de los nexos y el grado de cooperación tecnológica formal e informal entre los agentes, por el tipo de vínculos desarrollados entre las universidades, los centros de investigación y las firmas y por el grado de calificación de los recursos humanos (Boscherini y Yoguel, 2000).

El esquema de análisis que aquí proponemos está basado en una lectura tridimensional basada en los cambios tecnológicos, el mercado y la implicación con el entorno:

- la primera dimensión incluye los cambios a nivel de modernización y desarrollo tecnológico (implementados o en vías de hacerlo), su focalización dentro de las actividades de la empresa, el tipo de implementación y cuál es la meta buscada con dichas transformaciones;
- la dimensión del mercado remite al destino de la producción, la existencia de parámetros con los cuales compararse (nacionales o internacionales), la posición con respecto a primeras marcas, la diversificación de unidades de negocios (producto nuevo que compite en otro segmento del mercado). A su vez, las metas

(y soluciones) que pretenden alcanzar las empresas a través de cambios tecnológicos están relacionadas con las exigencias de los mercados y con su posición respecto de sus competidores;

- la implicación con el entorno analiza el grado y la propensión a articular acciones con otras firmas e instituciones, la conformación de redes y la participación en encadenamientos productivos.

De esta manera se contemplan tres dimensiones que se influyen mutuamente y delimitan las estrategias que se dan las empresas para lograr sus objetivos de rentabilidad y supervivencia. A su vez, se incorpora el estudio de la participación de profesionales de la ingeniería como eje transversal a las tres dimensiones pues se trata de profesionales ligados directamente a las actividades productivas como soportes o actores de la innovación técnica. Por lo tanto, se puede considerar a la existencia de ingenieros en las plantas y a las funciones que desempeñan en ellas y en los distintos planes de crecimiento como indicadores de las formas de gestión del conocimiento y de la utilización del potencial científico y técnico de la región.

CUATRO CAMINOS EN LA BÚSQUEDA DE COMPETITIVIDAD. LOS INGENIEROS Y EL DESARROLLO

A partir del análisis de las empresas de la región y a la luz de sus proyectos de transformación, de sus cambios tecnológicos, de su comportamiento en el mercado y de su implicación con el entorno, hemos diferenciado cuatro caminos u orientaciones en el modo en que esas empresas encarar su permanencia en el mercado y la mejora de sus ventajas competitivas. También encontramos firmas –en estos casos metalmecánicas– en situaciones de estancamiento y con la única expectativa de reducir costos y riesgos. Son empresas que no han registrado transformaciones en los últimos años ni tienen planificado realizar proyectos en el futuro. Por tal motivo, no han sido incluidas en la siguiente clasificación. Las dos primeras orientaciones corresponden a conductas de carácter ofensivo y constituyen una minoría de la muestra analizada. Por el contrario, las otras dos orientaciones, de tipo defensivo, abarcan al 70% de las empresas. En nuestro análisis, se profundizará, además, en la articulación entre cada una de las orientaciones, el rol de los ingenieros y la naturaleza autónoma o dependiente de su desarrollo tecnológico.

Modernización con inclusión de proyectos de innovación y desarrollo

Esta primera orientación –que agrupa a sólo tres casos– centra su crecimiento en la modernización de áreas productivas –como la infraestructura de planta, la definición de los procesos y la gestión de calidad– pero también inclu-

ye espacios propios de implementación de proyectos innovativos. Estos últimos están relacionados con el desarrollo de nuevos productos.

En uno de los casos, se trata de proyectos de desarrollo de variedades y nuevos productos buscando posicionarse con alguna ventaja temporal en el mercado para competir con marcas líderes. Las primeras marcas, que lideran el mercado y venden en las grandes cadenas de supermercados, están sometidas a exigencias de calidad, de plazos de entrega y de packaging equiparables con parámetros de orden internacional, aunque su producción se destine al mercado interno y a países limítrofes.

Para otra empresa, el desarrollo de productos innovativos tiene como meta brindar soluciones a problemas de energía e infraestructura regional –propios de nuestra geografía– que no alcanzan a ser cubiertos por las empresas prestatarias de servicios públicos porque ponen en riesgo los márgenes de rentabilidad.

Un último ejemplo de la diversidad de necesidades que orientan conductas de innovación y desarrollo está relacionado con proyectos que tienden a maximizar el uso de los desechos generados por el mismo proceso productivo y a transformarlos en nuevos productos. Si bien no trabajan sobre el producto principal, estos proyectos generan productos residuales que se colocan en el mercado, haciendo un uso eficiente de la materia prima utilizada en el proceso y, además, favoreciendo el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Para llevar a cabo estos proyectos, las empresas cuentan con profesionales de distintas disciplinas, incluyendo las ingenierías, y han generado lazos de vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Se trata de empresas que contratan como mínimo dos ingenieros o estudiantes de ingeniería. En algunos casos, son de tamaño mediano y de estructuras complejas; allí estos profesionales se desempeñan en áreas específicas, ocupando, en la mayoría de los casos, los puestos gerenciales.

Los procesos de modernización, innovación y desarrollo están a cargo de profesionales de ingeniería contratados en relación de dependencia que realizan tareas de diseño, desarrollo y puesta en marcha de nuevos productos para ser lanzados al mercado o de productos residuales que surgen del aprovechamiento de desechos. Además, esos ingenieros se ocupan del mejoramiento de los productos ya existentes. Por otro lado, esas tareas de diseño, desarrollo y puesta en marcha también se aplican a modificaciones de la ingeniería de planta, tales como el ahorro de energía, o a la fabricación de nuevos equipos para su propio proceso de producción. A las tareas mencionadas se les suma el análisis económico correspondiente, función que también se requiere para la planificación de la producción y de las compras que, a menudo, está a cargo de ingenieros.

Otra de las áreas clave para la modernización de las empresas en las que se desempeñan los ingenieros es la de calidad. Estos profesionales se encuentran a cargo de los procesos de certificación de normas internacionales de calidad mediante la elaboración de manuales de procedimiento, la capacitación

del personal y la mejora de los procesos o de las instalaciones. Además, comúnmente estas empresas cuentan con un ingeniero para el mantenimiento de los equipos y de la planta.

Es importante agregar que la vinculación con la Universidad está ligada a los procesos de modernización e innovación. Algunas empresas utilizan las instalaciones de la Universidad para desarrollar los nuevos proyectos o, en otros casos, las industrias se ofrecen como receptoras de pruebas piloto de creaciones desarrolladas en conjunto con la institución educativa. Además, otro vínculo frecuente es el convenio de pasantías o prácticas profesionales. En resumen, son los ingenieros quienes motorizan la mayoría de los cambios por los que transitan estas empresas.

Caso ilustrativo: empresa elaboradora de variedad de productos alimenticios

La empresa fabrica más de ochenta productos en el rubro de alimentos y bebidas, entre ellos variedades de café (instantáneo, en grano, en paquetes, etc.), cacao, yerba mate, edulcorantes, té, malta torrada, especias, bicarbonato, postres, gelatinas, féculas, azúcar impalpable, coco rallado, avena, ananá, palmitos, almendras, pasas de uvas, esencia de vainilla. Ha desarrollado nuevas variedades de café y cuenta con una certificación internacional de calidad denominada HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point* o Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control). Esta certificación es emitida por la empresa TUV Rheiland SA –con sede en Alemania– y garantiza que todos los productos que la empresa elabora son inocuos para el consumidor.

La firma tiene un convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNRC para recibir alumnos que hagan sus pasantías. Uno de ellos se ocupa de desarrollo de productos, es decir, busca diseñar nuevos productos para lanzar al mercado o bien introducir cambios en los productos ya instalados. Por ejemplo, actualmente este pasante trabaja en el desarrollo de un cacao en polvo al que se le desea agregar un complejo vitamínico. Otro pasante desarrolla tareas vinculadas con el abastecimiento y ampliación de proveedores; básicamente, se ocupa de analizar qué insumos pueden hacer falta para fabricar los nuevos productos diseñados desde el área de desarrollo de productos.

Asimismo, algunos análisis de laboratorio específicos se realizan en los laboratorios de esta Universidad. Actualmente hay ocho graduados de Ingeniería trabajando en los niveles de jefatura y gerencia (seis de ellos son graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto).

Caso ilustrativo: empresa manisera

La planta de maní-confitería es una de las más dinámicas de la región y opera con tecnología avanzada a nivel internacional. El espacio de producción es una nave importada desde España que se ocupa del acopio, selección y exportación.

tación del maní. La planta está automatizada en casi todas las etapas de producción. El producto puede salir de la planta crudo o blanchado. Si sale crudo, el proceso termina aquí. En cambio si sale blanchado, además de seguir los pasos antes descritos, pasa por un proceso de pre-tostado y se le saca la piel. Si bien, hasta el momento, el proceso de blanchado es tercerizado, actualmente se está construyendo el edificio para instalar la planta de blanchado de maní.

Uno de sus proyectos de innovación más importantes (en el que trabajan ingenieros químicos de la UNRC) es el desarrollo de una planta de carbón activado. El proyecto nació hace doce años en respuesta a una necesidad de la firma de solucionar el problema de impacto ambiental que generaba la quema de cáscara de maní. Se contactaron una serie de instituciones y profesionales y se puso en marcha el proyecto, primero en escala de laboratorio, luego en escala piloto y actualmente en escala industrial (se está instalando una planta para procesar 1.200 toneladas de carbón activado al año).

Diversificación y expansión de unidades de negocios

Este tipo de estrategia de crecimiento apunta a encarar proyectos sobre nuevos productos que, si bien se vinculan a los ya existentes, compiten en otro segmento del mercado y exigen la instalación de nuevas plantas. En términos más comerciales, podría denominarse incursión en nuevas unidades de negocios (Simone, 2007).

Tal diversificación no corresponde a desarrollos propios en diseño de producto o diseño de plantas y procesos, sino a la asociación con empresas extranjeras que concentran el *know how* productivo y tecnológico. Esta estrategia también implica modificaciones en las formas de comercialización, incluyendo la apertura de nuevas oficinas comerciales.

En los casos de diversificación de unidades de negocios, tanto la construcción de las nuevas instalaciones como el equipamiento necesario para ponerlas en funcionamiento y el desarrollo de los productos a elaborar se diseñan de manera externa a las empresas, es decir, se les solicita a empresas extranjeras líderes en el mercado de sus productos.

A modo de ejemplo, se puede incluir el caso de una empresa elaboradora de equipos para la industria láctea que decidió diversificar su producción; para ello firmó un convenio con una empresa italiana especializada en la realización de equipos y máquinas para la industria lácteo-alimenticia y cuyo fuerte es la producción de tecnología para el concentrado y evaporación de leche, suero, mosto para vino y jugos. La empresa local proyecta producir equipos para la concentración y secado de leche y suero. La comercialización se realizará bajo la licencia de la firma italiana. La alianza con esta empresa líder a nivel internacional implica también la utilización de la tecnología de esta firma, por lo que

podría decirse que la diversificación se llevará a cabo mediante la instalación de una planta “llave en mano”.

Las estrategias de diversificación de unidades de negocios están ligadas también a la elaboración de productos líderes en la exportación, como leche en polvo que constituye uno de los principales rubros lácteos de exportación de nuestro país.⁶ Tal es el caso de una empresa mediana elaboradora de quesos que proyecta instalar una planta automatizada de secado que produzca leche en polvo y suero de queso en polvo.

Por otra parte, se observan cambios en las plantas existentes con el objetivo de aumentar el volumen de producción. Estos cambios se llevan a cabo a través de la compra de maquinaria y equipos y de la ampliación de las instalaciones de la planta.

Con respecto a los profesionales que trabajan en este tipo de empresas, se observa que son ingenieros contratados en relación de dependencia y de las especialidades electromecánica y electricista. El ingeniero electricista se encarga de realizar el detalle de los planos de las máquinas para la industria láctea utilizando un programa de diseño asistido por computadora.

Los informantes empresarios han manifestado que, con la diversificación de las unidades de negocio, es probable que requieran ingenieros especializados en tareas propias del sector así como la incorporación de mayor cantidad de profesionales de diversas disciplinas.

Caso ilustrativo: empresa productora de equipamiento para la industria lácteo-alimenticia.

Los principales productos que fabrica son: tanques para el transporte de líquidos –principalmente para el transporte de leche–, línea de elaboración y envasado de ricota, tinas queseras y drenoprensas, líneas para la elaboración de *mozzarella* en continuo, hiladoras y moldeadoras para *mozzarella*, accesorios para moldeo, línea de tanques estáticos y otros equipamientos diversos, como lavadoras de bandejas y moldes, prensas neumáticas, tanques de proceso, filtros, etcétera.

Sus clientes son generalmente empresas lácteo-alimenticias tanto nacionales como internacionales. Entre las empresas nacionales que se consideran clientes se encuentran líderes como SanCor, La Serenísima, Nestlé, Milkaut, Molfino, La Paulina.

A fines de 1990 amplió sus instalaciones abriendo una planta fabril en Brasil. Desde hace tres años la empresa se contactó con una firma italiana cuyo fuerte –si bien se especializa en la realización de equipos y máquinas para la

6 En el año 2004, la Argentina era el tercer país productor y exportador mundial de leche en polvo entera, según los datos de la SAGPYA, Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, Dirección Nacional de Alimentos, Ministerio de Economía y Producción.

industria lácteo-alimenticia— es la producción de tecnología para el concentrado y evaporación de leche, suero, mosto para vino y jugos. La empresa proyecta comercializar y producir, bajo licencia y con la tecnología de la firma italiana, equipos para la concentración y secado de leche y suero. Frente a sus actuales instalaciones es posible observar el inicio de obras de infraestructura que indican el comienzo de la concreción del proyecto referido.

Otro de sus proyectos, alude a la apertura de un ala comercial en México donde se prevé vender los principales productos fabricados en la Argentina.

La firma no posee ninguna vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto ni con centros de investigación. Al momento de la visita se encontraba trabajando un joven ingeniero de la UNRC en la diagramación por computadora de los planos de las maquinarias.

Modernización integral ligada a mercados externos y modernización selectiva

En este caso se combinan patrones de comportamiento de tipo defensivo con proyectos de cambios integrales o selectivos en lo que hace a la modernización de la planta, a los procesos productivos o a la calidad. Sin embargo, y a diferencia de los tipos anteriores, no se visualizan proyectos de innovación y desarrollo o la generación de nuevas unidades de negocios que alteren la estructura tradicional existente.

Dentro de esta orientación se pueden diferenciar dos subgrupos: uno constituido por empresas orientadas hacia una modernización integral ligada a mercados externos; y el otro integrado por empresas que realizan modernizaciones parciales o selectivas.

En el primero, se agrupan unidades productivas que toman decisiones motorizadas por la búsqueda de mercados externos. Para lograr mayor competitividad se hacen esfuerzos de modernización integral, que incluyen cambios en la tecnología y en la organización de las áreas de infraestructura, de procesos y de calidad, con el objetivo de aumentar el volumen de producción y la calidad de los productos. En los casos estudiados no hubo innovación de productos y los cambios se implementaron a través de la tercerización y la compra de maquinaria y equipos. Las empresas no muestran señales claras de interrelación ni con otras firmas ni con centros de generación de conocimientos científico-tecnológicos.

Estas empresas recurren a servicios de consultoría o a agentes ajenos a la empresa para el diseño de los equipos, de la maquinaria específica y de los procesos a implementar. Los profesionales de ingeniería, junto con los directivos de la empresa, intervienen en la toma de decisiones de los cambios y en la forma de llevarlos a cabo en función de sus necesidades. En las etapas subsiguientes a la instalación de los nuevos diseños, el ingeniero se ocupa de resolver los problemas de ensayo y error para la puesta a punto de esos diseños con el fin de alcanzar

mayores niveles de eficiencia. Además de intervenir en las situaciones de cambio, estos mismos ingenieros realizan tareas gerenciales ligadas a la producción y/o al mantenimiento de la planta.

En estos casos, no se observaron iniciativas de vinculación con el entorno ni con la Universidad. Sin embargo, se puede hablar de cierto contacto con la UNRC, ya que se contrata a sus estudiantes de ingeniería: por ejemplo, en uno de los frigoríficos visitados se encontró un estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica desarrollando tareas de ingeniería de planta y mantenimiento. El estudiante realizó el diseño y la instalación de la iluminación de oficinas y corrales –tarea que luego utilizaría para presentar su trabajo final en la Universidad.

Cabe agregar que estas empresas cuentan con profesionales de distintas especialidades, tales como Microbiología y Medicina Veterinaria. En estos casos, son estos profesionales los que se ocupan de la calidad y quedan a cargo de la realización de los manuales de procedimiento, normas de higiene y capacitación del personal.

El segundo grupo de empresas, el de las que se orientan hacia modernizaciones parciales, se plantea como objetivo principal disminuir la brecha tecnológica que las separa de las empresas líderes del sector y, de esta forma, no alejarse demasiado de sus competidores. En esta dirección, realizan cambios puntuales, es decir, seleccionan alguna de las áreas productivas que ha quedado obsoleta o rezagada respecto de las prácticas y tecnologías productivas utilizadas en el sector para proceder a su modernización. Se trata de modernizaciones selectivas a través de la incorporación de nuevos equipos auxiliares y/o de maquinaria o de la implementación de herramientas organizacionales en procesos de gestión/calidad.

La mayoría de las empresas que responden a este tipo de estrategia son del sector de la alimentación. Casi la totalidad de ellas tiene contacto con ingenieros, sea porque dichos profesionales forman parte del personal de la empresa o porque se los contrata para resolver necesidades eventuales.

Todas las empresas de este grupo contratan además profesionales de otras especialidades entre las que se destacan: contadores públicos, administradores de empresas y médicos veterinarios.

Las empresas que contratan ingenieros de manera independiente los requieren generalmente para llevar a cabo nuevas construcciones, para que se ocupen del mantenimiento de planta o para que brinden algún tipo de capacitación al personal.

En cambio, las que no los contratan de manera independiente, cuentan con uno o dos profesionales de ingeniería o estudiantes de esa carrera en relación de dependencia. Por lo general, uno de los ingenieros ocupa un cargo gerencial y se ocupa de diversas tareas. Las empresas de este grupo son de tamaño pequeño, sus áreas organizativas se encuentran menos delimitadas que en las grandes y, por lo tanto, las tareas del ingeniero abarcan desde la organización del

proceso de producción, calidad y mantenimiento de equipos hasta la capacitación del personal y las estimaciones de compras.

Los estudiantes que trabajan en estas empresas se desempeñan en el área de mantenimiento, calidad o producción. Una de las empresas elaboradora de alimento balanceado para animales, la más grande de las empresas de este grupo, ha contratado a dos profesionales de Ingeniería Electromecánica y a un estudiante de Ingeniería Mecánica. Ellos manifestaron que habrán de contratar, a la brevedad, a otro ingeniero mecánico para que se ocupe del desarrollo de nuevas tecnologías y a dos estudiantes más para el sector de mantenimiento. En este caso se observa un contacto con la Universidad a través de la contratación de estudiantes.

Se puede destacar el caso de un pequeño molino, cuyo dueño es ingeniero egresado de la UNRC. Él se ocupa del área técnica y de diseño y patentó una de las máquinas que diseñó para su planta. También tiene el proyecto de vincularse y conformar una red de pequeños molinos con el fin de lograr la escala para exportar.

Supervivencia con poca inversión

En el caso de las empresas que han adoptado esta orientación se observa que, en los últimos años, han realizado inversiones mínimas para adecuarse a un incremento en la demanda o para reemplazar la rotura de maquinaria y equipos. Son acciones sin planificación, que se reducen a mantener su supervivencia frente a los cambios coyunturales. En los últimos años se ha notado un mayor dinamismo en el mercado interno, razón que explica, en parte, los pequeños cambios de modernización tendientes a incrementar la producción aunque sin incluir mejoras en los sistemas de calidad.

Esta es la orientación adoptada por la mayoría de las empresas estudiadas y muestra bastante heterogeneidad en su interior en cuanto a la rama de actividad y al tamaño.

Menos de la mitad de las empresas de este grupo tienen contacto con un ingeniero o un estudiante de ingeniería. En dos de las que participan ingenieros, estos son los dueños de la empresa y trabajan en ella. En un caso se trata de una pequeña empresa de bebidas cuyo dueño es ingeniero químico y ocupa el cargo de gerente general; contrata además a otro ingeniero químico que está a cargo del área de producción, compras y desarrollo de nuevos sabores. El otro caso es el de un taller de rectificación de motores y construcción y reparación mecánica de equipos industriales y piezas uno de cuyos dueños es uno de los ingenieros mecánicos encargados de la oficina técnica.

Por otra parte, se da el caso de una pequeña empresa que realiza construcciones metálicas y que contrata a una estudiante de ingeniería mecánica que se ocupa de realizar el seguimiento del producto y de controlar la parte operativa

del proceso. En la gran mayoría de los casos el ingeniero es el único profesional en la empresa.

Dentro de las empresas que no incorporan ingenieros se puede observar que el grupo perteneciente al sector de la metalmecánica tampoco contrata a ningún profesional y que la máxima calificación alcanzada es el nivel técnico. Distinto es el caso de las dos empresas alimenticias que se ubican en este grupo: en su personal, ambas cuentan con médicos veterinarios y contadores públicos.

Al analizar la incorporación de ingenieros en las empresas de este grupo, caracterizadas por una gran diversidad, se pudo observar en qué medida, a la hora de contratar nuevo personal, el nivel educativo de los dueños y gerentes es un factor de peso: estos tienden a incorporar personal de su mismo nivel educativo y especialidad. Es decir, los ingenieros tienden a contratar a jóvenes ingenieros o a estudiantes mientras que los técnicos buscan a jóvenes con una calificación similar a la suya. Además, los dueños de pequeñas empresas con calificación técnica no realizan su búsqueda de acuerdo con la certificación formal de los títulos, sino que contratan jóvenes por relaciones de confianza.

A continuación se enumeran algunas conclusiones que surgen del análisis de las orientaciones de competitividad y de la participación de los ingenieros.

En primer lugar, hay que señalar que la gran variedad de criterios, expectativas y formas con que las empresas resuelven los desafíos del contexto torna difícil encontrar aspectos comunes que permita reunirlos en pocos grupos claramente diferenciados y homogéneos en su interior. En realidad, se observa un desgranamiento de tendencias y caminos sutiles que configuran una gran diversidad de orientaciones agrupadas en dos grandes tendencias: las de tipo ofensivo y las de tipo defensivo.

El 70% de la muestra está constituido por empresas que han desarrollado orientaciones de carácter defensivo como parte de sus senderos de aprendizaje y de las características de los mercados en los que participan. El aspecto sectorial es un indicador de diferencias significativas en el tipo de orientación que desarrollan. En los sectores más dinámicos y con mayores niveles de actividad en la región, como es el caso del sector de la alimentación, se presenta la mayor cantidad de empresas con impulsos innovadores y modernizadores, especialmente en las etapas de envasado, infraestructura y mejoramiento de la calidad. En cambio, en los sectores más rezagados, como la metalmecánica, las empresas parecen mantenerse en los niveles básicos de lucha por la subsistencia sin elaborar estrategias de competitividad más complejas. Esta tendencia se refuerza en las pequeñas empresas estudiadas por cuanto el peso de sus trayectorias culturales y senderos de aprendizaje constituye un obstáculo para la implementación de conductas más ofensivas.

Por último, en cuanto a la implicación con el entorno, sólo las tres empresas que cuentan con actividades de investigación y desarrollo propios generan

vínculos estables y dinámicos con la Universidad de la región. Por el contrario, en el grupo mayoritario, se observan vínculos más fragmentados y esporádicos que muchas veces están relacionados con el uso de los recursos institucionales y con la incorporación de estudiantes y/o pasantes.

REFLEXIONES FINALES

Al inicio del trabajo nos preguntamos acerca de los caminos tomados por las empresas en los años subsiguientes a los cambios macroeconómicos de la posdevaluación del año 2002.

A partir de los distintos grados y áreas de reestructuración, modernización e innovación, ubicamos los casos estudiados en: adaptación con modernizaciones integrales o selectivas, orientación hacia la supervivencia con poca inversión, orientación hacia el crecimiento motorizado por modernizaciones ya sea con la inclusión de actividades de investigación e innovación propias o, por el contrario, con el desarrollo de nuevos productos y procesos pero a través de la incorporación de tecnología (material e inmaterial) extranjera.

En nuestro trabajo, pudimos constatar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la región de Río Cuarto tomaron caminos predominantemente de tipo defensivo, coherentes con el objetivo de mantener la rentabilidad y la supervivencia, aunque el mismo análisis nos advierte que existen importantes diferenciaciones sectoriales y matices particulares difíciles de generalizar.

En esta misma línea, en los estudios de competitividad y desarrollo productivo realizados a nivel nacional, se concluye que en las PYMES las innovaciones son de tipo incremental, basadas en la experiencia y en el aprendizaje del "ensayo y error" (*learning by doing and by using*), saberes prácticos, con alto contenido adaptativo. Además, se advierte un bajo grado de formalización e institucionalización de la investigación tecnológica con respecto a las grandes empresas (Ferraro, 2003).

Han sido pocos los casos en que empresas pequeñas han optado por desarrollos tecnológicos autónomos y de anticipación de escenarios. Sin embargo, en dichos casos la profesionalización de los planteles y principalmente la participación de ingenieros y la vinculación institucional con la Universidad y sus laboratorios aparecen como un factor decisivo para la viabilidad de estas orientaciones. Por otro lado, las oportunidades de desarrollo son visualizadas en nichos de mercado no cubiertos por grandes empresas y/o en la potencialidad de la creatividad, investigación y desarrollo de los profesionales e investigadores del entorno.

También se han observado casos de expansión y diversificación de negocios a partir de la asociación con empresas extranjeras. En estos casos, si bien es una estrategia de tipo ofensivo, no se fortalece la acumulación de aprendizaje

tecnológico ni se hace uso de los conocimientos científicos y tecnológicos que pueden aportar los profesionales locales.

Estos resultados no son ajenos a la trayectoria económica y política de nuestro país, caracterizada en las últimas décadas por la apertura comercial, la contracción del producto per cápita y el aprovechamiento de oportunidades financieras en detrimento de la inversión productiva. Estos factores, según Azpiazu y Nochteff, reforzaron el patrón de economía de adaptación tecnológicamente tardía, excluyendo las posibilidades del surgimiento de una economía de desarrollo, y redujeron aún más la demanda y la importancia de las políticas científicas, tecnológicas e industriales.

La política de apertura comercial fue asimétrica en un doble sentido. En primer lugar, la tasa efectiva para importaciones cayó menos que la de exportaciones, determinando una asimetría antiexportadora. En segundo lugar, la protección arancelaria de las actividades más oligopólicas y “escala intensivas” cayó mucho menos (y en algunos casos hasta se mantuvo) que la de los sectores basados en la ciencia y la de proveedores especializados, determinando una segunda asimetría, esta vez, entre sectores (Azpiazu y Nochteff, 1994). En este sentido, se vio desmejorada la competitividad de los sectores cuyas ventajas comparativas estaban menos directamente vinculadas a los recursos y ventajas naturales y que eran más dependientes de la organización social, productiva y educativa, es decir, más dependientes de la competitividad sistémica.

Esta postura política –predominante en las últimas décadas–, que facilitó la incorporación de conocimientos tecnológicos extranjeros y no promovió espacios de desarrollo de conocimientos científico-tecnológicos propios, tiene que ver con la dirección de la política pública y las decisiones soberanas, aspectos que diferencian sustancialmente a los países centrales de los periféricos.

Dichas posturas y decisiones inciden directamente en los patrones de distribución del ingreso, en las modalidades de inserción internacional y en la estructura de la propiedad, que es, en última instancia, la del poder económico. Se trata de definiciones que deberían ser objeto de debate nacional y de resolución democrática (Calcagno y Calcagno, 1995).

Como analiza Panaia, varios fenómenos relacionados con el carácter periférico de nuestro país tienen incidencia en la formación y en la práctica profesional de los ingenieros argentinos: la incorporación de capital cerebro-intensivo de países de alto nivel de desarrollo a través de tecnología de última generación, la privatización y asociación con empresas multinacionales que traen sus propias patentes y la concentración en los países centrales de núcleos estratégicos de inversión volcados a la generación de conocimientos científico-tecnológicos de vanguardia. Todos estos fenómenos conforman una clara tendencia internacional que no puede ser ajena al tratamiento del desarrollo autónomo de nuestro país y a la incumbencia profesional de los ingenieros locales (Panaia, 2006, p. 125).

A modo de síntesis, y siguiendo a Panaia, algunas de las consecuencias que estos fenómenos traen aparejados en relación con la formación y el ejercicio de la ingeniería son: la reducción de la inversión en departamentos de I&D, la orientación de la práctica profesional hacia actividades de comercialización, gestión, administración, seguridad y control ambiental y las mayores dificultades que tienen los ingenieros locales para acceder a los conocimientos de vanguardia al carecer de códigos idiomáticos y tecnológicos que les permitan enriquecerse y participar de los avances y debates de la comunidad científico-tecnológica internacional.

Las diferentes formas en que las empresas enfrentan la competitividad son definitorias para la acumulación de aprendizaje tecnológico y el establecimiento de formas de gestión del personal, así como en las características de la demanda y la función de los profesionales de la Ingeniería.

BIBLIOGRAFÍA

AZPIAZU, Daniel y Hugo NOCHTEFF (1994), *El desarrollo ausente*, Buenos Aires, FLACSO/Tesis- Grupo Editorial Norma.

BISANG, Roberto, Gustavo LUGONES y Gabriel YOGUEL (2002), *Apertura e Innovación en la Argentina*, Buenos Aires, Miño y Dávila, Grupo Redes, UNGS.

BOSCHERINI, Fabio y Gabriel YOGUEL (2000), "Aprendizaje y competencias como factores competitivos en el nuevo escenario: algunas reflexiones desde la perspectiva de la empresa", en F. BOSCHERINI y L. POMA (comps.), *Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas*, Madrid, Miño y Dávila.

CALCAGNO, Alfredo Eric y Alfredo Fernando CALCAGNO (1995), *El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes*, Buenos Aires, Alianza Editorial.

CASTILLO, Juan José, Andrés DE LAS ALAS-PUMARIÑO, Andrea DEL BONO, Julio FERNÁNDEZ, Aurora GALÁN y Maximiliano SANTOS (2000), "División del trabajo, cualificación, competencias. Una guía para el análisis de las necesidades de formación por los trabajadores", en *Sociología del Trabajo*, n° 40, Madrid, Siglo XXI de España Editores.

CHUDNOVSKY, Daniel y Fernando PORTA (1990), *La competitividad internacional. Principales cuestiones conceptuales y metodológicas*, Documento de Trabajo n° 3, CENIT.

FERRARO, Carlo (2003), "Desarrollo productivo local en Argentina" Estudio I. EG.33.3. Componente B, Préstamo BID 925/OC-AR CEPAL/ONU. Coordinación del estudio: oficina de la CEPAL-ONU en Buenos Aires.

GUTMAN, Graciela (1999), "De lo local a lo global: desafíos, oportunidades y amenazas para las PYMES alimentarias de Argentina", en BARBEITO, GEYMONAT y ROIG (comps.), *Globalización y políticas de desarrollo territorial*, Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Instituto de Desarrollo Regional.

KANTIS, Hugo, Rodrigo CARMONA y Rubén ASCUA (2000), "El estudio de las redes empresariales en el diagnóstico del desarrollo local: elementos metodológicos y su aplicación al caso Rafaela", en RED PYME MERCOSUR, *Las pequeñas y medianas empresas: entorno, estrategias y potencial transformador*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas e Instituto de Economía y Finanzas.

KATZ, Jorge (1996), *Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial del sector manufacturero latinoamericano en los años 90*, Buenos Aires, CEPAL/IDRC-Alianza Editorial.

----- (2000), *Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

KOSACOFF, Bernardo (1998), “Estrategias empresariales y ajuste industrial”, en Bernardo KOSACOFF (ed.), *Estrategias empresariales en tiempos de cambio. El desempeño industrial frente a nuevas incertidumbres*, Buenos Aires, CEPAL, UNQ.

KOSACOFF, Bernardo y Fernando PORTA (1998), “Apertura y estrategias de las empresas transnacionales en la industria argentina”, en Bernardo KOSACOFF (ed.), *Estrategias empresariales...* ob. cit.

KOSACOFF, Bernardo y Andrés LÓPEZ (2000), *Cambios organizacionales y tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas. Repensando el estilo de desarrollo argentino*, Buenos Aires, CEPAL.

NOCHTEFF, Hugo (1995), “Los senderos perdidos del desarrollo”, en Daniel AZPIAZU y Hugo NOCHTEFF, *El desarrollo ausente*, ob. cit.

PANAIA, Marta (2001), “Trayectorias profesionales y demandas empresariales de ingenieros en la Argentina”, en *Trayectorias ocupacionales y mercado de trabajo*, *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, Año 7, N° 13, diciembre.

----- (2006), *Trayectorias de ingenieros tecnológicos. Graduados y alumnos en el mercado de trabajo*, Buenos Aires, UTN-FRGP y Miño y Dávila Editores.

QUINTAR, Aída (1993), *Pequeños y Medianos Empresarios Industriales Metalmecánicos de Rosario*, Documento de Trabajo N° 38, Convenio de Cooperación Técnica CFI/CEPAL, Buenos Aires.

SIMONE, Vanina (2006), “Los desafíos de las PYMES alimentarias del sur cordobés”, en Marta PANAIÁ (coord.), *Transformaciones territoriales y mercado de trabajo litoral*, Buenos Aires, Impresiones Buenos Aires (en prensa).

SIMONE, Vanina, Verónica CAMPETELLI y Amalia TASCA (2006), *Las empresas manufactureras en la región de influencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un estudio de los sectores de la alimentación y la metalmecánica*, Documento de Trabajo N° 4, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

SIMONE, Vanina, Verónica CAMPETELLI, Amalia TASCA y María Eugenia SAN MARTÍN (2006), *El entorno productivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estrategias competitivas y el rol de los ingenieros*, Documento de Trabajo N°3, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

RESUMEN

El propósito de este estudio reside en brindar un aporte a la comprensión de la actividad productiva desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas de la zona cordobesa de Río Cuarto, identificando diferencias en sus conductas de búsqueda de competitividad y en su relación con el mercado, el entorno y las formas de adquisición de la tecnología: creación, imitación, adaptación.

Las diferentes formas en que las empresas enfrentan la competitividad son definitivas para la acumulación de aprendizaje tecnológico y las modalidades de gestión del personal, así como también para las características de la demanda y la función de los profesionales de ingeniería.

El estudio tiene como eje la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto y las empresas de su entorno. Para llevarlo a cabo se realizó un trabajo de campo en las empresas de la zona de influencia de la Facultad. El análisis de las estructuras empresarias, de los proyectos

de crecimiento, del papel que juegan los ingenieros y de los diversos vínculos que generan con la Facultad nos ha permitido identificar cuatro tendencias empresarias de búsqueda de competitividad en esta región en particular. Una de ellas se orienta hacia desarrollos tecnológicos autónomos e innovaciones que responden a necesidades locales y nacionales con importante participación de ingenieros en I&D y vínculos con laboratorios y grupos de investigación de la Facultad. La segunda está marcada por la búsqueda de diversificación de las unidades de negocios con la incorporación de diseño y tecnología extranjeros y por la casi inexistente participación de ingenieros y de vinculación con la Facultad. La tercera, de tipo adaptativa, se orienta hacia la modernización integral y selectiva. La cuarta se orienta hacia la supervivencia con escasa inversión. Estas dos últimas tendencias incluyen la participación de ingenieros en producción y mantenimiento y la vinculación con la universidad a través de convenios de pasantías.

ABSTRACT

The intention of this study resides in offering a contribution to the understanding of the productive activity from the perspective of the small and medium companies of the zone of Río Cuarto, Córdoba, identifying differences in its competitiveness conducts and their relation with the market, the surroundings and the forms of acquisition of the technology: creation, imitation, adaptation.

The different forms that the companies face the competitiveness are distinctive for the accumulation of technological learning, the modalities of management of the personnel, as well as the characteristics of the demand and function of the engineering professionals.

The study focuses in the Faculty of Engineering of the National University of Río Cuarto and companies of its surroundings. In order to carry out it a work of investigation was made in the companies of the Faculty's zone of influence.

The analysis of the structures industrialists, the projects of growth, the paper that the engineers play and the diverse relations whom they generate with the Faculty, have allowed us to identify four tendencies industrialists of competitiveness in this region in individual. One of them oriented towards independent technological developments and innovations that respond to local and national necessities with important participation of engineers in I&D and bonds with laboratories and groups of investigation of the Faculty. Second, focused by the search of diversification of the units of businesses with the incorporation of design and foreign technology and almost nonexistent participation of engineers and bows with the Faculty. Third, of adaptive type, oriented towards the integral and selective modernization. Finally, the last one, oriented towards the survival with little investment, both with participation of engineers in production and maintenance and entailment through agreements of pasantías.

PALABRAS CLAVE

COMPETITIVIDAD
DESARROLLO TECNOLÓGICO
INGENIEROS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

KEY WORDS

COMPETITIVENESS
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
ENGINEERS
SMALL AND MEDIUM COMPANIES

EL MERCADO DE TRABAJO EN EL GRAN LA PLATA DURANTE LOS AÑOS NOVENTA

*Amalia Eguía
Juan Ignacio Piovani*

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta un estudio descriptivo de la evolución del mercado de trabajo del Gran La Plata (aglomerado integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada) durante la década de 1990. Se basa en el análisis estadístico de algunas de las principales variables relacionadas con la problemática laboral, para lo cual se ha tomado como fuente la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC.¹

En primer lugar, con el fin de contextualizar los procesos objeto de interés, se realiza una revisión sintética de los principales cambios experimentados por la sociedad argentina durante la década del noventa en materia laboral, así como de las políticas del Estado en el campo de la producción, el mercado de trabajo y el empleo. A continuación, se examina cómo se manifestaron estos cambios –y qué consecuencias tuvieron dichas políticas– en el caso particular del aglomerado Gran La Plata, dirigiendo el análisis, en especial, a la evolución de la población económicamente activa y a los cambiantes perfiles de los ocupados y desocupados.

Si bien se trata de una aproximación descriptiva, se presentan algunas hipótesis explicativas –que dan sentido a los datos analizados– basadas en una interpretación que se sustenta en el cuerpo de conocimientos sobre el tema pro-

Este trabajo es una versión corregida y ampliada de la ponencia “Evolución de la situación laboral del Gran La Plata en la última década”, presentada en el 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, organizado por la Asociación Argentina de Especialistas del Trabajo (Buenos Aires, 1 al 4 de agosto de 2001). En la elaboración de dicha ponencia participaron también Constanza Loustau, Fernanda Chironi y Gabriela Rusiñol.

Amalia Eguía y Juan Ignacio Piovani pertenecen al Centro Interdisciplinario de Metodología de la Ciencias Sociales (CIMECS) y al Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP/CONICET.

1 Los datos que se presentan en el artículo resultan del procesamiento y análisis de las bases usuarios (EPH) de las ondas de mayo correspondientes al período 1990-2000.

ducidos en la Argentina y que aportan elementos a las controversias acerca de la explicación de algunos de estos fenómenos.

LA ARGENTINA DE LOS AÑOS NOVENTA: EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD Y SUS EFECTOS EN EL MERCADO DE TRABAJO

Muchos especialistas coinciden en señalar que la problemática laboral de los años 90 se debe entender en el marco del desarrollo de un modelo económico iniciado a mediados de la década de 1970 por la dictadura militar, así como del comportamiento y las estrategias que asumieron los grandes grupos económicos (Nochteff, 1999). El programa del gobierno militar viró diametralmente las orientaciones de la industrialización sustitutiva que habían estado vigentes en el país desde 1930 (Torrado, 1994).

Sin embargo, la experiencia sustitutiva sólo alcanzó sus límites hacia fines de los años 80, marcados internamente por la crisis de la deuda y de la hiperinflación y condicionados por la difusión a escala mundial del proyecto neoliberal. En este contexto, a partir de marzo de 1991 se implementó en el país el Plan de Convertibilidad, el cual tenía como objetivo explícito controlar la tendencia inercial de la inflación que persistía desde hacía más de dos décadas.

Pero el Plan no se limitó a un mero control de la inflación. El mismo debe entenderse como parte de la redefinición –ya iniciada por la dictadura militar– de la estructura económica argentina: esa redefinición partía del diagnóstico según el cual dicha estructura estaba afectada por distorsiones resultantes del proteccionismo, el atraso tecnológico, la falta de competitividad, las rigideces del mercado laboral, etc. Para revertir esta situación, el gobierno puso en práctica una serie de medidas que iban a cambiar de un modo notable la estructura de nuestra sociedad y de nuestra economía.

En lo que respecta al mercado laboral, tres son las áreas de intervención que –en algunos casos indirectamente y en otros muy directamente– provocaron transformaciones profundas. La primera se refiere a la apertura indiscriminada de la economía y a sus consecuencias en términos de desindustrialización y concentración del sector productivo. La segunda abarca las intervenciones directas realizadas sobre la (des)regulación del mercado de trabajo y la legislación laboral. Finalmente, la tercera se relaciona con la reestructuración del aparato estatal.

En efecto, se implementó una apertura externa indiscriminada y muy acelerada como forma de articulación con la economía internacional y como factor de disciplinamiento de los precios internos (Rofman, 1997). La apertura facilitó la masiva entrada al país de productos importados, afectando negativamente la competitividad de la industria nacional. Esta política, la inexistencia de emprendimientos y programas destinados al aumento de la capacidad exportadora y una falta de créditos a las empresas más pequeñas agudizaron la concentración

de la producción y centralización del capital, con un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo.

En cuanto a la segunda área de intervención mencionada, se impuso desde el gobierno nacional una reforma laboral tendiente a disminuir los costos de la fuerza de trabajo para los empleadores. “Esta política pretendía satisfacer los persistentes reclamos de las organizaciones empresariales, que sostenían que los costos asociados a las regulaciones vigentes atentaban contra la competitividad, que la negociación centralizada fortalecía a los sindicatos y elevaba los costos laborales...” (Cortés y Marshall, 1999). A partir de 1991, una sucesión de leyes y decretos modificó la regulación del salario, el derecho de huelga y el alcance y contenidos de la negociación colectiva. También se crearon diversas modalidades contractuales temporarias que involucraron rebajas o eliminación de las contribuciones a la seguridad social. Todas estas medidas influyeron directamente en la desalarización de la fuerza de trabajo, en el aumento del empleo informal, en la desocupación horaria, en los despidos masivos y en la precarización del trabajo.

Rofman (1997) sostiene que la implementación de las estrategias básicas del Plan de Convertibilidad generó un proceso de intenso deterioro de las condiciones de producción y de la demanda de trabajo en la mayoría de las áreas metropolitanas del país y en sus respectivas zonas de influencia. Sin embargo, afirma que la base económica relevada bianualmente por el INDEC en diversos centros urbanos es muy diferenciada. Por lo tanto, las consideraciones generales acerca de los efectos regresivos del modelo de política económica de los años 90 sobre los mercados de trabajo urbanos deben ser revisadas en términos de las características específicas de la estructura productiva de cada uno de ellos. Siguiendo esta sugerencia, proponemos en este artículo un análisis focalizado en el aglomerado Gran La Plata. Este aglomerado, aunque típicamente especializado en actividades vinculadas al aparato burocrático-administrativo del Estado, contaba, además, antes de la implementación del Plan de Convertibilidad, con un apreciable conjunto de actividades secundarias y terciarias pertenecientes a la órbita privada; estas actividades sufrieron serias dificultades durante la vigencia del Plan, destacándose la profunda crisis de la actividad manufacturera y, en especial, la retracción de los procesos vinculados al sector petrolero, químico y petroquímico (Rofman, 1997).

Si bien interesa particularmente el período 1990-2000, parece razonable hacer también algunas referencias a las décadas de 1970 y 1980 ya que los procesos estudiados exceden ampliamente los límites temporales que hemos fijado para nuestra investigación. Esto último se hace especialmente relevante si se considera que muchas de las políticas relacionadas con el Plan de Convertibilidad, en cuanto a la dinámica laboral, comenzaron en realidad a aplicarse —como ya se ha sostenido— a mediados de los años setenta. Por otra parte, y dado que la década aquí analizada no constituye en sí misma un ciclo político-económico, se hacen también algunas consideraciones generales relativas a los

primeros años de la década siguiente, especialmente a la crisis de 2001 y a la consecuente salida de la Convertibilidad.

Es innegable que el Plan tuvo importantes repercusiones en la situación ocupacional. Una de ellas en particular, el aumento de la desocupación, se convirtió en uno de los temas más alarmantes para la sociedad argentina. Pero, además del aumento de la desocupación, también se registró un notable incremento de la población económicamente activa (PEA). Tal como sostiene Iñíguez (1997), es necesario examinar las causas de ese crecimiento, especialmente si se pretende hacer una lectura comprensiva de la situación ocupacional. Es justamente en las distintas interpretaciones acerca de este aumento de la PEA donde se encuentran los fundamentos que nos van a permitir darles sentido a los datos estadísticos sobre la evolución de la situación laboral del Gran La Plata.

Algunos analistas sostienen que el aumento se debió a que el Plan permitió avizorar mejores y mayores posibilidades de encontrar empleo. Otros sostienen que la reducción de los ingresos (como efecto del Plan), sumada a las cesantías y despidos, aumentó la cantidad de miembros del hogar que debió incorporarse a la búsqueda de trabajo para garantizar el nivel de ingresos previo. Un argumento intermedio, que puede complementar a alguno de los otros, es que el Plan incentivó actividades (por ejemplo, los servicios) que pueden ser llevadas a cabo por personas sin experiencia laboral previa y que no formaban parte de la PEA (jóvenes y amas de casa) (Iñíguez, 1997).

Para reflexionar sobre la evolución de la PEA en el aglomerado Gran La Plata durante la última década a la luz de las explicaciones mencionadas, se comenzará por analizar la condición de actividad de la población, para luego especificar las características tanto de la población desocupada como de la población ocupada.

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AGLOMERADO GRAN LA PLATA

En primer lugar, se analizará la evolución de las tasas de actividad, empleo y desocupación en el período correspondiente a nuestro estudio.

En líneas generales, la tasa de actividad² en el aglomerado osciló entre 37% y 45%, registrándose los mayores porcentajes a partir de 1996. La tasa de empleo³ se mantuvo entre el 34% y 38%, con los valores más altos en los últimos tres años. La tasa de desocupación,⁴ en cambio, presentó un crecimiento sostenido.

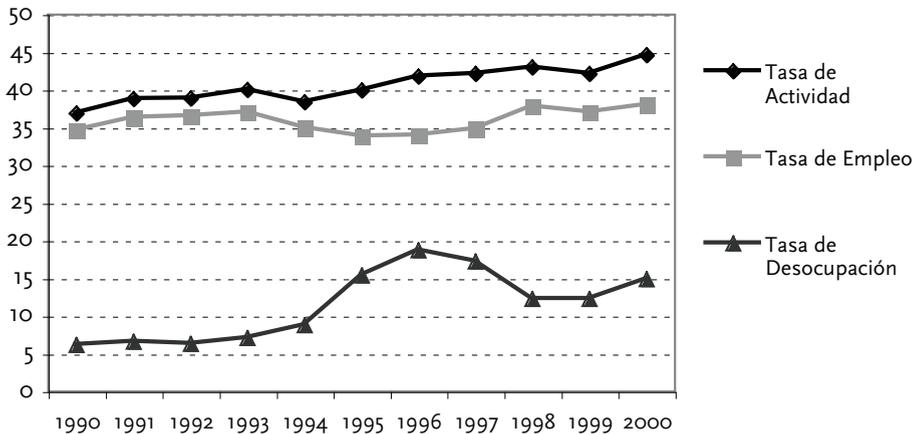
2 De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares, la tasa de actividad está calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total, entendiéndose por población económicamente activa la integrada por personas que tienen una ocupación o la están buscando activamente.

3 La tasa de empleo está calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.

4 La tasa de desocupación está calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. En la Encuesta Permanente de Hogares se considera desocupada a la persona que

Tal como se observa en el Gráfico 1, durante los primeros años del Plan (hasta 1993 inclusive), la tasa de empleo registró un aumento moderado, al igual que la tasa de desempleo. A partir de 1994 se produjo un punto de inflexión: la tasa de empleo cayó y la de desocupación comenzó a crecer más marcadamente. Este cambio en las respectivas tasas expresaba claramente la situación general de deterioro de la economía, agravada por el “efecto tequila”. Cabe consignar, sin embargo, que mientras que la tasa de empleo se mantuvo relativamente constante luego de su caída en 1994, la de desocupación continuó con su tendencia creciente, llegando a los más altos valores del período en 1995, 1996 (año en el que representó al 19% de la población económicamente activa) y 1997. Esta tendencia se revirtió recién en 1998, cuando la tasa de empleo se recuperó (e incluso superó los valores más altos del período anterior a 1994) y la de desocupación descendió notablemente, aunque aún distó de alcanzar los valores anteriores a 1994. Entre 1998 y 1999 la tasa de desocupación se mantuvo relativamente estable –alrededor del 12%–, presumiblemente como consecuencia, entre otras cosas, de la implementación de los Planes Trabajar.⁵ Pero a partir del año 2000 volvió a aumentar en forma considerable, llegando al 16,8% justo antes de la crisis de 2001, y al 22,1% en la primera medición luego de la salida de la Convertibilidad.

Gráfico 1. Evolución de las Tasas de Actividad, Empleo y Desocupación (Gran La Plata, 1990-2000)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, mayo 1990-2000.

durante una semana de referencia buscó activamente trabajo, no habiendo efectuado en ese lapso ningún trabajo remunerado.

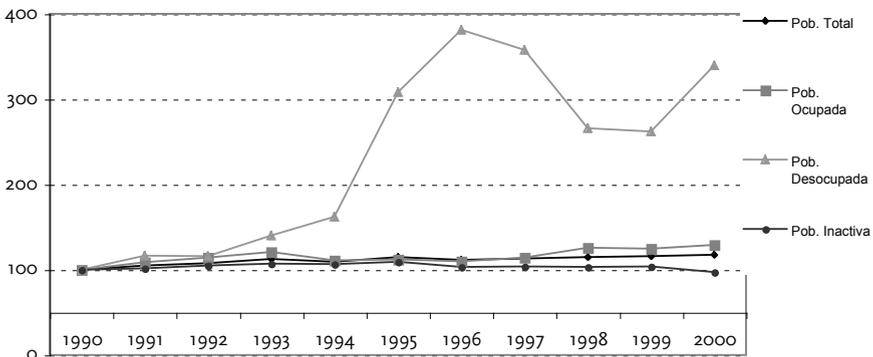
5 En 1997 comienzan a ejecutarse los Planes Trabajar. Estos tienen repercusión en la tasa de desocupación, ya que las estadísticas oficiales consideran a los individuos beneficiados con este Plan como ocupados, si bien los sueldos son bajos y no incluyen protección social.

Esta evolución se corresponde, en términos generales, con el planteo de Beccaria (2005): aunque el panorama global de los noventa fue de un desmejoramiento de la situación laboral, se pueden identificar una serie de fases definidas respecto del nivel de actividad:

1. una fase ascendente hasta 1994: en ella se registró una expansión significativa de la ocupación total y asalariada, pero también un elevado índice de desocupación;
2. una fase recesiva en 1994 y 1995: en esta fase se agudizó el comportamiento negativo del mercado de trabajo, que venía manifestándose desde 1993, por la recesión vinculada a la crisis internacional (“efecto tequila”);
3. una fase de recuperación entre 1996 y 1998: esta fase comenzó a manifestarse recién a mediados de 1996 y llevo a una reducción del desempleo;
4. una fase recesiva que va de 1998 a 2001: este período también se vincula con dificultades de financiamiento externo;
5. la crisis de fines de 2001, que agudizó la recesión, con lo cual se profundizaron el desempleo y el deterioro de los ingresos reales de los desocupados, y que, en última instancia, derivó en la renuncia del presidente de la Rúa y en el fin de la Ley de Convertibilidad peso-dólar.

Para poder echar más luz sobre la evolución de las tasas, consideramos pertinente analizar los cambios producidos en la población económicamente activa, ocupada, desocupada e inactiva durante el período analizado, tomando 1990 como año de base (Gráfico 2). Esto nos permitirá observar el cambio relativo registrado en cada una de las categorías poblacionales mencionadas. Como indicador de referencia, se incluye también la evolución de la población total del aglomerado.

Gráfico 2. Evolución de la población total, económicamente activa, ocupada, desocupada e inactiva (Gran La Plata, 1990-2000) Año 1990=100



Analizaremos en primera instancia cada una de las categorías. Con respecto a la población total se observa una variación de aproximadamente 17 puntos porcentuales entre el inicio y el fin de la década. Este aumento de la población⁶ resultó mayor al que se esperaría como resultante del crecimiento vegetativo, que en los grandes centros urbanos de la Argentina es relativamente bajo. Parte de este aumento se debe atribuir a migraciones internas⁷ y desde países limítrofes. La población económicamente activa también se incrementó durante el período, pero su variación porcentual (42,2%) fue muy superior a la de la población total. Es posible considerar este dato como un indicio de que el aumento de la PEA no responde exclusivamente a la incorporación “natural” de los jóvenes al mercado de trabajo a medida que finalizan o abandonan el sistema de educación formal. Tampoco parece razonable adjudicarlo a la presión que podría ejercer la población migrante. De los datos presentados se desprende que el gran aumento de la PEA está dado principalmente por las variaciones en los porcentajes de inactivos. En efecto, la población inactiva total disminuyó 2,7% en el período. Ella está compuesta básicamente por estudiantes, amas de casa y jubilados. Por el propio crecimiento de la población, no sería razonable pensar en una disminución de la cantidad total de niños y jóvenes que vivían en el aglomerado. Por el contrario, el aumento sostenido de la población total debería implicar, aunque con distintos niveles de incidencia, un aumento del total absoluto de personas en cada grupo etario. Por esta misma razón, tampoco parece plausible pensar en una disminución de la cantidad de personas que, debido a su edad, deberían haber pasado a la inactividad (jubilación). Por lo tanto, la disminución del total de inactivos se debe adjudicar a una de las causas siguientes o a todas ellas:

- una mayor incorporación de jóvenes y a edades más tempranas (parte de los que en otros períodos hubieran permanecido en el sistema educativo);
- una masiva incorporación de amas de casa;
- una permanencia de los ocupados que por su edad deberían pasar a la inactividad y/o un reingreso de personas ya jubiladas.

El total de personas ocupadas también creció considerablemente durante el período (29,1%), y lo hizo a un ritmo mayor que la población general. Sin embargo, el total de personas desocupadas aumentó aún mucho más aceleradamente. La variación en la cantidad de personas asignadas a esta categoría fue en efecto notable: tomando al año 1990 como base, aumentó 239,5%. Mientras que

6 Recordemos que se trata de valores estimados.

7 Es importante recordar que, como centro universitario de referencia nacional, La Plata atrae todos los años una significativa cantidad de estudiantes. Muchos de ellos permanecen en la ciudad, aun en el caso de abandonar o finalizar su carrera universitaria.

la población ocupada creció de 208.750 personas a 269.575, la población desocupada lo hizo de 13.860 a 47.061.

A partir de los datos presentados, podría plantearse claramente que el aumento de la población económicamente activa en el aglomerado Gran La Plata está vinculado, entre otras cosas, con el aumento de la población que busca trabajo sin encontrarlo. Es importante, por lo tanto, analizar quiénes conforman cada grupo y qué tipo de cambios se produjeron en la población ocupada en el período para dar cuenta de las razones de la intensificación de la búsqueda de trabajo.

Desagregando la población por grupos etarios y analizando su condición de ocupación, es posible observar que los tramos de edad con mayor población ocupada eran los de 30 a 49 años en todo el período. Con excepción de 1993, el grupo de edad de 20 a 24 años registró los mayores porcentajes de desocupados. Si comparamos la variación total del período, se observa que los grupos más afectados por el aumento de la desocupación fueron el de 40 a 49 años (en el que aumentó un 400% la proporción de desocupados) y el de los mayores de 60 (entre los cuales la desocupación había sido casi inexistente en 1990).⁸ En cuanto a la población inactiva, en el porcentaje de todos los grupos se detecta una reducción que se acentúa a partir de los 30 años. Esa tendencia en el grupo de 60 a 69 años, con una baja de 12 puntos porcentuales, y en los mayores de 69, con 7,7 puntos, confirma la hipótesis de un menor paso a la inactividad entre las personas de este grupo etario y/o un reingreso al mercado luego de la jubilación. Estos datos constituyen otro indicio a favor de nuestra argumentación acerca de la evolución de la PEA: el notable aumento registrado en el período se debió, en parte, a la permanencia en ella (tanto en condición de ocupados como de desocupados) de muchas personas que deberían haber pasado a la inactividad.

Considerando la condición de actividad según la posición en el hogar, cabe destacar que más de la mitad de los jefes de familia estaban ocupados en todo el período, manteniéndose relativamente constantes los valores (el porcentaje de ocupados entre el total de jefes en 2000 era sólo 3,6 puntos superior al registrado en 1990). Comparando los valores de 1990 y 2000, se observa un aumento de 5 puntos en el porcentaje de desocupados dentro de este grupo –pasó de 2,5% a 7,6%– y un descenso de la proporción de inactivos –36,6% en 1990 y 27,9% en 2000–. La relación entre estos porcentajes permite plantear que la mayoría de los jefes que dejaron la inactividad no lograron incorporarse al mercado de trabajo y que pasaron a engrosar el universo de desocupados.

8 Hay que tener en cuenta que los datos presentados son estimaciones realizadas a partir de las muestras de hogares. Por lo tanto, están sujetos a error, hecho que, en el caso de las desagregaciones muy específicas, los torna menos confiables. Según las recomendaciones del INDEC, se debe considerar a los datos con cautela, ya que en muchas situaciones el coeficiente de variación (indicador de la precisión de la estimación) supera el 10%. Esta situación se verifica en el caso de la desagregación por grupos etarios y condición de actividad que presentamos.

Las cónyuges⁹ ocupadas representaban, aproximadamente, la mitad de los jefes en esa condición. Entre ellas, se registró un crecimiento significativo tanto de la proporción de ocupadas como de desocupadas y un descenso correlativo de la proporción de inactivas. El porcentaje de cónyuges ocupadas relevado en mayo de 2000 era 10 puntos mayor que el de 1990; el porcentaje de desocupadas sobre el total de cónyuges había aumentado 7 puntos porcentuales comparando los años mencionados. Nuevamente podemos afirmar que estos datos se pueden interpretar en el sentido propuesto con respecto al aumento de la PEA, la que incorporó especialmente a amas de casa y jubilados.

Resulta llamativa la disminución de la proporción de jefes de hogar inactivos durante la década, contracara del aumento de la de jefes desocupados y no de la de ocupados, que, con ciertos altibajos, no tuvo grandes modificaciones. No sucedió lo mismo en el grupo de cónyuges, en el que no sólo aumentó la proporción de desocupados (de 1,8% a 8,8%), sino que se incrementó también la de ocupados (de 31,9% a 41,9%).

La mayoría de los hijos —como de otros integrantes del hogar— estaban en condición de inactividad. Los hijos ocupados representaban entre el 17% y el 20% del total en los años considerados; en mayo de 2000, registraban un porcentaje inferior en 1,6 puntos con respecto al de mayo de 1990. En 1990, el porcentaje de inactivos comprendía al 79% del grupo, y en 2000 descendió casi 5 puntos. Comparando la evolución de la población ocupada y desocupada entre los mismos, puede afirmarse que la mayoría de los que dejaron la inactividad no lograron insertarse en el mercado de trabajo.

Los datos presentados permiten afirmar que durante el período, con la excepción de los años 1994, 1996 y 1999 —en los que hubo una destrucción neta de empleos—, se registró en el aglomerado una significativa creación de puestos de trabajo, pero estos aumentaron mucho menos que la demanda de empleo. ¿Quiénes contribuyeron a esta mayor demanda? A partir del análisis de la distribución de la condición de actividad de la población entre los diferentes grupos de edad y según la posición en el hogar, se puede afirmar que, además de los jóvenes, fueron las amas de casa y los jubilados quienes presionaron masivamente sobre el mercado de trabajo.

El ingreso de las mujeres al mercado laboral también se observa en la evolución de la diferencia porcentual entre hombres y mujeres ocupadas. En efecto, para todos los grupos de edad, la brecha entre la cantidad de hombres y mujeres ocupadas disminuyó notablemente durante el período. En los grupos mayores de 30 años, en los que pierde fuerza el argumento del cambio de mentalidad de la mujer respecto del trabajo, es bien marcada la tendencia a la

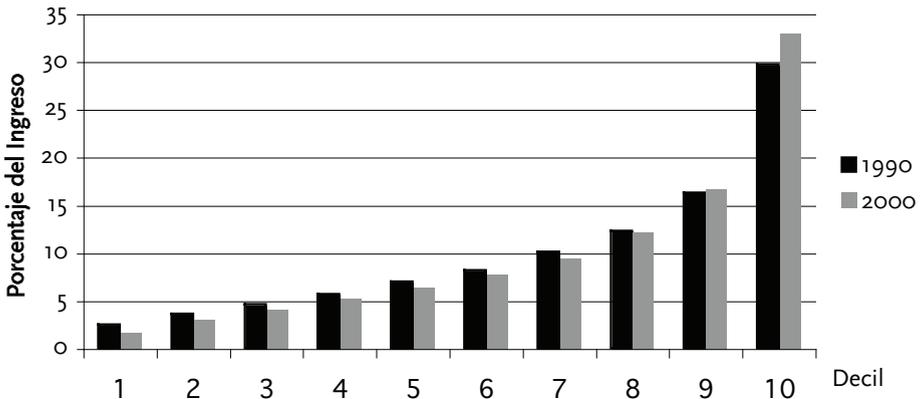
9 La amplia mayoría de cónyuges son mujeres. La EPH consigna como jefe de familia a la persona que el hogar reconoce como tal; en casi todos los casos de familias completas, este reconocimiento recae en el varón adulto.

reducción de la brecha. En el caso de los comprendidos entre los 60 y los 69 años, la evolución es más irregular pero también con una tendencia decreciente. Lejos de representar un avance en términos de independencia económica y emancipación, esto podría interpretarse, con la excepción tal vez de los grupos más jóvenes, como una necesidad de mantenimiento de las condiciones de vida previas a la implantación del modelo económico.

Por otra parte, se registró un aumento importante de la cantidad de desocupados que habitaban los hogares. En 1990, los hogares sin desocupados representaban el 95% del total; diez años después sólo representaban el 82%. Los hogares con al menos un desocupado se incrementaron de 4,3% a 14,2% y los hogares con dos desocupados pasaron de 0,4% a 3,5 por ciento.

La situación descrita, es decir, el aumento de la PEA por una masiva incorporación de jóvenes y amas de casa y por la permanencia de personas en edad de retiro, se relaciona, a nuestro juicio –al menos en muchos de los casos–, con la necesidad de cubrir el presupuesto familiar. Tal como se expresa en el Gráfico 3 y en los datos relevados en los últimos años del período considerado, la participación de los hogares de los deciles más bajos en el ingreso ha disminuido persistentemente. Esto, que a su vez es un indicador del proceso de concentración de la riqueza, nos da la pauta del deterioro de los ingresos (y, consecuentemente, de las condiciones de vida) de los sectores pobres y medios. Este deterioro ha llevado a la necesidad de reforzar los ingresos familiares a través de la inserción en el mercado de trabajo de miembros tradicionalmente inactivos del hogar.

Gráfico 3. Evolución de la participación de los hogares en el ingreso (Gran La Plata, 1990-2000)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, mayo 1990-2000.

Lo que se afirma en el párrafo anterior se refuerza cuando exploramos las razones por las cuales se dio la búsqueda de empleo. Para los años 1991 y 1998-2000, la Encuesta Permanente de Hogares indagó las razones de la misma. En el primero de los años mencionados, más de la mitad de la población desocupada buscaba insertarse en el mercado de trabajo para complementar el presupuesto familiar. Hacia mayo de 2000 esa proporción disminuyó y, en cambio, creció casi 25 puntos el grupo de quienes debían trabajar para cubrir dicho presupuesto.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA

Considerando el conjunto de desocupados, es importante destacar que, a partir del Plan de Convertibilidad, no solamente aumentó sino que también cambió el perfil de quienes lo integran. En efecto, si se tiene en cuenta el total de los desocupados en 1990 y 2000, se pueden detectar algunas transformaciones significativas.

En primer lugar, se observa un aumento de la participación de las cónyuges en el universo de desocupados: en 1990, representaban el 16,4% del total y en 2000, el 24,4%. Esto se relaciona obviamente con el crecimiento de la PEA (recordemos la presión ejercida por la incorporación masiva de amas de casa).

En segundo lugar se observa que, entre los desocupados, aumentó la proporción de personas con bajo nivel de instrucción (primario incompleto y completo): pasaron de 28,9% a 32,1%. Además, disminuyó la proporción de individuos con alto nivel de instrucción (superior o universitario completo).

Considerando los distintos grupos etarios, se destaca el aumento de la participación de todas las franjas correspondientes a los mayores de 40 años en la población desocupada. Esto podría atribuirse a los despidos masivos y a la dificultad de reinserción de la población adulta.

Finalmente, cabe destacar que creció el porcentaje de aquellos que buscaban trabajo habiendo perdido su ocupación anterior. En 1990, el 65% de los desocupados había estado ocupado anteriormente; desde 1992, si bien con algunos altibajos, este grupo se ubicó en torno al 80%, lo cual indica una alta inestabilidad en el empleo.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

Así como se produjeron cambios en el perfil de la población desocupada, también se observan modificaciones en la inserción laboral de los ocupados y en sus características.

Tanto entre asalariados como entre los cuentapropistas se produjo una significativa disminución de la industria manufacturera como rama de actividad de la ocupación principal.

Tal como afirma Giosa Zuazua (1999), es en la evolución de las grandes empresas –y particularmente en la de aquellas del sector industrial– donde hay que buscar los mecanismos que deterioran el mercado de trabajo. La disminución del coeficiente de industrialización, incluso en los primeros años de fuerte expansión de la economía, dio por resultado la disminución sistemática de la participación del empleo industrial. En esta década, el sector manufacturero se transformó en expulsor permanente de empleo.

En el caso del Gran La Plata, esta disminución del personal ocupado en la industria se relaciona con el proceso de privatización y reconversión productiva de los grandes establecimientos industriales, especialmente de aquellos que conforman el polo petroquímico de la región.

Durante el período analizado, se observa una disminución relativa de los grandes establecimientos como proveedores de puestos de trabajo. En efecto, el porcentaje de ocupados en establecimientos de más de 100 personas, sobre el total de los ocupados, cayó de 31,7% a 13,5%. Cabe consignar que no se trató simplemente de una disminución relativa. A partir de las estimaciones realizadas sobre la base de la EPH, se puede afirmar que en esta categoría se produjo una destrucción neta de empleos. En 1990, los grandes establecimientos del aglomerado empleaban a 61.916 personas y, en el año 2000, su planta se había visto reducida a 36.514 personas.

Entre los asalariados, por las características del aglomerado como capital provincial, las ramas administración pública y defensa concentraban los mayores porcentajes, registrándose un leve descenso en su presencia relativa entre 1990 y 2000. Como señala Rofman (1997), la reducción por parte del Estado de sus plantas administrativas no revistió a nivel provincial y municipal la misma intensidad que a nivel nacional; en dichos ámbitos, las estructuras burocráticas siguieron cumpliendo el rol de reserva ocupacional frente a la carencia de fuentes alternativas de trabajo.

Entre los cuentapropistas, en cambio, las ramas comercio, construcción y servicios personales agrupaban a la mayor parte de los trabajadores.

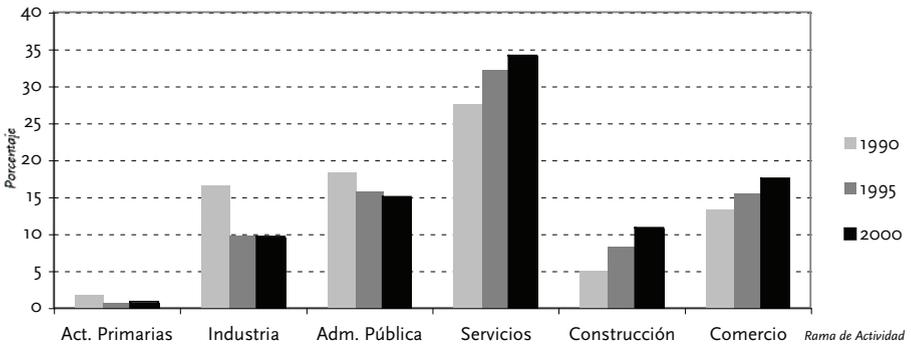
Entonces, la estructura ocupacional en conjunto se modificó fundamentalmente en dos aspectos: achicamiento del personal ocupado en la actividad industrial¹⁰ y crecimiento de la ocupación en las actividades de servicios y

10 “La industria ha incidido fuertemente sobre los altos niveles de desocupación en el Gran La Plata, ya que entre 1991 y 1998 se calcula que la reducción de sus planteles alcanzó aproximadamente a una quinta parte. En un contexto de fuerte incremento de la PEA, insuficiente crecimiento del empleo y altos niveles de desocupación durante la mayor parte de la década, la destrucción de puestos industriales se presenta como un elemento explicativo de la crisis ocupacional de la región, al mismo tiempo que un factor limitante para

comercio. En el caso del comercio, se registró una alta rotación de los negocios de pequeño tamaño y la presencia de hipermercados, con impacto limitado en la creación de puestos de trabajo (Suárez *et al.*, 1998).

Considerando tres años y agrupando algunas ramas,¹¹ los cambios pueden visualizarse claramente en el Gráfico 4. Desde 1990 hasta 2000, aumentaron los porcentajes de población ocupada en las ramas servicios, construcción y comercio. En este sentido, cabe recordar que las indemnizaciones de los despidos en la administración pública fueron invertidas, en su mayoría, en el comercio y los servicios. En lo que respecta a la construcción, si bien la misma creció en el país a nivel general, en el caso de La Plata su aumento también se relaciona con el notable incremento de la obra pública en el marco del Programa de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.¹² Por otro lado, la significativa disminución de la ocupación en la industria muestra que esta rama de actividad se vio especialmente afectada por los cambios en la política económica: achicamiento del Estado, despidos, privatizaciones, leyes de flexibilización laboral, falta de incentivos a la industria, aumento de las importaciones, etcétera.

Gráfico 4. Evolución de la población ocupada según rama de actividad (Gran La Plata, 1990-2000)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, mayo 1990-2000.

su crecimiento” (Adriani *et al.*, 2000).

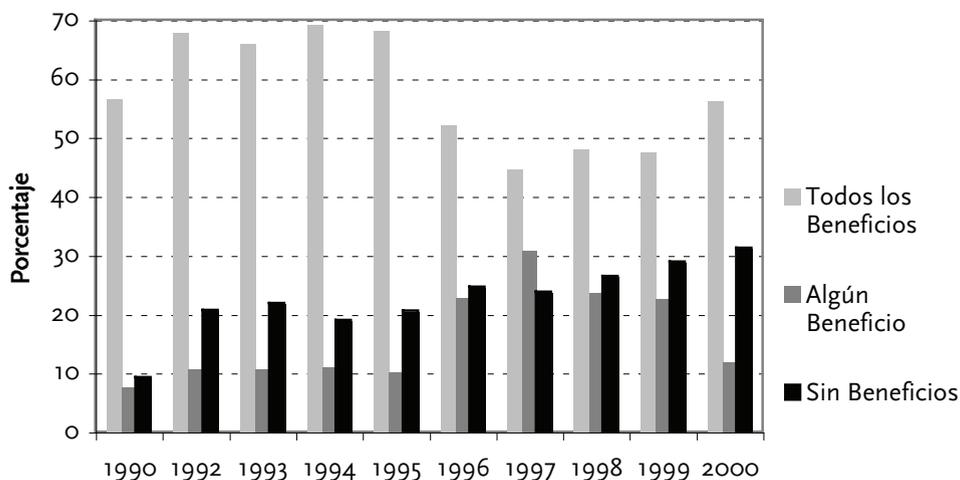
11 Nótese que la categoría Comercio incluye en esta elaboración a restaurantes y hoteles, y Servicios incluye a los servicios públicos privatizados, servicios financieros e inmobiliarios, servicios de educación y salud.

12 A pesar de no formar parte del Conurbano Bonaerense (y de no estar incluido en este aglomerado en las consideraciones del INDEC), el partido de La Plata fue receptor de los fondos mencionados.

En cuanto a las categorías ocupacionales, de acuerdo con los datos relevados por la EPH, no se produjeron cambios significativos. Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución de las ramas de actividad, se puede afirmar que la categoría predominante de obreros o empleados dejó de estar conformada por asalariados de la industria manufacturera.

Por otra parte, se dio un proceso de precarización del trabajo, hecho que es posible deducir sobre la base de varios indicadores. Por ejemplo, considerando la evolución de la percepción de beneficios sociales, se observa un crecimiento del porcentaje de ocupados sin protección social. La población ocupada sin beneficios sociales se triplicó durante la década considerada, y también aumentó aquella que percibía tan sólo beneficios parciales (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de la percepción de beneficios sociales en la población ocupada (Gran La Plata, 1990-2000)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, mayo 1990-2000.

Otro indicador del deterioro de los puestos de trabajo es la evolución del porcentaje del ingreso del que se apropia la población ocupada a lo largo del período. Aquella correspondiente a los menores deciles de la distribución disminuyó su participación en el ingreso total, factor que planteó la necesidad tanto de incrementar la inclusión familiar en el mercado de trabajo como de buscar ocupaciones complementarias. En efecto, el porcentaje de trabajadores que desempeñaban más de una ocupación pasó de 7,5 % en 1990 a 11,4% en 2000. Además, en este último año, entre la población ocupada el 11% buscaba otra ocupación (ocupados demandantes) y el 57% lo hacía con el fin de tener un trabajo complementario.

CONSIDERACIONES FINALES

Las políticas económicas implementadas a lo largo de la década transformaron profundamente el mercado laboral del aglomerado Gran La Plata. En este trabajo nos hemos concentrado en el análisis de la evolución de la PEA, destacando, al mismo tiempo, aunque de modo subsidiario, la tendencia al deterioro en las condiciones de trabajo.

Se ha observado un incremento de la población económicamente activa. A partir del examen de la distribución de la condición de actividad de la población, entre los diferentes grupos de edad y según la posición en el hogar, se puede afirmar que una proporción relevante de los que pasaron a la actividad estuvo constituida por jubilados y amas de casa, además de los jóvenes, que presionaron masivamente sobre el mercado de trabajo. Según la hipótesis que hemos planteado y en función de su interpretación a la luz de las explicaciones postuladas en nuestro país, este fenómeno se produjo por la necesidad de compensar la caída de los ingresos del hogar y no por una percepción de condiciones laborales favorables.

La incorporación de estos sectores al mercado de trabajo respondió al modelo económico vigente, que, a escala familiar, se tradujo en un aumento de los hogares con pérdida del empleo o con reducción del salario del sostén tradicional, provocando el ingreso de otros miembros del grupo al mercado laboral. La evidencia empírica permite concluir que una parte importante de quienes se incorporaron al mercado de trabajo encontraron empleo, aunque con un alto grado de precariedad.

En relación con las condiciones de trabajo, diversos indicadores ponen en evidencia una tendencia a su precarización. Ellos son:

- la evolución de la percepción de beneficios sociales: se triplicó la población ocupada sin protección social y aumentó la proporción de los trabajadores que percibían beneficios parciales;
- la evolución del porcentaje del ingreso del que se apropia la población ocupada y los hogares: la participación en el ingreso de la población ubicada en los deciles más bajos de la distribución disminuyó persistentemente. Esto, que constituye un indicador del notorio aumento de la concentración del ingreso en la década del noventa, da la pauta del deterioro de las condiciones de vida de los sectores pobres y medios de nuestra sociedad;
- la evolución de las ramas de actividad predominantes: se produjo una significativa caída de la industria manufacturera, con una disminución de los ocupados en grandes establecimientos.

Coincidimos con Giosa Zuazua (1999), quien plantea que desde el curso oficial se sostuvo que el desempleo y la precarización laboral eran el producto de rigideces institucionales en el mercado de trabajo. Partiendo de esa

lectura, se propuso políticas tendientes a su desregulación con el fin de reducir el costo laboral, disminuir el riesgo de contratación y moderar el poder de negociación de los sindicatos. Sin embargo, este tipo de políticas no logró recomponer los niveles de empleo; por el contrario, el mercado de trabajo acusó señales de mayor desestructuración.

Cabe recordar que el trabajo asalariado es el principal mecanismo de integración social (Beccaria y López, 1996b), ya que mediante el mismo los sujetos garantizan su acceso a los bienes y servicios, consolidándose así una base que les proporciona un lugar en la sociedad. El achicamiento relativo del mercado de trabajo formal, el aumento de la tasa de desempleo, el desmejoramiento de la calidad de los puestos de trabajo, la pérdida de derechos y garantías por parte de los trabajadores y su desafiliación a la seguridad social, entre otros factores, se conjugaron para producir el debilitamiento de los lazos de integración social en nuestra sociedad y la consecuente vulnerabilidad que crecientemente enfrentaron sus miembros.

BIBLIOGRAFÍA

ADRIANI, Héctor Luis, María Josefa SUÁREZ, María Margarita PAPALARDO y Mariana VERSINO (2000), “Actividad industrial y empleo en el Gran La Plata: transformaciones y políticas públicas en el período 1990-1999”, ponencia presentada en las Segundas Jornadas Platenses de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

BECCARIA, Luis (2005), “El mercado laboral argentino luego de las reformas”, en Luis BECCARIA y Roxana MAURIZIO (eds.), *Mercado de trabajo y equidad en Argentina*, Buenos Aires, Prometeo y Universidad Nacional de General Sarmiento.

BECCARIA, Luis y Néstor LÓPEZ (1996a), “Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano”, en Luis BECCARIA y Néstor LÓPEZ (comps.), *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Buenos Aires, UNICEF/Losada.

----- (1996b), “El debilitamiento de los mecanismos de integración social”, en Luis BECCARIA y Néstor LÓPEZ (comps.), *Sin trabajo...* ob. cit.

CORTÉS, Rosalía y Adriana MARSHALL (1999), “Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los ‘90”, en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, vol. 39, N°154.

GIOSA ZUAZUA, Noemí (1999), “Desempleo y precariedad laboral en la Argentina de los años 90”, en *Época*, Buenos Aires, Año 1, N° 1.

IÑÍGUEZ, Alfredo (1997), “Las dimensiones del empleo en la Argentina”, en Ernesto VILLANUEVA (comp.), *Empleo y globalización. La nueva cuestión social en la Argentina*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

MURMIS, Miguel y Silvio FELDMAN (1993), “La heterogeneidad social de la pobreza”, en Alberto MINUJIN *et al.* (comp.), *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*, Buenos Aires, UNICEF/Losada.

NOCHTEFF, Hugo (1999), “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, en *Época*, Buenos Aires, Año 1, N° 1.

ROFMAN, Alejandro (1997), *Convertibilidad y desocupación en la Argentina de los ‘90*, Buenos Aires, Colección CEA-CBA.

SUÁREZ, María Josefa *et al.* (1998), “Modificaciones del mercado laboral en el Gran La Plata: 1991-1995”, en *Meridiano*, Buenos Aires, N° 6.

TORRADO, Susana (1994), *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

RESUMEN

En este artículo se presenta un análisis estadístico de las principales variables relacionadas con la problemática laboral en el aglomerado Gran La Plata (integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada), tomando como base la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC (período 1990-2000).

Si bien se trata de una aproximación descriptiva, se presentan algunas hipótesis explicativas que le dan sentido a los datos analizados. Esto implica interpretarlos a la luz del cuerpo de conocimientos producidos en la Argentina sobre el tema, aportando elementos a las controversias planteadas alrededor de la explicación de algunos de estos fenómenos.

El análisis del aglomerado urbano objeto de estudio se inserta en la realidad argentina de los años noventa, con especial atención en el Plan De Convertibilidad y en sus efectos en el mercado de trabajo. En particular, se considera en este contexto la evolución de la condición de actividad de la población del aglomerado y se presenta una caracterización de la población desocupada y ocupada en el mismo.

El análisis realizado permitió identificar significativos cambios en la estructura del mercado de trabajo: el considerable aumento de la tasa de desocupación, la incorporación de amas de casa en porcentajes nunca experimentados en períodos anteriores, la precarización de los puestos de trabajo con una creciente pérdida de derechos y garantías por parte de los trabajadores y su desafiliación a la Seguridad Social.

CARACTERIZACIÓN

This article presents a statistical analysis of the key variables related to labor issues in the Greater La Plata (an urban area involving the boroughs of La Plata, Berisso and Ensenada). The analysis is based on the data provided by the General Household Survey conducted by INDEC (period 1990-2000).

Despite its descriptive approach, some explanatory hypotheses are also introduced in order to make sense of the data. This implies interpreting them in the light of the body of knowledge produced in Argentina with respect to recent developments in the labor market, and intends to provide some fresh elements to the controversies that arise when it comes to explaining them.

The analysis of this specific urban agglomerate is made taking the Argentine reality of the 90s as a frame of reference, particularly the so-called Convertibility Plan and its consequences for the labor market. Within this context we consider the evolution of the occupational status of the population. Also, we present a description of the main characteristics of both the employed and the unemployed.

The analysis allowed us to identify remarkable changes in the structure of the labor market: a considerable increase in the unemployment rate; a presence of housewives in unprecedented percentages within the working force; a deterioration of the working conditions, with increasing losses in the labor force's rights and in the terms of its affiliation to the Social Security.

PALABRAS CLAVE

GRAN LA PLATA
MERCADO LABORAL
PLAN DE CONVERTIBILIDAD
DESOCUPACIÓN

KEY WORDS

GREATER LA PLATA
LABOUR MARKET
CONVERTIBILITY PLAN
UNEMPLOYMENT

LOS CAMBIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN EL CHACO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE MINIFUNDISTAS Y TRABAJADORES VINCULADOS

Inés Liliana García

INTRODUCCIÓN

A partir de los década de 1970, la producción de algodón en la Provincia del Chaco –principal referente nacional del cultivo– sufre cambios que van modificando en forma paulatina la estructura de vida de los agentes históricamente vinculados a dicha producción, en especial de los trabajadores y los minifundistas hoy, prácticamente, excluidos del proceso productivo.

Entre las numerosas modificaciones, las más relevantes son aquellas vinculadas a la desarticulación en el territorio de cadenas de valor agregado, al proceso de tecnificación y a la diversificación hacia otros cultivos, principalmente al avance de la soja sobre hectáreas antes destinadas al cultivo del algodón.

Estos procesos de cambio se manifiestan en la imposibilidad a la que se enfrentan los minifundistas de sostener una producción rentable y en la pérdida de numerosas fuentes de trabajo directas e indirectas, con el consecuente aumento de la pobreza, la emigración hacia los cordones periféricos urbanos (Gran Resistencia, Gran Rosario) y el deterioro de las condiciones laborales de quienes aún permanecen dentro del sistema productivo algodonero.

Nuestro trabajo es un análisis comparativo en relación con las condiciones preexistentes y de observación *in situ*. Las fuentes de información que hemos empleado son referencias bibliográficas y entrevistas realizadas tanto a agentes vinculados directamente con la problemática como a especialistas en la temática.

Nos interesó conocer cuáles son las características de los sectores más desprotegidos dentro de la producción de algodón y reflexionar sobre su futuro; en particular, nos preguntamos si se podrán recuperar las fuentes de trabajo

perdidas y, en general, nos planteamos si es necesaria la implementación de un sistema agroindustrial sustentable que contemple y que revierta las características del actual modelo de alta competitividad que apuesta a la soja y que se caracteriza por tres aspectos fundamentales: 1) se basa en el aprovechamiento de las ventajas del mercado internacional –que lleva a un proceso extensivo del cultivo de soja sin contemplar la problemática de la erosión, de la pérdida de materia orgánica y de nutrientes en los suelos, del proceso de desertificación y su carácter de irreversibilidad–, descuidando otras necesidades de la economía local, como la provisión de materia prima a la industria textil y derivadas; 2) la producción de soja requiere escasa mano de obra y lleva al consecuente despoblamiento del área rural, con sus secuelas de desempleo, pobreza, desarraigo cultural y exclusión social, aspectos que este modelo no tiene en cuenta; y 3) este modelo se sustenta en una concentración de la tierra productiva en pocas grandes corporaciones de productores altamente tecnificados que, por factores de competitividad, pueden absorber a los pequeños y medianos productores empobrecidos.

FACTORES DE CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALGODÓN A PARTIR DEL MODELO DE ECONOMÍA NEOLIBERAL Y DE LA DESARTICULACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR

En los años 80, se pusieron en evidencia, en la estructura de producción de algodón en el Chaco, los cambios provocados por la política económica iniciada a mediados de la década anterior: la creciente apertura a las importaciones de esa década afectó fuertemente al sector textil y, por consiguiente, la producción del insumo principal quedó relegada de toda política de incentivos y protección.

La producción de algodón en la Provincia del Chaco tiene un fuerte arraigo cultural; desde principios de los años 1930, poblaciones enteras se organizaron en torno a esa actividad desarrollando numerosas instituciones –como cooperativas, asociaciones representativas de productores pequeños o medianos y sociedades de fomento– ligadas, básicamente, a los sectores de la inmigración europea que se radicaron allí.

El gobierno *de facto* que se instala en el poder a partir de 1976 abrió las puertas a la implementación del neoliberalismo económico que desarticuló –conscientemente– los lazos sociales construidos en décadas. Las condiciones desfavorables que llevaron al cierre de fábricas locales, como consecuencia de dichas políticas, trajeron consigo la caída del salario, el cese de numerosas actividades industriales dedicadas al mercado interno y el fin de los derechos de seguridad social para la mayoría de la población. Las medidas de apertura a la importación de mercancías de todo tipo dañaron diversas economías regionales, como es el caso especial que nos ocupa.

En los primeros años de la década del 70 suceden dos acontecimientos fundamentales que cambian la estructura productiva del algodón: por un lado, el acuerdo entre las provincias y el Estado Nacional para el reparto –en porcentajes proporcionales– del Presupuesto del Fondo de Coparticipación Nacional; y, por otro, el impulso de nuevos polos productivos en áreas postergadas del país.

La Provincia del Chaco accede a uno de los mayores porcentajes del reparto –ocupa el cuarto lugar en el volumen de cuota de coparticipación recibida por todas las provincias–, pero a cambio de permitir el traslado de las hilanderías –cercanas a los predios de producción de la materia prima– hacia nuevos polos industriales fomentados por el Estado que se instalaron en San Luis, Catamarca y La Rioja.

De este modo, se desmantela todo un circuito interno que requería de mano de obra calificada y que permitió a la economía provincial la elaboración de un producto de venta industrializado, como los hilados o telas de algodón. Los requerimientos de insumos y transporte, los centros de provisión de alimentos y de las demás necesidades de una población asentada en derredor de fuentes de trabajo diversificadas fueron disminuyendo; la población se orientó hacia otras zonas más urbanizadas pero incapaces de absorberlos en nuevos puestos de trabajo, ya que la estructura económica provincial se deterioró seriamente (Rofman, 1980).

Al romperse la cadena de valor agregado en la producción del algodón, se produce el quiebre definitivo de la estructura socioeconómica sobre la que se había montado, hasta entonces, el perfil productivo de la Provincia del Chaco. A partir ese momento, su participación en la producción queda limitada al fardo (algodón en bruto-acopio-desmote); y los precios de la materia prima producida por los pequeños productores caen en el mercado local por los costos de traslado que de allí en más requerirán. La colocación en el mercado del algodón en rama hace caer su valor: los intermediarios –que son, al mismo tiempo, sus acreedores– les compran a menor precio que el promedio pagado en las desmotadoras porque los productores quedan sujetos a esta única opción. Sólo producir mayor cantidad puede compensar la pérdida de las ganancias; es decir, sólo a los poseedores de grandes predios les puede resultar aún beneficioso el cultivo de algodón; para mantenerse en el mercado de intercambio, colocar su producción y recuperar al menos lo invertido, los pequeños y medianos productores van cediendo proporciones de sus ganancias.

A principios de los 80, muchos pequeños productores y minifundistas son absorbidos en cargos públicos administrativos; y, para el pago de sus salarios, el Estado provincial emplea el presupuesto resultante –básicamente– de la Ley de Coparticipación. De esta manera, se busca dar paliativo a la ruptura de un modelo de inserción productiva de varias décadas de construcción. Pero, a partir de la década de 1990, con el cierre de las vacantes en el sector público y las políticas de reducción de personal y de gastos en la administración estatal, este mecanismo “compensatorio” se ve interrumpido para las nuevas generaciones.

El movimiento cooperativo, con su visión solidaria y de fuerte apoyo al pequeño y mediano productor, había sido el protagonista central de la entrega de fibra al mercado interno hasta bien entrada la década de los 70. Desde la vigencia de la política económica puesta en marcha por la dictadura militar, comienza lentamente el declive de estas instituciones impulsoras de lazos de cooperación entre un segmento muy importante de productores algodoneros chaqueños. Sostenidas sólo por sus asociados –ahora empobrecidos– y sin políticas públicas de apoyo, van perdiendo terreno ante la competitividad que adquieren los acopiadores privados. La agudización de las políticas alineadas con el enfoque del capitalismo neoliberal produjo en el cooperativismo chaqueño sensibles daños, que se reflejaron en su participación cada vez más reducida en el desmote del algodón en rama. En la década de los 90 este proceso se acentuó, aunque, desde el retorno de la democracia, se implementaron 3 o 4 salvatajes financieros. En la actualidad, las cooperativas creadas por productores algodoneros que sobreviven lo hacen no por la actividad de sus socios sino porque sus principales clientes son productores de soja y de girasol.

A partir de la década de los 90, la Argentina –hasta entonces productora de algodón para uso interno– se introduce al mercado internacional bajo condiciones de absoluta desprotección. La apertura irrestricta a las importaciones y una política de cambio fijo impidieron a los sectores nacionales competir en condiciones similares; esto, sumado a la ausencia de un Estado compensador de los desequilibrios, provocó una de las mayores crisis estructurales de la historia del país. En más de un cuarto de siglo, la falta de políticas públicas de contención social contribuyó a que también se desarticularan los lazos solidarios construidos por la sociedad civil.

“El algodón ha sido una actividad económica característica de distintas zonas del país, en particular del nordeste argentino. La producción local ha cubierto tradicionalmente la demanda de la industria textil nacional. Sin embargo, en los últimos años de la década anterior, la producción comenzó a caer dramáticamente. El área sembrada en la Provincia del Chaco, principal productora del país, rondaba antes de la crisis 1.000.000 de hectáreas y se redujo en pocos años a 160.000 hectáreas. Quiere decir que se perdió el 84% del área sembrada en dicha provincia” (Capitanich, 2004).

Observaremos, en adelante, cómo el tejido socioproductivo comienza a desintegrarse; la sociedad empieza a fragmentarse, los sectores más vulnerables quedan imposibilitados de continuar con su estrategia de subsistencia y se ven expulsados del área de cultivo, migrando a la periferia rural o al cordón periférico de ciudades como Resistencia, Corrientes y –desde finales de los 90– Rosario.

El estallido social de fines de 2001 pone fin a un modelo especulativo de convertibilidad cambiaria, continuador del que imperó en tiempos de la apertura irrestricta y la abstención del Estado en su rol compensador. El resultado fue una crisis social que se reprodujo a lo largo de un cuarto de siglo: destrucción de

fuentes de trabajo, desempleo y una pobreza que representa, para muchos sectores, la exclusión definitiva del goce de sus derechos de ciudadanía. El descontento generalizado de la sociedad y el grado extremo de necesidad condujeron a generar políticas públicas de contención. Se idearon programas que, aunque acotados a una población definida, no contemplaban las especificidades regionales o la trayectoria social de los beneficiarios. Uno de estos programas –al que nos referiremos más adelante para observar algunos aspectos de su incidencia en la producción algodonera– es el aún vigente Plan Jefes de Hogar. Representativo de una nueva política basada en la emergencia social y enmarcado en un período de transición hacia un modelo económico alternativo, se observa que fue incapaz de transitar, más allá de lo explicitado en sus objetivos, hacia la inserción de los sectores marginados en un sistema productivo sostenible y que permita recuperar o incorporar derechos laborales.

Aunque en los últimos años, las políticas públicas, tanto locales como nacionales, comienzan a tener presencia, no logran aún la repercusión necesaria para revertir la situación.

EL PROCESO DE TECNIFICACIÓN

Como decíamos, la rentabilidad de ganancia sólo es posible para los productores que disponen de grandes extensiones de tierras para el cultivo: estos –favorecidos en los 90 por la política cambiaria de paridad peso-dólar, el acceso a créditos para la compra de maquinarias e insumos en el exterior y por el aluvión de empresas internacionales que dominaron el mercado de las semillas transgénicas y de plaguicidas– fueron quienes tuvieron la posibilidad de reconvertirse tecnológicamente adquiriendo sembradoras, cosechadoras y desmotadoras apropiadas para producir más toneladas de algodón (en bruto o en fibra) reduciendo, al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra en el proceso productivo.

“[...] quienes operaban en unidades minifundistas completaban los ingresos necesarios para su subsistencia con el trabajo de recolección a mano de los capullos de algodón, en las fincas de tamaño mediano y/o grande [...] De este modo, la función del bracero satisfacía, simultáneamente, dos exigencias que eran insoslayables y que no tenían opciones técnicas, económicas y sociales: el productor se hacía de su esfuerzo productivo y el cosechero [...] obtenía el complemento de recursos para subvenir a las necesidades básicas de su unidad familiar.¹ La incorporación de la cosechadora mecánica, que se inicia a principios de la década de 1990, supone romper con este esquema productivo y social. Mientras que uno de los dos conjuntos de actores tiende inexorablemente a desaparecer, el otro [...] obtiene beneficios crecientes, dadas las ventajas que,

1 Se entiende por productor minifundista a aquel que posee no más de 5 hectáreas destinadas al cultivo, con escasa o nula tecnificación y que emplea su fuerza de trabajo y la de su familia.

en materia de costos de producción, supone reemplazar fuerza de trabajo por maquinaria” (Rofman, 2000).

Como se observa en el Cuadro 1, la disminución de fuentes de trabajo fue notoria en la Provincia del Chaco y, por extensión, en otras dedicadas a la producción de algodón como Corrientes, Formosa y el norte de Santa Fe.

Cuadro 1. Trabajadores en forma permanente en explotaciones agropecuarias de la Provincia del Chaco. Años 1960, 1988 y 2002, en diversas categorías

Año relevado	Productores	Familiares	No familiares	Total
1960	22.994	43.715	10.545	77.254
1988	19.815	27.274	9.258	56.347
2002	17.743	13.110	5.282	36.135

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Economía de la Nación y obtenidos de INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

Lo que obtiene una máquina cosechadora en una hora reemplaza el trabajo de 70 jornaleros manuales en el mismo lapso. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores vinculados a la cosecha manual de algodón, sin posibilidad de subsistir por sus propios medios –primero, por no ser rentable la producción de algodón familiar minifundista y, segundo, por la reducción de fuentes de trabajo para terceros– o perdieron irreversiblemente tales ingresos o abandonaron o malvendieron sus tierras, permitiendo que se hiciera presente otra de las características de la producción agropecuaria capitalista: la concentración de grandes extensiones de tierra bajo el control de pocos grandes productores.

Es así que los braceros o minifundistas migran a las villas de emergencia (muchos de ellos a las de los alrededores de la Ciudad de Rosario), donde se ven sometidos a condiciones de hacinamiento y escasa provisión de bienes públicos. Dedicados al cirujeo o a la venta de artesanías, sobreviven algo mejor que en sus lugares de origen pero sin salir de la marginalidad y la vulnerabilidad de sus condiciones de existencia.

“Teníamos una hectárea donde sembraba algodón, pero se lo pagan con centavos”, comenta Roberto, un nuevo integrante de la villa. Luego agrega: “...antes se podía vivir de pequeños sembradíos y de la caza de animales para comer y vender las pieles. A la cosecha se la comió la sequía y las autoridades prohibieron atrapar a diversas especies de animales. ¿Qué se puede hacer entonces?” (*Diario Norte*, 06-03-2006).

Las tasas de desocupación y subocupación registradas por la Encuesta Permanente de Hogares en el Gran Resistencia evidencian un aumento en los años en que el proceso de mecanización se fue expandiendo y expulsando manos de obra rural hacia el ejido urbano. En el Cuadro 2 se puede apreciar que en

1995 y 1996 se registra un incremento importante de ambas tasas coincidente con los años de mayor importación de maquinarias agrícolas en el sector algodonero. Si bien no es posible vincular este incremento en forma directa con la pérdida de fuentes de trabajo en el sector algodonero, al menos nos permite constatar una realidad: el sistema capitalista concentra su desarrollo desentendiéndose de los sectores más vulnerables antes incorporados al proceso de trabajo.

Cuadro 2. Tasas de desocupación y subocupación (promedio anual) en el Aglomerado Gran Resistencia, período 1986-2005

Año	Desocupación	Subocupación
1991	5,20	10,50
1992	4,95	7,70
1993	7,15	9,60
1994	9,10	10,45
1995	12,65	12,20
1996	13,40	12,45
1997	11,65	12,10
1998	11,30	13,17
1999	10,93	11,67
2000	10,85	11,45
2001	14,45	13,05
2002	16,15	18,40
2003	10,90	12,75
2004	8,00	11,45
2005	5,40	10,45

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

En el año 2004 se realizó una encuesta, enmarcada en una investigación del PROINDER (SAGPYA) y del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Rofman, Foti y García, 2005) a pequeños productores minifundistas de la Provincia del Chaco. Algunas variables analizadas en las entrevistas realizadas –que reproducimos en el Cuadro 3– pueden evidenciar, también, las consecuencias del cambio en la estructura de producción del algodón.

Cuadro 3. Condiciones en la calidad de vida de la pequeña producción rural en la Provincia del Chaco. Año 2004

Variable	Valores predominantes entre los PPM del Chaco
Tipo de explotación por actividad principal	Algodonera: 32,8%, Diversificada: 36,8%
Superficie total promedio por explotación	9,31 ha
Superficie cultivada promedio	Algodón: 4,8 ha
Cantidad de explotaciones por estrato de tamaño	10,1 a 25 ha: 35,8% / 2,1 a 5 ha : 26,9%
Forma de tenencia	Propia con título: 38.8% / Ocupante: 20,9%
Canales de comercialización	Acopiador: 46% / Circuito minorista: 22%
Edad del jefe de hogar	Entre 31 y 50 años: 53% / + de 50 años: 39,4%
Nivel educativo del jefe de hogar	Prim. incompleta (62,7) y completa (22,4%): 85,1%
Posesión de tractor	2%
Contratación de mano de obra	19%
Trabajo extrapredial	33%
Ingreso familiar anual neto	de \$2001 a \$5000: 31,3% / hasta \$ 1000: 22,4%

Fuente: Rofman, Foti y García (2005).

El perfil que caracteriza al pequeño productor minifundista algodonero que aún prosigue en el circuito es el de quien no tiene otra alternativa posible de inserción laboral –por su edad y escasa capacitación–, produce a escala reducida –en forma manual, sin equipamiento y sin acceso a financiación–, comercializa lo producido sin opciones a obtener un precio competitivo y tiene ingresos que, en el mejor de los casos, apenas llegan a los 400 pesos mensuales. El cultivo tradicional le permite –hasta el momento y por la ayuda recibida por planes provinciales de cooperación y sostén– una economía de subsistencia, dada esta muy limitada capacidad de producción, en nada competitiva en relación con el resto de los productores y, mucho menos, con márgenes de crecimiento. En la zona, persisten productores pertenecientes a las generaciones que han vivido un modelo productivo de provisión de algodón para el mercado interno previo a los años 80; pero las nuevas generaciones, sin capitalización previa y sin acceso a la tierra por el proceso de concentración, quedan relegadas del circuito y optan por trasladarse hacia espacios urbanos.

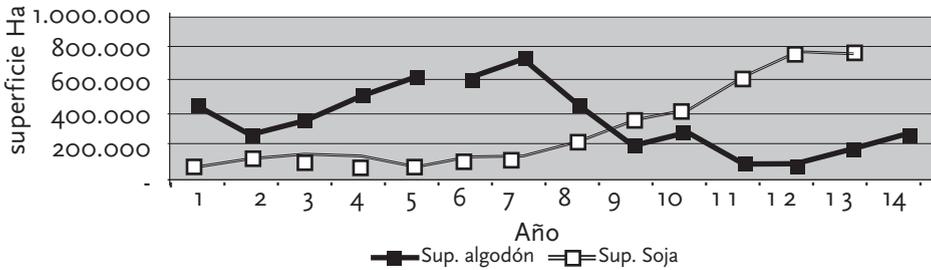
PROCESO DE SOJIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Las ventajas comparativas y las posibilidades de exportación que se abrieron para el cultivo de oleaginosas, en especial para la soja, permitieron que año a año, a partir de 2000, se incrementaran las hectáreas destinadas a su cultivo en detrimento de los productos tradicionales. La soja, primeramente cultiva-

da en la región central de nuestro país, fue expandiendo sus fronteras de modo tal que aquellos medianos y grandes productores algodoneros de la Provincia del Chaco que pudieron reconvertirse tecnológicamente en los noventa aseguraron sus ganancias –evitando las amenazas de las sequías y de las variaciones de los precios del algodón en el mercado internacional– volcándose hacia las oleaginosas que, además y a diferencia del algodón, requieren de escasa mano de obra y no generan demasiada incertidumbre en cuanto a su rendimiento final.

La cantidad de hectáreas destinadas a la siembra de soja, tal como lo indica el Gráfico 1, se sustraen de la superficie de cultivo de algodón.

Gráfico 1. Evolución de la superficie sembrada con algodón y soja en la Provincia del Chaco entre 1992 y 2005



Fuente: Delssin (2005).

Los predios reconvertidos en muchos casos son producto de la compra de tierras a pequeños y medianos productores por parte de grandes productores o de consorcios que provienen de otras provincias de la zona central del país y que expanden sus negocios hacia territorios antes impensados para el cultivo de oleaginosas. También muchos medianos productores –en especial de la Provincia de Córdoba– venden o alquilan sus tierras y, por un costo menor, compran o arriendan en Chaco mayores extensiones prediales. Es este otro factor que favorece la concentración de grandes extensiones en manos de pocos productores.

“La disminución en los costos, flexibilidad en las operaciones del proceso productivo, aspectos relacionados a la logística de cosecha y comercialización, ampliación de los grados de libertad disponibles en errores operativos y de las ventajas de oportunidad de las tareas, hacen una combinación de factores que facilitan enormemente el trabajo del productor, requiriéndole menor dedicación de capitales, tiempo y atención en los procesos [p. 14]. [...] El algodón perdió com-

petitividad frente a la soja, que lo ha desplazado en la decisión de siembra de la mayoría de los medianos y grandes productores. Solamente continúan sembrando en cantidades significativas proporcionalmente al tamaño de las empresas los minifundistas, los productores pequeños y algunos medianos [p. 17]" (Delssin, 2005).

Cabe señalar que quienes aún continúan sembrando algodón son aquellos que no pueden afrontar los procesos de tecnificación y mecanización necesarios pero que, por razones culturales y de endeudamiento, no se adecuan a un cambio o diversificación de su producción, o ni tienen opciones para hacerlo.

CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS EN LOS PRODUCTORES MINIFUNDISTAS Y EN LOS TRABAJADORES VINCULADOS A LA SIEMBRA Y COSECHA DEL ALGODÓN

Como vimos, los grandes productores algodoneros fueron diversificando sus tierras con oleaginosas, aplicando alta tecnología y escasa mano de obra; en la actualidad el cultivo del algodón en el Chaco está en manos de medianos y pequeños productores que demandan mano de obra para la realización de las distintas tareas, en particular para la cosecha que realizan en forma manual. En el ciclo anual productivo, se emplea no menos de 40 jornales por hectárea cultivada y cosechada. Esta cifra es mayor a la que corresponde a otras actividades o cultivos que, como la soja, requieren de la quinta parte (0,20%) de un jornal por hectárea o de la ganadería, que precisa de un tercio de jornal (0,33%) por hectárea/año (Capitanich, 2004).

Si bien las cifras de mano de obra empleada son menores a las requeridas en décadas anteriores, hoy todavía es posible considerar al cultivo del algodón como un factor de recuperación de fuentes de trabajo rural y de reconstrucción de un tejido social cuya desarticulación dejó definitivamente excluidos a muchos de los actores intervinientes.

"[...] si el cultivo de algodón se expande, se generarán nuevos puestos de trabajo que podrán ser ocupados tanto por vecinos de la zona actualmente sin empleo, como por beneficiarios de planes sociales que podrán alcanzar la dignidad que sólo brinda el trabajo [...]. Al mismo tiempo, se evitarán las migraciones campesinas sobre los grandes centros poblados, con todas las consecuencias que implica para las personas abandonar el lugar de origen y trasladarse a un ámbito de características totalmente distintas que, la mayoría de las veces, es agresivo y hostil con el recién llegado" (Capitanich, 2004).

La necesidad de reinsertar a los marginados del sistema económico neoliberal, luego de la crisis y estallido del modelo, hace que, a fines del año 2005, se apruebe la Ley 26.060 que crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera.

En ella se contempla, por un lado, la contratación de seguros agrícolas algodonereros: “Artículo 3º-. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional y a las provincias que adhieran a la presente ley a contratar seguros y servicios conexos, y/o asistir financieramente al productor en la contratación de los mismos, contra las caídas extraordinarias de la producción debido a las adversidades climáticas, físicas, telúricas y biológicas que afecten un área geográfica algodонера identificada como tal por la Autoridad de Aplicación, dejando asentado que dicha cobertura se hará extensiva a los productores mediante la cesión de los derechos a indemnización contemplado en las pólizas contratadas por el Estado Nacional y/o provincial”.

Y, por otro lado, el artículo 7º crea el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA) “con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero”.

Dicho Fondo tendrá una duración de 10 años a partir de su aplicación y resultarán beneficiarios los productores que, primeramente, se inscriban voluntariamente y en forma anticipada a la siembra de cada año calendario (entre julio y agosto). Sus tierras deben estar dentro del área de aplicación y los beneficios deberán solicitarse entre los meses de febrero y agosto de cada año, es decir, en los momentos de operaciones de venta de algodón en bruto y/o fibra o semilla “efectivamente realizadas y verificadas”.

La constitución inicial del Fondo, sobre la base de cincuenta millones de pesos (\$ 50.000.000), se efectivizará mediante un subsidio proveniente del Tesoro Nacional y se deja establecido que el mismo puede crecer en forma programada en función de las hectáreas sembradas a futuro.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de la Nación será su autoridad de aplicación, pero, desde la creación de la Ley hasta la actualidad, no se ha llegado a acuerdos para su reglamentación. Por ende, al no poder instrumentarse, no se aplica. Resulta llamativo que, a pesar de las grandes dificultades que presenta la economía algodонера, aún no se haya avanzado al respecto. Con el solo marco regulatorio, sin los mecanismos de aplicación y administración, las intenciones quedan frenadas y las necesidades de los productores permanecen sin respuestas.

Las cifras del INDEC sobre los porcentajes de pobreza e indigencia indican que durante los primeros meses del año 2006 más de la mitad de la población de la Provincia del Chaco era pobre y que en Resistencia existía un 30,5% de indigentes (INDEC, 2006).

Los trabajadores ya no viven en los lugares de explotación agrícola, sino que residen en la periferia con una situación económica de mera subsistencia.

El largo proceso de desarticulación de los pequeños productores agrícolas que conformaban la estructura productiva del algodón se fue profundizando, en parte, coexistiendo con la entrega de Planes Jefes de Hogar. El abandono de sus fincas, luego concentradas en manos de los grandes productores tecnificados, representó un punto de inflexión sin retorno a las previas formas de inserción económica.

A comienzos del año 2006, los Planes Jefes de Hogar alcanzaban a 103.000 beneficiarios. Si se tiene en cuenta que, en promedio y por el tipo de estructura familiar rural, hay cinco integrantes por familia, podríamos decir que más de 500.000 de los 900.000 habitantes chaqueños viven –parcial o exclusivamente– de estos subsidios. Su alcance, entonces, es más que significativo. En el Gran Resistencia, la mayoría de la población beneficiaria complementa sus ingresos con changas, cartoneo o mendigando. Aquellos que permanecen en la periferia rural y siguen produciendo algodón –en forma marginal– lo hacen porque son asistidos con programas del Ministerio de la Producción del Chaco o de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, que los provee de semillas y gasoil. La calidad de lo cosechado no es óptima y la producción –cuando no se pierde por la sequía– se vende a los intermediarios más próximos (bolicheros o acopiadores privados) a un precio menor a los precios promedio de mercado. Estas razones hacen que el Programa Manos a la Obra o el Programa Social Agropecuario –tomados como modelos de una nueva política pública para el sector– busquen la asociación de los minifundistas para que puedan vender su producción a cooperativas (apoyadas financieramente, a su vez, por el Ministerio de la Producción de la provincia para que tengan la capacidad de pagar un precio sostén preestablecido), mejorando de este modo sus ingresos anuales. Sin embargo, esta mejoría de ingresos es sólo es parcial porque no pueden realizar la cosecha manual para otros productores debido, precisamente, al hecho de ser beneficiarios de un Plan Jefes de Hogar.

Ante esas dificultades, el Programa Jefes de Hogar destinado a las actividades productivas rurales elaboró un circuito operativo muy singular para su implementación: “En cuanto a esta contraprestación, la novedad que implementa el programa es la creación del Registro de Empleadores que están interesados en incorporar beneficiarios a los recursos humanos de sus empresas. El mismo está a cargo de la Secretaría de Trabajo del MTEYSS. La principal ventaja para los empleadores reside en lograr disminuir sus costos en personal. Para ser incorporados en dicho registro los empleadores deben presentar a través de un Convenio de Adhesión: la cantidad de beneficiarios a incorporar, los puestos a cubrir, las tareas a realizar, la jornada de trabajo (que no puede ser a tiempo parcial), el expreso compromiso de pago a los beneficiarios del suplemento en dinero según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad o empresa, y, por último, el pago de las correspondientes contribuciones patronales, cargas familiares y aseguradoras de riesgos en el trabajo” (MTEYSS, 2006).

Como puede apreciarse, es casi imposible asimilar estos mecanismos a los requerimientos de una producción agrícola y mucho menos a los propios del ciclo productivo de cultivo del algodón: es un ciclo anual que requiere –en forma intensiva pero acotada a pocos meses– mano de obra en parte para la siembra y, más fuertemente, durante la cosecha, lo que impide que se puedan mantener horarios y sueldos constantes a lo largo de todo el año.

¿Cuántos medianos productores, que aún podrían requerir de los servicios de los cosecheros, pueden inscribirse en un Registro de Empleadores? En primer lugar, sus deudas con la AFIP y con el Banco Nación, en muchos casos, los han llevado a figurar en el banco de datos de deudores incobrables (Veraz). Por otro lado, el hecho de que los trabajadores deban encontrarse bajo el régimen de la seguridad social y de tener que cubrir los beneficios que requiere el Sindicato del Trabajador Rural no sólo induce a que los empleadores tergiversen en sus registros las cantidades de trabajadores requeridos y los montos abonados por jornal, sino que lleva a que los mismos beneficiarios de los Planes Jefes de hogar soliciten su exclusión de esos registros: además del temor a perder los 150 pesos mensuales del plan, está el fantasma de ver reducidos sus salarios con los descuentos para previsión y seguridad social y para los aportes sindicales.

Uno de los representantes gremiales del Sindicato de los Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a quien entrevistamos estimaba que en 1995 había en el Chaco unos 100.000 trabajadores rurales, de los cuales sólo 30.000 estaban blanqueados por sus empleadores. De este total, el 80% estaba abocado a la siembra y a la cosecha de algodón. En la actualidad, nos señalaba, el total de trabajadores se ha reducido a una quinta parte –aproximadamente, unos 20.000, incluyendo a trabajadores ganaderos, hortícolas y algodoneros– de los cuales sólo unos 7.000 están registrados.

Con la mecanización de la siembra y de la cosecha se han perdido innumerables puestos de trabajo: actualmente una cosechadora de 3 surcos realiza en un día el equivalente al trabajo de 400 cosecheros manuales durante una jornada.

Las contrataciones de mano de obra que tuvieron lugar luego de la crisis del 2001, en sustitución del uso ya instalado de la cosechadora mecánica, se concentraron en aquellas fincas donde lo reducido de la superficie sembrada posibilitaba el reingreso del bracero o donde se concertaron acciones destinadas a restituir la cosecha manual respondiendo a la necesidad de otorgar empleo a parte del amplio número de trabajadores desocupados.

“La recuperación global de la economía del país no tuvo el mismo efecto en las economías regionales. El Chaco no pudo zafar de los peores índices de pobreza e indigencia, mejorando la ocupación sólo por los efectos de la obra pública, con un fuerte plan de viviendas” (Entrevista a Derewicki, 2006).

La información periodística evidencia que los cientos de cosecheros manuales que, con anterioridad a ser contratados por los meses que dura la re-

colección, solicitaban a los municipios subsidios para sobrevivir, tuvieron, en la campaña 2001-2002, una tarea productiva con ingresos mayores que los escasos subsidios; pero, simultáneamente, se multiplicaron los pedidos de recomposición de los salarios recibidos, ante el fuerte incremento de los precios de los artículos de primera necesidad luego de la devaluación. El proceso devaluatorio fue responsable de los reclamos que se sucedieron durante los dos primeros años en que se dispararon los precios de los consumos básicos; pero, a la vez, congelados los salarios, tornó nuevamente atractivo para algunos productores recontratar recolectores manuales antes que invertir en combustible y demás costos de mantenimientos de las máquinas cosechadoras.

Como señalamos antes, los medianos productores que aún requieren de cosechadores manuales no declaran a sus empleados porque su situación de endeudamiento les impide afrontar los gastos que ello requiere; pero, muchas veces, no blanquean esa situación a pedido de los propios trabajadores porque la mayoría son beneficiarios del Plan Jefes de Hogar y temen que el cruce de datos en la AFIP lleve a que les quiten el subsidio; y no hay que olvidar que se trata de trabajos temporarios que sólo los aleja de la categoría de desocupados por escaso tiempo.

Tales circunstancias hacen que el reclamo principal del gremio UATRE sea el blanqueo de los trabajadores rurales. En el momento en que escribimos este artículo, el gremio está apoyando el proyecto de ley "Régimen de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social en el Ámbito Rural", ingresado el 22 de julio de 2004 en el Senado de la Nación, impulsado por el Senador Jorge M. Capitanich (Sec. S. N° 2179/04). El mismo propone la reforma a la Ley 23.107 actualmente en vigencia impulsando la declaración, por parte de los productores, de los trabajadores que contratan pero sin obligarlos a identificarlos con nombre y apellido. El proyecto de Ley propicia restablecer el Sistema de Convenios de Corresponsabilidad Gremial para la recaudación de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social dentro del ámbito rural.

Hasta el momento, tanto ciertos temores como factores de interés en cuanto a la contratación de mano de obra empleada en las cosechas han generado la terciarización del servicios. Un agente convoca a una cuadrilla de peones, los carga en su camión y acuerda con el productor un precio según la extensión a cosechar y la premura de las tareas. El productor paga por dicho servicio y, si se requiere constancia legal, la misma se reduce a la mínima expresión. Luego, el intermediario toma su comisión y reparte el resto de la paga entre la totalidad de sus "peones". Quienes tienen el Plan nunca figuran y pueden mejorar por unos meses sus ingresos, pero la existencia del intermediario también juega en detrimento de sus propios intereses ya que, por el mismo trabajo, cobrarán menos.

Los intermediarios cobran, en promedio, entre 350 y 450 pesos la tonelada cosechada, dependiendo de la urgencia que tenga el productor o de la demanda registrada.

Asimismo, el costo de la intermediación representa entre el 25 y el 30% del precio total pagado por el servicio, y quien intermedia no tiene otro gasto más que el del traslado de los jornaleros. Los recolectores trabajan en condiciones de precariedad absoluta: no reciben ningún tratamiento en caso de accidentes o de malestares propios de un trabajo a destajo, no tienen ningún tipo de seguro y trabajan en horarios extensos, lo que se llama jornadas de sol a sol.

Existe también el empleo de mano de obra infantil, aunque se trata de ocultar de múltiples maneras. Es cada vez mayor la necesidad de las familias de acudir al trabajo de sus hijos pequeños para obtener ingresos adicionales o complementarios. Los niños quedan expuestos a grados de alta vulnerabilidad social, educativa y sanitaria.

“Me daban mucha lástima mis hijos, pero no teníamos ni para comprar calzado o abrigo, ellos se pasaban la ropa de uno a otro y con tanto uso, se arruinaba mucho. Los chicos empezaban la escuela cuando la época de cosecha terminaba a mitad de abril, porque tenían que ayudar a cosechar el algodón. A los más chiquitos los dejaba a la cabecera del campo solitos y al bebé dentro de un fuentón vacío, de esos altos, de chapa, como si fuera un corralito. Los que eran muy chicos para cosechar quedaban en la casa cuidándose unos a otros a la deriva de Dios. No podían faltar porque si lo hacían los echaban y cuanto más cosechaban, mejor les pagaban [...] A veces cosechaba llorando, porque sentía llorar a mi hijo que había dejado en el fuentón y no lo podía atender... pero al ir alejándome, no lo escuchaba más.”²

Las expresiones de quienes todavía prestan la tarea de recolector manual muestran los niveles de explotación a los que aún están sometidos: trabajo informal, sin vinculación alguna con los sistemas de seguridad social estatales o sindicales, omisión de descansos, condiciones laborales precarias sin previsión ante accidentes y/o incapacidades, salarios reducidos.

Según comentaba, en plena campaña 2002-2003, Mario Verón, un vocero del grupo de trabajadores rurales que recogían algodón en la zona de Pte. Sáenz Peña, la paga por la cosecha manual “...es irrisoria ... la mayoría de los braceros estamos en negro ... y lo menos que pedimos es que nos paguen 200 pesos por tonelada ... a ellos [los patrones] les pagan 1.200 pesos la tonelada” (*Diario Norte*, 18-02-2003, p. 33).

De acuerdo con el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 22.248), para el personal en explotaciones agrarias que se desempeña en tareas de maneja continua o transitoria en el ámbito de todo el país se estipulan las siguientes remuneraciones (al 1º de mayo de 2006 –sin comida y sin SAC–):

Peones generales: Sueldo \$ 749,70, Jornal \$ 32,98.

2 Grabación del reportaje a Doña Ángela, oriunda de Quitilipi, realizado por Viviana Pérez en la Radio 2 de Rosario, Santa Fe, en agosto de 2006.

Ayudantes especializados: Sueldo \$ 769,64, Jornal \$ 33,85.

Conductores de tractores y/o cosechadoras: Sueldo \$ 835,16, Jornal \$ 36,80.

Puestero: Sueldo \$ 826,62.

Capataz: Sueldo \$ 911,85.

Sin embargo, a la mayoría de los trabajadores que son blanqueados se los declara con un ingreso igual o apenas superior a los \$240 ya que es lo mínimo requerido para acceder a los servicios de la obra social del sector; el resto de la paga la reciben en negro.

La concepción de que los recursos del Estado deben acompañar una estrategia de defensa del precio de la materia prima y del salario de los trabajadores vinculados fue ganando adhesiones en todos los sectores relacionados con la cadena agroindustrial del algodón.

La Provincia del Chaco actualmente desarrolla el Programa Algodón 2004-2007 cuyos objetivos principales, entre otros, son: estabilizar la producción algodonera, con plena ocupación de la inversión instalada y de la mano de obra disponible; recuperar y consolidar la trama socio productiva PYME rural, reconvirtiendo en el mediano plazo a los pequeños productores; desarrollar la producción algodonera en calidad mediante la incorporación de tecnología y capacitación; generar el agregado de valor al producto; y restablecer en el territorio provincial la industria textil complementaria que lo permita. Esto implica reconocer que el algodón es un cultivo social cuya producción no puede entenderse sin una diversidad de actores vinculados tradicionalmente a su desarrollo.

Se reconoce, a su vez, la necesidad de incrementar las hectáreas de cultivo del algodón –mejorando sus rendimientos a fin de adecuarlos a la calidad de la fibra requerida– para abastecer al mercado interno y generar excedentes exportables.

En la búsqueda de estos propósitos, durante todo el año 2006 se ha experimentado la tecnología de la siembra en surco estrecho. En lugar de cultivar en surcos separados por unos 90 cm entre sí, se lo ha hecho cada 50 cm; y a futuro se proyecta sembrar en surcos separados por 25 cm. El programa experimental no sólo es implementado por el Ministerio de la Producción del Chaco, sino que cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional del Nordeste (Facultad de Agronomía) y del INTA. Los resultados, aún prematuros, son muy positivos. En una campaña afectada por una prolongada sequía, como ha sido la 2005/2006, quienes han trabajado con el sistema tradicional obtuvieron rindes que promedian los 500 kg por ha, en tanto que con surco estrecho se han alcanzado los 1.200 a 1.300 kg por ha. Esto llevaría a suponer que en años normales, donde los rindes alcanzan los 1.600 a 1.700 kg por ha, mediante la técnica de surco estrecho estos oscilarían en los 3.200 kg. por ha, como ha sucedido en áreas experimentales de siembra no afectadas por la sequía ni la plaga del picudo.

Para la implementación de dicha técnica, en Las Breñas,³ bajo la dirección del INTA se desarrolló una adaptación de máquina cosechadora con rastrillos ajustados a las nuevas distancias y contemplando también que las plantas son más pequeñas en altura –de los 1,10 cm tradicionales se reducen a 0,70 cm– debido a que las semillas utilizadas reciben un tratamiento especial: se las fortalece para que no necesiten de agroquímicos posteriores a su siembra y desarrollen capullos en menor tiempo que el habitual.

Esta experiencia, además, reduce los costos de cosecha: si se considera que la cosecha manual puede rondar los \$350 –o más– por tonelada y que en períodos de rindes normales estaría constando unos \$500 a \$650 los 1.600 kg por ha, con la cosechadora mecánica el costo se reduce a escasos \$70 por cada 3.200 kg por ha, de acuerdo con las primeras consideraciones efectuadas por el Ministerio: “... si Ud. tiene 3.200kg de algodón en bruto –al 30% o al 33% de rinde– son 1.000 kg de fibra por ha. Eso significa que 1.000 kg de fibra por hectárea a la cotización de hoy de mercado son \$3.500 que cultivo a un costo \$1.000 y que deja una ganancia de \$2.500 por ha. Esto no hay cómo superarlo. Por eso el algodón va a seguir –todavía no, porque estamos teniendo algunos problemas–, pero va a seguir ... tiene una perspectiva de crecimiento” (Entrevista a Ing. Agr. Livio, 2006).

Los problemas a los que alude el Ing. Agr. Livio responden a la necesidad de masificar la práctica una vez finalizado su período de prueba, capacitando a los productores en las nuevas técnicas de producción y, especialmente, logrando la erradicación del picudo que lamentablemente avanza hacia las zonas más productivas del Chaco. Sin embargo, otra de las conclusiones a las que se está llegando con la técnica de surco estrecho es que esta reduce el tiempo de desarrollo en algunas variedades de algodón pasando de los 150 días promedio a los 125/130; de ser así, el crecimiento se produciría en un tiempo menor al necesario para la reproducción del picudo,⁴ de tal modo que se lo puede controlar antes de que dañe al capullo del algodón. Es decir, al acortar el tiempo de cultivo es más difícil que el picudo entre y lo afecte directamente. La rápida quema de los rastrojos complementaría esta estrategia de combate.

“Pregunta: ¿Y qué pasa con los pequeños productores que no tendrán acceso a las cosechadoras? Respuesta: Ellos pueden hacer surco estrecho con

4 Plaga que se alimenta de los capullos cerrados de algodón. El insecto se aloja en los capullos dañándolos a tal punto que, una vez crecida, la planta no rinde fruto. La gravedad de su efecto puede medirse por el impacto económico, fundamentalmente por la desactivación de miles de pequeños emprendimientos regionales que sirven de impulso a una cadena de valor de la agroindustria textil y de indumentaria que emplea a medio millón de personas en nuestro país.

3 La Nueva Metalúrgica, de Gerardo Wouchuk, es la empresa breñense que desarrolla y construye los equipos cosechadores de algodón para surco estrecho sistema stripper tipo fingers, absolutamente diseñado y fabricado en sus talleres.

cosecha manual. No sé si de ultraestrecho, porque al ser espacios muy chicos no hay posibilidad de ingresar entre ellos; pero de 50 cm no hay ningún problema porque han podido entrar y cosechar” (Ídem).

Si duda que esta innovación permitiría obtener más producción reduciendo los costos y la cantidad de tierra necesaria, puesto que es mayor el rinde por hectárea dado el aprovechamiento del espaciado entre surcos. Si bien el pequeño productor podría aspirar a una siembra y cultivo manual, lo cierto es que, por más que reciba los insumos en forma gratuita, requeriría una cantidad proporcionalmente mayor de trabajo para alcanzar los rindes estimados: realizar más surcos, agacharse aún más para la cosecha, mayor cantidad de horas de trabajo o empleo del trabajo familiar en forma intensiva. Por lo tanto, según nuestras conclusiones, el nuevo modelo de producción de algodón está pensado para los medianos y grandes productores. De manera que, a menos que se privilegie el trabajo por sobre la rentabilidad –es decir, que se frene la maquinización y que se retrotraiga la producción al sistema tradicional–, no será posible ocupar al número de trabajadores que se requería en la producción del algodón hace décadas.

La crisis social descripta empujó a algunas autoridades municipales, entidades cooperativas o grupos de productores a permitir el reemplazo de la cosecha mecánica por la manual como un procedimiento destinado a paliar la emergencia social. De cualquier modo, dada la singular disminución de las superficies de algodón a cosechar, las contrataciones de fuerza de trabajo fueron de bajo impacto y solamente adquirieron cierta importancia en zonas puntuales, como es el caso del Departamento Maipú, en torno a Tres Isletas.

Podríamos asegurar, entonces que, si, por un lado, las políticas públicas aplicadas desde los 70, en el caso de la producción de algodón, fueron abiertamente responsables de las consecuencias que se observan en la actualidad, por otro lado, las políticas públicas diseñadas luego de la crisis del modelo con la intención de insertar a los excluidos y de reconstruir lazos solidarios entre los diferentes actores sociales aún se hallan lejos de alcanzar sus objetivos.

El Ministerio de la Producción del Chaco ha creado la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario para dar contención a los productores que no superan las 10 ha para el cultivo de algodón. Actualmente posee un registro de cada uno de los beneficiarios y les entrega las semillas que se producen en el Semillero Provincial. Tanto estas semillas como el gasoil necesario para la siembra les son entregadas a los productores a través de cooperativas representativas de cada zona de cultivo. Si bien durante los primeros años esta política no se implementó en tiempo y forma como para coincidir con el mejor momento para la siembra, muchos coinciden en que actualmente se ha mejorado y que se ha logrado que la entrega de los elementos esté dispuesta cada año hacia octubre-noviembre. Asimismo, cada municipio pone a disposición tractores que preparan las tierras para la siembra. El pequeño productor debe solicitar turno para recibir el servicio en forma gratuita.

Sin embargo, lo que evidencian los registros de usuarios de estos programas es la poca cantidad de pequeños y medianos productores que actualmente se dedican al cultivo de algodón con apoyo gubernamental: entre ambas categorías el Ministerio registró unos 8.000 productores y señala que, en mucho de los casos, se contabilizan en forma separada al jefe de familia y a cada uno de los hijos que los auxilian en el mismo predio. A su vez, las autoridades admiten que existen otros 5.000 productores a los que aún no han podido dar alcance.

Además, como se indicó, los cambios ocurridos en la producción del algodón que trajeron aparejados una constante expulsión mano de obra rural no generaron, como contrapartida, nuevos espacios de inserción laboral locales.

La economía chaqueña, basada en los ingresos por coparticipación, no logra revertir el mecanismo de importar de otras provincias más del 80% de lo que se consume internamente. Así, la producción de alimentos primarios y elaborados, de vestimenta y de infinidad de insumos y servicios que permitiría a los chaqueños generar fuentes de trabajo local es reemplazada por lo producido fuera de su geografía.

CONCLUSIONES

Los datos analizados nos permiten comprobar cómo, en forma paulatina y por diferentes factores que se han ido sumando a lo largo de más de tres décadas, se fue desarticulando una de las clásicas economías regionales de nuestro país.

Los cambios facilitaron la expulsión de los sectores más débiles del proceso productivo, la consecuente pérdida de fuentes de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales hasta una precariedad extrema que no se logra revertir hasta el momento.

A nuestro criterio, recomponerse de las consecuencias del modelo económico neoliberal en el sector rural requiere de la construcción consensuada de un Plan Nacional Agropecuario que permita que cada región pueda desarrollar todo su potencial humano y económico, instaurando políticas que faciliten la inclusión de los jóvenes mediante la generación de valor en las aglomeraciones aledañas a la producción de las materias primas, y, fundamentalmente, estableciendo un conjunto de medidas de fomento, financiación y capacitación adecuadas a cada tipo de producción y productor interviniente en los respectivos procesos.

En el caso del algodón, creemos que para lograr una producción sustentable se debería contemplar:

- a) la problemática de la soja como factor de riesgo en suelos productivos;
- b) los efectos sociales del reemplazo de una producción basada en mano de obra intensiva por una que requiere escasa mano de obra;

- c) cerrar un debate basado en el eje “tecnología *versus* trabajo manual” buscando el equilibrio entre la productividad y el desarrollo local;
- d) una discusión a cerca de la tenencia de la tierra para evitar la concentración y favorecer una distribución más equitativa;
- e) contemplar las situaciones de endeudamiento de los diferentes actores productivos;
- f) articular los diferentes intereses y necesidades de las provincias productoras de algodón y los intereses nacionales a los fines de conectar las diversas economías regionales y evitar que la alta competitividad de un producto sea destructiva de otros necesarios para una economía nacional integral e independiente.

BIBLIOGRAFÍA

CÁMARA ALGODONERA ARGENTINA, *Revista Anual*, años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

CAPITANICH, Jorge. M. (2004), Proyecto de ley “Régimen de corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social en el Ámbito Rural”, ingresado el 22 de julio del año 2004 en el Senado de la Nación (Sec . S. N° 2179/04).

DELSIN, Eduardo A. (2005), *Algodón: consideraciones sobre la oferta en la Argentina*, Publicación Técnica N° 25, Reconquista, INTA-EEA-Reconquista, octubre.

DIARIO NORTE, Resistencia, selección de artículos entre años 2001 y 2006.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (2006), *Estadísticas Algodoneras*.

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA, *Ley Nacional de Trabajo Agrario (22.248)*, texto disponible en la web del Congreso de la Nación.

INDEC (1998), *Censo Nacional Agropecuario 1988*. Cifras definitivas publicadas en 1990.

----- (2003), *Censo Nacional Agropecuario 2002*. Cifras definitivas.

----- (2006), *Encuesta Permanente de Hogares*. Informes de prensa, primer semestre.

LARRAMENDY, Juan C. y Luis A. PELLEGRINO (2005), *El algodón, ¿una oportunidad perdida?*, La Plata, Al Margen Ediciones.

Ley Nacional de Trabajo Agrario (22.248), texto Consultado en la Web en el sitio del Honorable Congreso de la Nación Argentina.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN *Programa Nacional Plan Jefes y Jefas de Hogar*, Portal Internet consultado en 2006.

PAYTAS, Marcelo (2005), *Algodón en surcos estrechos y con alta densidad*, Reconquista, INTA-Reconquista, diciembre.

ROFMAN, Alejandro (1980), *Monetarismo y crisis en el Nordeste*, Buenos Aires, Ediciones CEUR.

----- (1999), *Las economías regionales a fines del siglo XX*, Buenos Aires, Ariel Editores.

----- (2000), *Desarrollo regional y exclusión social*, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

ROFMAN, Alejandro, María del Pilar FOTI e Inés GARCÍA (2005), *Acceso de los pequeños productores al crédito formal e informal: diagnóstico y propuestas*, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN, *Boletines quincenales sobre Algodón*, serie 2002-2006.

VALENZUELA, Cristina O. (2006), *Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el nordeste argentino*, Buenos Aires, Ed. La Colmena.

Entrevistas realizadas en julio de 2006

- CPN- Juan M. Kisiel., Pte. de Cooperativa Agropecuaria Pte. Roque Sáenz Peña Ltda.
- CPN- Alfredo Zárate, Representante del Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL).
- Dr. Juan Carlos Larramendy.
- Dra. Cristina Valenzuela, Instituto de Investigaciones Neohistóricas, UNNE-CONICET.
- Ing. Agr. Alberto E. Bianconi, INTA, Director Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña.
- Ing. Agr. Graciela Elena, INTA, Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña.
- Ing. Agr. Luis A. Livio, Director de Algodón, Ministerio de la Producción del Chaco.
- Ing. Agr. Diana R. Piedra, INTA, Proyecto Nacional Algodón, Centro Regional Chaco-Formosa.
- Lic. Marcelo Sánchez Castelán, Subsecretario de las Pequeñas y Medianas Empresas, Industria y Comercio, Ministerio de la Producción del Chaco.
- Prof. Enrique Bruniard, UNNE-Resistencia.
- Prof. Raúl Silvero, UNNE-Resistencia.
- Sr. José V. Derewicki, Subdirector del *Diario Norte*, 28 de mayo, Columna de Opinión "Siete días en el Chaco", Editorial Chaco S.A.
- Sr. Miguel A. Fernández, Director *Diario Norte*, Editorial Chaco S.A.
- Sr. Lucas López, UATRE-Resistencia.
- Sr. Ángel Machuca, Pte. Unión de Pequeños Productores Chaqueños.
- Sr. Carlos A. Matujasevich, Pte. de la Cooperativa Agropecuaria La Unión Ltda.
- Sra. Norma Pimienta, CEDEI, Provincia del Chaco.
- Sra. Juana Vukich, Pte. Organización Mujeres de la Producción.

RESUMEN

En el artículo nos planteamos los cambios que desde los años 1990 ha sufrido la producción de algodón en la Provincia del Chaco –principal referente nacional del cultivo– y cómo estos fueron modificando la estructura de vida de los agentes históricamente vinculados, en especial, los trabajadores y los minifundistas hoy prácticamente excluidos de dicho proceso. Entre los numerosos cambios, los más relevantes son los vinculados al proceso de tecnificación, a la desarticulación en el territorio de cadenas de valor agregado y a la diversificación hacia otros cultivos como las oleaginosas y, notoriamente, al avance del cultivo de soja sobre hectáreas antes destinadas al algodón. Como consecuencia de dichos procesos de cambio, se evidencia la imposibilidad –por parte de los minifundistas– de sostener una producción rentable, la pérdida de numerosas fuentes de trabajo directas e indirectas, el aumento de la pobreza, la emigración hacia los cordones periféricos urbanos (Gran Resistencia, Gran Rosario) y el deterioro de las condiciones laborales de quienes aún permanecen dentro del sistema productivo algodónero. Las políticas públicas, tanto locales como nacionales, también son un punto de interés en el análisis puesto que tienen gran repercusión en el actual estado de la situación.

ABSTRACT

In the article we considered the changes that since the '90s has suffered cotton production in the Province of Chaco and how they were changing the quality of life of the workers and smallholders today virtually excluded from this process.

Among the many changes the most relevant were the process of technical modernization, the disarticulation in the territory of value-added chains and the advance of soybean cultivation substituting the areas before devoted to cotton.

As a result of these processes, the weakest agents of the province were damaged in their social profile. Unemployment, increasing poverty, migration to the urban peripheral rings (Greater Resistencia Area and Greater Rosario Region) and deteriorating working conditions of those who remain within the cotton productive system were the worst social impacts. Public policies, both local and national, will also be included in the analysis as they are unable to cope with these problems

PALABRAS CLAVE

PRODUCCIÓN ALGODÓN
 CHACO
 CAMBIOS TECNOLÓGICOS
 DESARTICULACIÓN CADENA DE VALOR
 DIVERSIFICACIÓN
 DETERIORO DE CONDICIONES
 LABORALES Y DE VIDA
 POLÍTICAS PÚBLICAS

KEY WORDS

COTTON PRODUCTION
 CHACO
 TECHNOLOGICAL CHANGES
 DISMANTLING VALUE CHAIN
 DIVERSIFICATION
 DETERIORATING WORKING AND LIVING
 CONDITIONS
 PUBLIC POLICY

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN LA REGIÓN NEA EN EL PERÍODO 2003-2006

Blanca Sobol

INTRODUCCIÓN

La recuperación de la economía argentina en estos últimos tiempos ha repercutido en forma notable en el mejoramiento de los indicadores laborales, principalmente de aquellos que se refieren a la disminución de la desocupación. En gran medida, esta situación se debió a la introducción, luego de la crisis de 2001-2002, de herramientas macroeconómicas, tales como un tipo de cambio alto y el sostenimiento del superávit fiscal, que permitieron una expansión sostenida de la economía con repercusiones positivas sobre la ocupación debidas al incremento de la demanda laboral (Fraguglia y Metlika, 2006). Sin embargo, no se han logrado revertir los procesos de segmentación y fragmentación del mercado de trabajo: todavía existe en dicho mercado un espacio significativo caracterizado por generar puestos precarios e inestables. No obstante, como explica Salvia (2005), estas características se presentan de forma heterogénea: varían según la región de acuerdo con sus capacidades productivas y con su desarrollo político e institucional. Estas diferencias se agravan por la depresión de algunas economías regionales y por la falta de iniciativas de desarrollo local.

En este contexto, se ubica la Región Nordeste (NEA), la que, si bien ha mostrado los signos de la recuperación aludida –como la disminución del desempleo–, ha mantenido valores altos en lo que refiere a informalidad, pobreza e indigencia. Precisamente, el presente trabajo se propone analizar el comportamiento del mercado laboral de la Región NEA durante los últimos cuatro años, con el objeto de mostrar las tendencias que presenta, tanto en relación con las características de la estructura histórica de este mercado como en comparación con otras regiones del país.

Esta región presenta particularidades sociohistóricas que contribuyen al acrecentamiento de los procesos de vulnerabilidad del mercado de trabajo. En este sentido ha sido considerada, históricamente, *periférica* al eje central de producción del país; no obstante, su ubicación espacial la posiciona en el *centro* de los procesos de integración regional producidos en la última década, principalmente, de los vinculados con el comercio intra-MERCOSUR. Sin embargo, estos procesos no han logrado cambiar los patrones de desarrollo de la región.

Para desarrollar la propuesta, se trabajó con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),¹ seleccionado dos mediciones específicas de la misma: el 2º semestre de 2003 –año en que tanto el país como la región se encontraban atravesando aún el período de crisis– y el 2º semestre de 2006 –cuando se comienza a vislumbrar la recuperación de la economía–. Los datos analizados representan información estadística sobre las características sociodemográficas y ocupacionales de los aglomerados urbanos correspondientes a las denominadas *Regiones Estadísticas*² definidas por el INDEC. Para el caso de este estudio, la *Región Estadística NEA* está conformada por los aglomerados urbanos de Gran Resistencia, Corrientes, Posadas y Formosa.

El artículo ha sido organizado del siguiente modo: en primer lugar, se mencionan las principales características económicas, productivas y sociales de la Región NEA; en segundo lugar, se analiza el mercado de trabajo de la misma partiendo de las tendencias más históricas y pasando luego a considerar su comportamiento en el período señalado.

1 Los datos analizados corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares, modalidad *continua*. Esta responde a la nueva metodología implementada en el año 2003, cuya modificación tuvo la finalidad de atender tanto a las actuales características socioeconómicas como a las nuevas modalidades de inserción en el mercado de trabajo y a su dinámica. El relevamiento, a diferencia del anterior que era puntual (mayo y octubre), es *continuo* y tiene distintos dominios de estimación. Según la EPH, se entiende por dominio a cualquier subdivisión de población acerca de la cual se puede dar información numérica de precisión conocida. Por lo tanto, los períodos de estimación son: trimestres, semestres y años. Para cada uno de los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, como es el caso de los que conforman la Región Estadística NEA, las estimaciones son semestrales y anuales (INDEC, 2003a; Marcoleri, 2005).

2 Para la regionalización de los aglomerados urbanos relevados, el INDEC se basa en criterios de contigüidad de áreas geográficas, reconociendo seis regiones: 1) **Región Gran Buenos Aires**: integrada por Ciudad de Buenos Aires y Partidos del CBA; 2) **Región Noroeste (NOA)**: integrada por los aglomerados de Gran Catamarca; Gran Tucumán-Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero-La Banda; 3) **Región Nordeste (NEA)**: integrada por los aglomerados de Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas; 4) **Región Cuyo**: integrada por los aglomerados de Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis-El Chorrillo; 5) **Región Pampeana**: integrada por los aglomerados de Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata-Batán, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay; 6) **Región Patagónica**: integrada por los aglomerados de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande (INDEC, 2006).

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN NEA

La Región Nordeste del país, se destaca, principalmente, por su gran heterogeneidad; sus características productivas, económicas y sociales permiten afirmar que no existe un único NEA histórico, económico o político; tampoco manifiesta tener una cultura común que permita identificar particularidades regionales (Schweitzer, 2004).³

No obstante, desde una perspectiva física, se puede decir que la región geográfica NEA está formada por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones y nace oficialmente, como programa de planificación nacional, en 1966 con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en el que se incluía, también, a los departamentos de 9 Julio, Vera y Obligado de la Provincia de Santa Fe. Esta Región-Plan, explica Schweitzer, no llegó a ser una realidad, principalmente por las políticas de desarrollo regional que la sustentaban. Sin embargo, este agrupamiento, ajustado a los límites de las actuales provincias que la componen, se mantiene hasta el presente, en términos de Región *Estadística o Formal*, dando lugar a la Región NEA.

En términos generales, esta región constituye una zona fundamentalmente rural, con centros urbanizados a la vera de los ríos y cuya población –particularmente en las últimas décadas– ha tenido un fuerte incremento orientado hacia las ciudades capitales de las provincias que la integran (Panaia, 2004).

Panaia y San Martín (2004) señalan que la región se destaca tanto por tener una estructura productiva básicamente primaria, con baja capacidad tecnológica y formas no capitalistas de producción, como por el carácter principalmente minifundista de la tenencia de la tierra. Tradicionalmente, la producción se orientó a los monocultivos de tabaco, yerba mate y té y a la extracción de algodón y frutos tropicales. Dichos autores subrayan también que el sector agroindustrial, de escaso nivel técnico y productivo, se orientó fundamentalmente al mercado interno. En ese sector se destacan: las desmotadoras de algodón, las actividades vinculadas con la industria arrocera, la industria textil, la forestación y los frigoríficos. Pero el comportamiento de la demanda interna en el período de ajuste estructural contribuyó al deterioro de todas estas actividades (Rofman, 1999).

3 El autor explica que no existe un único NEA histórico en términos de los procesos de formación de los territorios de la Nación, ni que respete sus fronteras, internas y externas; tampoco existe una unidad económica regional donde se desarrollen actividades económicas comunes que se complementen y que formen un posible mercado interno regional. Por otro lado, afirma que, en términos políticos –es decir, en cuanto a instituciones, políticas y administración–, no se puede hablar de un NEA integrado ya que las capitales de las cuatro provincias que lo integran son polos de irradiación de políticos de otros estados de una federación. Por último, señala que, si la identidad de una región se define como una construcción de proyectos propios por parte de la sociedad con vistas a integrarse, cooperar y construir agrupamientos más amplios, en el NEA esa identidad está pendiente.

Sin embargo, los cambios producidos en los patrones de la economía en los años noventa, orientados a la exportación, hicieron que los bienes manufacturados o semimanufacturados logran una salida alternativa. Así, por ejemplo, el algodón y el arroz, cuyo principal destino era Brasil, experimentaron incrementos en los montos producidos. No obstante, esto no fue suficiente para dinamizar el empleo en este sector, porque este proceso tuvo un definido perfil concentrador que expulsó a los pequeños productores, imposibilitados de acceder a recursos financieros y organizativos y a la nueva tecnología para ajustarse a las exigencias de toda empresa exportadora (Rofman, 1999).

En cuanto a las inversiones, las más importantes están vinculadas con el complejo celulósico papelerero y con la empresa Yaciretá, ubicada en la provincia de Misiones, donde también se encuentran las Cataratas del Iguazú, constituidas como un gran reactivador económico de la región. Sin embargo, la dinámica de esta zona no alcanzó para contribuir al crecimiento del desarrollo de la región (Panaia, 2004).

Un rasgo importante del perfil de la región es el fomento de una economía subterránea basada en el contrabando, en la usurpación de tierras fiscales y en el comercio de fronteras. A estas características contribuyen principalmente, por un lado, la actividad turística cada vez más desarrollada y, por otro lado, el crecimiento de las ciudades de la triple frontera (Panaia y San Martín, 2004).

Varios de estos aspectos, contribuyen a definir a la región como un *área rezagada* (Rofman, 1999), condición que se agrega a su posición histórica de *periferia* respecto del *centro* del sistema espacial argentino por estar alejada del eje central pampeano de producción. Esta caracterización se basa en la concepción sociohistórica y económica de la conformación de regiones en la Argentina de Romero y Rofman (1973), sustentada teóricamente en el estructuralismo económico y en la Teoría de la dependencia. Desde esta perspectiva, se sostiene que la Región Nordeste del país se constituyó como una región *periférica* en el ordenamiento del sistema espacial argentino.⁴

En la actualidad, aunque se sigue considerando al Nordeste como periférico con respecto al centro del país, la región se ha ubicado en una posición espacial central en los procesos de integración regional consolidados a partir de la década del noventa por su condición de paso obligado del nuevo comercio intra-área del MERCOSUR (Rofman, 1999). Pero, esto no ha logrado cambiar el patrón de desarrollo de esta región.

4 Un período histórico que contribuyó a la consolidación del sistema centro-periferia fue el que va desde 1860 hasta 1930. En esta etapa, la Argentina se integra a esta división internacional especializándose en la agricultura y la ganadería. Aquí es donde un conjunto de factores, como la expansión vigorosa de la producción exportable y su concentración en la zona pampeana, la política de librecambio de las autoridades nacionales, el desarrollo de los ferrocarriles y la formación del mercado nacional, fueron derribando las barreras que defendían las posiciones relativas de las zonas del interior. Así es como se fue marcando definitivamente la conversión del interior del país en zona periférica y dependiente del centro (Rofman y Romero, 1973; Ferré, 2004).

En efecto, Panaia y San Martín (2004) destacan que la fragmentación productiva de la zona, donde contrastan grandes industrias con zonas de fuerte atraso, el mantenimiento del monocultivo, el débil crecimiento de la infraestructura, así como el fracaso de la construcción de los ejes viales y fluviales que debían asegurar la integración de la región, han operado como los principales obstáculos para el aprovechamiento de los beneficios producidos por el comercio intra-MERCOSUR, acrecentando los procesos de desintegración.

EL MERCADO LABORAL DEL NEA

Principales tendencias

Aunque se presentan aquí determinadas tendencias en el mercado laboral en la región, no se pretende establecer ninguna homogeneidad: por el contrario, como ya se señaló, este estudio reconoce la gran diversidad productiva, económica y social del NEA, rasgo crítico, no por la heterogeneidad en sí misma, sino por la ausencia, entre otras cosas, de una complementación de las actividades que permita consolidar un mercado interno regional (Schweitzer, 2004). Esto implica, a su vez, reconocer la actual revisión exhaustiva⁵ de las numerosas perspectivas de los contenidos y formas del concepto de región geográfica que buscan aportar elementos para los análisis regionales, reconociendo la forma en que los factores históricos, económicos, sociales y políticos inciden en las transformaciones regionales.

Por lo tanto, sin desconocer estos aspectos contextuales, se enumeran aquí las principales tendencias del mercado laboral de la *Región Estadística* NEA:

1. Bajas tasas de actividad en relación con los promedios nacionales y/o de otras regiones. Con todo, en los últimos años la región ha presentado una tendencia creciente en esta tasa, lo que puede atribuirse a distintos factores, principalmente a la incorporación al mercado de trabajo de otros miembros de la familia –en particular cónyuges e hijos– a partir de la situación de desempleo del jefe de hogar, así como al aumento de la ocupación femenina.
2. Tasa de desocupación significativamente inferior a las del resto del país: las bajas tasas de actividad, que muestran el reducido número de personas que trabajan o buscan trabajo en la región, tienen un peso significativo en el total de desocupados, que es marcadamente inferior respecto de otras regiones. Asimismo, la existencia de cantidades importantes de beneficiarios de planes

5 En este sentido, una revisión interesante es la realizada por Marta Panaia (2005), quien aporta un abordaje histórico y actual del concepto de “región geográfica”, destacando que el acento puesto, en los últimos tiempos, en la región como espacio de referencia social plantea la necesidad de reelaborar el enfoque regional, considerando las nuevas realidades de las economías regionales, su vinculación con el concepto de territorio y la concepción de espacio en el trabajo.

sociales incide en las cifras de desocupación porque en las mediciones del INDEC se los considera como ocupados.

3. Baja capacidad de absorción de mano de obra por parte del sector formal y privado de la economía regional; y, en contraposición, elevadas tasas de empleo estatal, así como un alto porcentaje de cuentapropistas y trabajadores familiares sin remuneración.

4. Predominio de pautas de comportamiento político patriarcal y clientelar, reflejadas, en gran medida, en la alta tasa de empleo público mencionada. La región se caracteriza por la primacía de vínculos primarios en el funcionamiento del mercado laboral, rasgo que se manifiesta principalmente en las formas de reclutamiento de mano de obra en el sector empresarial: en las estrategias de las empresas para la incorporación de personal se privilegia el acceso por contactos y conocidos y no por procedimientos técnicos específicos.

5. Alta concentración de actividades en el sector de la construcción y de servicio doméstico.

6. Escaso crecimiento de ocupaciones que demanden un alto grado de calificación. Las empresas que emplean universitarios son, fundamentalmente, las del sector servicios y, como gran parte de ellas tienen un bajo grado de desarrollo organizacional, demandan poco personal técnico y profesional. Pero las empresas con un mayor grado de desarrollo y que han instalado sucursales en la región tampoco ofrecen oportunidades para empleos calificados (porque tales puestos se establecen generalmente en las casas centrales ubicadas en otras ciudades –Buenos Aires, Córdoba, Rosario–) (Barbetti, 2002).

El período de recuperación económica 2003-2006: el mercado laboral en el NEA⁶

Hacia el año 2003, la región NEA, al igual que el resto del país, afrontaba la crisis económica, social y política más aguda de todos los tiempos. Los índices de pobreza e indigencia constituían los indicadores más preocupantes y eran los más elevados tanto en relación con el promedio nacional como en comparación con el resto de las regiones: en el NEA el 64,5% de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza y el 33,9% bajo la línea de indigencia, mientras que para el total país estas cifras alcanzaba el 47,8% y el 20,5% respectivamente.

En el año 2006, estos indicadores muestran una tendencia decreciente: las personas bajo la línea de pobreza disminuyen en 2,1% y las personas bajo

6 Como ya se mencionó, el análisis de este período está basado en los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al 2º semestre de 2003 y al 2º semestre de 2006, relevados para cada una de las *Regiones Estadísticas* del país.

la línea de indigencia en 4,6%, aunque los porcentajes seguían siendo los más elevados del país (véase en el Anexo el Cuadro 1)

En cuanto al comportamiento del mercado de trabajo de la región, la tasa de actividad tanto en 2003 (37,6%) como en 2006 (37,9%) es la más baja en comparación con la del total de los aglomerados (45,7%) y en relación con otras regiones del país. Por el contrario, la tasa de empleo, aunque con leves diferencias, muestra un comportamiento diverso: crece en concomitancia con la disminución de la tasa de desocupación. En este punto, cabe recordar que, si bien hacia 2003 los niveles de desocupación en el país eran muy altos (16,7%), la región mostraba la segunda tasa de desocupación más baja (10,6%). Como se señaló antes, esta diferencia se puede atribuir, en gran medida, al alto porcentaje de desocupados con planes sociales existentes en la región⁷ y, fundamentalmente, a las bajas tasas de actividad que presenta el NEA. En 2006 la tasa de desocupación muestra una disminución sustancial: se ubica en el 5,2%, lo que implica una baja del 50% de la población desocupada. Este valor, al igual que lo ocurrido en 2003, sigue posicionando al Nordeste como la segunda región con más baja tasa de desocupación luego de la Región Cuyo (véase en el Anexo el Cuadro 2).

Pero esas otras regiones del país, como la Patagonia o Cuyo, que experimentan también reducidos niveles de desempleo, presentan, en comparación, tasas de actividad notoriamente más altas que las del NEA, e incluso, en el período estudiado, han mostrado un crecimiento –tal es el caso de la Región Patagonia–. Por ello, se considera que la disminución del desempleo en estas zonas responde efectivamente a una mejoría de sus economías,⁸ traducida, a su vez, en los niveles inferiores de pobreza e indigencia con respecto a los del NEA. Por lo demás, las mayores tasas de desocupación se presentan en el Gran Buenos Aires y en la Región Pampeana, lugares en los que la tasa de actividad resulta elevada, marcando una diferencia sustancial con la Región Nordeste en términos de oferta laboral.⁹

Esto es lo que distancia al NEA de estas regiones más desarrolladas: en el Nordeste las bajas tasas de desocupación, más que significar una recuperación de los indicadores laborales, reflejan características estructurales, como lo es el reducido porcentaje de la población que trabaja y que busca trabajo, porcentaje que no ha logrado revertirse y que tiene una alta incidencia en las situaciones de pobreza e indigencia que afecta a un segmento importante de la población en la

7 Al respecto, se recuerda que en sus mediciones el INDEC considera como ocupados a los beneficiarios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar que realizan una contraprestación.

8 La Región Patagónica, frente a los cambios económicos y productivos de los últimos años, ha logrado convertirse en un importante atractivo turístico; también ha resurgido su sector industrial. La Región Cuyo ha podido diversificar ampliamente sus actividades productivas y captar inversiones para todo tipo de proyectos: alimentarios, textiles, metalúrgicos y mineros (*El Economista on line*, 25 de abril de 2005, Buenos Aires).

9 Documento producido por el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER), 18/07/2006, *on line*. Disponible en: <http://www.iader.org.ar>

región. Específicamente, parte de la reducida tasa de desocupación esconde una elevada tasa de inactividad: mucha gente no es desempleada porque directamente no busca empleo.

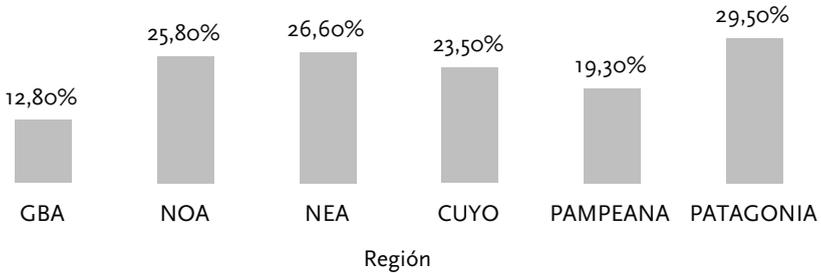
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA REGIÓN

Sectores de actividad. En relación con esta cuestión, la Región Nordeste se caracteriza por el elevado porcentaje de ocupaciones en el Sector Estatal de la economía. En 2003 la ocupación en el mismo alcanzaba el 32% ocupando el segundo lugar luego de la región Patagónica (35,5%), mientras que el Gran Buenos Aires sólo presentaba el 16,2% de ocupados en empleos públicos. Sin embargo, en el período analizado, se verifica un decrecimiento del empleo en este sector tanto en el NEA como en las diferentes regiones, aun cuando la región que nos ocupa continúa ocupando los primeros rangos, como se observa en el Gráfico 1. Dentro de la Región, Formosa configura el aglomerado con mayor número de ocupados en este sector; en segundo lugar se encuentra Corrientes, seguido de Gran Resistencia; Posadas ocupa el último puesto. Durante el período en estudio, no se produjeron variaciones en esta distribución (véase en el Anexo el Cuadro 3).

Si bien, en el conjunto del país, la Región Patagónica y el NEA se destacaron siempre por presentar los mayores índices de empleo en el Sector Estatal, existen algunas particularidades que es posible analizar a la luz de los procesos migratorios internos del país y que contribuyeron al crecimiento de ese sector. La Región Patagonia, explica Rofman (1999), ha sido, históricamente, receptora de población, y durante el período intercensal (1980-1991) se acentuó, por un lado, el caudal poblacional –mayoritariamente proveniente del interior del país– que llegaba a la zona atraído por el sector público demandante de mano de obra para la construcción, y por otro lado, la afluencia de profesionales especializados para encarar programas de crecimientos planificados. Por el contrario, en la Región Nordeste –tradicionalmente expulsora de población orientada hacia los grandes centros urbanos– la conformación de este sector respondió a dos procesos: por un lado, las transformaciones productivas indujeron el desplazamiento de la población rural hacia las áreas urbanas de la región; por el otro, el debilitamiento de la demanda laboral en los grandes centros urbanos del país determinó que las provincias del NEA exhibieran una mayor retención de su población. Frente a esta situación –fundamentalmente en los casos de Formosa, Corrientes y Chaco–, el sector público se convirtió en el principal empleador de esta mano de obra excedente. Misiones constituye la excepción: las importantes inversiones en la industria papelera y en la construcción de Yaciretá incidieron de manera importante en la incorporación a esas actividades de la población activa que en otros tiempos hubiera migrado hacia otros centros urbanos, contribuyendo, al mismo tiempo, a un menor crecimiento del empleo público en esta provincia, tendencia que hasta la actualidad se mantiene.

Un aspecto que se suma a esta diferenciación respecto de la Patagonia es el tipo de estrategia implementada por el poder político en la región NEA que hace que parte de este caudaloso empleo público –provincial y municipal– persiga, también, objetivos “clientelísticos” (Rofman, 1999).

Gráfico 1. Porcentaje de actividad en el Sector Estatal de la Economía según Región Estadística. 2º semestre de 2006



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la EPH, 2º semestre de 2006.

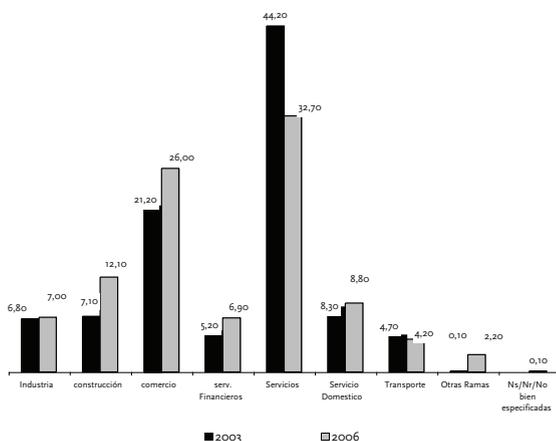
Rama de actividad y tipo de calificación de las ocupaciones. Lo que caracteriza a la región, en particular debido al escaso desarrollo del sector moderno de la economía, es el predominio de los servicios sociales.¹⁰ Sin embargo, la recuperación de los indicadores económicos derivó en una disminución de estas actividades y en un aumento de las pertenecientes al ámbito de la construcción, el comercio y los servicios financieros. De todos modos, estos cambios no alcanzaron para modificar las características estructurales de la región, las cuales se evidencian en los altos valores que presentan las actividades del servicio doméstico y en el crecimiento insuficiente que registró el sector industrial en 2006 (véanse el Cuadro 4 del Anexo y el Gráfico 2).

Con respecto a este último sector, y siguiendo a Rofman (1999), las provincias del NEA configuran un área de escaso desarrollo. Los efectos de la recesión de fines de la década de 1980 y la implementación de la convertibilidad llevaron a una desindustrialización más aguda que la de las regiones más indus-

10 En este rubro las mediciones del INDEC incluyen a la Administración Pública y la Defensa, los Planes de Seguridad Social de afiliación obligatoria, la Enseñanza, los Servicios Sociales y de Salud, Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.

trializadas y si bien, como se mencionó más arriba, el cambio en los patrones de la economía permitió que algunos bienes –como el algodón y el arroz– fueran exportados, esto no alcanzó para dinamizar el empleo en este sector (Rofman, 1999).

Gráfico 2. Ramas de actividad en la Región NEA según períodos: 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006

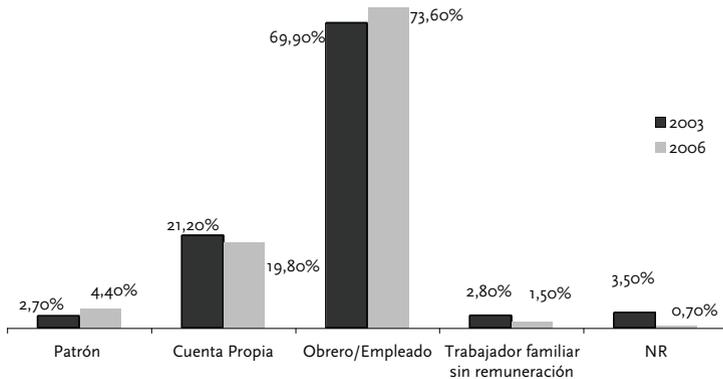


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

En relación con el tipo de calificaciones predominante que requieren las ocupaciones en el NEA, resulta necesario destacar que, a pesar de la disminución registrada en el año 2006, las actividades que demandan trabajadores no calificados siguen representando una proporción elevada (29,2%) (véase en el Anexo el Cuadro 5). Esto se vincula con lo observado en las diferentes categorías ocupacionales, donde se hace visible que los trabajadores con menor educación (primaria incompleta-sin instrucción) incrementaron su participación en actividades informales¹¹ como el cuentapropismo y el trabajo familiar sin remuneración, tareas que, a pesar de haber disminuido, siguen representando un segmento importante del mercado laboral (véase el Gráfico 3). Por el contrario, el aumento del 3,7% en el trabajo asalariado (en relación de dependencia), como así también el de la categoría patrón o empleador, se produjo fundamentalmente entre los trabajadores con mayores niveles educativos (medios y superiores) (véase la Tabla 6 del Anexo).

11 De acuerdo con la definición operacional establecida por la OIT, el sector informal es aquel constituido por personas que responden a las siguientes categorías ocupacionales: el trabajo familiar no remunerado, el trabajo por cuenta propia (excepto técnicos y profesionales), los asalariados y patrones de empresas de hasta cinco empleados y el trabajo doméstico (Souza y Tokman, 1995, citado por Busso, 2006, p. 139).

Gráfico 3. Categoría ocupacional en la Región NEA según períodos: 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Al respecto, se observa que otras características sociodemográficas, como la edad, el sexo y los aglomerados, intervienen diferenciando el acceso a una u otra de estas categorías (véanse en el Anexo los Cuadros 8, 9 y 10). En primer lugar, en el caso de los asalariados, vemos que, si bien son las mujeres las que mayoritariamente se encuentran en esta categoría, se aprecia que el crecimiento más importante se dio en el grupo de hombres. Dentro de la Región, Formosa constituye el aglomerado con mayor número de asalariados pero, al igual que Posadas, estas son localidades donde la categoría se desarrolló en menor proporción en comparación con Corrientes (5,3%) y Resistencia (4,6%), donde se observa un incremento más importante. Y al considerar las edades, vemos el predominio de jóvenes en este tipo de actividades. Con respecto a quiénes son los cuentapropias, resulta necesario señalar que, si bien se manifestaba como una actividad predominante en los hombres, la comparación entre ambos períodos muestra un decrecimiento en este grupo y un correlativo aumento entre las mujeres. Ciertamente, es el grupo de personas de mayor edad quienes realizan estas actividades. Al analizar el interior de la región, se revela que el aglomerado de Corrientes es el que muestra el más alto porcentaje de cuentapropistas, a diferencia de lo que ocurría en el año 2003 en el que el aglomerado de Resistencia resultaba ser la ciudad con mayor número de trabajadores en esta categoría. En el grupo de trabajadores familiares predominan las mujeres y los jóvenes entre 14 y 24 años, y se dan en mayor proporción en el aglomerado de Corrientes.

Por último, en el período 2006 se aprecia un incremento en las situaciones de trabajo no registrado: el porcentaje de trabajadores que no recibe ningún tipo de comprobante por su trabajo pasa del 31,5% en el 2º semestre de

2003 al 35,5% en el 2º semestre de 2006 (véase el Cuadro 7 del Anexo).¹² Esta situación de alta vulnerabilidad afecta principalmente a los jóvenes –entre 14 y 24 años– y a los trabajadores con menor calificación –nivel educativo primario incompleto o sin instrucción–. Dentro de la Región, Posadas, con el 39,4%, resulta el aglomerado con mayor porcentaje de trabajadores no registrados: le sigue Corrientes, con el 39%; en tercer lugar se encuentra el Gran Resistencia (34,9%) y en el último Formosa con el 29,3 por ciento.

Panaia (2004) explica que en estos valores tienen gran incidencia el sector de la construcción, el aumento de los trabajadores autónomos y el desarrollo de actividades temporales como el turismo, la cosecha y el contrabando en la zona de frontera que activa fuertemente la economía subterránea. Fundamentalmente, el tipo de actividad turística y el hecho de ser zona de frontera es lo que hace que el NEA tenga propensión natural a favorecer las actividades en “negro”.¹³

CONCLUSIONES

Al inicio de este trabajo, señalamos que la recuperación de la economía nacional repercutió favorablemente en algunos indicadores del mercado de trabajo, principalmente en los referidos a la desocupación. Al observar lo ocurrido en la Región Nordeste, vimos que aquí también se experimentó, como en el resto del país, una baja en la desocupación. Sin embargo, se aprecia que las tendencias que marcan los rasgos característicos de la región en materia laboral no se han modificado y que esos rasgos continúan ubicando a la misma como un área de escaso desarrollo y con alto grado de informalidad y precariedad en las ocupaciones. A esta afirmación contribuyen las siguientes observaciones:

1. la persistencia de las bajas tasas de actividad en relación con el resto del país y la consecuente tasa de desempleo reducida;
2. la continuidad del alto nivel de empleo en el sector estatal así como también el elevado porcentaje de trabajadores por cuenta propia;
3. el escaso crecimiento de las actividades en el sector industrial y la tendencia creciente de incremento en el trabajo doméstico, tanto como el predominio de ocupaciones de baja calificación;

12 El tipo de comprobante obtenido en el momento de percibir los haberes se torna aquí un indicador del empleo no registrado.

13 La autora hace referencia a que, por ejemplo, la zona turística internacional de las Cataratas del Iguazú, ubicada a sólo 25 km de la Triple Frontera e incluida en el Parque Nacional que comparten Argentina y Brasil, nuclea una intensa actividad turística, importante cantidad de hoteles y equipamiento social. Pero, aunque no tiene las características estacionales de otras regiones, mantiene un nivel de personal declarado muy por debajo de la capacidad instalada.

4. el incremento del trabajo no registrado y la apreciación de que se trata de una problemática que continúa afectando principalmente al grupo de trabajadores jóvenes.

Con todo, es posible advertir algunas diferencias dentro de la Región. En particular, se advierte la recuperación de los indicadores labores en los aglomerados de Posadas y Gran Resistencia. En Corrientes la tendencia es hacia el empeoramiento de la situación laboral. Mientras que el aglomerado de Formosa registra cierta constancia en su comportamiento.

De cualquier modo, los parámetros aquí presentados, contribuyen a ubicar a la Región Nordeste entre aquellas regiones donde las mejoras de índole económica repercutieron de manera más lenta y no fueron suficientes, al menos hasta el momento, para revertir las características más estructurales del mercado laboral. En gran medida, su posición periférica respecto del eje central de producción del país ha incidido en esta falta de modificación de sus condiciones de desarrollo. Al mismo tiempo, la fragmentación productiva, económica, social y política de la Región no le ha permitido su consolidación como unidad regional capaz de beneficiarse de su ubicación central en los procesos de integración del MERCOSUR, que debería posibilitarle una notable mejora en sus indicadores económicos y sociales.

ANEXO

Cuadro 1. Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza e indigencia según Regiones Estadísticas: 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006

Región /aglomerado	2º semestre de 2003		2º semestre de 2006	
	Personas bajo la línea de pobreza	Personas bajo la línea de indigencia	Personas bajo la línea de pobreza	Personas bajo la línea de indigencia
Total Aglomerados	47,8	20,5	26,9	8,7
Gran Buenos Aires	46,2	18,9	25,5	8,0
Cuyo	51,5	19,9	26,3	7,2
Noroeste	60,3	26,2	37,2	12,6
Pampeana	43,3	19,8	22,6	7,8
Patagónica	34,5	14,4	15,9	5,7
Nordeste	64,5	33,9	39,1	15,9
Corrientes	68,7	41,4	46,0	18,1
Formosa	60,4	31,1	43,7	11,5
Posadas	61,2	30,5	48,1	12,6
Gran Resistencia	65,5	31,5	43,6	19,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 2. Principales tasas según Regiones Estadísticas. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006

	Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de desocupación		Tasa de subocupación	
	2ºsem. 2003	2ºsem. 2006	2ºsem. 2003	2ºsem. 2006	2ºsem. 2003	2ºsem. 2006	2ºsem. 2003	2ºsem. 2006
Total de los Aglomerados	45,7	46,2	38,6	41,8	15,4	9,5	16,4	11,0
Gran Buenos Aires	47,9	48,5	39,9	43,4	16,7	10,5	17,6	12,6
Cuyo	43,5	42,9	38,3	41,0	11,8	4,4	15,2	10,5
Noroeste	41,9	42,1	36,0	38,0	14,0	9,5	17,3	10,6
Pampeana	45,1	45,5	38,1	41,3	15,4	9,2	15,4	9,4
Patagónica	41,3	45,7	37,7	42,4	8,6	7,2	5,0	5,3
Nordeste	37,6	37,9	33,6	35,9	10,6	5,2	12,4	9,0
Corrientes	38,1	38,3	32,9	35,8	13,8	6,6	15,1	8,7
Formosa	35,9	35,7	33,7	34,2	6,2	4,3	8,0	5,7
Gran Resistencia	38,9	37,0	34,8	35,2	10,5	5,0	9,9	11,9
Posadas	36,3	40,2	32,6	38,4	10,0	4,5	15,9	8,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 3. Tipo de actividad según Aglomerados. Región NEA. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Tipo de actividad	Aglomerado							
	Posadas		Gran Resistencia		Corrientes		Formosa	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2003
Estatual	28,0	19,8	26,1	24,2	32,8	27,3	45,2	35,2
Privada	68,9	78,1	65,5	71,1	66,9	72,3	54,8	64,8
Otro Tipo	3,1	2,0	8,4	4,7	,3	,3	--	--
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 4. Ramas de actividad según Regiones. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Ramas de actividad	Regiones Estadísticas											
	GBA		NOA		NEA		Cuyo		Pampeana		Patagónica	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Industria	14,3	16,4	8,7	9,4	6,8	7,0	12,3	13,1	12,9	12,6	13,7	8,2
Construcción	6,0	7,9	7,4	9,9	7,1	12,1	6,9	9,3	6,4	9,6	6,1	10,4
Comercio	20,9	23,3	22,2	25,7	21,2	26,0	24,4	24,2	23,7	24,5	21,9	18,9
Serv. Financieros	11,2	11,2	5,9	6,7	5,2	6,9	7,7	8,9	8,9	9,6	10,6	7,0
Servicios	30,3	24,8	40,2	32,3	44,3	32,7	32,7	29,0	32,9	27,8	31,1	34,5
Serv. Doméstico	7,3	8,3	6,8	8,2	8,3	8,8	6,4	6,9	6,1	8,2	6,9	7,4
Transporte	8,0	6,9	5,9	5,9	4,7	4,2	6,4	5,3	6,2	6,4	7,5	5,6
Otras Ramas	0,7	0,9	--	1,9	0,1	2,2	--	3,3	0,2	1,9	0,5	8,8
Ns/Nr/No bien especificadas	--	0,4	--	--	--	0,1	--	0,1	--	0,1		0,1
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 5. Calificación de las tareas según Regiones Estadísticas. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Calificación de las tareas	Regiones Estadísticas											
	GBA		NOA		NEA		Cuyo		Pampeana		Patagónica	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Profesional	9,7	8,8	6,6	8,7	7,1	7,1	8,4	7,8	8,4	9,3	7,6	8,6
Técnica	17,0	15,8	17,5	16,8	15,7	17,4	19,4	16,7	18,2	16,4	20,3	17,8
Operativa	46,5	51,7	41,6	50,1	42,6	46,2	42,4	47,1	45,2	50,7	45,5	51,0
No Calificada	26,2	23,5	34,4	24,5	34,6	29,2	29,7	28,4	27,9	23,4	26,5	22,5
Ns/Nr/No bien especificadas	0,5	0,4	--	-	--	--	--	--	0,3	0,2	--	0,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 6. Categoría ocupacional según nivel educativo. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Categoría ocupacional	Nivel educativo							
	Primaria incompleta		Secundaria completa		Universitaria completa		Sin instrucción	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Patrón	1,7	2,0	2,2	3,6	4,5	6,8		2,2
Cuenta propia	27,6	33,5	21,5	20,9	16,8	12,7	37,5	41,3
Obrero/empleado	64,2	61,1	69,7	73,2	73,4	78,8	60,0	56,5
Trabajador familiar s/rem.	3,9	2,4	3,0	1,7	1,6	1,1	2,5	
Ns/Nr/No bien especificadas	2,6	,9	3,6	0,7	3,7	0,6		
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 7. Comprobante al momento de percibir los haberes. Por Total Región y según aglomerados urbanos. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Tipo de Comprobante	Total Región		Posadas		Gran Resistencia		Corrientes		Formosa	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Recibo Completo	57,3	56,3	63,6	56,4	43,5	51,2	57,6	56,9	68,8	60,1
Sólo Papel	8,4	3,9	1,2	1,8	24,9	10,4	2,1	1,8	1,7	2,1
Entrega Factura	1,5	3,9	1,4	1,9	0,8	3,1	2,1	1,6	1,7	8,6
Nada	31,5	35,6	32,3	39,4	29,4	34,9	36,7	39,0	26,9	29,3
Ad honorem	1,3	0,3	0,9	0,5	1,2	0,4	1,3	0,4	1,5	
N/S N/R	0,1	0,1			0,1	0,3	0,3			
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 8. Categoría ocupacional según sexo. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Categoría ocupacional	Sexo			
	Varón		Mujer	
	2003	2006	2003	2006
Patrón	3,8	5,4	1,3	3,1
cuenta propia	25,5	22,2	15,6	16,6
obrero/empleado	65,4	71,1	75,7	77,4
Trabajador familiar s/rem.	2,3	0,9	3,3	2,1
Ns/Nr/Ne	3,0	0,5	4,1	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 9. Categoría ocupacional según edad. Región NEA. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Cat. ocupacional	Edad											
	14-24		25-34		35-44		45-54		55-64		+ de 65	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Patrón	1,0	1,4	1,5	3,2	2,5	4,5	5,0	5,9	3,6	7,2	10,8	11,0
Cuenta propia	17,1	14,5	17,3	15,8	21,5	20,2	23,4	22,1	30,9	26,8	50,0	44,2
Obrero/empleado	64,6	77,9	75,9	79,1	73,6	74,5	69,3	71,1	62,8	64,7	37,8	41,9
Trabajador familiar s/rem	7,2	3,7	1,6	1,4	1,5	0,7	1,0	0,6	1,5	0,9	1,4	2,9
Ns/Nr/Ne	10,1	2,5	3,8	0,6	0,9	0,1	1,3	0,3	1,2	0,4		
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

Cuadro 10. Categoría ocupacional según aglomerados. Región NEA. 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006 en porcentajes

Cat. ocupacional	Aglomerado							
	Posadas		Gran Resistencia		Corrientes		Formosa	
	2003	2006	2003	2006	2003	2006	2003	2006
Patrón	2,4	5,1	2,7	4,2	1,8	3,6	4,5	4,7
Cuenta propia	20,5	20,1	24,2	21,0	22,6	22,1	15,1	15,8
Obrero/empleado	71,5	72,2	68,2	72,9	65,8	71,3	76,8	78,3
Trabajador familiar s/rem.	2,5	2,0	1,7	1,4	5,2	2,2	1,1	0,5
Ns/Nr/Ne	3,2	0,6	3,3	0,5	4,7	0,8	2,5	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, 2º semestre de 2003 y 2º semestre de 2006.

BIBLIOGRAFÍA

BARBETTI, Pablo Andrés (2002), “Necesidades de Formación y Capacitación de Profesionales Universitarios en Empresas de Corrientes: la visión de los empresarios”, en Ana María PÉREZ (coord.), *Los Universitarios y el Mercado de Trabajo. Crónica de una Relación Compleja*, Corriente, EUDENNE, pp. 135-168.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) (2003a), *La nueva encuesta permanente de hogares en Argentina 2003*, Metodología, *on line*. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/Metodologia_EPHContinua.pdf

----- (2003b), *Encuesta Permanente de Hogares, Indicadores Socioeconómicos para los 31 aglomerados urbanos*, Informe de Prensa, *on line*. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/indic_mayo3.pdf

----- (2004), *Encuesta Permanente de Hogares, Mercado de Trabajo: Principales Indicadores. Resultados Trimestrales y Semestrales 2003*, Informe de Prensa, *on line*. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHCont_4trimo3.pdf

----- (2007a), *Encuesta Permanente de Hogares, Indicadores Socioeconómicos - 31 aglomerados urbanos. Resultados Semestrales, 2do. Semestre de 2006*, Informe de Prensa, *on line*. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHCont_4trimo3.pdf

----- (2007b), *Encuesta Permanente de Hogares, Mercado de Trabajo: Principales Indicadores. Resultados Trimestrales y Semestrales 2006*, Informe de Prensa, *on line*. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHCont_4trimo3.pdf

FRAGUGLIA, L. y U. METLIKA (2006), “Una mirada del mercado de trabajo a partir de la calidad de las inserciones ocupacionales”, en *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, Año 2, N° 2, Argentina, SIMEL, pp. 65-94.

FERRÉ, A. (2004), *La Economía Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, (1ra. ed. 1963).

MARCOLERI, M. E. (2005), “La Nueva Encuesta Permanente de Hogares. Sus efectos sobre los indicadores del Mercado Laboral del NOA”, en *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, Año 1, N° 1, Argentina, SIMEL, pp. 97-118.

PANAIA, Marta (2004), “Crisis Fiscal, mercado de trabajo y economía subterránea en las nuevas territorialidades del nordeste argentino”, en Marta PANAI, *Crisis Fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el nordeste argentino*, Buenos Aires, La Colmena, pp. 5-40.

PANAIA, M. y M. A. SAN MARTÍN (2004), "Introducción General", en Marta PANAIA, *Crisis Fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el nordeste argentino*, Buenos Aires, La Colmena, pp. 1-4.

PANAIA, M. (2005), "Apuntes para la rediscusión del concepto de región en la Argentina actual", en *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, Año 1, N° 1, Argentina, SIMEL, pp. 225-246.

ROFMAN, A. y L. ROMERO (1973), *Sistema Socioeconómico y estructura regional en la Argentina*, Buenos Aires, Amorrortu.

ROFMAN, A. (1999), *Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones y crisis en la Argentina contemporánea*, Argentina, Amorrortu.

SALVIA, A. (2005), "Crisis del empleo y nueva marginalidad: el papel de las economías de la pobreza en tiempos de cambio social", en F. MALLIMACI y A. SALVIA, (2005), *Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados*, Buenos Aires, Biblos-Instituto Gino Germani, pp. 29-40.

SCHWEITZER, A. (2004), "¿Uno o varios NEA? Regiones y territorios en el espacio del nordeste Argentino", en Marta PANAIA, *Crisis fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el nordeste argentino*, Buenos Aires, La Colmena. pp. 41-62.

SOUZA, P. y V. TOKMAN (1995), "El sector informal y la pobreza urbana en América Latina", en V. TOKMAN (comp.), *El sector informal en América Latina. Dos Décadas de Análisis*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, citado por M. BUSSO "El trabajo Informal en Argentina: la novedad de un fenómeno histórico", en J. NEFFA y P. PÉREZ, *Macroeconomía, Mercado de Trabajo y Grupos Vulnerables: desafíos para el diseño de políticas públicas*, Buenos Aires, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL)-PIETTE, 2006.

RESUMEN

En los últimos meses, las cifras oficiales mostraron una recuperación notable de la economía Argentina y su repercusión en el mejoramiento de los indicadores laborales, principalmente de aquellos que refieren a la disminución de la desocupación. Sin embargo, los procesos de segmentación y fragmentación del mercado de trabajo no han logrado revertirse, especialmente en regiones como el NEA, históricamente periférica respecto del eje central de producción del país, y cuyas características productivas, políticas e institucionales la convierten en una zona de escaso desarrollo. Estos procesos se vinculan fundamentalmente con el sostenimiento de modalidades ocupacionales e inserciones laborales caracterizadas por la informalidad. De allí que el presente artículo se haya propuesto analizar el comportamiento del mercado de trabajo en la región NEA durante los últimos cuatro años. Para esto se trabajó con los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al segundo semestre de 2003 y al segundo semestre de 2006, con el objeto de mostrar las tendencias que se presentan tanto en relación con las características de la estructura histórica de este mercado como en comparación con otras regiones del país.

ABSTRACT

In the last months, the official numbers showed a remarkable recovery of the Argentina economy, and its repercussion in the improvement of the labor indicators, mainly, those that refer the diminution of unemployment. However, the processes of segmentation and fragmentation of the work market, have not managed to revert themselves, specially in regions like the NEA, historically peripheral to the central axis of production of the country, and where their productive, political and institutional characteristics turn it into a peripheral zone, in relation with the rest of the country. These processes, fundamentally tie with the support of occupational modalities and labor insertions characterized by the informality. Considering this, the present article seted out to analyze the behavior of the work market, in the NEA region of Argentina, during the last 4 years. In order to do this, I worked with data originated from permanent survey of homes corresponding to the second semester of 2003 and 2006, with the intention of showing the tendencies that present, as much in relation to the characteristics of the historical structure of this market like thus also in comparison with other regions of the country.

PALABRAS CLAVE

REGIÓN
MERCADO DE TRABAJO
TRABAJO PRECARIO
INFORMALIDAD LABORAL

KEY WORDS

REGION
MARKET OF WORK
PRECARIOUS WORK
INFORMAL LABOR

ECONOMÍA, DESOCUPACIÓN Y POBREZA EN CATAMARCA Y TUCUMÁN (1980-2002)

Ariel Osatinsky

INTRODUCCIÓN

Catamarca y Tucumán conforman, junto a otras siete provincias,¹ el Norte Grande Argentino (NGA), región que en los primeros años del siglo XXI experimentaba un estado crítico en su situación socioeconómica. En efecto, los niveles de desocupación y pobreza de las provincias de esa región eran más que preocupantes. Pero, si bien Catamarca y Tucumán no escapaban a esa realidad, existen diferencias significativas en los procesos socioeconómicos que tuvieron lugar en ambas.

Históricamente, las producciones más importantes de ambas provincias estuvieron orientadas al mercado interno y gozaron de algún grado de protección del Estado. Así, se desarrollaron economías caracterizadas por una escasa diversificación productiva y una presencia importante de pequeños y medianos productores, aunque en ambas regiones se conformaron complejos productivos disímiles: mientras que Tucumán se caracterizó por una mayor penetración de las formas de producción capitalistas, Catamarca conservó ciertos rasgos tradicionales en sus actividades económicas. De esa forma, en Tucumán la agroindustria del azúcar tuvo un desarrollo importante durante el siglo XX y fue también notable la expansión de la actividad agroindustrial citrícola en las últimas décadas. Por el contrario, en Catamarca se desarrollaron ciertas actividades tradicionales, como el cultivo del olivo, de la nuez, de la vid, del tabaco, o la producción textil en un nivel artesanal. Y en los últimos años del siglo XX hubo una notable expansión de la producción minera.

A pesar de tener la economía más dinámica de la región, Tucumán alcanzaba uno de los niveles de pobreza más elevados del NGA en el período bajo

Ariel Osatinsky pertenece al Instituto de Estudios Geográficos-UNT; Instituto Superior de Estudios Sociales-CONICET; Becario de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. aosatinsky@yahoo.com.ar

¹ Estas son Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Estas 9 provincias conforman el NGA a partir del Tratado de Integración de la Región Norte firmado en abril de 1999.

estudio. Por el contrario, Catamarca, con una producción más rezagada, aparecía como la provincia menos pobre (Bolsi, Paolasso y Longhi, 2006).

Los contrastes señalados motivaron la realización de esta investigación cuyo objeto es comparar la evolución que tuvieron en Tucumán y Catamarca la actividad económica, la población con problemas de empleo y la pobreza en el período 1980-2002, indagando sobre el tipo de vinculación que hubo entre los tres fenómenos señalados.

Por último, cabe destacar que este escrito representa los primeros pasos de una investigación más amplia que, analizando los procesos socioeconómicos que tuvieron lugar en estas dos provincias, intenta encontrar algunas pistas que expliquen los motivos por los cuales, a comienzos del siglo XXI, Catamarca presenta niveles de pobreza más bajos que Tucumán.

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE CATAMARCA Y TUCUMÁN EN LA DÉCADA DE 1980

Las economías de Catamarca y Tucumán se conocen también como economías regionales, las que se caracterizan por poseer "... una estructura económica basada preferencialmente en la explotación directa de un recurso natural. Ello supone la prevalencia de las actividades primarias (agricultura, ganadería y minería) en la composición del producto bruto regional por el lado de la producción de bienes" (Rofman y Romero, 1997, p. 115).

Históricamente, ambas economías tuvieron una participación marginal en la estructura productiva del país. En 1980, Catamarca representaba el 0,5% del PBI argentino mientras que Tucumán aportaba el 2,8% de la producción de bienes y servicios del país.²

Teniendo en cuenta estos rasgos generales, cabe destacar que, a nivel nacional, la década de 1980 se caracterizó por ser un período de estancamiento económico. Entre 1982 y 1990, el PBI del país tuvo un descenso anual promedio de 0,3% (Gatto y Cetrángolo, 2003, p. 13). Tanto Catamarca como Tucumán formaron parte de esta dinámica.

El Cuadro 1 muestra los valores que alcanzó el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Catamarca y Tucumán en el período 1980-1989.

2 Datos del Consejo Federal de Inversiones.

Cuadro 1. PBG de Catamarca y Tucumán (1980-1989)
(a precios constantes de 1970 en miles de pesos Ley 18.188)

Año	Catamarca		Tucumán	
	PBG	Crecimiento anual	PBG	Crecimiento anual
1980	45.028	-	272.100	-
1981	42.935	-4,65	259.322	-4,70
1982	44.764	4,26	262.625	1,27
1983	50.464	12,73	275.930	5,07
1984	60.249	19,39	285.750	3,56
1985	56.364	-6,45	278.019	-2,71
1986	71.313	26,52	289.708	4,20
1987	75.784	6,27	304.972	5,27
1988	73.697	-2,75	308.360	1,11
1989	73.596	-0,14	244.841	-20,60

Fuente: Consejo Federal de Inversiones.

Como lo expresan las cifras, al inicio de la década de 1980 eran notorias las diferencias entre ambas economías en cuanto al valor de su producción. Catamarca se encontraba muy rezagada con respecto a Tucumán. Si bien esa diferencia persistió, se fue reduciendo con los años debido al mayor crecimiento de la economía catamarqueña. Al terminar la década, Catamarca poseía un PBG mayor que el de 1980, mientras que Tucumán experimentó el proceso opuesto.

Cuando se analiza la evolución de los distintos sectores que componen las economías mencionadas, también se observan diferencias importantes. El Cuadro 2 muestra la composición del PBG de Catamarca entre los años 1980 y 1989. Por un lado, sobresale la pérdida de participación de las actividades agropecuarias en la estructura productiva provincial. Por otro lado, tanto la industria manufacturera como el sector servicios, que engloba a la actividad del sector público, adquirieron un mayor peso en la economía catamarqueña.

Cuadro 2. Participación de las actividades económicas en el PBG de Catamarca (1980-1989)

Sectores	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricultura, Caza, etc.	16	17	16	16	14	16	13	12	13	13
Minas y Canteras	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2
Industria Manufacturera	16	21	20	20	22	23	25	26	29	22
Electricidad, Gas y Agua	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
Construcción	13	9	13	9	7	4	5	7	8	5
Comercio	7	8	7	8	7	8	7	6	7	5
Transporte	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
Servicios Financieros	4	4	3	3	2	3	2	2	2	2
Servicios	34	33	32	37	40	39	41	40	34	46
Total PBG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Consejo Federal de Inversiones.

La industria fue beneficiada en aquellos años por una Ley de Promoción Industrial.³ En cuanto a los servicios, es posible que su mayor peso se relacione con el crecimiento del empleo en el sector público: en 1983 había 16.887 empleados públicos en Catamarca (*La Nación*, 24/10/1987, Manzanal y Rofman, 1989, p. 54) y diez años después esa cifra era de 23.257.⁴

El Cuadro 3 muestra la composición del PVB de la provincia de Tucumán entre 1980 y 1989.

Cuadro 3. Participación de las actividades económicas en el PVB de Tucumán (1980-1989)

Sectores	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricultura, Caza, etc.	15	15	15	14	15	14	13	12	12	10
Minas y Canteras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industria Manufacturera	31	30	30	32	31	31	32	31	36	30
Electricidad, Gas y Agua	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Construcción	8	7	7	6	6	6	7	6	5	6
Comercio	14	13	14	14	14	13	13	13	12	12
Transporte	9	9	9	11	11	12	12	14	11	14
Servicios Financieros	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2
Servicios	16	19	18	17	16	18	17	17	18	22
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Consejo Federal de Inversiones.

Se destaca la pérdida de participación de las actividades agropecuarias. También, como en el caso catamarqueño, el sector servicios adquirió un mayor peso en la estructura económica: mientras que en 1983 había en la provincia 33.609 empleados estatales (*La Nación*, 24/10/1987, Manzanal y Rofman, 1989, p. 54), en 1993 esa cifra había ascendido a 42.344.⁵ Sin embargo, en el caso de Tucumán la industria manufacturera, que tradicionalmente constituyó el sector más dinámico de la economía, no logró incrementar su participación en la estructura económica provincial.

Se puede afirmar, entonces, que en ambas provincias mientras que las actividades primarias perdieron importancia aquellas vinculadas a los servicios incrementaron su participación. En cuanto al sector secundario, mantiene su peso en ambas economías, sobresaliendo la mayor participación de la industria manufacturera en Catamarca.

3 En aquellos años Catamarca formó parte del conjunto de provincias elegidas como destino de la política de promoción industrial del gobierno nacional. Esta última tenía como fin lograr el desembarco de inversiones en distintas regiones geográficas que poseían históricamente un importante nivel de atraso económico.

4 Base de datos de la Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial, Tomo II, 1995 (Panaia, 2000).

5 Base de datos de la Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial, Tomo II, 1995 (Panaia, 2000).

LAS ECONOMÍAS DE CATAMARCA Y TUCUMÁN ENTRE 1990 Y 2002

A diferencia de lo ocurrido en la década de 1980, signada por períodos de estancamiento y retroceso económico, la actividad económica tuvo un crecimiento en los años 90.⁶ Sin embargo, esa expansión fue la expresión de realidades disímiles. Mientras que las actividades terciarias crecieron e incrementaron su participación en la estructura económica, hubo un retroceso de las actividades secundarias y del sector primario; mientras que se produjo la quiebra y el cierre de numerosas pequeñas y medianas industrias, el proceso de tercerización cobró importancia en estos años en la Argentina; a la vez, hubo producciones primarias orientadas al mercado exterior que lograron expandirse, en tanto que las que tenían como destino satisfacer la demanda del mercado interno agravaron sus crisis.

A partir del año 1999 la economía argentina entró en una etapa de recesión económica que se prolongó hasta el año 2002.

Como lo expresa el Cuadro 4, las economías de Tucumán y Catamarca siguieron la dinámica de la economía nacional.

Cuadro 4. PBG de Catamarca y Tucumán (1990-2002) (a precios constantes de 1993)

Año	Catamarca		Tucumán	
	PBG	Crecimiento anual	PBG	Crecimiento anual
1990	982.327		2.628.408	
1991	1.030.599	5	2.951.396	12,29
1992	1.072.168	4	2.834.530	-3,96
1993	1.119.001	4	2.853.950	0,69
1994	1.120.886	0	2.965.929	3,92
1995	1.140.720	2	3.038.733	2,45
1996	1.187.311	4	3.068.148	0,97
1997	1.316.591	11	3.284.153	7,04
1998	1.702.121	29	3.446.405	4,94
1999	1.775.753	4	3.362.854	-2,42
2000	1.557.667	-12	3.403.030	1,19
2001	1.518.460	-3	3.156.498	-7,24
2002	2.022.893	33	2.898.189	-8,18

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos del *Anuario Estadístico 2003*, Provincia de Catamarca, pp. 407-408, y del *Anuario Estadístico 2004/2005*, Provincia de Tucumán.

En ambas provincias hubo un crecimiento hasta el año 1998 y una caída de la actividad económica a partir de 1999. El elevado crecimiento que tuvo la economía catamarqueña en los años 1998 y 2002 se relaciona con la puesta en marcha del proyecto minero Bajo de La Alumbrera a partir del año 1996.

6 El PIB del país creció a una tasa anual del 6% entre 1991 y 1998 (Gatto y Cetrángolo, 2003: 13).

A pesar del crecimiento económico, la apertura económica y la desregulación estatal que caracterizaron a los años 90 afectaron profundamente algunas de las producciones tradicionales de Catamarca y Tucumán orientadas al mercado interno. Por su parte, en aquella década se produjo la consolidación de actividades vinculadas al mercado externo que gozaron de una notable expansión, como los casos de la producción citrícola en Tucumán o de la producción olivícola en Catamarca.

El Cuadro 5 muestra la composición de la estructura económica catamarqueña en el período 1990-2002. Si bien el sector primario incrementó notablemente su participación en la misma, ello se debió al desarrollo productivo que tuvo el sector Minas y Canteras, por efecto de la producción de la mina Bajo de La Alumbraera,⁷ puesto que las actividades agropecuarias siguieron perdiendo importancia económica.

Cuadro 5. Participación de las actividades económicas en el PBC de Catamarca (1990-2002)

Sectores	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Agricultura, Caza, etc.	6	6	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	3
Minas y Canteras	1	1	0	1	1	1	1	4	17	22	11	13	38
Sector Primario	7	7	5	6	6	6	5	8	20	25	15	17	41
Industria Manufacturera	21	24	25	24	23	22	21	22	19	17	18	14	9
Electricidad, Gas y Agua	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3
Construcción	6	5	4	5	3	3	4	4	4	3	3	4	1
Sector Secundario	30	31	31	31	28	27	27	29	25	22	24	21	13
Comercio	7	7	7	8	9	9	9	9	8	9	10	10	7
Transporte	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	3
Servicios Financieros	19	19	19	19	19	20	21	20	16	16	18	19	14
Servicios	35	34	34	32	34	35	34	31	25	24	27	28	21
Sector Terciario	63	63	63	62	66	67	68	64	53	53	60	62	45
Total	100												

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del *Anuario Estadístico 2003*, Provincia de Catamarca, pp. 407-408.

El sector secundario perdió presencia como consecuencia de la menor participación de la industria manufacturera. En cuanto al sector terciario, es notable el elevado peso que tuvo durante el período en la estructura económica catamarqueña. Ambos fenómenos se relacionan con el proceso de tercerización anteriormente descrito. El sector servicios siguió siendo el más relevante dentro de las actividades terciarias, probablemente con una participación importante de las actividades vinculadas al sector público. Su menor peso relativo a partir del año 1998 se debió a la mayor participación de la actividad minera.

7 Según datos de la Subsecretaría de Minería, Bajo de La Alumbraera obtuvo una producción de 70 millones de pesos en 1997, y de 470 millones de pesos anuales en el período 1998-2002 (Moori-Koenig, 2000, p. 322).

En cuanto a Tucumán, la composición de su actividad económica en el período 1990-2002 se aprecia en el Cuadro 6. En este caso, sobresale también la elevada participación del sector terciario en la economía provincial, por motivos similares a los señalados para el caso de Catamarca. A su vez, hasta el año 1998 hubo un crecimiento de la gravitación del sector secundario en la estructura productiva, mientras que el sector primario mantuvo la misma participación. En la fase recesiva de la economía, las actividades secundarias perdieron presencia hasta llegar a los valores de comienzos de la década, mientras que las actividades primarias incrementaron su participación en el PBC provincial.

Cuadro 6. Participación de las actividades económicas en el PBC de Tucumán (1990-2002)

Sectores	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Agricultura, Caza, etc.	9	9	9	7	7	8	8	9	9	10	10	11	13
Minas y Canteras	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Sector Primario	9	9	9	8	9	9	9	10	10	11	11	13	15
Industria Manufacturera	18	17	18	18	19	19	19	21	21	19	18	17	18
Electricidad, Gas y Agua	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Construcción	2	4	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2
Sector Secundario	24	24	24	24	26	26	27	28	28	25	24	23	23
Comercio	15	13	14	14	13	13	14	16	16	16	16	13	9
Transporte	11	10	11	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
Servicios Financieros	14	13	13	14	14	14	14	14	14	15	16	15	15
Servicios	28	30	30	31	30	29	27	25	25	25	25	27	29
Sector Terciario	68	66	68	67	65	64	63	63	63	64	66	64	62
Total	100												

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del *Anuario Estadístico 2004/2005*, Provincia de Tucumán.

El hecho de que el sector manufacturero de Tucumán haya conservado su peso en la estructura productiva y el sector agrícola haya incrementado el suyo se relaciona, por un lado, con la importancia que siguió conservando la actividad azucarera en la provincia y, por el otro, con el desarrollo que tuvo en esos años la actividad citrícola.

Si bien la actividad azucarera siguió siendo relevante en Tucumán, la desregulación iniciada en el año 1991, en el marco de la nueva orientación económica, perjudicó a numerosos productores de caña de azúcar, quienes quedaron excluidos de la actividad.⁸

Otras actividades cuyas producciones estaban vinculadas al mercado exterior se expandieron notablemente en aquellos años. Son los casos de la actividad minera y de la producción olivícola de Catamarca y de las producciones de limón y soja en Tucumán.

8 En el año 1990 la superficie plantada con caña era de 250.000 hectáreas. En 1998 esa cifra había caído hasta las 222.000 hectáreas, mientras que en el 2002 dicha superficie se había reducido a 185.727 hectáreas (Datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombes, en *El Siglo*, 05/09/2005, p. 6).

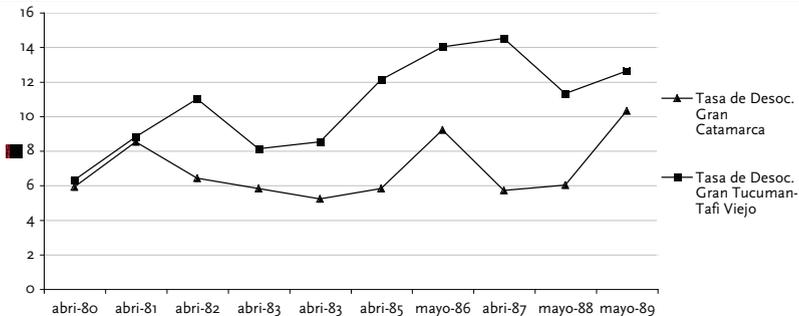
Cabe destacar que en los años 90 se vivió una profundización de la re-conversión productiva en las agroindustrias mencionadas: a medida que aumentó la mecanización de las cosechas se produjo una menor demanda de mano de obra; además, hubo un avance de la concentración de la propiedad, proceso que benefició a los grandes productores en detrimento de los pequeños y medianos (Barsky y Gelman, 2001).

En síntesis, se puede decir que, si bien las economías de Catamarca y de Tucumán tuvieron un crecimiento económico en los años 90, ello no puede caracterizarse como la expresión de un notable desarrollo productivo. En ambos casos la mayor participación en la estructura económica la tuvo el sector terciario. En Catamarca, el hecho de que una sola actividad, la minería, llegue a representar el 40% de la economía provincial a fines del período considerado, está indicando el atraso que todavía caracteriza al resto de las actividades. En cuanto a la provincia de Tucumán, a pesar de que tiene las industrias más importantes de la región, el sector manufacturero, en el período estudiado, sigue desempeñando un papel menor que el sector servicios, el cual está ligado a las actividades del sector público.

LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE EMPLEO EN CATAMARCA Y TUCUMÁN EN LA DÉCADA DE 1980

Como ya se dijo, los años 80 se caracterizaron por una gran inestabilidad económica. Los problemas que sufrieron distintas actividades se tradujeron en el plano laboral en un incremento de la desocupación. En el Gráfico 1 se aprecia en qué medida tanto Catamarca como Tucumán fueron parte del proceso descrito.

Gráfico 1. Tasas de desocupación en el Gran Catamarca y Gran Tucumán-Tafí Viejo (1980-1989)



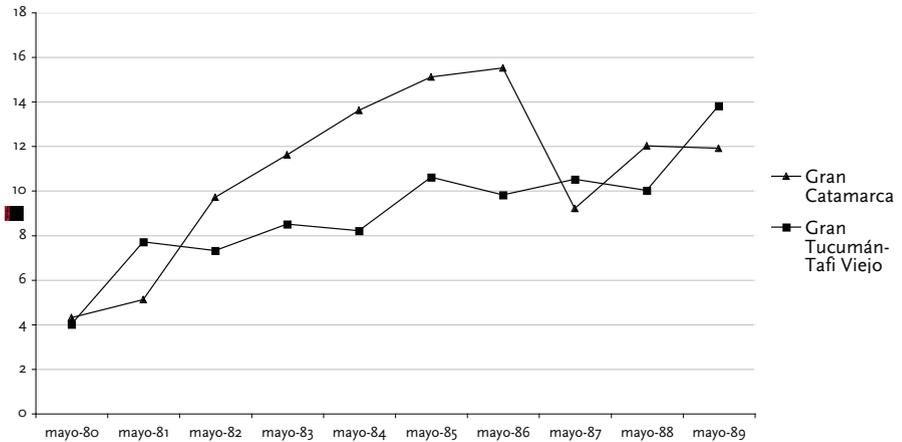
Fuente: INDEC, *Boletines Estadísticos trimestrales*, 1980, 1984, 1986, 1989.

Si bien hubo un crecimiento del desempleo en los dos aglomerados provinciales, estos tuvieron un comportamiento diferente en el transcurso de la década de 1980. El Gran Tucumán-Tafí Viejo, que en abril de 1980 tenía un 6,3% de la PEA⁹ desocupada, mantuvo valores cercanos al 10% en la primera mitad de la década, superando esa cifra a partir de 1985. Por el contrario, en el Gran Catamarca, si bien el problema de la desocupación se agravó en aquellos años, la tasa que mide la misma alcanzó los dos dígitos a fines de la década de 1980.

Por lo expuesto, a pesar de que ambos aglomerados tenían valores cercanos a comienzos de los 80, el desempleo tuvo un crecimiento superior y afectó a un porcentaje mayor de la PEA en el Gran Tucumán-Tafí Viejo.

En cuanto a la tasa de subocupación, ambos aglomerados muestran valores cercanos, aunque en algunos años el Gran Catamarca tuvo valores notablemente mayores, como lo refleja el Gráfico 2.

Gráfico 2. Tasa de subocupación en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1980-1989, ondas de mayo)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

La subocupación prácticamente se triplicó en los 80. Tanto el Gran Catamarca como el Gran Tucumán-Tafí Viejo tenían un 4% de la PEA subocupada a comienzos de 1980, mientras que en mayo de 1989 la tasa de subocupación era del 11,9% y del 13,8%, respectivamente.

9 La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por los desocupados y los ocupados. Desocupado es toda persona que, sin tener una ocupación, la está buscando activamente. Asimismo, subocupado es aquel que trabaja menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias.

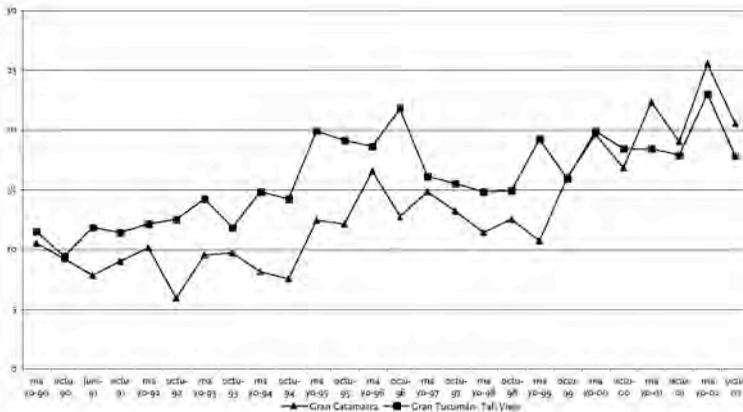
Por último, cabe mencionar que la población con problemas de empleo¹⁰ era el 10% de la PEA en ambas regiones a comienzos de la década de 1980 y que al finalizar la misma este porcentaje, en ambos casos, se situaba por encima del 20%. El hecho de que ambos aglomerados presentaran valores cercanos en cuanto a la población con problemas de empleo se explica por la existencia de un porcentaje mayor de desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo y por la elevada subocupación que se registraba en el Gran Catamarca.

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE EMPLEO EN EL PERÍODO 1990-2002

En la década de 1990 los problemas de empleo alcanzaron una dimensión nunca antes conocida en el país. Las crecientes desocupación y subocupación llegaron a afectar a millones de habitantes del territorio nacional.

Tucumán y Catamarca no fueron ajenos a los fenómenos señalados, como lo refleja la evolución de la desocupación en los principales aglomerados de ambas provincias expuesta en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Tasa de desocupación en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1990-2002)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

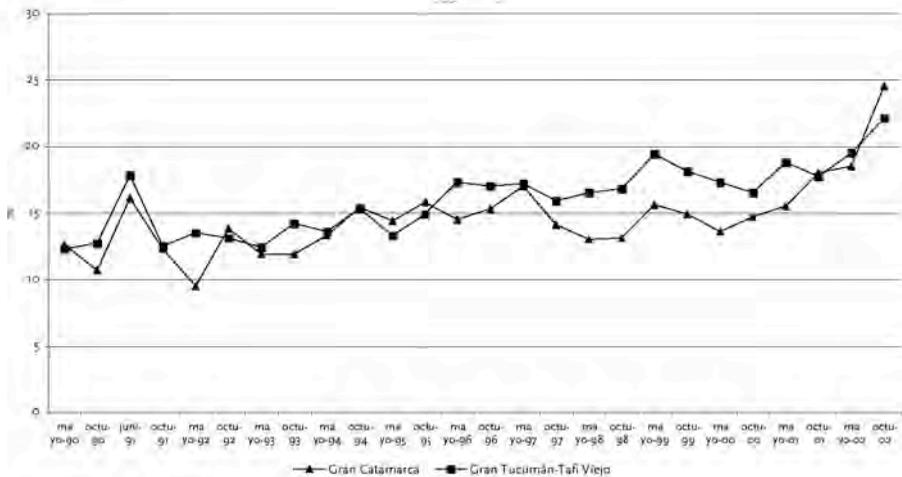
En ambos casos la tasa de desempleo se duplicó nuevamente: de un 10% de la PEA a comienzos de la década de 1990, la desocupación había ascendido a más del 20% de la PEA del Gran Tucumán-Tafí Viejo y del Gran Catamarca a fines del periodo bajo estudio.

¹⁰ La población con problemas de empleo hace referencia al conjunto de los desocupados y subocupados.

Cabe destacar que en la etapa de la última recesión económica el desempleo sufrió un pronunciado incremento en el Gran Catamarca, afectando en esos años a un porcentaje mayor de la PEA en relación con la situación existente en el Gran Tucumán-Tafi Viejo.

La subocupación tuvo una evolución parecida a la del desempleo, como se aprecia en el Gráfico 4.

Gráfico 4. Tasa de subocupación en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafi Viejo (1990-2002)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

En las dos regiones bajo estudio la tasa de subocupación se incrementó notablemente; partiendo de valores cercanos al 12% en las primeras mediciones del periodo bajo estudio, alcanzó casi el 20% en los últimos años considerados.

Teniendo presente esta evolución de la desocupación y la subocupación en los dos aglomerados, no sorprende el hecho de que, a comienzos del siglo XXI, el 45% de la PEA del Gran Catamarca tuviera problemas de empleo, mientras que en el Gran Tucumán-Tafi Viejo ese porcentaje fuera del 40%. En los primeros años de la década de 1990, estos valores rondaban el 20 por ciento.

La orientación económica que prevaleció en la década de 1990 ocasionó crisis profundas en numerosas actividades. Estas fueron víctimas de la apertura económica, la cual se realizó teniendo como marco la implementación de la convertibilidad que, mediante una sobrevaluación del peso, restaba competitividad a los productos nacionales. A su vez, la desregulación estatal llevada adelante por el gobierno nacional en diversas producciones ocasionó una pérdida en la participación de los sectores más débiles de cada una de ellas. En aquellos años se produjo el avance de los grandes grupos económicos mientras se cerraban

numerosas pequeñas y medianas industrias o comercios,¹¹ y un crecimiento de los grandes productores rurales a la par que se retiraban de esa actividad numerosos pequeños y medianos productores.¹² Asimismo, aumentó la mecanización de la cosecha en diversas producciones agrícolas de la zona.¹³ Estos hechos contribuyeron al incremento de la población con problemas de empleo.

En síntesis, tanto la PEA del aglomerado catamarqueño como la del Gran Tucumán-Tafí Viejo sufrió en el período 1990-2002 un profundo agravamiento de la situación laboral reflejado en el notable incremento de la desocupación y subocupación.

LA POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

Entre los métodos más conocidos de medición de la pobreza se encuentra el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual utiliza como fuente la información de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas realizados por el INDEC. Por lo tanto, se cuenta con información de la población de cada provincia con NBI¹⁴ para los años 1980, 1991 y 2001, años en los que se efectuaron los últimos censos. Sin embargo, debido a la utilización de distintas metodologías en el cálculo, no se pueden comparar los datos brindados por el censo de 1980 con los correspondientes a los años 1991 y 2001.

Es importante destacar que el método de las NBI se asocia, en general, con la pobreza estructural, puesto que las variables que tiene en cuenta suelen modificarse en el largo plazo.¹⁵

El Cuadro 7 muestra la población con NBI en las dos provincias bajo estudio en los años 1980, 1991 y 2001.

11 Entre 1990 y marzo de 1996 cerró el 9,5% de los locales comerciales existentes en la ciudad de Tucumán (*La Gaceta*, 27/10/1996, p. 13).

12 En Tucumán, entre los años 1988 y 2002 desaparecieron el 41% de los pequeños productores de caña y el 64% de los productores medianos. En el caso de las explotaciones empresariales, si bien su número se redujo en 69%, las que sobrevivieron acapararon 5,73% más de tierras (Datos del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, en *La Gaceta*, 2/11/2003, 3° Sección, p. 4). Por lo tanto, hubo un proceso de concentración y centralización en la actividad cañera de la provincia en la década de 1990.

13 En la actividad azucarera, “desde 1991 utilizan sistemas semimecánicos y mecánicos de recolección que redundan en mayores rendimientos, lo que ayuda a la concentración de la tierra. Más del 50% de los productores tienen menos de 10 ha...” (Barsky y Gelman, 2001, p. 403).

14 Se refiere a la población que vive en hogares particulares.

15 El método de las NBI considera cinco indicadores: 1) Hacinamiento (más de dos personas por cuarto); 2) Vivienda inadecuada (habitación en una vivienda de tipo inconveniente); 3) Servicios sanitarios inadecuados (no poseen ningún tipo de retrete); 4) Deficiencia educativa (presencia de algún niño en edad escolar –6 a 12 años– que no asistiera a la escuela); 5) Baja capacidad de subsistencia (presencia de cuatro o más personas por miembro ocupado, y cuyo jefe tuviera baja educación).

Cuadro 7. Porcentaje de población en hogares particulares con NBI en Catamarca y Tucumán. Años 1980, 1991, 2001

CATAMARCA				TUCUMÁN			
Departamento	1980	1991	2001	Departamento	1980	1991	2001
Ambato	53,6	38,0	22,3	Burruyacú	67,2	46,7	37,7
Ancasti	81,5	71,1	46,3	Capital	30,0	19,9	17,5
Andalgalá	43,7	30,9	26,5	Cruz Alta	52,8	33,5	30,0
Antofag. de la Sierra	65,5	46,3	39,8	Chicligasta	46,4	30,5	27,8
Belén	49,2	34,2	28,8	Famaillá	56,0	35,1	31,7
Capayán	55,7	40,7	30,6	Graneros	64,7	51,2	42,4
Capital	28,8	19,4	15,2	J. B. Alberdi	50,5	32,3	26,9
El Alto	69,8	58,8	36,3	La Cocha	56,8	41,1	35,8
Fray M. Esquiú	40,1	25,8	17,7	Leales	56,7	37,4	31,0
La Paz	70,7	42,1	32,5	Lules	47,1	30,0	28,2
Paclín	61,3	42,0	18,0	Monteros	48,5	29,6	24,3
Pomán	54,3	38,0	25,1	Río Chico	47,4	30,6	28,8
Santa María	39,1	27,0	22,4	Simoca	70,8	52,5	37,8
Santa Rosa	59,1	42,8	32,7	Tafi del Valle	47,1	41,5	30,3
Tinogasta	45,0	26,4	23,8	Tafi Viejo	34,8	24,9	21,9
Valle Viejo	39,4	24,7	18,3	Trancas	58,2	43,0	35,1
Total	42,6	28,2	21,5	Yerba Buena	35,7	21,5	14,8
				Total	42,4	27,7	23,9

Fuente: INDEC, *Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1980, 1991 y 2001*.

Como se aprecia, ambas provincias tenían en el año 1980 más del 40% de la población –con el mismo valor– en hogares particulares con NBI. Esto indica que la pobreza estructural afectaba a un porcentaje elevado de las poblaciones de Catamarca y Tucumán.

En el año 1991 ambas provincias mostraban un porcentaje menor de población con NBI y seguían teniendo valores prácticamente similares. Si bien la metodología empleada en el censo del año 1991 difiere de la que se utilizó en el año 1980, se puede afirmar que hubo en ellas una disminución en la pobreza estructural aunque, por el problema de medición señalado, no se puede saber la dimensión que tuvo dicha reducción.

Hacia el año 2001 se aprecia una disminución en la proporción de población con NBI en ambas provincias, pero ese año Catamarca mostraba un menor porcentaje que Tucumán.

En general, en las tres mediciones tanto en Catamarca como en Tucumán los mayores porcentajes de población con NBI se registraron en los departamentos menos poblados, mientras que las regiones con mayor población mostraban valores inferiores.¹⁶

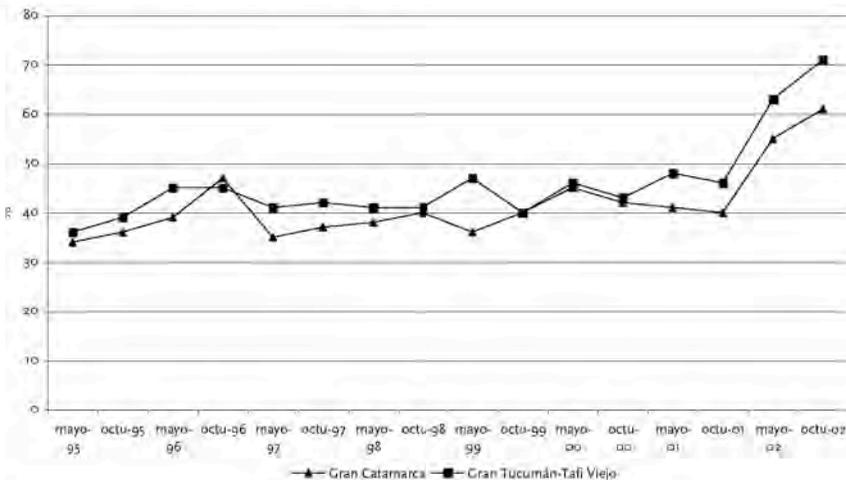
16 En Tucumán los departamentos más poblados con esa dinámica eran San Miguel de Tucumán, Monteros, Tafi Viejo y Chicligasta, siendo la excepción Cruz Alta. En Catamarca, los departamentos más poblados eran San Fernando del Valle de Catamarca, Santa María, Tinogasta y Valle Viejo, siendo en este caso la excepción el departamento de La Paz.

Es conveniente recalcar que, aunque los datos expuestos estarían reflejando una disminución importante de la pobreza estructural en ambas provincias entre 1980 y 2001, las serias limitaciones que presenta el método de las NBI no permiten afirmar con certeza que se haya producido efectivamente esa reducción. Es cierto que este método permite establecer comparaciones entre distintas zonas geográficas, pero los indicadores que considera no contemplan la realidad de aquellos sectores de la sociedad que han caído en situación de pobreza debido a un proceso de deterioro de su poder adquisitivo. Además, los indicadores seleccionados poseen un alcance restringido puesto que hacen referencia a las características de la vivienda, a la situación escolar o a la carga familiar por ingreso, pero no tienen en cuenta necesidades esenciales como la alimentación, la salud o la vestimenta. Por último, este método tiende a subestimar la pobreza crónica urbana: el grado de carencia de cada indicador que se utilizaría como parámetro fija niveles de privación tan críticos que tienden a excluir a los pobres urbanos.

LA POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

El método de la línea de pobreza, a diferencia del criterio de las NBI, registra la pobreza reciente. Este comenzó a aplicarse en los aglomerados más importantes de cada provincia a partir del año 1995. El Gráfico 5 muestra la evolución de la población bajo la línea de pobreza en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo en el período 1995-2002.

Gráfico 5. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1995-2002)

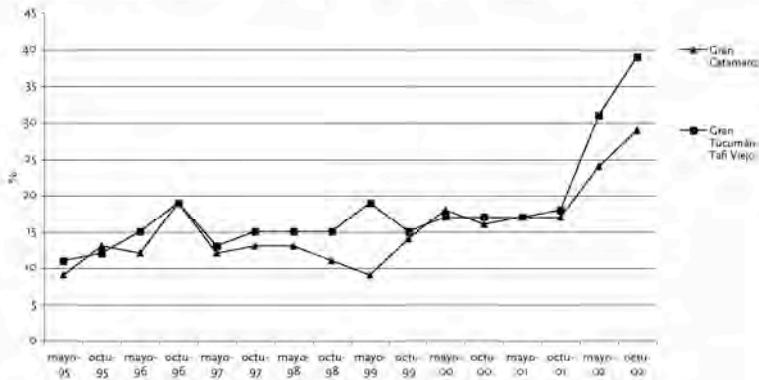


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Es posible observar en ese gráfico que en ambos aglomerados la población bajo la línea de pobreza aumentó. Sin embargo, mientras que en 1995 el Gran Catamarca tenía el 34% de población bajo la línea de pobreza y el aglomerado tucumano el 36%, a fines del período bajo estudio el Gran Tucumán-Tafi Viejo presentaba un porcentaje claramente superior al del aglomerado catamarqueño (71% y 61%, respectivamente). Es llamativo el hecho de que en los años 2000 y 2001, en plena recesión económica, la proporción de población bajo la línea de pobreza en el Gran Catamarca haya disminuido.

El Gráfico 6 muestra el incremento de la indigencia en ambos aglomerados provinciales.

Gráfico 6. Porcentaje de población bajo la línea de indigencia en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafi Viejo (1995-2002)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Dichos aglomerados mantuvieron aproximadamente los mismos porcentajes de población bajo la línea de indigencia: en 1995 el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafi Viejo tenían valores cercanos al 10%, mientras que a fines del 2001 el porcentaje era del 17% y el 18%, respectivamente.

En síntesis, se puede decir que en los aglomerados urbanos de ambas provincias crecieron la pobreza y la indigencia. Pero, si bien hacia mediados de la década de 1990 estas áreas poseían aproximadamente los mismos porcentajes de población pobre e indigente, en la etapa de la última recesión económica el Gran Tucumán-Tafi Viejo mostró porcentajes superiores de población bajo la línea de pobreza; y en el año 2002 la indigencia también fue mayor en el aglomerado tucumano.

CONCLUSIÓN

En el trabajo se analizó la dinámica que tuvieron la actividad económica, la población con problemas de empleo y la pobreza en Catamarca y Tucumán entre 1980 y el año 2002. En materia económica, si bien, al comienzo de este período, Catamarca se encontraba mucho más rezagada en cuanto a su importancia en la producción nacional, tuvo en las décadas consideradas un crecimiento mayor que Tucumán. Sin embargo, ambas economías, a pesar del incremento que tuvieron en los años 90, no lograron un desarrollo productivo destacado. El hecho de que una sola actividad, la minería, represente casi el 40% de la actividad económica catamarqueña en los últimos años bajo estudio, o bien, la circunstancia de que el sector terciario tenga un peso considerable en ambas economías –presentando el sector servicios una participación incluso mayor que la industria manufacturera– son expresiones de estructuras productivas que están alejadas todavía de los niveles de desarrollo económico que se consideran relevantes.

En la década de 1990, la apertura económica, la convertibilidad y la desregulación estatal, provocaron crisis en numerosas actividades cuyas producciones estaban orientadas al mercado interno. En ese contexto, los sectores más débiles que participaban de actividades importantes, como la azucarera en Tucumán, en muchos casos quebraron y fueron excluidos de las mismas. Hubo producciones, orientadas al mercado externo, que se expandieron, pero que no generaron una importante demanda de trabajo.

Estas transformaciones económicas y la existencia de una estructura económica sin posibilidades de generar una demanda importante de trabajo explican, en parte, el crecimiento que tuvo la población con problemas de empleo en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo. Mientras que en la década de 1980 había más desocupación en el aglomerado tucumano, a fines del período considerado era el Gran Catamarca el que presentaba un porcentaje mayor de desempleo.

Por otra parte, aunque en ambas provincias se registró una disminución de la población con *NBI*, no se puede aseverar que haya habido una reducción de la pobreza debido a las limitaciones que, como se indicó, tiene esta metodología. En cuanto a la población bajo las líneas de pobreza e indigencia, se puede afirmar que creció en ambos aglomerados provinciales.

Teniendo presente los dos métodos tradicionales de medición de la pobreza, Catamarca aparecía a fines del período bajo estudio menos afectada por la pobreza en comparación con Tucumán, a pesar de que esta última se caracterizó históricamente por tener una estructura productiva de mayor envergadura, mientras que Catamarca fue más conservadora en las transformaciones de sus actividades económicas. En ese sentido, futuras investigaciones se orientarán en la búsqueda de una explicación que permita una mayor comprensión acerca de estas realidades socioeconómicas disímiles de Catamarca y Tucumán.

ANEXO ESTADÍSTICO

Población bajo la línea de pobreza y línea de indigencia en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1995-2002)

Periodo	Gran Catamarca		Gran Tucumán-Tafí Viejo	
	% de población bajo la línea de pobreza	% de población bajo la línea de indigencia	% de población bajo la línea de pobreza	% de población bajo la línea de indigencia
Mayo-95	34	9	36	11
Oct.-95	36	13	39	12
Mayo-96	39	12	45	15
Oct.-96	47	19	45	19
Mayo-97	35	12	41	13
Oct.-97	37	13	42	15
Mayo-98	38	13	41	15
Oct.-98	40	11	41	15
Mayo-99	36	9	47	19
Oct.-99	40	14	40	15
Mayo-00	45	18	46	17
Oct.-00	42	16	43	17
Mayo-01	41	17	48	17
Oct.-01	40	17	46	18
Mayo-02	55	24	63	31
Oct.-02	61	29	71	39

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Población con problemas de empleo en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1980- 1989) (Ondas de mayo)

Periodo	Gran Catamarca			Gran Tucumán-Tafí Viejo		
	Desoc.	Subocup.	Des. + Suboc.	Desoc.	Subocup.	Des. + Suboc.
Mayo 80	5,9	4,3	10,2	6,3	4	10,3
Mayo 81	8,5	5,1	13,6	8,8	7,7	16,5
Mayo 82	6,4	9,7	16,1	11	7,3	18,3
Mayo 83	-	-	-	8,1	8,5	16,6
Mayo 83	5,2	13,6	18,8	8,5	8,2	16,7
Mayo 85	5,8	15,1	20,1	12,1	10,6	22,7
Mayo 86	9,2	15,5	24,7	14	9,8	23,8
Mayo 87	5,7	9,2	14,9	14,5	10,5	25
Mayo 88	6	12	18	11,3	10	21,3
Mayo 89	10,3	11,9	22,2	12,6	13,8	26,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Población con problemas de empleo en el Gran Catamarca y el Gran Tucumán-Tafí Viejo (1990-2002)

Período	Gran Catamarca			Gran Tucumán-Tafí Viejo		
	Desoc.	Subocup.	Des. + Suboc.	Desoc.	Subocup.	Des. + Suboc.
Mayo-90	10,5	12,6	23,1	11,5	12,3	23,8
Oct.-90	9,2	10,7	19,9	9,4	12,7	22,1
Junio-91	7,8	16,1	23,9	11,8	17,8	29,6
Oct.-91	9,0	12,3	21,3	11,4	12,5	23,9
Mayo-92	10,1	9,5	19,6	12,1	13,5	25,6
Oct.-92	5,9	13,8	19,7	12,5	13,1	25,6
Mayo-93	9,5	11,9	21,4	14,2	12,4	26,6
Oct.-93	9,7	11,9	21,6	11,8	14,2	26,0
Mayo-94	8,1	13,3	21,4	14,8	13,6	28,4
Oct.-94	7,5	15,4	22,9	14,2	15,3	29,5
Mayo-95	12,4	14,4	26,8	19,9	13,3	33,2
Oct.-95	12,1	15,8	27,9	19,1	14,9	34,0
Mayo-96	16,5	14,5	31,0	18,6	17,3	35,9
Oct.-96	12,7	15,3	28,0	21,8	17,0	38,8
Mayo-97	14,8	17,0	31,8	16,1	17,2	33,3
Oct.-97	13,2	14,1	27,3	15,5	15,9	31,4
Mayo-98	11,4	13,0	24,4	14,8	16,5	31,3
Oct.-98	12,5	13,1	25,6	14,9	16,8	31,7
Mayo-99	10,7	15,6	26,3	19,2	19,4	38,6
Oct-99	16,0	14,9	30,9	15,9	18,1	34,0
Mayo-00	19,6	13,6	33,2	19,9	17,3	37,2
Oct.-00	16,8	14,7	31,5	18,4	16,5	34,9
Mayo-01	22,3	15,5	37,8	18,4	18,8	37,2
Oct.-01	19,0	18,0	37,0	17,9	17,7	35,6
Mayo-02	25,5	18,5	44,0	23,0	19,5	42,5
Oct.-02	20,5	24,5	45,0	17,8	22,1	39,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

BIBLIOGRAFÍA

ARGERICH, Federico R. (1973), *Reseña Económica de Catamarca*, Dirección General de Planeamiento (Provincia de Catamarca), Catamarca.

BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN (2001), *Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Mondadori.

BOLSI, Alfredo, Pablo PAOLASSO y Fernando LONGHI (2006), “El Norte Grande Argentino entre el progreso y la pobreza”, en *Población y Sociedad*, n° 12/13, San Miguel de Tucumán, pp. 227-266.

CAMPI, Daniel (1998), *Estado nacional y desarrollo regional. El Noroeste Argentino y el modelo agroexportador, 1870-1914*, Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.

CARO, Raúl E. (2007), *Industria y minería. Catamarca, siglo XIX*, inédito.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, “Las Provincias en Cifras”, www.cfired.org.ar/esp2/indices/f_biblio.htm, 10 de abril de 2007.

DENIS, P. (1987), *La valoración del país. La República Argentina, 1920*, Buenos Aires, Solar.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE TUCUMÁN (2006), *Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán 2004/2005*, www.tucuman.gov.ar/planeamiento/anuario2005/index.html, 13 de abril de 2007.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE CATAMARCA (2004), *Anuario Estadístico 2003 Provincia de Catamarca*, vol. 9, Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca.

EL SIGLO (2005), “El cultivo de soja creció frente a la caña”, en *El Siglo*, 05/09/2005, Cuerpo Central, p. 6.

GATTO, Francisco y Oscar CETRÁNGOLO (2003), *Dinámica productiva provincial a fines de los años noventa*, Serie Estudios y Perspectivas, n° 14, Santiago de Chile, CEPAL.

INDEC (1982), *Censo Nacional de Población y Vivienda 1980*, INDEC, Buenos Aires.

INDEC (1993), *Censo Nacional de Población y Viviendas 1991*, INDEC, Buenos Aires.

INDEC (2003), *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001*, www.indec.gov.ar/webcenso/provincias_2/provincias.asp, 18 de abril de 2007.

INDEC, *Encuesta Permanente de Hogares*, “Tasa de desocupación por aglomerado desde 1974 en adelante”, <http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/shempleo4.xls>, 15 de abril de 2007.

INDEC, *Encuesta Permanente de Hogares*, “Tasa de subocupación por aglomerado desde 1974 hasta 1993”, <http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/shempleo5.xls>, 15 de abril de 2007.

INDEC, *Encuesta Permanente de Hogares*, “Tasa de subocupación demandante y no demandante por aglomerado desde 1993 en adelante”, <http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/shempleo6.xls>, 15 de abril de 2007.

LA GACETA (1996), “Se perdió el 9,3% de los negocios en Tucumán”, en *La Gaceta*, 27/10/1996, Cuerpo Central, p. 13.

LA GACETA (2003), “La desregulación azucarera golpeó duro al pequeño cañero”, en *La Gaceta*, 02/11/2003, 3° Sección, p. 4.

MANZANAL, Mabel y Alejandro B. ROFMAN (1989), *Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de desarrollo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina y Centro de Estudios Urbanos y Regionales.

MEDINA, Ramón D. (1989), *Tucumán y su economía azucarera*, Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.

MOORI-KOENIG, Virginia (2000), “Las reformas estructurales y el sector minero en Argentina”, en Daniel HEYMANN y Bernardo KOSACOFF, *Desempeño económico en un contexto de reformas*, Tomo II, Buenos Aires, Eudeba, pp. 288-323.

ORTIZ DE D’ARTERIO, Julia P. y Pablo C. PAOLASSO (2005), “Una aproximación al estudio del crecimiento de la población del NOA (1980-2001)”, en *Actas VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población*, Tomo I, Buenos Aires, INDEC, pp. 475-495.

PANAIA, Marta (2000), “El impacto de la crisis fiscal en el trabajo en negro: las provincias de noroeste argentino”, en *Sociologías*, n° 4, Porto Alegre.

RAPOPORT, Mario (2000), *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Macchi.

ROFMAN, Alejandro (1999), *Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar*, Buenos Aires, Ariel.

----- (2005), “Las transformaciones regionales”, en Juan SURIANO (dir.), *Dictadura y democracia (1976-2001)*, Col. Nueva Historia Argentina, Tomo X, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 331-376.

ROFMAN, Alejandro B. y Luis A. ROMERO (1997), *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto realizar una comparación entre la economía, la población con problemas de empleo y la pobreza de las provincias de Catamarca y Tucumán en el período 1980-2002, buscando indagar acerca del tipo de vinculación que hubo entre los tres fenómenos señalados en cada una de dichas provincias.

Históricamente la economía tucumana tuvo un peso preponderante en la región, lo cual se refleja en su mayor participación en la estructura productiva nacional respecto de la de las restantes provincias del Norte Grande Argentino (NGA). Por su parte, la economía de Catamarca, que tradicionalmente se encontró en una posición de rezago en comparación con la situación de Tucumán, mostró mayor dinamismo y tuvo un incremento en su participación en la estructura económica del país en los últimos años del período analizado.

En el plano laboral, la población con problemas de empleo en el aglomerado urbano más importante de ambas provincias

aumentó considerablemente, siendo mayor la desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo en casi todo el período considerado.

En cuanto a la pobreza, Catamarca muestra un descenso superior que Tucumán en la cantidad de hogares o de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Si bien la población bajo la línea de pobreza se incrementa en los aglomerados antes mencionados, hay un descenso de la misma en el Gran Catamarca en los últimos años del período bajo estudio. En ese sentido, Catamarca se destaca como la provincia menos pobre del NGA mientras que Tucumán no escapa a la situación general de niveles de pobreza muy elevados.

Partiendo de las diferentes realidades socioeconómicas que se señalaron, en el escrito, se indican algunos elementos que pueden contribuir en la búsqueda de las causas por las cuales, a comienzos del siglo XXI, Catamarca presenta niveles de pobreza más bajos que Tucumán.

ABSTRACT

This paper has as object to make a comparison between the economy, the population with problems of employment and the poverty of Catamarca and Tucumán in the time period of 1980-2002, searching to investigate wich kind of link there was between the three phenomenons indicated in each province mentioned.

Historically the economy of Tucumán had a preponderate weight in the region, wich is reflected in the main participation of the national productive structure in relation to the remaining provinces of the NGA. Beside, the economy of Catamarca, wich traditionally found herself in a position of delay, showed mayor dynamism and had increase in the participation of the economical structure of the country in the last years of the period analyzed.

In the level of labour, there was an important increase in the population with employment

problems in the most important mass of people of both provinces, in which as bigger the desocupation in the Gran Tucumán-Tafi Viejo in almost all the period considered.

As for the poverty, Catamarca shows a decline superior to Tucumán in the amount of homes o population with basic needs insatified (NBI). The population below the line of poverty increased in the mass of people, before mentioned. Nevertheless, there is a decline of the same in Gran Catamarca in the last years of the time period which is investigated. Therefore, Catamarca appears in those years the less poor province of the NGA, meanwhile Tucumán doesn't escape the general situation of a raised poverty level.

Starting from the different socioeconomic realities, the paper shows some elements which could contribut in the searching of the reasons of which Catamarca shows lower poverty level that Tucumán, in the start of the XXI century.

PALABRAS CLAVE

ECONOMÍA
DESOCUPACIÓN
POBREZA
CATAMARCA
TUCUMÁN

KEY WORDS

ECONOMY
DESOCUPATION
POVERTY
CATAMARCA
TUCUMÁN

SAN LUIS: DEL EMPLEO INDUSTRIAL AL REFUGIO ESTATAL. CAMBIOS Y DESPLAZAMIENTOS EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL

Mónica Páez

A partir de la implementación de las leyes de promoción industrial, en la provincia de San Luis se configuró una estructura sectorial del empleo con características particulares respecto de la del resto del país. En efecto, hasta la década de 1990, el sector secundario de la economía concentraba aproximadamente el 50% de los ocupados. Sin embargo, desde 1991 este escenario se modifica y aumentan los ocupados en el sector terciario de la economía.

La pérdida de peso de la industria como generadora de empleo no fue compensada por un incremento de otros sectores productivos: las ramas que muestran un comportamiento expansivo son Servicios y Sector Público. Como resultado de estos desplazamientos, se modificaron también la estructura de las ocupaciones y las calificaciones requeridas: quienes se habían capacitado laboralmente trabajando en la industria se encuentran hoy en un escenario en el cual sus calificaciones han perdido valor en un mercado que ahora demanda distintos saberes y capacidades. Frente a esto, el empleo estatal y las ocupaciones de baja calificación en el sector Servicios configuran un refugio, una alternativa a la desocupación.

Este trabajo analiza los cambios, rupturas y continuidades en la estructura ocupacional de la provincia de San Luis a partir de datos provenientes de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y de la Encuesta Permanente de Hogares.

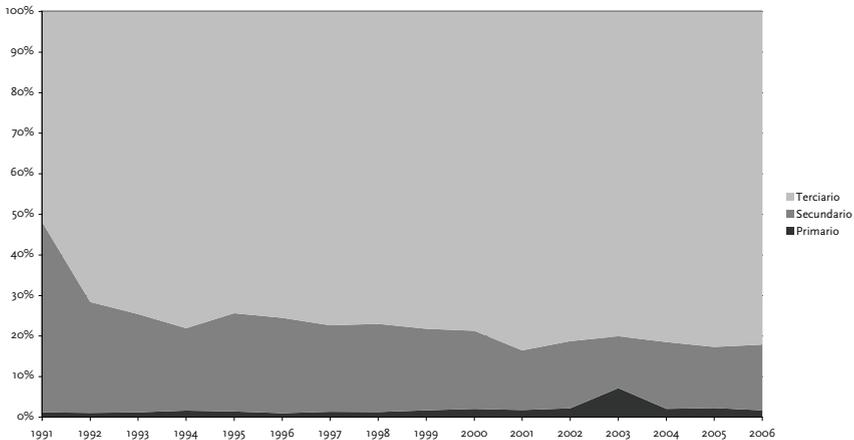
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO

Desde el inicio de la década de 1990, en la Argentina creció el empleo en los servicios y actividades terciarias y disminuyó en la industria y la construc-

ción. Vale decir, la estructura productiva y la forma en que la sociedad se organiza para la producción y distribución de las riquezas variaron hacia un escenario marcadamente diferente, relacionado, entre otras cuestiones, con la apertura a los mercados externos y con las nuevas estrategias de competitividad.

Estos procesos, si bien visibles para el total del país, tuvieron una expresión particular en la provincia de San Luis. En efecto, como consecuencia de la puesta en marcha de las leyes de promoción industrial,¹ en esa provincia el empleo en el sector secundario de la economía llegó a concentrar aproximadamente al 50% de los ocupados (Páez, 2004). Pero, a lo largo de la década de 1990, los beneficios de la promoción llegaron a su fin. Esto, sumado a los procesos más generales ya mencionados, llevó a que comenzara a caer la ocupación en el sector industrial y a que este sector fuera paulatinamente reemplazado por el sector terciario como principal generador de empleo.

Gráfico 1. Ocupados por sector. Aglomerado San Luis y El Chorrillo



Fuente: Elaboración propia según datos de EPH-INDEC.

Como puede observarse en el gráfico, hacia el final de la serie analizada el sector secundario de la economía apenas daba cuenta del 15% de la ocupación, frente al 82,5% del sector terciario. El hecho de que más del 80% de los ocupados pertenezca al sector terciario de la economía implica, además, que cambian notablemente las condiciones de la ocupación. En efecto, esta reestructuración

1 En 1982, la Ley Nacional 22.702 otorgó a las provincias de San Luis y Catamarca un conjunto de beneficios promocionales que implicaban fuertes incentivos al capital para la radicación de industrias en áreas periféricas de la economía nacional.

supone la pérdida de empleos formales y mayoritariamente estables y su reemplazo por empleos precarios e inestables en el sector terciario.²

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD

El comportamiento de los distintos indicadores de empleo según ramas de actividad económica posibilita una aproximación al análisis de la dinámica sectorial, es decir, brinda la posibilidad de considerar el sector de la economía al que pertenece el establecimiento dentro del cual la persona ejerce su empleo.

Como punto de partida, la información provista por los censos nacionales permite hacer un examen descriptivo sobre la totalidad de la población y detectar las variaciones a largo plazo.

El dato más relevante registrado entre 1980 y 1991 se refiere al aumento de los ocupados en la *Industria*. En efecto, mientras que en 1980 la *Industria* concentraba sólo al 10% de los ocupados, en 1991 –luego de la puesta en marcha de las leyes de promoción industrial– agrupaba a más del 23%. Sólo hubo otras dos ramas que crecieron, aunque en porcentajes mucho menores: *Comercio, restaurantes y hoteles* y *Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a las empresas* (Páez y Bussetti, 2005).

El resto de las ramas consideradas redujeron su participación en ese período. La caída fue particularmente significativa en el caso de *Agricultura, caza, silvicultura y pesca* y en el de la *Construcción*: ambas perdieron alrededor de un 30 por ciento.

Si se consideran las variaciones registradas entre 1991 y 2001, se advierte que la *Industria*, si bien aún agrupa a una parte importante de los ocupados, pierde más del 35% de participación, aunque sigue concentrando al 20% de los ocupados. Por oposición, los *Servicios financieros* muestran el incremento más pronunciado: 40%; sin embargo, sólo emplean al 4% de los ocupados. También registran un comportamiento ascendente la *Construcción* y el *Transporte*.

2 Si bien no existe un acuerdo teórico generalizado acerca de la necesidad de este traslado, estudios realizados para la Provincia de San Luis han encontrado que la mayoría de quienes trabajan “en negro” (no registrados) lo hacen en el sector terciario de la economía. Al mismo tiempo, se ha comprobado que el nivel de protección del asalariado aumenta junto con el nivel de ingreso, lo cual coloca a quienes menores ingresos reciben en condiciones de mayor desprotección (Véanse Páez *et al.*, 2004; Bussetti y Páez, 2005).

Cuadro 1. Distribución de la población ocupada según rama de actividad económica (en %)

Rama de actividad económica	1980	1991	2001
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	16,9	11,8	11,0
Explotación de minas y canteras	1,7	1,3	0,6
Industrias manufactureras	10,3	23,1	20,1
Electricidad, gas y agua	1,9	0,9	0,6
Construcción	12,8	9,1	10,1
Comercio, restaurantes y hoteles	12,6	16,0	15,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4,8	4,2	4,9
Finanzas, seguros, inmuebles y serv. a las empresas	2,2	3,0	4,2
Servicios comunales, sociales y personales	30,4	29,8	30,1
Actividades no bien especificadas	6,5	0,9	3,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001.

En valores absolutos, entre 1980 y 1991 se registró más de un 52% de ocupados. En el mismo período, la población de la provincia se incrementó en un 33,6%. Entre 1991 y 2001, si bien la población también registró un crecimiento importante (28,4%), la cantidad de ocupados sólo creció alrededor de un 3%. Consecuentemente, fue a partir de la década de 1990 cuando el mercado laboral sanluisense comenzó a mostrar signos de deterioro, a pesar de contar aún con los beneficios de la promoción industrial.

Este análisis se puede complementar con la información obtenida a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que, aunque tiene una cobertura geográfica más acotada,³ permite un seguimiento a lo largo de períodos de tiempo más reducidos, acortando la brecha intercensal.

La evolución de las distintas ramas de actividad a lo largo del período considerado⁴ confirma la pérdida de peso de la *Industria* como generadora de empleo: redujo más de un 40% su participación. La *Construcción*, por su parte, ha mostrado considerables fluctuaciones, aunque, si se consideran los extremos de la serie analizada, se observa un incremento del 51 por ciento.

3 La EPH que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se releva en el caso de San Luis sólo en la capital provincial y en uno de sus suburbios, lo cual implica que solamente tiene en cuenta al 44% de la población total.

4 La serie se ha definido en función de la disponibilidad de las bases usuarias para el aglomerado San Luis-El Chorrillo.

Cuadro 2. Ocupados por rama de actividad agrupadas. San Luis y El Chorrillo, 1992-2006 (en %)

Rama	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Act. primarias	1,1	1,2	1,7	1,4	1,0	1,3	1,3	1,7	2,0	1,8	2,2	1,3	1,8	1,9	1,8
Industria	27,3	24,2	20,3	24,1	23,5	21,3	21,7	20,1	19,2	14,7	16,5	14,8	16,5	15,2	16,3
Construcción	7,2	6,7	12,0	9,8	8,2	9,4	10,7	12,7	11,5	13,2	9,0	10,2	9,3	9,6	10,9
Comercio	15,8	17,0	16,0	13,9	15,7	16,8	17,8	18,1	15,1	16,3	14,4	16,4	11,9	12,6	16,9
Servicios	18,3	19,4	18,1	20,6	22,1	22,3	21,2	22,8	23,1	23,6	23,9	25,4	21,5	19,9	17,2
Sector Público	30,4	31,3	31,9	29,7	29,4	28,4	27,2	24,5	29,0	30,4	33,8	31,9	38,8	40,7	36,9
Otros	0,1	0,2	0,0	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de EPH-INDEC.

El hecho de que la única rama productiva que muestra expansión sea *Actividades primarias*, que sólo representa el 1,8% de los ocupados, mientras que el resto de las actividades tradicionalmente consideradas “productivas” se encuentra claramente en declive, marca una pauta de la transformación de la estructura productiva de la provincia.

Si se compara la evolución promedio de la ocupación en las distintas ramas a lo largo de las dos décadas se advierte que la industria perdió casi un 30% de participación, retracción que parece haber sido compensada por un aumento de ocupados en el sector público (casi un 20%) y en la construcción y los servicios (17% entre ambos).

Si se fragmenta la serie temporal para considerar el período 2002-2006, se evidencia claramente que la incidencia del Estado ha sido mayor en lo que va de la década de 2000.

En síntesis, en San Luis la distribución sectorial del empleo muestra un desequilibrio: crece principalmente en las actividades terciarias y cae marcadamente en la industria manufacturera.

Es cierto que en las economías desarrolladas se ha descrito también un desplazamiento sectorial del empleo desde la industria hacia los servicios –tercerización–, pero, evidentemente, este desplazamiento no se puede analizar de la misma forma en una sociedad en la cual los servicios –en su mayor parte, no integrados en cadenas productivas– se convierten en actividades refugio para los trabajadores expulsados.

LOS REFUGIOS

Frente a la evidencia de que el sector industrial se mostraba incapaz de absorber mano de obra⁵ y de que muchos sanluisenses tenían dificultades para insertarse en el mercado laboral, en el año 2003 el gobierno de la provincia puso en marcha el Plan de Inclusión Social *Trabajo por San Luis*.

El objetivo declarado del Plan se dirigía a eliminar la desocupación. Consecuentemente, podían inscribirse como beneficiarios todos los sanluisenses que así lo desearan, con la salvedad de que no tuvieran un empleo registrado. Las tareas previstas por el Plan como contraprestación se relacionaban, en una primera etapa, con la limpieza de paseos públicos. Más adelante surgió el Plan de Seguridad Comunitaria, cuyos miembros fueron reclutados dentro de los beneficiarios del Plan de Inclusión. La tarea que realizan estos beneficiarios se orienta a prevenir situaciones que pudieran requerir el auxilio de la fuerza policial.⁶

Aunque la ley que da origen al Plan sostiene que se dirige a todos aquellos *dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo*, los beneficiarios realizan tareas que exigen una escasa calificación: desmalezamiento de parques públicos y caminos con herramientas como picos y palas.⁷ Resulta difícil sostener que esta tarea mejore su calificación profesional o sus posibilidades de acceder a nuevos empleos en el sector privado.

Por otro lado, estos “empleos” que provee el Estado, si bien suministran un ingreso a los beneficiarios, distan mucho de ser empleos de calidad: los beneficiarios no cuentan con aportes jubilatorios ni recibos de sueldo, no reciben su pago en pesos sino en “Cheques de Inclusión”, no tienen vacaciones ni días por enfermedad pagos y tampoco aguinaldo.

Sin embargo, el Plan parece haberse configurado en un refugio idóneo tanto para los desplazados por las modificaciones en la industria como para los jóvenes que no conseguían insertarse en el mercado laboral y para las mujeres que, no siendo jefes de familia, vieron en el Plan una forma de complementar los ingresos del hogar.

Como consecuencia, a pesar de que el empleo en el sector público se redujo a partir de los procesos de privatización y achicamiento del Estado, en la provincia de San Luis da cuenta de más del 40% de los puestos de trabajo. Así, a través de la obra pública o, principalmente, de los programas sociales de empleo, el Estado provincial ha llegado a convertirse en el mayor empleador de la

5 A lo largo de la década de 1990 la desocupación se duplicó.

6 En la práctica, los integrantes de Seguridad Comunitaria tienen como tarea vigilar una o dos manzanas de la ciudad. No cuentan con capacitación en seguridad y tampoco portan armas.

7 De hecho, popularmente se conoce a los beneficiarios del Plan como “los pico y pala”.

economía provincial, desplazando al sector privado en la generación de puestos de trabajo.

De hecho, las últimas mediciones de la tasa de desocupación indican una importante reducción del número de desempleados: el porcentaje es de apenas el 2% en el segundo semestre de 2006.

Si bien, en función de las características de los “empleos” que provee el Plan, deberían tomarse ciertos recaudos antes de decidir si se los debe incluir como *puestos de trabajo*, a los fines de la medición del desempleo, el INDEC considera que los trabajadores que reciben ingresos del Plan están *ocupados*.

Cabe tener en cuenta, además, que una parte importante de los ocupados en planes aparecen registrados en la EPH como trabajadores de servicios sociales, no del sector público, lo que indica también la influencia de la cantidad de “empleos” generados en el Plan sobre las otras ramas de actividad. Por ejemplo, el análisis de la distribución de la población ocupada de la provincia de San Luis según el carácter y calificación laboral indica que al año 2003 –puesta en marcha del Plan– el rubro *Servicios varios* concentraba al 27,4% de los ocupados y al 71% de los beneficiarios del plan. Si se toman los datos en conjunto, se advierte que la EPH registra a los beneficiarios del Plan como *trabajadores de servicio de limpieza no doméstica (no calificado)*, dentro del rubro *Servicios varios*, que, junto con el rubro *Servicios Sociales Básicos*, concentran al 40% de los ocupados, como puede observarse en Cuadro 3.

Cuadro 3. Ocupados según carácter de la ocupación (CNO). San Luis y El Chorrillo, 2003-2006 (en %)

Ocupaciones de:	2003	2004	2005	2006
0 Dirección	3,4	2,8	3	3,9
1 Gestión adm., de planificac. y control de gestión, juríd. legal	4,7	5,8	9,2	7,2
2 Gestión presupuestaria, contable y financiera	2,5	3,0	3,0	3,1
3 Comercialización, transporte, almacenaje, telecomunicac.	16,8	16,4	14,1	19,8
4 Servicios sociales básicos	13,6	15,2	16,3	16,6
5 Servicios varios	27,4	23,6	25,4	20,6
6 Agrícolas, ganaderas, forestales, de la caza y pesca	1,7	3,4	1,6	1,6
7 Producción extractiva, energética, de construcc. e infraest.	14,2	10,6	10,4	10,6
8 Producción industrial, artesanal y de reparac. de bs. de cons.	13,7	17,5	15,9	15,1
9 Auxiliares de la producc. de bienes y prestac. de servicios	1,9	1,8	0,9	1,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de EPH-INDEC.

Adicionalmente, en las últimas mediciones, probablemente como consecuencia de la implementación del Plan de Seguridad Comunitaria, se puede advertir un traslado desde el rubro de *Trabajadores de limpieza no doméstica* a *Trabajadores de servicios de vigilancia y seguridad*.

Por otro lado, si se considera la calificación de las ocupaciones se advierte que el 80% corresponde a puestos sin calificación, lo cual indicaría que los servicios que más han crecido son los que no requieren de capacitación alguna para su desempeño.

En la estructura ocupacional general, el 52% corresponde a funciones operativas y el 28% a empleos que no requieren calificación. Tomando estos datos en conjunto, se advierte que más de dos tercios de los puestos de trabajo corresponden a ocupaciones de nula o escasa calificación, mientras que los profesionales y técnicos no alcanzan a cubrir un 20 por ciento.

CONCLUSIONES

Desde la implementación de las leyes de promoción industrial, en la provincia de San Luis se configuró una estructura sectorial del empleo que presentaba características particulares dentro del contexto del país. En efecto, hasta la década de 1990, el sector secundario de la economía concentraba aproximadamente el 50% de los ocupados. Pero desde 1991, se produce una pérdida creciente de empleos en la industria que aparece compensada por un aumento de los ocupados en el sector terciario de la economía. En la actualidad, el sector secundario apenas da cuenta del 15% de la ocupación, frente al 82,5% del sector terciario.

También se estancaron o decayeron otras ramas productivas. De hecho, la única que mostró un movimiento expansivo fue *Actividades primarias*, que solamente representa el 1,8% de los ocupados. A pesar de que la provincia –al menos en los últimos veinte años– se ha considerado “industrial”, muy por el contrario, las ramas que se han expandido son *Servicios* y *Sector público*.

Estos desplazamientos también han afectado a la estructura de las ocupaciones y las calificaciones requeridas: en la estructura ocupacional general, el 52% corresponde a funciones operativas y el 28% a puestos que no requieren calificación. Y tomando estos datos en conjunto, se advierte que, mientras que profesionales y técnicos apenas alcanzan al 20%, dos tercios de los puestos de trabajo corresponden a ocupaciones de nula o escasa calificación.

En efecto, solamente en el sector de servicios relacionados con alimentación, alojamiento, servicio doméstico y de limpieza y otros servicios personales ha aumentado el número de puestos de trabajo para todos los niveles de calificación. Particularmente, la mayor tasa de crecimiento corresponde a las funciones operativas.

Los servicios sociales básicos, que reúnen al mayor porcentaje de ocupados, mantienen una tendencia estable, aunque cambia su composición: menor cantidad de puestos profesionales y aumento de las ocupaciones operativas.

En síntesis, a pesar del fuerte impacto positivo generado en la provincia por los planes de promoción industrial, en la actualidad el sector terciario ha reemplazado al sector productivo de la economía en la generación de empleo. Consecuentemente, quienes habían adquirido una capacitación laboral trabajando en la industria, se encuentran hoy en un escenario en el cual sus calificaciones han perdido valor en el mercado, que requiere distintos saberes y capacidades. Frente a esto, el empleo estatal –particularmente el Plan de Inclusión Social– y las ocupaciones de baja calificación en el sector servicios configuran un refugio o alternativa a la desocupación.

Como consecuencia de la aplicación del Plan, en San Luis se ha configurado un escenario de pleno empleo. Sin embargo, como queda dicho, esto no es resultado de un esquema productivo basado en un sector manufacturero fuerte, con servicios integrados a sus productos y procesos. Por el contrario, el aparato productivo de la provincia genera una parte escasa de los puestos de trabajo mientras que es el Estado el que emplea en actividades de servicios personales a los desplazados o a los que no lograban otra inserción laboral.

BIBLIOGRAFÍA

BECCARIA, L. (2001), *Empleo e integración social*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

CATTANEO, M. (2001), “La EPH en los noventa: una mirada desde el usuario”, en *Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo*, Cuaderno del CEPED n° 5.

INDEC, *Censos Nacionales de Población y Vivienda*. Años 1980, 1991, 2001.

-----, *Diseño de registro y estructura de las Bases Usuarías EPH*, <http://www.indec.mecon.gov.ar/>

LINDENBOIM, J. (comp.) (1998), *El desafío del empleo a finales del siglo XX*, Cuaderno del CEPED n° 2.

MÉNDEZ, R. (1998), “Hacia una nueva división espacial del trabajo en España”, en C. DE MATTOS, D. NICOLAS y D. BOTERO (comps), *Globalización y Territorio. Impactos y Perspectivas*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.

MORE, S. (2001), “Mercado de trabajo urbano regional. Argentina 1990-1999”, en *Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo*, Cuaderno del CEPED n° 5.

NEFFA, J. (2002), “Promoción del empleo y derechos laborales”, en *Hacia El Plan Fénix. De la crisis actual al crecimiento con equidad*, en <http://www.econ.uba.ar/www/planfenix/aportes/textos/5/Neffa.doc>

PÁEZ, M. (2004), *El ingreso y su distribución. Análisis por rama de actividad en la provincia de San Luis durante la década del 90*, tesis de Maestría, UNSL.

PÁEZ, M. y M. BUSSETTI (2005), “Estructura ocupacional de la provincia de San Luis”, 7° Congreso ASET, CD-ROM. ISBN 987-98870-2-6

PÁEZ, M. *et al.* (2004), “Distribución del ingreso en San Luis. 1998-2003”, en *Actas del 15° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas-FACPCE*, Salta, Ed. Buyatti.

RESUMEN

A partir de la implementación de las leyes de promoción industrial, en la Provincia de San Luis se configuró una estructura sectorial del empleo con características particulares respecto de la del resto del país. En efecto, hasta la década de 1990, el sector secundario de la economía concentraba aproximadamente el 50% de los ocupados. Sin embargo, desde 1991 este escenario se modifica y aumentan los ocupados en el sector terciario de la economía. La pérdida de peso de la industria como generadora de empleo no fue compensada por un incremento de otros sectores productivos: las ramas que muestran un comportamiento expansivo son Servicios y Sector Público. Como resultado de estos desplazamientos, se modificaron también la estructura de las ocupaciones y las calificaciones requeridas: quienes se habían capacitado laboralmente trabajando en la industria se encuentran hoy en un escenario en el cual sus calificaciones han perdido valor en un mercado que ahora demanda distintos saberes y capacidades. Frente a esto, el empleo estatal y las ocupaciones de baja calificación en el sector Servicios configuran un refugio, una alternativa a la desocupación. Este trabajo analiza los cambios, rupturas y continuidades en la estructura ocupacional de la Provincia de San Luis a partir de datos provenientes de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y de la Encuesta Permanente de Hogares.

ABSTRACT

Since the implementation of industrial promotion laws, in San Luis' province there was shaped a sectorial structure of employment that showed particular characteristics, different from the rest of the country. Actually, up to 1990, the secondary sector of the economy was concentrating approximately 50% of occupied workers. Nevertheless, from 1991 this scene modifies and workers occupied in the tertiary sector of economy increase. This loss of weight of Industry as employment generator was not compensated by an increase of other productive sectors: the only branches that show an expansive behavior are Services and Public Sector. As a result of these displacements, there was also modified the structure of the occupations and the qualifications required for workers. Thus, those who had qualified being employed at the industry find themselves today in a scene in which their qualifications have lost value on a market that now demands different knowledges and capacities. In this situation, public employment and low qualification occupations in Services appear as a refuge, an alternative to unemployment. This work analyzes the changes, breaks and continuities in the occupational structure of San Luis' province according to information of the National Censuses of Population and Housing and of the Permanent Survey of Homes.

PALABRAS CLAVE

RAMAS DE ACTIVIDAD
ESTRUCTURA OCUPACIONAL
CALIFICACIONES

KEY WORDS

ACTIVITY BRANCHES
OCCUPATIONAL STRUCTURE
QUALIFICATIONS

LA POBREZA: EN EL ENCUENTRO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

Elena Abraham

Elsa Laurelli

Elma Montaña

Gabriela Pastor

Laura María Torres

INTRODUCCIÓN

Aquellas teorías del desarrollo regional elaboradas hace más de cincuenta años para interpretar la evolución de las economías nacionales y de sus subespacios regionales en el interior de los países de América Latina no responden ya a las problemáticas y desafíos planteados por los territorios actuales. La fuerte articulación entre las escalas local, regional y mundial que imponen los procesos de globalización de la economía, la competencia por los mercados y la necesidad de innovar generan un ajedrez territorial formado por piezas locales de producción flexible y especializada en permanente competencia entre sí. Esta intensificación de las relaciones entre los sistemas productivos locales y el sistema mundial impulsa nuevas territorialidades en los espacios periféricos. Es así como, sobre la base de herencias de épocas anteriores, se está produciendo no solamente la transformación de los sistemas de producción sino, asimismo, la aparición de nuevos contenidos sociales y políticos. En otras palabras, se están modelando nuevos territorios.

Elena Abraham pertenece al Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Directora del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento del Territorio (LADYOT), Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT).

Elsa Laurelli pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Coordinadora Científica del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento del Territorio (LADYOT), Directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).

Elma Montaña pertenece al CONICET, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) LADYOT, CRICYT.

Gabriela Pastor pertenece al CONICET, IADIZA, LADYOT.

Laura María Torres pertenece al CONICET, IADIZA, LADYOT.

Las categorías que se han utilizado en las últimas décadas para identificar los procesos territoriales han ido mostrándose progresivamente insuficiente. Conceptos como Primer Mundo, Tercer Mundo, centros, periferias, “nuevas periferias”, sectores formales e informales de la economía, sectores excluidos, aunque son de utilidad resultan limitados si no se emplean en el marco de discursos integrales y complejos que no sólo busquen nuevas respuestas sino que admitan nuevas preguntas sobre las transformaciones territoriales. En este contexto, se advierte la necesidad de integrar marcos conceptuales y de recuperar e incorporar, respectivamente, viejas y nuevas categorías de análisis. Es así como la *pobreza* y la *segregación socioespacial* son revalorizados como fenómenos que transversalizan buena parte de los análisis sobre los territorios que se hacen desde diversos enfoques de las ciencias sociales y con abordajes interdisciplinarios.

Estas reflexiones surgen de investigaciones en curso sobre las transformaciones territoriales en las tierras secas del centro-oeste de la Argentina. Los procesos de transformación de estos territorios periféricos sólo pueden entenderse a la luz de la pobreza creciente, tal como ha sido planteado en el proyecto PICT N° 13-1504 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Argentina (desde hace alrededor de tres años) y también en una experiencia en la región que llevó a la creación del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento del Territorio (LADYOT) en el CRICYT. Aquí, sólo se ha logrado encarar la complejidad de esta pobreza desde un marco conceptual que surge del encuentro de dos abordajes: *el ordenamiento territorial y la lucha contra la desertificación*.

El ordenamiento territorial y la lucha contra la desertificación son dos vertientes del conocimiento con gran entidad en sí mismos; sin embargo, no es frecuente encontrar que sus enfoques y perspectivas se articulen y, yendo más allá, que se integren en propuestas operativas que sinergicen sus resultados.

Se advierte que, de la integración de ambas, podrían resultar *desarrollos teóricos, metodológicos y propuestas de intervención* capaces de mitigar las condiciones de inequidad y pobreza que se registran en amplios territorios de tierras secas de la Argentina. Las vertientes del conocimiento a las que se ha hecho referencia han avanzado en el planteo de soluciones frente a diversas problemáticas, pero se entiende que, si ambas se suman en una acción conjunta, el resultado puede ser aún más significativo, dado que sería posible formular propuestas alternativas que contribuyan a mitigar las condiciones de pobreza e inequidad territorial. Por otra parte, ambas reconocen problemas comunes dentro de los que se destaca la ausencia de una metodología que integre las dimensiones socioeconómicas e institucionales con el soporte físico-biológico en un análisis *multiescalar*, basado en la rigurosidad de la obtención y evaluación de indicadores y puntos de referencia, que articule los conocimientos científicos con los saberes locales y tradicionales, que permita aprehender la particularidad y especificidad de lo local en vínculo con lo global y, finalmente, que asegure instancias de comparación interregional e internacional. Esta metodología debe ser capaz de

articular un mismo objeto de estudio e intervención a través de las estrategias de desarrollo sustentable y de lucha contra la pobreza. La validación de la propuesta se realiza a partir del estudio de caso en desarrollo en la Provincia de Mendoza.

NUEVOS CAMINOS PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DESDE LOS VIEJOS PROBLEMAS

La fragilidad inherente a los ecosistemas de tierras secas,¹ que cubren más de la tercera parte de las tierras emergidas del planeta, los hace sumamente vulnerables a la sobreexplotación y al aprovechamiento inadecuado de la tierra. La lucha contra la desertificación busca garantizar la productividad a largo plazo de las tierras secas y promover mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Para ello fue necesario un enfoque integral, que colabore en el conocimiento de sus verdaderas causas y consecuencias y que sea capaz de introducir cambios a distintos niveles, tanto locales como regionales e internacionales.

En esa búsqueda es que la Convención Internacional de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UN CCD) define a la desertificación como “la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”. En esta definición, cada uno de los conceptos tiene un alcance específico que permite aprehender la complejidad de los procesos de desertificación, explicitados en el texto actualizado de la Convención (UN CCD, 1999).

A diferencia de visiones anteriores, actualmente la UN CCD centra su enfoque en alentar la implementación de programas de acción que buscan articular el conocimiento con la gestión de los recursos y la toma de decisión, promoviendo principios como la planificación participativa, la descentralización, el mejoramiento de los sistemas de tenencia de la tierra, el fortalecimiento de la participación de las mujeres y de las comunidades locales y la construcción de alianzas y acuerdos de asociación en el proceso, sobre todo con las ONG y las OG. Según los propios conceptos de la UN CCD, “la desertificación sólo se podrá revertir introduciendo cambios profundos en las pautas de comportamiento locales e internacionales. Estos cambios graduales conducirán finalmente al uso sostenible de las tierras y garantizarán la seguridad alimenticia para la creciente población mundial. Por tanto, en realidad, la lucha contra la desertificación es sólo parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sostenible de los países afectados por la sequía y la desertificación” (UN CCD, 1999).

1 Las tierras secas, definidas como aquellas que reciben menos de 500 mm anuales de precipitación, han sido clasificadas en zonas semiáridas, áridas y subhúmedas secas; pero, en realidad, no hay un límite entre ellas sino una continuidad natural que facilita su permanente expansión o retracción de acuerdo con el uso que hacen de ellas los grupos humanos. En estas tierras vive el 38% de la población mundial.

La desertificación tiene una incuestionable relación con la pérdida de territorios productivos.² Es un problema ambiental de alcance mundial con fuertes implicaciones en el ámbito productivo. Es un proceso específico que se distingue de fenómenos similares en otras zonas más húmedas del mundo porque tiene lugar en condiciones climáticas muy duras y afecta negativamente a zonas con recursos naturales limitados de suelo, agua y vegetación. Este proceso influye cada vez más en la degradación ambiental del planeta y desempeña un papel importante en la contaminación del agua, del aire y del suelo, en la deforestación, en las pérdidas de suelo y en el cambio climático. Tiene un peso sustancial en la disminución de la diversidad biológica en el mundo. Aumenta la pérdida de biomasa y de productividad y contribuye al agotamiento de la reserva mundial de humus, perturbando las transformaciones biogeoquímicas mundiales. Reduce la proporción de agua y de suelo disponibles. Es en gran medida responsable del cambio climático porque aumenta el albedo de la superficie terrestre y disminuye la tasa actual de evapotranspiración, modificando el equilibrio energético en la superficie y la temperatura del aire contiguo y añadiendo polvo y dióxido de carbono a la atmósfera (UN CCD, 1999).

De igual manera, la estrecha relación entre *desertificación* y *pobreza* se encuentra crecientemente ligada a los procesos sociales. Más aún: *se considera que la desertificación es causa de la pobreza y es agravada por la pobreza*. Los índices de desarrollo humano del PNUD muestran que los países menos avanzados suelen ser los más afectados (PNUMA, 1991).

Una de cada cinco personas del mundo vive en una zona afectada por desertificación. El mapa mundial de la desertificación (Naciones Unidas, 1992) advierte que esta amenaza se cierne sobre el 74% de Australia, el 34% de África, el 31% de Asia, el 19% de América y el 2% de Europa. Las tierras secas bajo riesgo de degradación se extienden en 110 países, afectando a una población de más de 900 millones de personas, altamente vulnerable a las fluctuaciones climáticas, marginada y prácticamente ignorada por los planificadores del desarrollo. Según datos del Atlas de Desertificación, “cada año alrededor de 6.000.000

2 La palabra “desertificación” suele asociarse a la “formación de desiertos”, y se utilizan indistintamente los términos “desertización” y a veces “aridización”. Por definición –y cabe señalar que el concepto asociado a “desertificación” motivó una solicitud específica a la Real Academia de la Lengua Española para que se incorporara este término al castellano, solicitud que fue aceptada–, la desertificación no es un problema de los desiertos, sino que es la consecuencia de la sobreexplotación que los grupos humanos hacen de las tierras secas. El clima –fundamentalmente la recurrencia de fenómenos como las sequías– juega un papel catalizador, pero no es determinante del proceso. Si lo son las prácticas agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo, la deforestación, los procesos de urbanización, la expansión de la frontera agropecuaria, el mal manejo del recurso hídrico que favorece el anegamiento y la salinización de los suelos, o los procesos de empobrecimiento de la población, que generan miseria y migración. Es preferible reservar el término “desertización” para utilizarlo en aquellos casos aislados donde fehacientemente puedan determinarse sólo causas naturales, fenómenos físicos, que determinen la formación de desiertos, teniendo en cuenta la excepcionalidad de este fenómeno, ya que en la actualidad prácticamente no existen ambientes en el planeta que no estén afectados –directa o indirectamente– por la acción antrópica (Abraham, 2002).

de ha de tierras anteriormente productivas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas pierden su capacidad de producir alimentos” (UNEP, 1992). Esta destrucción de la capacidad productiva en el nivel mundial cuesta alrededor de U\$S 42,3 billones por año.³ El 70% de las tierras secas del mundo utilizadas para agricultura están afectadas, en mayor o menor medida, por desertificación. En 1984, 135 millones de personas sufrieron sus efectos, convirtiéndose en los llamados “inmigrantes de la tierra”.

Los procesos de desertificación son complejos e implican un ciclo de causa-efecto natural y social. La deforestación, la degradación del suelo y de la vegetación, el agotamiento de los campos cultivados, la salinización de las tierras bajo riego, la drástica reducción y contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, la desaparición de la fauna silvestre son factores que tienen tremendas consecuencias para muchos habitantes agobiados por la pobreza que viven en las tierras secas. Sin capital ni control sobre las decisiones respecto de sus recursos, muchos no han tenido otra opción que sobreutilizarlos o emigrar, abandonado sus tierras porque estas ya no pueden mantenerlos.

Finalmente, y resumiendo, la definición de desertificación de la UN CCD articula cuatro dimensiones: por un lado, las múltiples relaciones entre el soporte físico-biológico de las tierras secas (oferta) y la demanda que de este hacen los grupos sociales; por otra parte, estas relaciones entre lo físico-biológico y lo social se inscriben en el espacio y en el tiempo, introduciéndose de este modo los conceptos de niveles de aplicación y escalas espaciales y temporales. La idea que subyace a esta aproximación es la concepción del ambiente como valor para el desarrollo sustentable de una región (Abraham, 2003).

La pobreza en el mundo: América Latina y la Argentina

El 25% del territorio de América Latina y el Caribe (ALC) son tierras secas. En ellas habita el 28% de la población. El 35% de esta población está afectada por situaciones de pobreza y entre los pobres el 16 % vive en condiciones de pobreza extrema. Un dato que no es menor para entender las condiciones actuales es que el 75% de la población de ALC vive en áreas urbanas.

Esta situación afecta a los sistemas productivos. No existen cifras actualizadas. Según datos de PNUMA (1991), el problema de la desertificación alcanza cifras alarmantes en las tierras secas de América del Sur: del total de 420,67 millones de hectáreas de tierras utilizadas para fines agrícolas, 305,81 millones están degradadas, lo que representa un porcentaje del 72,7%. Entre estas, las tierras cubiertas por pastizales dedicadas a la producción animal (390,90 millones de hectáreas) son las que tienen mayor superficie afectada: 297,75 millo-

nes, o sea un 76% del total. Les siguen las tierras de cultivo de secano: del total de 21,35 millones de hectáreas que representan dichas tierras, están degradadas 6,64 millones, es decir, el 31%. Finalmente, de los 8,42 millones de hectáreas de las tierras de regadío, 1,42 están degradados (17%). Es evidente que revertir esta situación será no solamente muy costoso sino, sobre todo, muy difícil.

Se calcula que, para recuperar una superficie afectada total de 8.415.000 hectáreas en las tierras bajo riego de las zonas secas de América del Sur, las medidas directas de lucha contra la desertificación sumarían un costo global de entre U\$S 2.024.000 y U\$S 5.211.000.

La lucha en el interior de las Américas es una lucha desigual. Los gobiernos de América del Norte han invertido billones de dólares para minimizar las pérdidas de tierras productivas. Baste recordar los efectos de la llamada “carrera por la fiebre del oro” en las primeras décadas del siglo en las tierras de los estados del Este de los Estados Unidos y compararlos con la situación actual. Hace más de 70 años, con la administración Roosevelt, comenzó la política de conservación de suelos. En los últimos 60 años, los EE.UU. han gastado un billón de dólares por año en el Servicio de Conservación de Suelos.⁴

Ante estas cifras ¿cómo puede esperarse que las naciones más pobres de América Latina y el Caribe, agobiadas por el endeudamiento y la crisis, luchan contra la desertificación sin inversiones similares? ¿Cómo podrían responder a las crecientes presiones de la declinación socioeconómica, la pobreza y la migración y, al mismo tiempo, poner en valor sus recursos naturales y sociales? *Estas fueron las preguntas que se formularon los países latinoamericanos que participan en la UN CCD, organizados en el Grupo de Países de América Latina y El Caribe (GRULAC).*

América Latina: diversidad de situaciones a nivel de países

La diversidad de relaciones oferta ambiental-demanda a lo largo de América Latina conforma un cuadro heterogéneo, como se puede apreciar en los datos extraídos de los distintos Programas de Acción Nacionales. En la Argentina, el 75% del territorio está afectado por problemas de desertificación, pero en esta zona sólo habita el 30% de su población. En Brasil, por el contrario, sólo el 18% de su territorio es árido o semiárido, pero allí viven 18,5 millones de personas. En las tierras secas peruanas, que alcanzan el 38% del territorio, habita casi el 90% de la población. En Chile, la desertificación afecta gravemente a 47 millones de hectáreas –sobre todo en las III y IV Regiones– y fuertes procesos erosivos se presentan desde la Región Metropolitana hasta la Patagonia. Del total de casi 1.100.000 km² de la superficie de Bolivia, aproximadamente

4 Actual Servicio de Conservación de Recursos Naturales.

340.000 km² están sujetos a un acelerado proceso de desertificación; esto representa el 31% del territorio y la población afectada se calcula en más de 3.600.000 habitantes.

Por otra parte, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela presentan una muy baja proporción de tierras secas, pero no están exentos de problemas causados por actividades antrópicas. En el Caribe, Cuba es el país que presenta el mayor porcentaje y afectación, pero prácticamente todos los estados insulares, sobre todo Jamaica, Barbados y Antigua y Barbuda están amenazados, en mayor o en menor grado, por la fragilidad de sus ecosistemas y la alta presión sobre los recursos.

La urbanización creciente suele ser un aspecto clave en estas situaciones. Esta se refuerza en un proceso que vincula la sobreexplotación de los recursos y la degradación de las tierras con las pérdidas de productividad y el éxodo rural. La desertificación es uno de los factores que aceleran el proceso de urbanización, que se incrementa permanentemente en los países en desarrollo: en los últimos cincuenta años se cuadruplicó la población de muchas ciudades iberoamericanas, como por ejemplo Bogotá, México DF, San Pablo y Managua. En México, donde las tierras áridas alcanzan casi el 40% de su territorio, el 18,3% de la población (17 millones de personas) vive en el Distrito Federal, que representa el 0,3% del territorio. Esta situación ha provocado la sobreexplotación del acuífero del Valle de México, hecho que trajo como consecuencia, entre otros fenómenos, el hundimiento de la ciudad.

Los procesos de globalización emergentes de políticas económicas de corte neoliberal

Sobre los procesos mencionados y las ya históricas dificultades para incorporar ecuaciones de sustentabilidad en la planificación del desarrollo, cabe agregar un factor adicional propio de los últimos decenios: el proceso de globalización y la aplicación de políticas económicas de inspiración neoliberal en los países de América Latina. En distintos momentos y con efectos diversos –entre los que destaca la gravedad del caso argentino–, ellos han determinado severas consecuencias sociales y económicas.

La aplicación de estos modelos, donde la globalización se instala como campo perceptivo y operacional, atraviesa al conjunto de las sociedades. La globalización económica y cultural, la apertura de las economías y la interpenetración de los mercados, los cambios en la gestión empresarial y de los procesos productivos en el marco de las privatizaciones, el avance del capital privado y de sus inversiones como “ordenadoras” del territorio, los modelos de concentración de la población y de la producción –cuya máxima expresión son las macrociudades– se transforman en los verdaderos organizadores de los espacios económicos y del territorio (López Levi, 1993). Los efectos territoriales y ambientales

de esta reestructuración económica derivados del avance del mercado y de la visión cortoplacista del capital se vinculan con la debilidad del Estado para aplicar políticas y acciones orientadas a prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos, en un contexto económico y social que se caracteriza por la tendencia a la exclusión social y a la degradación ambiental.

En este marco se han agudizado desigualdades territoriales preexistentes. A las viejas periferias, definidas como territorios dependientes, se suman hoy nuevas periferias que ni siquiera se relacionan subordinadamente con los centros dinámicos sino que son francamente ignoradas y excluidas (Montaña, 2003). La simplificación de las identidades y la desvalorización de lo local tienen, asimismo, profundas consecuencias en la expansión de los procesos de desertificación.

UN CAMINO HACIA EL ENCUENTRO DE UNA METODOLOGÍA

Las características de las problemáticas y su dispersión geográfica han conducido a la necesidad de encontrar una modalidad de trabajo que cumpliera al menos con dos premisas. Por un lado, salvar la discontinuidad territorial con la continuidad temporal; por otro, complementar el trabajo continuo en red, en formato no presencial, con las instancias o eventos puntuales necesariamente presenciales.

Para que esto sea posible, se ha previsto una modalidad en la que se pueda trabajar de modo continuo en una plataforma en línea cerrada, diseñada especialmente según las necesidades. A tal fin, se selecciona una aplicación con plataforma en Internet de código abierto, de las múltiples disponibles en el mercado. Esta modalidad operativa permite la interacción tanto en el “espacio de los lugares” como en el “espacio de los flujos” (Castells, 1998). Dicho en otras palabras, posibilita complementar el trabajo en el espacio-tiempo de los lugares donde las distancias físicas separan y el tiempo está regido por la naturaleza con aquel otro realizado en el espacio-tiempo artificial, cuya infraestructura son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y donde, a su vez, las distancias no existen y el tiempo es continuo, precisamente por ser artificial.

Esta modalidad permite realizar un aporte diferencial a los resultados en lo concerniente a sus aspectos cualitativos, aporte que se fundamenta en las ventajas del trabajo en línea, que brinda la posibilidad de *gestionar información* y *producir conocimiento en red* de modo continuo en el tiempo, reproduciendo de esta manera el tipo de trabajo que usualmente realizan los equipos cuando se reúnen en talleres o seminarios intensivos presenciales.

Al encuentro de una metodología

La estrategia de desarrollo de nuevos conocimientos –y la consecuente naturaleza del perfil de la problemática– obligó al diseño de una metodología que se desarrolla en dos dimensiones: una de nivel inferior, correspondiente a cada uno de los equipos, y una situada en un plano superior, que se enfoca a la articulación de dichos equipos en un mismo proyecto.

Consideramos que resultó pertinente plantear un *diseño de investigación estructurado* para el caso del trabajo en el interior de los grupos, mientras que era adecuado un *diseño emergente* para la parte de la metodología que responde principalmente a los objetivos generales y que se focaliza en la articulación de los equipos de trabajo. Se trata de que las decisiones de diseño tomadas en fases preliminares del proceso de investigación no comprometan las riquezas de la articulación buscada, permitiendo asegurar productos de primer nivel en una estrategia de producción científica y una modalidad de trabajo en *red*.

Por lo tanto, para esta dimensión integradora de la metodología se propuso un diseño de investigación emergente que “no se estampa mediante un molde o modelo que sirvió una vez sino que se moldea cada vez a partir de los criterios maestros generadores de respuestas” (Valle, 2000, p. 79). Su característica principal es la de guiarse por los resultados del avance de la investigación y ser capaz de adaptarse en pos de la mayor calidad y profundidad de los nuevos conocimientos a adquirir.

Por otra parte, mientras que no se anticipan mayores dificultades en el trabajo con metodologías cuantitativas en problemáticas específicas en las que la presencia del medio biofísico es fuerte, esta alternativa se hace inviable cuando los temas incluyen contenidos del ámbito social, como es frecuente en los análisis territoriales. Lo mismo ocurre cuando las bases de datos son incompletas y/o inconsistentes o la información no da el nivel de detalle que se requiere. En estos casos, se previó recurrir a la perspectiva etnográfica que, mediante técnicas cualitativas de investigación, resulta particularmente útil para el abordaje de las problemáticas sociales, en especial la de las identidades emergentes en las regiones estudiadas. Por ello, esta decisión de diseño implica abrir el juego de las estrategias de triangulación metodológica, combinando las técnicas *cuantitativas con las cualitativas*.

Para esto se identifican y caracterizan actores relevantes y se construyen categorías de análisis que dan cuenta de los procesos en curso, que permiten establecer criterios para un tratamiento comparativo de los casos y que son susceptibles de aplicar en terreno mediante técnicas como las entrevistas en profundidad (Kvale, 1996) y las entrevistas grupales (Krueger, 1994), la observación participante y las historias de vida (Delgado y Gutiérrez, 1995; Taylor y Bogdan 1992). Esta identificación y construcción de categorías parte de la evidencia cuantitativa y se ajusta con la evidencia cualitativa de terreno, y, finalmente, se llega a explicaciones contextualizadas desde la mirada de los sujetos de estudio (Geertz, 1973, 1988; Glaser y Strauss, 1999).

El empleo de métodos cualitativos es útil para comprender los fenómenos, procesos y patrones estudiados en términos de una realidad compleja y dinámica de sistemas que articulan procesos sociales y biogeofísicos históricamente determinados (Burch y DeLuca, 1984; Burdge, 1998; Machlis *et al.*, 1994; Machlis *et al.*, 1997). Además, dichos métodos resultan útiles para profundizar los análisis contextuales, relacionales y estructurales, enriquecer las hipótesis, facilitar la comparación de los casos y efectuar triangulaciones para incrementar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

DESDE EL ABORDAJE DEL CASO: EL DESIERTO DE LAVALLE

Los problemas de desarrollo y de investigación: su identificación

La propuesta desde el caso del desierto de Lavalle (Provincia de Mendoza, Argentina) que se presenta posee rasgos diferenciales que afirman su carácter innovador respecto de las estrategias hasta ahora implementadas tanto por los planes de desarrollo como por otras actuaciones destinadas al aprovechamiento de los recursos de un área que ha sido devastada en sus recursos naturales. Se basa en el reconocimiento del potencial de desarrollo existente en el medio rural desde una *óptica del desarrollo sostenible superadora del enfoque compensatorio y asistencial* (IIICA, 2000, p. 13) y se enmarca en una concepción de “desarrollo territorial” que tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente un territorio con mercados dinámicos (Schejtman y Berdegué, 2003, p. 32).

Esta experiencia ha recibido el nombre de Unidad Demostrativa de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Culturales del Territorio (UPYS) y se desarrolla en el marco del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Pobreza, de acuerdo con los términos de la UN CCD. En términos generales, se propone: generar estrategias de desarrollo sustentable en comunidades rurales originarias del desierto de Mendoza; mejorar el estado del ecosistema a través de un manejo integrado de recursos naturales y culturales; promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las tierras secas. Además, se ha considerado la compatibilización entre la regeneración del ecosistema y la inversión en infraestructura y servicios, la transformación y diversificación de las actividades productivas, y, consecuentemente, la generación de empleo y el aumento de la renta.

El objetivo que se persigue con la creación de esta Unidad Demostrativa es posicionarse en mercados más dinámicos con productos de calidad emanados de territorios periféricos (Pastor, Abraham y Torres, 2005). Se trata de una experiencia que potencia la base productiva a través de un aprovechamiento múltiple y sustentable de los recursos naturales y culturales con el fin de lograr una amplia gama de productos y servicios. En este marco, la UPYS procura incidir en las prácticas productivas vigentes con el fin de que los habitantes puedan orientarse

hacia otras prácticas sustentables, sustituyendo o mejorando las actuales –que, en el mediano y largo plazo, se constituyen en fuente de degradación ambiental– por otras que incorporan conceptos y prácticas de conservación en aspectos tales como el adecuado manejo del rodeo, la preservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, la sanidad animal y humana, la organización social, la eficiencia en el riego, el reciclado de residuos, el aprovechamiento de los recursos hídricos y de las energías no contaminantes, la producción de abonos orgánicos, los servicios turísticos y culturales y, fundamentalmente, la obtención de productos alimentarios sanos.

La estrategia se organiza según un sistema de estabulamiento de cabras en su máximo período productivo lácteo y se basa en la optimización de la producción a través de la incorporación de técnicas que capitalizan los saberes asociados a las prácticas tradicionales y permiten generar un alto impacto en la diversificación de la producción disminuyendo los factores de presión sobre el territorio –mitigación y desaceleramiento de los procesos de desertificación–. En paralelo, se pretende favorecer el empoderamiento de la Comunidad Original Huarpe Paula Guaquinchay, especialmente de sus mujeres, y se incentiva la asociatividad de los miembros de la comunidad en alianza con otros actores sociales, se recuperan y mejoran las técnicas constructivas tradicionales propias del desierto, se impulsa la producción de artesanías y se pone en valor, se desarrolla y se enriquece el patrimonio gastronómico de la región.

Dado el contexto en que se desarrolla, esta actuación ha incorporado nuevos valores de significación que señalan el potencial de replicación que tiene la estrategia. El desierto de Lavalle posee condiciones ambientales, sociales, culturales y de organización altamente representativas de las que se presentan en las tierras secas del centro-oeste argentino –con una extensión aproximada de 614.000 km²– y en otros países de América Latina afectados por desertificación, lo cual evidencia la importancia del trabajo y asegura la replicabilidad de los resultados en estos territorios.

El camino recorrido

Tras más de 20 años de trabajo sostenido en investigaciones y transferencias para el desarrollo de las tierras secas de Mendoza, el LADYOT, en el año 2003, ha comenzado a desarrollar, ejecutar y operar sus acciones desde esta Unidad Demostrativa a través de una alianza estratégica con la Municipalidad del Pueblo de Lavalle y con la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay de La Asunción, contando para ello con el apoyo financiero de la Agencia Argentino-Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).⁵

5 Cabe señalar que esta iniciativa fue declarada de Interés Departamental y Prioritario por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad del Pueblo de Lavalle (Resol. n° 340/04 y 366/04) y de Interés

Quienes están llevando a cabo las tareas conforman un equipo interdisciplinario compuesto por geógrafos, arquitectos, ingenieros agrónomos, especialistas en aguas subterráneas, trabajadoras sociales y economistas.⁶ Mediante diversas estrategias de investigación-acción y conjuntamente con los pobladores del área en cuestión, se acordó un proyecto piloto basado en la articulación de dos líneas de actuación: una de investigación, y otra de desarrollo. Por su parte, esta última contiene dos líneas prioritarias y complementarias: una de producción sustentable y otra de servicios y capacitación permanente.

A mitad de camino

La evaluación de los resultados en este momento permite reflexionar y analizar aspectos como:

- a. Impactos directos sobre los puesteros involucrados en la UPYS.
- b. Impacto directo sobre el empleo.
- c. Impacto indirecto sobre el empleo.
- d. Impacto sobre el capital natural y cultural de la zona de La Asunción.
- e. Impacto potencial sobre otros territorios de similares características.
- f. Impacto en el acceso a los servicios públicos.
- g. Impacto en las políticas públicas o de otros agentes privados.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Lecciones aprendidas y reflexiones finales

Actualmente, la experiencia en curso se halla abocada a la implementación del primer módulo de la segunda fase, que corresponde a la ejecución y puesta en marcha del área netamente productiva y a la realización de talleres específicos de capacitación. Por esta razón, perduran algunos interrogantes e incertidumbres que no son los mismos que los iniciales; por el contrario, algunas dudas y preguntas han ido desapareciendo, otras han ido evolucionando, transformándose y trasladándose entre los actores participantes; y también han

Prioritario por el Ministerio de Economía y Producción dependiente de la Secretaría de Política Económica de la Nación (n° 157, 21-05-04).

6 Integran el equipo interdisciplinario: Elena M. Abraham (Directora general del proyecto); Elsa Laurelli (Coord. Científica LadyOT), José Luis Sánchez; Carlos Stassi; Laura Torres; Gabriela Pastor; Eduardo Torre; Eduardo Fabre; Elma Montaña; Silvia Urbina; Alberto J. Abraham; Esteban Fernández; Mariano Cony; Gerardo Vaquer; Ana Castillo; Raúl Guardia; Juan Traslaviña; Roberto Ahumada; Adriana Sava; Jorge Benegas y Santiago Cartier.

surgido nuevos interrogantes. Aun así, en el estadio actual de desarrollo, podemos efectuar un balance y una transferencia de las experiencias recogidas en el camino transitado.

El desarrollo local no es tal si no es económicamente rentable. Las profundas falencias y necesidades de transformación de las economías de los territorios periféricos requieren de una revisión de las políticas de subsidios para las comunidades con altos índices de pobreza. Es necesario revertir la tendencia de adjudicar “subsidios pobres para comunidades pobres” y sustituirlos por inversiones que permitan incidir en las transformaciones productivas, en un marco de articulación e integración equilibrada entre los valores económicos, ambientales, sociales y, también, culturales.

En consonancia con la afirmación anterior, *el desarrollo local no es posible si no posee réditos específicos para cada uno de los sectores involucrados.* Para que las alianzas sean sustentables, resulta fundamentales los acuerdos celebrados en torno al capital cedido y a la rentabilidad del mismo y la definición de los réditos esperados y deseados por todos y cada uno de los actores. Para ello, habrá que generar las condiciones que permitan obtener la equidad en la capitalización de los réditos al inicio de las acciones. Todo ello, a su vez, debe establecerse teniendo en cuenta también *las cuestiones inherentes al manejo de los tiempos.* Efectivamente, los tiempos y ritmos de cada actor son diferentes y difícilmente coincidan. Por ello, ello es necesario reconocerlos y articularlos.

Por otra parte, es importante subrayar *la necesaria interdisciplinariedad en el enfoque y tratamiento de los problemas,* así como en el diseño de las acciones, para lo cual resulta altamente beneficioso el monitoreo permanente y sistemático del desarrollo de la experiencia. De aquí se deduce que en la conformación de los equipos, además de tener en cuenta la presencia de representantes de las disciplinas vinculadas con las especificidades propias de la problemática, se debe considerar la participación de especialistas en economía. En este sentido, además, se impone *la necesidad de la integración multiactoral y multisectorial para la toma de decisiones.* En la formación de las alianzas estratégicas se debe promover y consolidar el trabajo en forma horizontal y pareciera que es recomendable reservar el gerenciamiento del emprendimiento a un agente externo en común acuerdo con la alianza. Para ello, la incorporación de técnicas de mediación para la resolución de conflictos resulta una herramienta insoslayable.

En cuando a *la gestión de los recursos económicos para asegurar la permanencia en el tiempo del emprendimiento,* la experiencia nos indica que, cumplidas las recomendaciones anteriores, este aspecto se resuelve en el marco de esos lineamientos.

Finalmente, cabe señalar que surgen evidencias de las dificultades para gestionar acciones en el marco de mercados competitivos y de las incapacidades de los actores del ámbito del desarrollo social, los científico-técnicos y los pobladores rurales involucrados para manejarse en el mundo de los “emprendedores” y sus “negocios”.



El paisaje natural...



...el paisaje comienza a transformarse.



BIBLIOGRAFÍA

ABRAHAM, E. M. (1987), "Metodología para el estudio de la desertificación", en F. Roig (ed.), *Detección y control de la desertificación*, Mendoza, IADIZA.

----- (1995), "Metodología para el estudio integrado de los procesos de desertificación. Aporte para el conocimiento de sus causas y evolución", en *Anales del V Curso sobre Desertificación y Desarrollo Sustentable en América Latina y El Caribe*, FAO, PNUMA, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillo, México.

----- (1996), "Problemas de desertificación en la República Argentina. Propuestas para un Plan de Acción", en *XI Seminario-Curso: Problemas da qualidade e quantidade da água em regiões semi-áridas*, Centro Interamericano de Recursos da Água, Salvador, Bahía (CD).

----- (2000), "Demand driven definition of indicators", documento presentado por la Argentina en el Side Event-COP4: "Process Monitoring, Impact Indicators and Monitoring-Evaluation for Action Programmes to Combat Desertification", OSS-CILSS-GTZ, Bonn.

----- (2002), "Lucha contra la desertificación en las tierras secas de Argentina. El caso de Mendoza", en A. F. CIRELLI y E. M. ABRAHAM (eds.), *El agua en Iberoamérica. De la escasez a la desertificación*, Buenos Aires, Cooperación Iberoamericana, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

----- (2003), "Desertificación: bases conceptuales y metodológicas para la planificación y gestión. Aportes a la toma de decisión", en *Revista Zonas Áridas*, N° 7, Lima, Centro de Investigaciones de Zonas Áridas, Univ. Agraria La Molina.

ABRAHAM, E. M. y M. DEL R. PRIETO (1991), "Contributions of historical geography to the study of processes of landscape change. The case of Guanacache, Mendoza, Argentina", en *Bamberger Geographische Schriften*, Heft II, S. 309-336, Bamberg.

ABRAHAM, E. M. y P. MACAGGNO (2001), "La experiencia argentina vinculada a la obtención y evaluación de indicadores de desertificación", documento nacional en *Actas del International Workshop On Benchmarks And Indicators*, Burkina Fasso, CCD, OSS, CILSS, 21 al 25 de mayo.

ABRAHAM, E. M., D. TOMASINI y P. MACAGGNO (2002), "Monitoreo y evaluación de la sequía y desertificación. Sistemas de alerta temprana para mitigar los efectos de la sequía en América Latina y El Caribe", documento presentado en la 1° Reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la UN CCD (CRIC I), Roma, 11 al 22 de noviembre.

AROCENA, José (1995), *El desarrollo local: un desafío contemporáneo*, Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Universidad Católica del Uruguay, Ed. Nueva Sociedad, pp. 19-33.

BAUMOL, W. y W. OATES (1982), *La teoría de la política económica del medio ambiente*, Barcelona, Antoni Bosh Ed.

BRUNDTLAND, Gro Harlem *et al.* (1987), *Our Common Future*, Londres, Oxford University Press.

BURCH William y Donald DELUCA (1984), "Measuring the Social Impact of Natural Resource Policies", Albuquerque, Universidad de Nuevo Mexico Press.

BURDGE, R.J. (1998), *A conceptual approach to social impact assessment*, Middleton, Social Ecology Press, 2da edición.

CARRIZOSA, Julio (1982), "Planificación del medio ambiente", en *Cuadernos del CIFCA*, n° 27, Madrid.

CASTELLS, M. (1998), "La era de la información. Economía, sociedad y cultura", Madrid, Alianza.

CCD/PNUMA (1995), *Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. Texto con anexos*, Suiza, UN CCD.

CEPAL/ILPES/PNUMA (1986), *La dimensión ambiental en la planificación del desarrollo*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

CEPAL/PNUMA (1979), *Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina: Una interpretación global*, E/CEPAL/PRCY, 2/R.50, octubre.

CNUMAD (1999), *Textos completos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación*, edición revisada, Ginebra.

DELGADO Y GUTIÉRREZ (1995): "Métodos y técnicas cualitativas de investigación social", Madrid, Síntesis.

DI PIETRO PAOLO, José Luis (2001), "Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al desarrollo local", en David BURÍN y Ana Inés HERAS, *Desarrollo local. Una respuesta a escala humana a la globalización*, Argentina, Ediciones CICCUS La Crujía.

ECOSOC (Commission on Sustainability) (1995), *Review of sectoral clusters, second phase: land, desertification, forests and biodiversity*, Nueva York, UN.

ESPASA-CALPE (1987), *Diccionario de la Naturaleza. Hombre, Ecología, Paisaje*, Madrid, Espasa-Calpe.

GALLOPIN, G. C. (1987), *Perspectiva ecológica de América Latina. Conferencia Científica Anual Von Humboldt*, Sociedad Científica Argentina, octubre.

----- (1994), "Agroecosystem health: a guiding concept for agricultural research?", en N. NEILSEN (ed.), *Agroecosystem Health*, Ontario, University of Guelph.

GARCÍA, Rolando (1986), "Conceptos Básicos para el Estudio de Sistemas Complejos", en E. LEFF (comp.), *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo*, México, Siglo XXI.

GEERTZ, Clifford (1973), *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa.

----- (1988), *El antropólogo como autor*, Barcelona, Paidós.

GLASER, B. y A. STRAUSS (1999), *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*, Hawthorne, Nueva York, Aldine de Gruyter.

GUBER, R. (2001), *El Salvaje Metropolitano*, Buenos Aires, Legasa.

HURTUBIA, Jaime (1980), "Ecología y desarrollo; evolución y perspectivas del pensamiento ecológico", en O. SUNKEL y N. GLIGO, *Estilos de desarrollo y Medio Ambiente en América Latina*, Trimestre Económico N° 36, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) (2000), *Nueva ruralidad*, Serie Documentos Conceptuales, Panamá, marzo.

IUCN, PNUMA, WWF, FAO y UNESCO (1987), *Estrategia Mundial de la Conservación*, Ginebra.

KRUEGER, R.A. (1994), *Focus groups: A practical guide for applied research*, Londres, Sage Publications.

KVALE, S. (1996), *Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*, Londres, Sage Publications.

LEFF, Enrique (1986), *Ecología y Capital. Hacia una perspectiva ambiental del desarrollo*, México, UNAM.

LAURELLI, Elsa (2006), "Condiciones de inequidad territorial y pobreza en los espacios andinos de la Patagonia", en *Anales del V Simposio Internacional de Desarrollo Sustentable de los Andes*, San Salvador de Jujuy, Asociación de Montañas Andinas (AMA), MAB-UNESCO, CONICET, CONCYT, Univ. Nacional de Jujuy.

LÓPEZ LEVI, Liliana (1993), "Organización económica y política del mundo", en *Configuraciones del mundo actual*, año I, n° 2, México, U-AMX.

MACHLIS, G. E., J.E. FORCE y S. E. DALTON (1994), *Monitoring social indicators for ecosystem management*, Technical Paper 43-0E00-4-9186, Interior Columbia River Basin Project.

MACHLIS, G. E., J.E. FORCE y W. R. BURCH JR. (1997), *The human ecosystem Part I: The human ecosystem as an organizing concept in ecosystem management. Society and natural resources*.

MANZANAL, Mabel (2000), "Los Programas de Desarrollo Rural en la Argentina (en el contexto del ajuste macroeconómico neoliberal)", en EURE, Santiago, *on line*, septiembre, vol. 26, n° 78 [citado 03 de marzo de 2005].

MEDINA TORRES, J. G. y N. BELTRÁN (1998), *Recursos Naturales. Planeación íntegra*, México, Trillas Ed.

MONTAÑA, Elma (2003), “Reconversion et Intégration régionales au cœur du Cône Sud: La province de Mendoza (Argentine) à l’aube du XXIème siècle”, tesis de doctorado de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, Paris, France.

MORELLO, J. (1984), *Perfil Ecológico de Sudamérica*, Barcelona, Instituto de Cooperación Iberoamericana..

----- (1987), “Manejo integrado de recursos naturales”, en A. BRAILOVSKY, (ed.), *Introducción al estudio de los recursos naturales*, Buenos Aires, Eudeba.

NACIONES UNIDAS (1992), *Cumbre para la Tierra. Las Naciones Unidas y el Desarrollo sostenible*, Río de Janeiro, CNUMAD.

PASTOR, G., E. M. ABRAHAM Y L. TORRES (2005), Desarrollo local en el desierto de Lavalle. Estrategia para pequeños productores caprinos (Argentina), en *Cuadernos de Desarrollo Rural*, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, N° 54.

PNUMA (1991), *Estado de la desertificación y aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. Informe del Director Ejecutivo*, Nairobi, UNEP, GCSS, III-3.

ROIG, Fidel (ed.) (1989), *Desertificación, detección y control. Conferencias, trabajos y resultados del Curso Latinoamericano*, Mendoza, UNEP-IADIZA.

SANTIBÁÑEZ, F. y J. PÉREZ (1997), *Metodología Unificada para la Evaluación y Monitoreo de la Desertificación en América Latina. Indicadores de la Desertificación*. Santiago de Chile, FAO.

SCHJEITMAN, Alexander y Julio A. BERDEGUÉ (2003), *Desarrollo Territorial Rural*, Santiago de Chile, RIMSIP.

TAMAMES, Ramón (1985), *Ecología y desarrollo. La polémica sobre los límites al crecimiento*, Madrid, Alianza Editorial.

TAYLOR, S. J. y R. BOGDAN (1992), “Introducción a los métodos cualitativos en investigación”, Barcelona, Paidós.

TOLEDO, Alejandro (1998), *Economía de la biodiversidad*, México, PNUMA.

TRICART, J. y J. KILIAN (1982), *La ecogeografía y la ordenación del medio natural*, Barcelona, Ed. Anagrama.

UN CCD (1999), *La convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación*, Francia (texto actualizado).

UNEP (1990), *The assessment of global desertification: status and methodology*, Ad-hoc Consultation Meeting, Nairobi, 15-17 de febrero.

----- (1992), *World Atlas of Desertification*, Londres.

VALLE, M.S. (2000), “Técnicas Cualitativas de Investigación Social”, España, Síntesis.

VILLALOBOS, Ruy de (2001), “Desarrollo Rural y Desarrollo Local”, en David BURÍN y Ana Inés HERAS, *Desarrollo local. Una respuesta a escala humana a la globalización*, Buenos Aires, CICUS, La Crujía.

WINOGRAD, M. (1994), *Environmental indicators for Latin America and the Caribbean: towards land-use sustainability*, Washington DC, Ecological Systems Analysis Group (GASE), World Resources Institute.

WORLD BANK (1995), *Land quality indicators: report on a workshop*, 21 de junio, Washington DC.

RESUMEN

El ordenamiento territorial y la lucha contra la desertificación constituyen dos vertientes del conocimiento con gran entidad en sí mismos y no es frecuente encontrar una articulación entre sus respectivos enfoques y perspectivas ni tampoco propuestas operativas que sinergicen sus resultados. La integración de ambas vertientes podría resultar en desarrollos teóricos, metodológicos y propuestas de intervención capaces de mitigar las condiciones de inequidad y pobreza que se ponen en evidencia en amplios territorios de tierras secas de la Argentina. Una metodología integradora de estos enfoques debería ser capaz de articular un mismo objeto de estudio e intervención, a través de las estrategias de desarrollo y lucha contra la pobreza. Los ejemplos y la validación de esta propuesta fueron se basan en estudios de casos en desarrollo sobre las transformaciones territoriales en las tierras secas del centro-oeste de la Argentina.

ABSTRACT

Territorial planning and the combat against desertification are two branches of knowledge with a strong entity and it is not frequent to find them articulated in conceptualizations and –further on– in operative proposals that could synergize their results. The integration of both proposals could result in theoretical and methodological developments as well as proposals of intervention suitable for mitigating the inequity and poverty conditions of these drylands of Argentina. An integrated methodology should be able to integrate a same study and intervention in strategies of development and poverty combat. The examples presented and the validations of the proposal were carried out from studies of study cases being developed in the drylands of the center-west of Argentina.

PALABRAS CLAVE

DESERTIFICACIÓN
POBREZA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EXCLUSIÓN

KEY WORDS

DESERTIFICATION
POVERTY
TERRITORIAL ORDERING
EXCLUSION

HACIA UNA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PATAGONIA AUSTRAL. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA NUEVA DINÁMICA PRODUCTIVA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO

*Daniel Schinelli
Carlos Vacca*

El presente trabajo entronca con estudios anteriores en los que se realiza una caracterización económica de la Provincia de Santa Cruz. En ese marco se releva aquí a la actividad turística como emergente de una nueva dinámica productiva.

La estructura económica provincial se ha basado históricamente en el sector primario, con preponderancia del agregado “minas y canteras” –en especial, la rama petrolera–. Destacan en dicha actividad sus características de enclave y de recurso agotable. En la actualidad, se observa un importante flujo de inversiones públicas –y en menor medida privadas– que impactarán a futuro en el desarrollo económico de la provincia. Las obras de infraestructura en ejecución propenden a dotarla de mejores condiciones de competitividad, favoreciendo la diversificación de sus actividades. En este contexto, la actividad turística emerge con gran dinamismo, evidenciando un enorme potencial, especialmente a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas derivadas de la crisis devaluatoria del año 2001.

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “Nuevas dinámicas productivas y mercados de trabajo regionales: caracterización sociolaboral de la explotación de hidrocarburos y del turismo en Patagonia Austral en el actual contexto económico nacional”, el cual está radicado en la UNPA y dirigido por el Dr. Agustín Salvia. Una versión preliminar del presente trabajo fue presentado como ponencia en el VIII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET.

Daniel Schinelli es Licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Argentina y Magíster en Administración de Negocios. Investigador y Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos. Ha publicado diversos trabajos relacionados con la economía nacional y regional y el mercado de trabajo. E-mail: daniel.schinelli@speedy.com.ar

Carlos Vacca es Licenciado en Administración de Empresas y Magíster en Administración de Negocios. Investigador y Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos y Co-director del Proyecto de referencia. Ha publicado diversos trabajos vinculados al mercado de trabajo. E-mail: jubileo@ciudad.com.ar

Si bien el principal atractivo del turismo se centra en el producto “glaciares”, la región cuenta también con muchos otros atractivos vinculados a la naturaleza que favorecen el desarrollo de nuevas dimensiones de la actividad, tales como el turismo de intereses especiales –científico, cultural y de aventura.

La ciudad de El Calafate, localizada en el Departamento de Lago Argentino, es el epicentro de la región. El flujo de inversiones allí dirigido ha generado en los últimos años un significativo incremento de la actividad que repercutió en el empleo vinculado al sector, el cual presenta características extremadamente particulares.

El objetivo del presente trabajo es el análisis del sector turístico provincial y de su vinculación con el empleo así como de los aspectos a considerar en procura de su desarrollo sustentable en el tiempo. En tal sentido, es necesario tener en cuenta tanto las ventajas comparativas existentes como los problemas estructurales que enfrenta el sector para lograr condiciones de competitividad en el mercado turístico mundial. Por otra parte, el análisis de la morfología de la estructura empresarial permite comprender más acabadamente las formas de contratación existentes y su proyección en el tiempo.

LA RELEVANCIA DEL SECTOR TURISMO

En la actualidad, se puede considerar a la actividad turística como una de las más dinámicas en el marco de la economía mundial: presenta un ciclo de expansión continuada que se inicia en la década de 1970, se mantiene firme y manifiesta una tendencia creciente en el mediano y largo plazo.

A nivel mundial, registra un crecimiento medio anual del 13 por ciento, superando el de los servicios comerciales y el de las exportaciones de mercancías que, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), alcanzaron un 10 y un 9 por ciento, respectivamente, en el decenio 1983-1993.

El crecimiento de la actividad turística –con una demanda en aumento– se acompaña de un incremento significativo en la oferta de servicios vinculados al sector. A esto han contribuido diversas circunstancias, como las transformaciones técnico-económicas del transporte –que han permitido el surgimiento de una multiplicidad de nuevos destinos– y políticas de desarrollo rural y regional –que han puesto en el mercado una nueva gama de turismo alternativos: científico, de aventuras, etcétera.

El turismo se caracteriza por el encadenamiento de actividades necesarias para la producción del servicio. Al respecto cabe aplicarle el concepto de “agregabilidad”, inherente a la servucción¹ y más concretamente al

1 Del libro *Servucción* de P. Eiglier y E. Langeard, referido al marketing de los servicios; basado en definir primero, el servicio que se quiere dar y para qué tipo de cliente, y a partir de aquí, qué tipos de soportes

marketing turístico (Eiglier y Langeard, 1989). Estos encadenamientos se explican por las características propias de la actividad, que generan la necesidad de diversos procesos “en línea” para que se perfeccione la capacidad de oferta del servicio.

La interseccionalidad del turismo y la especial característica de su cadena de valor –que implica la participación de distintas actividades económicas– dan como resultado la generación de un multiplicador económico de mayor amplitud que el de otras actividades económicas, y, por ende, lo configuran como un efecto motorizador del desarrollo.

Argentina atrae actualmente alrededor de 4 millones de turistas extranjeros al año, del total de 702,6 millones mundiales (Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, 2006), y ha experimentado en los últimos años un crecimiento récord de su industria turística. Se estima que el sector tiene una participación en el PBI nacional del orden del 7,7 %, lo que la constituye en una de las ramas más dinámicas del sector terciario de la economía. A su vez, la cuenta “viajes” de la balanza de pagos ha comenzado a mostrar guarismos positivos, en contraposición a la serie histórica de dicho agregado.

Sin embargo, todo este dinamismo económico se relativiza al efectuar un balance social de los resultados de la actividad. Los países pobres se convierten en receptores de turistas ricos provenientes de países desarrollados, y pocas veces el beneficio económico alcanza para reparar los perjuicios que provoca el turismo cuando no se da en el marco de una planificación adecuada. En muchos de estos países, la mayor parte de los ingresos que genera el turismo internacional no llegan a las economías locales, y en el corto plazo se observa que la fuga de divisas que provienen de las utilidades obtenidas supera largamente a las inversiones realizadas por las empresas extranjeras.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución sobre turismo sustentable como parte de su “Programa para la aplicación de la Agenda XXI”, el plan de acción aprobado en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. La misma reconoce la importancia del turismo en el contexto de la Agenda XXI. Entre otras cosas, establece que “para un modelo sustentable de consumo y producción en el sector del turismo, es esencial fortalecer las políticas nacionales y aumentar la capacidad en las áreas de planeamiento físico, evaluación de impacto y uso de instrumentos económicos y regulatorios, así como en la información, la educación y el marketing”.

físicos se necesitan y qué personal establecerá los contactos con el cliente, para que finalmente, se pueda crear el sistema organizativo que asegure el buen funcionamiento del método; todo ello considerando a la organización como un sistema de fabricación de un servicio.

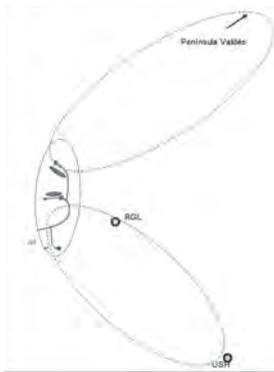
EL TURISMO EN LA REGIÓN PATAGÓNICA

El turismo como actividad económica, ha demostrado en la Región Patagónica Austral² un gran crecimiento especialmente a partir de las nuevas condiciones económicas surgidas posteriormente a la crisis devaluatoria del año 2001.

Sus principales atractivos se localizan en las ciudades de Puerto Madryn (Chubut), Ushuaia (Tierra del Fuego) y El Calafate (Santa Cruz).

El principal circuito de Turismo Organizado se basa en la conexión de dichas localidades, aunque se observa también una oferta creciente de otros. Entre los principales corredores regionales se destacan los siguientes:

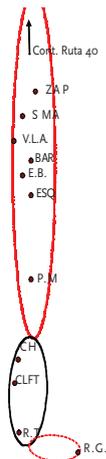
Corredor de Patagonia Austral Nacional (desde Península Valdés hasta Ushuaia)



CH: Chaltén
GMP: Glaciar Perito Moreno
CLFT: El Calafate
RT: Yacimientos Río Turbio
28 N: 28 de Noviembre
RGL: Río Gallegos
USH: Ushuaia

Fuente: Elaboración propia.

Ruta Nacional N° 40 (Norte-Sur, de traza paralela a la cordillera)

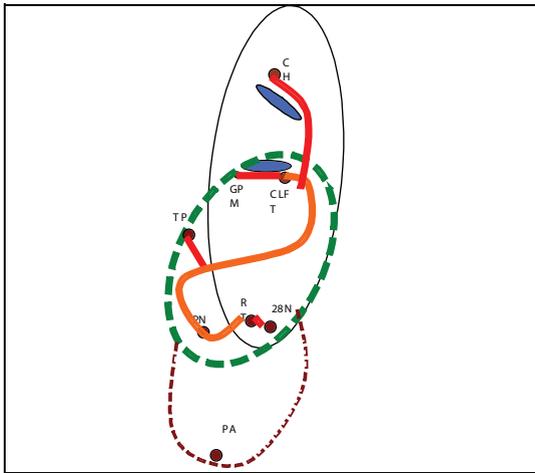


ZAP: Zapala
SMA: San Martín de los Andes
VLA: Villa La Angostura
BAR: Bariloche
EB: El Bolsón
ESQ: Esquel
PM: Perito Moreno
CH: Chaltén
CLFT: El Calafate
RT: Yacimiento Río Turbio
RG: Río Gallegos

Fuente: Elaboración propia.

² El recorte regional corresponde a los territorios de las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Corredores Binacionales: Patagonia Austral Continental (en combinación con Torres del Paine y Puerto Natales en Chile, y en menor medida, Punta Arenas)



- CH: Chaltén
- CLFT: El Calafate
- GPM: Glaciar Perito Moreno
- TP: Parque Nacional Torres del Paine (Chile)
- PN: Puerto Natales (Chile)
- RT: Yacimientos Río Turbio
- 28 N: 28 de Noviembre
- PA: Punta Arenas (Chile)

Fuente: Elaboración propia.

Estos atractivos pasan a conformar los principales circuitos de la región mencionada y cuentan con un alto porcentaje de participación de visitantes extranjeros.

A continuación se hace una breve caracterización de los principales corredores turísticos actuales y potenciales de la Región Patagónica Austral.

- *Patagonia Austral Nacional*: vincula las mencionadas localidades patagónicas argentinas con atractivos naturales especiales y centros de gran importancia turística: Trelew-Puerto Madryn (ballenas), El Calafate (glaciares) y Ushuaia (fin del mundo). Este circuito tiene actualmente conexión aérea internacional en las tres localidades, importantes puertas de entrada de turistas. Es un corredor difícil de completar en forma terrestre por las distancias, porque parte del mismo se encuentra sin pavimentar y, además, porque exige el cruce del Estrecho de Magallanes. Es importante destacar que es el corredor patagónico de mayor flujo actual; de hecho, la mayoría de operadores que comercializan el destino Patagonia en el extranjero ofrecen paquetes comerciales que combinan estos tres destinos. El circuito Ushuaia-El Calafate –en este sentido o a la inversa– es el más activo de este corredor en cuanto a flujo de turistas.

- *Ruta Nacional N° 40 (tramo sur o también denominada Ruta 40 Austral)*: incipiente corredor turístico vertical que permite tomar contacto con la totalidad

de la zona cordillerana sur andina. Integra los atractivos turísticos relevantes de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut con los de Santa Cruz. Se conecta con el tramo Norte completando el macro-corredor de la Ruta Nacional N° 40 que actualmente, y como iniciativa reciente de la Secretaría de Turismo de la Nación, fija su kilómetro cero en Cabo Vírgenes –Santa Cruz– y finaliza en el kilómetro 5.244 en La Quiaca, Jujuy.

Este es un circuito con escasos kilómetros pavimentados: el 40% de su longitud total. Actualmente es transitado por turistas independientes, generalmente en vehículos de doble tracción o en autobuses que hacen el recorrido de la ruta por tramos (Bariloche-El Calafate, por ejemplo). Los que utilizan vehículo propio aprovechan para pernoctar en las Estancias Turísticas que conforman la red de servicios para atender a estos viajeros. Actualmente se está realizando la pavimentación del tramo correspondiente a la Provincia de Santa Cruz.

- *Patagonia Austral Binacional*: corredor transfronterizo andino en el área del Parque Nacional Los Glaciares que integra atractivos a ambos lados de la Cordillera. Une los puntos de mayor interés de la Patagonia Austral Continental que son: el Parque Nacional de Los Glaciares, en la Comarca Austral de Santa Cruz, y el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Esta área comparte actualmente un flujo importante de turistas y una complementariedad de atractivos pero la falta de cooperación y las trabas político-administrativas al tráfico de vehículos y operadores constituye la mayor dificultad para la total conformación del circuito como corredor. Las puertas actuales de entrada son Puerto Natales y Punta Arenas, en Chile, y El Calafate del lado argentino.

- *Costa Patagónica*: dado su escaso nivel de desarrollo turístico, este corredor constituye un atractivo potencial, pero resulta de extraordinario interés como patrimonio natural que recorre la totalidad de la costa atlántica de la Patagonia. Incluye una importante área de uso turístico actual como es la Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una significativa puerta de entrada de visitantes: Puerto Madryn. En el Plan Federal Argentina 2016 se destaca la conveniencia de fortalecer las otras entradas potenciales de este corredor vertical: Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Incluye otras localidades ubicadas entre los principales conglomerados mencionados, tales como Camarones (Provincia de Chubut), Puerto Deseado, San Julián y el Parque Nacional Marítimo Monte León (Provincia de Santa Cruz).

EL TURISMO EN SANTA CRUZ

En Santa Cruz el producto “glaciares” emerge como excluyente, convirtiéndose en el epicentro turístico provincial a partir del cual cobran relevancia otros productos y destinos regionales. Se puede afirmar que se trata de una región que se encuentra en un proceso de franco desarrollo turístico.

El Parque Nacional Los Glaciares,³ de aproximadamente 450.000 ha y ubicado en el sudoeste de la provincia, posee un 30% de superficie ocupada por hielos continentales. Aloja uno de los más impactantes atractivos de la naturaleza: el Glaciar Perito Moreno. La actividad económica vinculada al sector turístico se desarrolla en la provincia a partir de la accesibilidad al glaciar y de la difusión internacional que se le dio a su comportamiento.⁴ Su centro de servicios es la ciudad de El Calafate.

A partir de mediados de la década de 1980, el Estado provincial generó medidas de promoción vinculadas al sector turístico así como un cúmulo de inversiones dirigidas a generar una infraestructura adecuada a la prestación de servicios, especialmente en el mencionado epicentro.

La construcción del aeropuerto en la ciudad de El Calafate –inaugurado en el año 2000– constituyó una inversión básica que permitió un mejor acceso al atractivo principal y también generó importantes cambios en el desarrollo del transporte aéreo y terrestre.

La ciudad de El Calafate se relaciona directamente con la localidad de El Chaltén, que presenta impactantes atractivos paisajísticos y una mayor especialización en turismo de aventura y trekking. Esta pequeña localidad –en fase de crecimiento acelerado– forma parte del mismo circuito que integra la Comarca Austral Turística de la Provincia de Santa Cruz.

Además, la provincia presenta otros destinos potenciales que aún no se han puesto en valor y que constituyen atractivos naturales más que productos turísticos. Sin embargo, la actual inversión en infraestructura permitirá su desarrollo en el mediano plazo. En este sentido se destacan:

- El corredor de la Ruta 40 en el ámbito provincial. Como se mencionó, actualmente se encuentra en etapa de pavimentación. Su recorrido une distintos atractivos naturales: la región del noroeste santacruceño (NOSA), que comprende la Cueva de las Manos, Los Antiguos y el Lago Posadas; el Monte San Lorenzo; el Parque Nacional Perito Moreno y la conexión con El Chaltén y El Calafate, entre otros.
- El corredor de la Costa Atlántica santacruceña. Se destacan la ciudad de Puerto Deseado en el noreste provincial y Puerto San Julián. Ambas localidades cuentan con importantes atractivos naturales y con significativos recursos históricos.
- El Parque Nacional Monte León. Recientemente declarado Parque Nacional Marítimo, está ubicado a 200 km de Río Gallegos y constituye un atractivo de gran potencialidad.

3 Por sus condiciones únicas, su interés paisajístico y el riesgo de extinción de su flora y fauna autóctona, el Parque Nacional Los Glaciares fue creado en 1937 y declarado en 1981 Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

4 Avances sobre la Península de Magallanes, retrocesos y el espectáculo incomparable que representa la periódica ruptura de su frente, cuya primera ocurrencia conocida data de 1940.

- Otros atractivos. Se incluyen aquí los vinculados a pinturas rupestres, al turismo de deportes –especialmente pesca–, al turismo rural o asociado –estancias turísticas – y a productos relacionados con el turismo minero y con trenes turísticos (cuena carbonífera) .

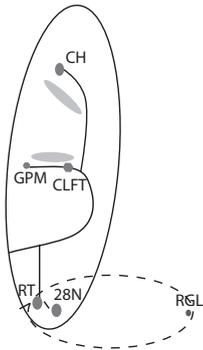
COMARCA AUSTRAL: EL CALAFATE Y EL CHALTÉN

Caracterización

La Comarca Austral abarca los principales y más conocidos atractivos turísticos de la Provincia de Santa Cruz. Entre ellos se encuentra uno de jerarquía internacional: El Calafate-Parque Nacional Los Glaciares, con el emblemático Glaciar Perito Moreno, auténtico símbolo de toda la Patagonia, y uno de los destinos más importantes de la Argentina. Este glaciar es reconocido como único en el mundo por sus características especiales que combinan un comportamiento exclusivo de movimiento y ruptura, una fácil accesibilidad, gran proximidad al espectador –unos 150 m– y excepcional monumentalidad.

Esta región constituye un multidestino turístico interconectado y sinérgico, diferenciado y bien posicionado en los principales mercados-objetivo a través de sus dos motivaciones/productos/marcas básicas: glaciares (El Calafate), *trekking* y aventura (El Chaltén). El Calafate y El Chaltén se posicionan además como líderes internacionales en su segmento/producto. Ambos destinos intentan resolver sus problemas de crecimiento y han aplicado planes de restauración paisajística y conservación ambiental. Se crearon reservas y otros espacios protegidos que se aprovechan de forma sostenible para el turismo y el ecoturismo.

Comarca Austral



CH: Chaltén
RT: Yacimientos Río Turbio
CLFT: El Calafate
28 n: 28 de Noviembre
GPM: Glaciar Perito Moreno
RGL: Río Gallegos

La localidad de El Calafate, situada a 320 km de la capital de la Provincia, la ciudad de Río Gallegos, ha adquirido trascendencia nacional e internacional por ser el punto donde se inician los circuitos, ya que es la ciudad más cercana para visitar el Parque Nacional Los Glaciares.

Si bien según datos del Censo Poblacional de 2001 la localidad poseía una población de 6.410 habitantes, el importante crecimiento de las últimas dos temporadas ha generado un significativo incremento de la misma: en la actualidad se estima en 15.000 habitantes, cifra que aumenta de modo sustancial en alta temporada turística (entre los meses de noviembre y abril).

Por lo expuesto, la localidad de El Calafate se constituye en el principal destino turístico de la región y opera como “atractor” del conjunto de procesos económicos más inmediatos, relacionándose, a su vez, con otras localidades más pequeñas y conglomerados de mayor tamaño. En conjunto conforman un espacio que abarca una superficie aproximada de 650 km², en la que se concentran las más importantes muestras paisajísticas de la Patagonia Austral Argentina y la más emblemática del país, dado que la denominación “Patagonia” es conocida internacionalmente y, como tal, es una referencia esencial para la ubicación de la Argentina en el continente. Limita con Chile en una región de características de atractivo turístico de similar importancia, que en total abarca una superficie cercana a los 2000 km² (Artesi, 2003).

El Calafate se ha caracterizado por una temporada alta, entre los meses de septiembre y abril, y una temporada baja que históricamente respondió a indicadores muy bajos de ingreso de turistas.⁵ Esto condujo a que los empresarios hoteleros, gastronómicos y de otros servicios implementaran estrategias diferenciadas: generalmente mantenían sus locales abiertos en alta temporada y cerrados durante la baja, debido a la dificultad de absorción de los costos fijos. Esto se verificaba fundamentalmente en los establecimientos de mayor tamaño (hoteles de 4 y 3 estrellas) y en actividades vinculadas a la recreación y esparcimiento.

Sin embargo, la tendencia actual procura revertir tal situación. En efecto, en las últimas temporadas se ha registrado un mayor nivel de actividad durante el período invernal, con un creciente ingreso turístico. Esto es consecuencia, por un lado, de la puesta en marcha del aeropuerto internacional, que permite el acceso durante todo el año, pero también de condiciones climáticas más favorables y de un mejor mantenimiento de los accesos.⁶

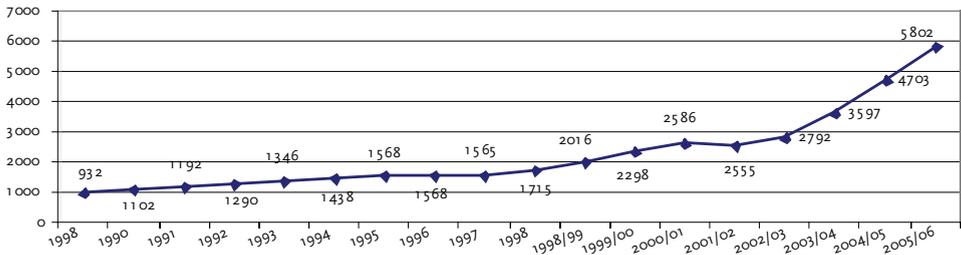
La oferta de servicios turísticos mostró una significativa evolución en los últimos años, lo que se refleja en un alto grado de inversión que, aunque dirigida principalmente al sector alojamiento, también impactó en el sector co-

5 No se cuenta con registros históricos confiables, ya que generalmente se subestimó su medición.

6 Sin embargo, cabe señalar las dificultades inherentes a la situación de la Industria Aeronáutica en nuestro país, que en muchos casos –especialmente en baja temporada– limita un mejor acceso a la región turística.

mercio, servicios y restauración. Según datos relevados a noviembre de 2006, la capacidad de alojamiento dentro del casco urbano abarcaba aproximadamente 6.000 plazas.

Evolución de la planta hotelera de El Calafate expresada en plazas (1998-2006)



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Calafate.

La mayor concentración de plazas –49 % del total– corresponde al tipo Hotel; y, dentro de este tipo de plazas, el mayor volumen se verifica en las categorías 3 y 4 estrellas. Cabe destacar también la existencia de alojamientos de menor categoría, así como complejos de cabañas y establecimientos agropecuarios vinculados a la actividad turística.

Por su parte El Chaltén⁷ constituye el segundo atractivo a nivel de importancia en la comarca. Si bien se trata de una pequeña localidad de no más de 500 habitantes, en alta temporada presenta una importante afluencia de turistas que incrementan el número de población vinculada a la atención de los servicios turísticos.

El aeropuerto internacional de El Calafate, inaugurado en noviembre de 2000, y la pavimentación de la ruta correspondiente facilitaron el acceso a El Chaltén y modificaron en gran medida su posicionamiento frente a los centros emisores del norte del país.

Los circuitos turísticos de la localidad se presentan en forma reticular. El Fitz Roy ofrece dos atractivos principales: *trekking* y fotografía. Otro atractivo

7 Chaltén es el nombre con que los tehuelches denominaban al cerro luego bautizado con el nombre de Fitz Roy. En lengua nativa significa “montaña que humea”. Esta montaña mide 3.441 m de altura y da su nombre al centro de servicios creado el 12 de octubre de 1985 y que en el año 1994 fue declarado Capital Nacional del *Trekking* por la Secretaría de Turismo de la Nación.

importante es el circuito de los hielos continentales. Los circuitos presentan distintos niveles de dificultad: desde accesibles, como El Chorrillo del Salto, hasta los más difíciles, como el recorrido por los hielos continentales.

La oferta hotelera está compuesta por un número aproximado a las 900 plazas, pero se observa un importante proceso de inversión privada que concuerda con los indicadores de proyección de demanda que, como en el caso de El Calafate, han mostrado un gran crecimiento en las últimas temporadas.

Tanto El Calafate como El Chaltén son áreas que han venido experimentado un crecimiento espectacular como destinos turísticos de gran éxito en los mercados internacionales y en el nacional. Este hecho aportó desarrollo y prosperidad a la zona a través del gasto de los turistas, pero igualmente generó diversos problemas de saturación de espacios y de degradación ambiental y paisajística, además de un empeoramiento en la relación calidad/precio de algunos servicios que amenaza la competitividad. Se trata de destinos que se encuentran en una fase de crecimiento acelerado, aunque más incipiente en El Chaltén que en El Calafate.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El crecimiento de la demanda a partir de las nuevas condiciones económicas fue acompañado por un fuerte incremento de la oferta en los distintos sectores de servicio al turismo: alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, comercio y servicios en general. A ello contribuyeron también las mejores condiciones de rentabilidad generadas por un mayor margen de utilidad y un incremento de la rotación.⁸

El desarrollo de la oferta se verificó en mayor medida en el sector alojamiento de mediano y alto nivel con la construcción de hoteles de 4 y 5 estrellas y otros establecimientos de alta calificación. Lo acompañaron inversiones en los sectores gastronomía, comercio y servicios.

La estructura empresarial se agrupa principalmente en la categoría de PYMES, con la excepción de algunos hoteles pertenecientes a cadenas internacionales y del sector comercio en algunos rubros específicos.⁹ Aún no se verifican prácticas de concentración económica en los sectores específicos del turismo (hoteles, gastronomía, agencia de viajes, etc.), aunque potencialmente se estima la posibilidad de inserción en el mercado de grandes cadenas hoteleras.

8 Los altos precios de los servicios vinculados al segmento de turismo extranjero constituyen un componente fundamental para las condiciones de rentabilidad. Algunos de los servicios presentan precios internacionales.

9 En los últimos años se han establecido locales de la cadena de supermercados La Anónima y de negocios de construcción que responden al grupo económico regional Hipertehuelche.

La importante cantidad de nuevos establecimientos ha generado la aparición de nuevos actores en la región, vinculados primordialmente a la actividad económica. A su vez, esto llevó a un significativo incremento del valor inmobiliario en la región.

Como dijimos, en el sector alojamiento predomina la inversión en hoteles categorizados como de 3, 4 y 5 estrellas. Los establecimientos de mayor tamaño y complejidad han incorporado tecnología, una mayor orientación al cliente y recursos humanos con determinados grados de calificación. En cuanto a las restantes categorías (hoteles de 1 y 2 estrellas, hospedajes, cabañas, campings, etc.) están conformadas por emprendedores que se han desarrollado en distintos rubros, prevaleciendo la atención familiar y un nivel de prestación de servicios de menor calidad.

En lo que se refiere a los otros rubros vinculados al turismo –gastronomía, comercio, servicios, agencias de viajes–, predominan los establecimientos medianos y pequeños vinculados a emprendedores de menor calificación, con algunas excepciones en el sector gastronomía y algunas prácticas de integración vertical, especialmente en lo concerniente al sector de agencias de viaje.

Las estrategias empresariales se adaptan en general a la dinámica de la demanda. El significativo incremento evidenciado en los últimos años ha reafirmado esta mecánica, con estrategias de marketing pasivas y sin mayor inversión en management y en tecnologías de gestión. Pero el crecimiento de la oferta en los estratos superiores de calidad, especialmente en la hotelería de cuatro y cinco estrellas, ha generado la inclusión de nuevas tecnologías y una orientación superior del ámbito estratégico general.

Son escasas y heterogéneas las prácticas de formación y capacitación específicas para el área empresarial. Más allá de algunas iniciativas llevadas a cabo por la Secretaría de la Producción de la Provincia, no se observa un interés generalizado en el nivel empresarial. Esto condiciona a su vez la realización de programas de capacitación para el personal de nivel táctico y operativo.

Las acciones de gestión de calidad también son escasas. Aunque se observa una mayor preocupación en los establecimientos hoteleros de mayor nivel –con iniciativas e inversión propia–, no existen programas institucionales con dicha orientación.

El desarrollo de la infraestructura de servicios públicos intenta acompañar al desarrollo de la comarca, con un alto nivel de inversiones en ese sentido. Sin embargo, resulta paradójico que la inversión del Estado haya quedado “atrasada” con respecto al crecimiento de la demanda turística y a las necesidades de la comunidad en general. No existe una planificación estratégica orientada al crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo.

Por el contrario, como vimos, los servicios privados se desarrollaron ampliamente, con un nivel de oferta compatible con el crecimiento de la demanda. En algunos pocos casos –vinculados al consumo masivo–, se observan estra-

tegiyas de concentración empresarial, aunque, en general, la oferta incorporada responde a patrones de pequeñas y medianas empresas.

Entrevistas realizadas a informantes calificados de la localidad de El Calafate evidencian el carácter prioritariamente individualista del empresariado local, que podría explicarse, en gran medida, por la fuerte inmigración de nuevos emprendedores en los últimos años. Esta situación lleva a un escaso sentido de pertenencia a la comunidad, a la falta de implicación de dichos actores y a la dificultad de concretar acciones conjuntas para el mejoramiento de los servicios y de la sociedad en general. Además, la estacionalidad y el comportamiento de estos emprendedores generan importantes movimientos migratorios: hay una gran afluencia y actividad en la temporada alta y un alejamiento de la región en el resto del año.

La visión empresarial existente es en general cortoplacista, respondiendo a los muy buenos resultados económicos actuales. No se observan, en general, estrategias vinculadas al mediano y largo plazo, salvo excepciones que responden a actores de mayor implicación y más larga trayectoria en la región.

La existencia de entidades intermedias, como la Cámara de Comercio y Turismo, aún no genera el involucramiento de la mayor parte de los actores. Se observa, además, que las relaciones del sector empresarial con los sectores de conducción política –Municipalidad de El Calafate y Comisionado de Fomento de El Chaltén – todavía no son fluidas ni integradas.

Más allá de los factores y limitaciones mencionadas, es indudable que el significativo desarrollo del sector turístico ha derivado en una generación de riqueza mayor con la llegada de nuevas inversiones y en una importante diversificación de la oferta. A su vez, la dinámica de la demanda ha provocado una reducción del factor estacionalidad y un mejoramiento de la productividad. Queda aún pendiente una mayor inclusión social de los nuevos actores para contribuir al desarrollo sustentable de la región.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO TURÍSTICO Y SU IMPACTO EN EL MERCADO DE TRABAJO

El turismo genera un significativo impacto en el empleo a través de la conjunción de las distintas actividades que conforman finalmente el producto respectivo.¹⁰ El servicio brindado al visitante involucra distintos sectores: alojamiento, gastronomía, excursiones, agencias de viaje, transporte, comercio y

10 El producto turístico es un producto de servicios que se compone de una mezcla (en el sentido de amalgama o combinación de partes que permanecen individualizadas) de elementos básicos de la industria turística. Gran parte de los mismos se disponen, a su vez, en forma de servicios. El producto se eleva a un estado superior convirtiéndose en un "satisfactor" (Muñoz Oñate, 1994).

servicios en general. Es decir, el turismo es un multiplicador que muestra una alta incidencia en la generación de empleo.

Los principales problemas laborales que afectan a esta industria son: la alta rotación del personal, los irregulares horarios de trabajo, los bajos niveles de sindicalización (por debajo del 10 por ciento) y la intensa presión sobre los recursos humanos y medioambientales a medida que el turismo se hace cada vez más competitivo y llega a destinos más remotos donde los recursos institucionales son débiles o inapropiados.

Se observa una tendencia general a trabajar con un plantel básico y a emplear sólo la mano de obra necesaria para las actividades diarias mediante acuerdos atípicos de contratación que muchas veces presentan condiciones de precariedad. La estacionalidad es el principal factor condicionante de las formas de contratación: el número de trabajadores del sector se incrementa sustancialmente durante la temporada de más alta demanda, generando importantes requerimientos de trabajo intensivo.

La existencia de un gran número de trabajadores eventuales genera relaciones laborales que, si bien provocan reducciones en los costos, no necesariamente contribuyen a lograr una mayor competitividad en las empresas del sector. Los trabajadores tienden a estar menos comprometidos con las empresas y no llegan a conocer ni a compartir la cultura organizacional vigente. Los empresarios son también conscientes de que la precarización de la mano de obra resulta en una menor lealtad a la empresa y en niveles de calificación más bajos. Y la alta proporción de trabajadores no calificados empleados en el sector, cuyas condiciones de trabajo se caracterizan a menudo por trabajos a tiempo parcial y con un alto porcentaje de informalidad en las contrataciones, impacta en el nivel salarial.

De acuerdo con fuentes municipales de la ciudad de El Calafate, se estima que la cantidad de personas vinculadas directamente a la actividad turística es de aproximadamente 4.500 (temporada 2005-2006). En esta cifra, el sector hotelero es el que presenta mayor participación, con un 39%, seguido por el sector transporte (18%), la gastronomía (17%), las agencias de viaje (13%) y otros servicios (11%).

El personal ocupado vinculado directamente al turismo en sus actividades principales –excursiones, hotelería de alto nivel, guías de turismo– se caracteriza por su relativa buena calificación; en general, ese personal domina más de un idioma y hay una alta proporción de profesionales universitarios y técnicos. Además, la mayoría adquiere su formación profesional fuera de la provincia y presenta, también, un elevada tasa de migración en baja temporada.

Por su parte, el personal operativo que se desempeña en tareas de hotelería, restauración, comercio y servicios en general posee una menor calificación y es posible de formas de contratación temporarias y precarizadas. No se observan acciones de capacitación planificadas dirigidas a esta categoría. Como ya se

señaló, el factor estacionalidad genera límites y dificultades en el marco laboral, favoreciendo las contrataciones precarias y una alta rotación de personal. A su vez, una parte de la población vernácula aprovecha la temporada alta como fuente de segundo empleo.

En resumen, entre las principales debilidades observadas a nivel de la gestión de recursos humanos en la comarca, podemos mencionar los siguientes:

- escasa mano de obra, con problemas de ausentismo e informalidad y escasa calificación;
- empleo de mano de obra operativa primordialmente en alta temporada;
- muy altos índices de rotación de personal;
- inactividad forzosa para muchos profesionales del área de turismo durante el resto del año, lo que los obliga a desplazarse hacia otros destinos en busca de trabajo;
- concentración de la actividad turística en períodos determinados;
- aumento de costos derivados de la subutilización de la estructura existente;
- deficiente calidad en la atención al turista;
- falta de capacitación de guías en determinados idiomas,
- falta de conocimiento y de capacitación en sistemas de gestión de la calidad;
- desinterés general por acciones de capacitación, motivada por la relativa facilidad en conseguir trabajo;
- pocos incentivos de capacitación por parte de los actores empresariales. Los buenos resultados económicos y la visión cortoplacista impactan negativamente en el desarrollo de acciones en este sentido;
- muy escaso nivel de sindicalización.

DESTINOS Y PRODUCTOS POTENCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Los restantes destinos que presentan ventajas comparativas en el territorio provincial –Ruta 40, Corredor Costa Atlántica, Parque Nacional Monte León y otros– muestran características muy incipientes de desarrollo, aunque potencialmente constituyen atractivos de real valía que pueden llegar a contar con una puesta en valor a partir de las distintas inversiones de infraestructura que se están llevando a cabo en la región.

Los productos asociados a dichos destinos responden a los grupos de turismo activo (turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural), turismo científico (arqueológico y minero), turismo de deporte (nieve y pesca deportiva) y turismo de interés especial (cruceiros, trenes turísticos, sitios de patrimonio mundial, Ruta 40).

Pero se debe tener en consideración que aún se trata de atractivos más que de productos turísticos puestos en valor. Para llegar a dicha categoría, se requieren inversiones tanto públicas como privadas que permitan generar ventajas competitivas en el marco turístico regional.

La conexión entre dichos destinos es insuficiente –especialmente la aérea–, si bien es cierto que en la actualidad hay un importante proceso de inversión pública en infraestructura vial. Los escasos circuitos existentes se relacionan con visitantes que llegan por vía terrestre y se vinculan con El Calafate como principal puerta de acceso o de arribo a la región.

Las empresas que operan son de pequeño tamaño, principalmente familiares, y presentan un bajo nivel de capitalización. Se dirigen en especial al mercado interno regional, aprovechando a su vez las oportunidades derivadas del crecimiento de distintos sectores económicos, en particular el petrolero y el minero.¹¹

Estos emprendedores presentan bajos niveles de desarrollo de tecnología de gestión y sus niveles de decisión se concentran sobre todo en áreas operativas. Carecen de visión estratégica y no tienen claramente internalizado el concepto de “negocio turístico”.

Si bien existen interesantes programas de financiamiento a nivel provincial, todavía no han sido utilizados por los actores existentes. Y los organismos responsables tampoco han motivado a dichos actores a hacerlo.

Las características de empleo responden principalmente a la gestión de los propios emprendedores, a la ayuda familiar y al autoempleo. Los empleados en relación de dependencia presentan bajas categorías de calificación y sus niveles salariales son compatibles con los correspondientes al sector comercio. Las necesidades vinculadas a una mayor calificación de los recursos humanos –como los guías de turismo– se cubren temporalmente con personal foráneo.

A excepción de algunas acciones vinculadas al Estado provincial, no existen relevantes programas de formación, tanto sea para el nivel empresarial como para el nivel operativo. Los municipios locales aún no han incorporado la gestión de servicios turísticos como prioritaria, por lo que tampoco contribuyen a implementar procesos de capacitación.

11 Puede considerarse que la infraestructura hotelera resulta insuficiente para la atención de la demanda actual.

Sin embargo, a pesar de estas carencias, se prevé un interesante desarrollo potencial para estos destinos turísticos. El crecimiento de la demanda turística bajo las actuales condiciones económicas tiende a impactar favorablemente en toda la región, potenciando los productos vinculados con la Patagonia.

CONCLUSIONES

El turismo se vislumbra, cada vez más, como una firme base para muchos países y regiones en vías de desarrollo. Los efectos multiplicadores y de arrastre sobre las infraestructuras y el resto de los sectores lo sitúan como un sector propicio para inducir los procesos de crecimiento.

Sin embargo, la ausencia de modelos de desarrollo turístico sostenibles impacta negativamente en la puesta en valor de los mismos. En el caso de la Comarca Austral, el crecimiento desordenado existente amenaza la sostenibilidad tanto ambiental –por la degradación y saturación que implica– como económica –por la consecuente pérdida de competitividad– del segundo destino turístico de mayor importancia de la Argentina.

Con respecto a los nuevos destinos posibles, parece llegado el momento de emplear el turismo como instrumento de desarrollo económico y social en áreas que ofrecen numerosos atractivos de gran potencial turístico y recreativo pero que permanecen ociosos como recursos.

La falta de modelo y de directrices ha facilitado el crecimiento espontáneo, descontrolado, y en algunos aspectos caótico, que amenaza su desarrollo sustentable. Se requiere, entonces, un cambio y una adecuación de esos procesos de crecimiento que, hasta ahora, se han dado en el epicentro turístico, y que –conviene señalar– suelen darse habitualmente en destinos “de éxito” emergentes o incipiente en sus primeras fases de desarrollo.

Hemos subrayado el hecho de que las condiciones de rentabilidad del sector mejoraron sustancialmente con la crisis devaluatoria, favoreciendo a la actividad a partir de un nivel de precios vinculado a tarifas internacionales acompañado de un significativo incremento de la demanda. Pero también insistimos en el hecho de que, si ello contribuyó al crecimiento de la oferta empresarial, esta aún no ha adaptado sus estructuras a las necesidades existentes.

Por otra parte, en el marco de responsabilidad social que debe asumir todo ejercicio empresarial –compromiso particularmente importante en el sector involucrado–, se debe reiterar la importancia de incorporarse en la estrategia no sólo el beneficio económico de carácter personal/sectorial sino la atención a la sustentabilidad¹² del recurso, en mancomunidad con el desarrollo social, económico, laboral y medioambiental (Vacca, 2006).

12 En 1992, en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo

Si bien han existido importantes inversiones en distintos componentes del negocio turístico –alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, comercio y servicios relacionados–, ellas se han centrado en el factor edilicio y en la “puesta” de los negocios; y hasta el presente no se observa un direccionamiento de inversiones en intangibles, tales como tecnología de gestión, estructura gerencial y programas de formación y capacitación.

En nuestro país, la calidad integral¹³ aplicada al turismo constituye una clara innovación para este sector y surge, a su vez, como una prioritaria necesidad. La característica exportable del turismo receptivo genera la necesidad de sistematización del factor calidad, de manera de adecuarse a la cada vez más exigente demanda internacional y de lograr un mejor posicionamiento ante la competencia existente (Schinelli, 2006).

Con respecto al mercado laboral, hemos visto que prevalecen la informalidad y la precarización. La escasez de mano de obra calificada, la ausencia de programas de capacitación y los problemas derivados de la estacionalidad son límites de gran peso para el desarrollo sostenido del sector.

Si se quiere mejorar la calidad del empleo y de la mano de obra es necesario fomentar la estabilidad del empleo, las perspectivas de carrera y un horario de trabajo razonable. Mientras otros sectores de la economía ofrezcan empleos con similares niveles de remuneración pero con condiciones de contratación y de trabajo más ventajosas, y a menos que la industria turística establezca condiciones equivalentes u otros medios de compensación, se seguirá planteando el problema de la rotación de personal en el sector de la hotelería y de la restauración.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el impacto provocado por la aparición de nuevas tecnologías en el comportamiento del empleo. Ello se verifica en distinto grado según los subsectores de que se trate (transporte, agencias de viaje, restauración, hotelería). En tal sentido, resulta menester que la formación profesional y las nuevas tecnologías sean más accesibles para las pequeñas y medianas empresas, para lo cual se requiere de niveles de capacitación significativamente más altos. No se trata simplemente de crear puestos de trabajo; estos puestos han de ser de una calidad aceptable.

El bajo nivel de desarrollo en el área de formación y capacitación es un importante factor limitante para la gestión de calidad y de recursos humanos. Si bien existen instituciones que brindan conocimientos en la materia, el grado de

incorpora el factor ambiental a todo tipo de actividad, concibiendo al desarrollo sustentable como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones”. Explícitamente reconoce al sector turístico un alto potencial para la contribución positiva a la sostenibilidad de la vida en el planeta.

¹³ El concepto de “Calidad Integral del Turismo” se relaciona con las nociones de Calidad Total y abarca la competitividad y la calidad en destinos turísticos, en productos, en sectores empresariales y en la formación de recursos humanos (Gobierno de España, 1999).

aprovechamiento de las mismas y su inserción en la actividad turística es aún muy pobre.¹⁴

En tal sentido, tanto en la Comarca Austral como en los destinos potenciales de la región, resulta necesario brindar en los niveles superiores de la educación formal obligatoria una orientación laboral hacia las actividades y profesiones turísticas, complementándola con una más amplia y profunda formación en lo local.

Entonces, se advierte que se impone como prioridad el desarrollo de un proceso de planificación turística que permita el crecimiento sustentable de la Comarca Austral y la puesta en valor ordenada de los restantes destinos turísticos provinciales, mejorando el aprovechamiento del turismo como sector generador de riqueza, impulsando el desarrollo del gran potencial de recursos existentes aún no aprovechado y resolviendo los problemas ya mencionados que dificultan actualmente la gestión sostenible de los recursos en explotación. Ello implica mejorar la competitividad de los destinos turísticos, para lo cual surge como clave y prioritario la formación y capacitación a nivel empresarial y laboral.

Un modelo de desarrollo deberá tener en cuenta también el involucramiento de las distintas comunidades en la actividad turística, para lo cual se requieren acciones específicas en varios campos: educación, capacitación, apoyo especial a la creación y puesta en marcha de productos y negocios turísticos, tutorías de proyectos y macroproyectos y financiación adaptada.

En síntesis, las principales líneas estratégicas a establecer en la formulación de una política turística orientada a mejorar las condiciones de competitividad y al crecimiento ordenado del sector turístico provincial y, por ende, al desarrollo socioeconómico local, deberán estar centradas en los siguientes ejes:

- *Impulso al turismo como una prioridad provincial.* Desde los diferentes organismos y dependencias nacionales, provinciales y municipales se deberá articular y coordinar la estructuración y la implementación de una política turística tal que capitalice el cabal aprovechamiento de las oportunidades que representa el sector, anteponiendo por sobre los beneficios sectoriales los intereses de la región y de sus comunidades locales.

- *Destinos sustentables.* El objetivo de la sustentabilidad en el turismo implica desarrollar e implementar medidas que protejan la integridad del ser humano y del potencial del medio ambiente a la par que se maximizan los beneficios económicos y sociales de la actividad, estableciendo sistemas y procedimientos que involucren a la mayor parte de los actores de la región. Destinos sustentables y altamente competitivos, respaldados con calidad integrada en los servicios y procesos de atención, proveerán la base para potenciar la actividad

14 La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES) brindan carreras universitarias y terciarias vinculadas al turismo en la Provincia de Santa Cruz.

turística, contribuyendo a la plena satisfacción del turista y a fomentar el involucramiento activo de las comunidades en dichos procesos.

- *Mancomunidad entre el sector público y el privado.* Si bien el sistema turístico evidencia su desempeño en la esfera de la actividad privada, su funcionamiento efectivo depende en buena medida del apoyo de las intervenciones públicas. La conformación de una filosofía de colaboración permanente orientada a mejorar la calidad de la oferta a partir del mejoramiento de la gestión integral del sistema turístico redundará, con seguridad, tanto en beneficio de los legítimos intereses empresariales como en el simultáneo desarrollo sustentable del sector y de la región.

- *Fortalecimiento de las capacidades locales.* En la práctica, el turismo opera en el ámbito geográfico de las localidades. Ello hace necesario el fortalecimiento y la construcción conjunta de las mejores capacidades de gestión de los recursos humanos a fin de lograr una mayor diversificación en la oferta de productos, el mejoramiento en los niveles de satisfacción de los turistas y la promoción del bienestar social. Conocer y comprender la forma en que los turistas viven ese proceso, permitirá evaluar cómo somos percibidos y adoptar, en consecuencia, las acciones tanto de gobierno como de la iniciativa privada para superar las deficiencias.

- *Profesionalización de los recursos humanos.* La calidad, pertinencia y sistematización de la formación de recursos humanos resulta fundamental y debe constituir una oportunidad para demostrar que existe una ventaja competitiva en relación con otros mercados de servicios turísticos. Esto implica acciones en el orden estatal y privado: el Estado debe impulsar la creación y la oferta de programas institucionales; el sector privado debe asumir la responsabilidad empresarial y social de mejora en la calidad de los recursos humanos aplicados al servicio.

Finalmente, se concluye que el sector turístico provincial ha surgido con una significativa dinámica en los últimos años, aprovechando la coyuntura económica existente, pero con la posibilidad de concretar un sector económico sustentable y de gran potencial futuro. Para poder lograrlo, es necesario que el crecimiento espontáneo y desordenado de su principal destino se transforme en un modelo sostenible que consolide el desarrollo turístico cualitativo del mismo, contribuyendo así a la puesta en valor ordenada de los destinos turísticos potenciales y a la consolidación del turismo como importante componente de la actividad económica regional.

ANEXO: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE SANTA CRUZ



Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santa Cruz.

BIBLIOGRAFÍA

ALTÉS MACHAIN, C. (1983), *Marketing y turismo: Introducción al marketing de empresas y destinos turísticos*, Buenos Aires, Editorial Síntesis.

ÁLVAREZ SOUSA, A. (1994), *El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas*, Barcelona, Bosch.

ARTESI, L. (2003), *Desarrollo turístico en El Calafate*, Santiago de Chile, CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas.

AUGÉ, M. (1993), *Los "no lugares". Espacios del anonimato*, Barcelona, Gedisa Editorial.

AURELIO, J. et al. (1997), *Plan de Marketing y Estudio del Mercado Turístico de El Calafate*, Buenos Aires, Aresco y Subsecretaría de Turismo de Santa Cruz.

BAYON, F. et al. (1997), *Gestión de Recursos Humanos. Manual para técnicos en empresas turísticas*, Madrid, Síntesis.

BRUNETICART, A. et al. (2003), *Sociología del Trabajo Turístico*, Barcelona, Ariel Turismo.

EIGLIER, P. y E. LANGEARD (1989), *Servucción. El marketing de servicios*, Madrid, Mc Graw-Hill.

GIL, A. (2003), *Sociología del Turismo*, Barcelona, Ariel Turismo.

GOBIERNO DE ESPAÑA (1999), *Plan Integral de Calidad de Turismo Español (PCTE) 2000-2006*.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, S. T. (2005), *Informes Estadísticos*.

GRANDE, Esteban I. (1996), *Marketing de los Servicios*, BARCELONA, ESIC Editorial.

HILL, M., M. KNIGHT y M. BACA, (2003). *Tourism in developing countries: a new focus on sustainable destinations*, PA Consulting Group.

IATA (2000), *The economic benefits of air transport, 2000 edition*, Informe preparado para el Air Transport Action Group.

KOTLER, P., John BOWEN y James MAKENS (1997), *Mercadotecnia para Hotelería y Turismo*, México, Prentice-Hall Hispanoamericana SA.

LAURELLI, E. et al. (1990), *Reestructuración económica global. Efectos y políticas territoriales*, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert-CEUR.

MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE, S. T. (2005), *Informes Estadísticos temporalada 2003/2004*, El Calafate.

MUÑOZ OÑATE, F. (1994), *Marketing turístico*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2001), *El desarrollo de los recursos humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la restauración y el turismo*, Informe para el debate de la Reunión Tripartita sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, el Empleo y la Mundialización en el Sector de la Hotelería, la Restauración y el Turismo, Ginebra, OIT.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999), *Turismo Panorama 2020*, Madrid, Avance.

RODRÍGUEZ, M. et al. (2000), *El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad y desarrollo*, Granada, Editorial Urbano.

SAILLARD, Y. (1995), *Globalización, localización y especialización sectorial*, París, Editions La Découverte.

SALVIA, A. (comp.) (1999), *La Patagonia de los noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden*, Buenos Aires, Editorial La Colmena-UBA-UNPA.

SALVIA, A. et al. (1992), *Reestructuración económico-social y evolución del mercado de trabajo en la Provincia de Santa Cruz*, Buenos Aires, IDEP-ATE.

SCHINELLI, D. (2007), "La Problemática de las Estancias Turísticas de la Patagonia Austral. Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad aplicado al Producto Turístico", en *Turismo en Santa Cruz. Herramientas de Gestión Aplicadas al Sector*, tesis de posgrado, Maestría en Administración de Negocios, UNICEN-UNPA.

----- (2000), "Estructura económica y circuitos productivos en la Patagonia Austral de los '90", en *Revista Observatorio Patagónico*, n° 1, Caleta Olivia.

SCHMITT, B.H. (2004), *Administración de las experiencias de los clientes con las marcas*, México, McGraw-Hill.

SECRETARÍA DE TURISMO. PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (2005), *Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable*, Buenos Aires.

STALKER, P. (2000), *Workers without frontiers. The impact of globalization on international migration*, Ginebra, Lynne Rienner Publishers.

VACCA, C. (2006), "Las cabañas y bungalows como opción de alojamiento en destinos turísticos. Una estrategia competitiva para el subsector", en *Turismo en Santa Cruz. Herramientas de Gestión Aplicadas al Sector*, tesis de posgrado, Maestría en Administración de Negocios, UNICEN-UNPA.

ZÁRATE, R. et al. (2000), *Patagonia Austral. Integración inconclusa y subdesarrollo inducido*, Rosario, Homo Sapiens Editora.

RESUMEN

El presente trabajo deriva de estudios realizados anteriormente sobre la caracterización económica de la Provincia de Santa Cruz. En dicho contexto se releva a la actividad turística como emergente de una nueva dinámica productiva.

La estructura económica provincial se ha basado históricamente en el sector primario, con preponderancia del agregado “minas y canteras” –en especial la rama petrolera–. Destacan en dicha actividad sus características de enclave y de recurso agotable.

En la actualidad se observa un importante flujo de inversiones públicas –y en menor medida privadas–, las que impactarán a futuro en el desarrollo económico provincial. Las obras de infraestructura en ejecución propenden a dotar a la provincia de mejores condiciones de competitividad, favoreciendo la diversificación de sus actividades.

En ese contexto emerge la actividad turística con gran dinamismo y evidenciando un enorme potencial, especialmente a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas derivadas de la crisis devaluatoria del año 2001. El principal atractivo se centra en el producto “glaciares”. Sin embargo, la región cuenta

también con muchos otros vinculados a la naturaleza, que favorecen el desarrollo de nuevas dimensiones de la actividad turística, tales como el turismo de intereses especiales, científico, cultural, de aventura.

La ciudad de El Calafate, localizada en el Departamento de Lago Argentino, se constituye en el epicentro de la región. El flujo de inversiones recibido, ha generado en los últimos años un significativo incremento de la actividad, repercutiendo en el empleo vinculado al sector; el cual posee características de extrema particularidad.

Surge como objetivo del presente trabajo el análisis del sector turístico provincial y su vinculación con el empleo, así como también de los aspectos a tener en cuenta para su desarrollo sustentable en el tiempo. Resulta necesario analizar tanto las ventajas comparativas existentes como los problemas estructurales que enfrenta el sector para lograr condiciones de competitividad en el mercado turístico mundial. Por otra parte, el análisis de la morfología de la estructura empresarial permite comprender más acabadamente las formas de contratación existentes y su proyección en el tiempo.

ABSTRACT

The present piece of work derives from studies done previously about the economic characterization of the Province of Santa Cruz. In this context, it is relevant to point out the tourist activity as an emergent of a new productive dynamic.

The economic provincial structure has been historically based on the primary sector, with a special stress on the mining activity –namely, the oil industry–. It is important to state the characteristics of the latter, that is to say, the fact that it is set in a way of an enclave and that it is a non-renewable resource.

At present, an important flow of public investments is observed –and also private ones, but in a lesser degree– which will impact on the economic provincial development in the future.

The infrastructure works which are being carried out tend to provide the province with better conditions for economic competition, favouring the diversification of its activities.

In this context, the tourist activity stands out with great dynamism and evidences an enormous potential, especially with the new macroeconomic conditions derived from the devaluation in 2001.

The main attraction is centred on the product “glaciers”. However, the region has many other attractive interests related to nature, making the development of new dimensions of the tourist activity possible, such as scientific, cultural, adventure or other special interests tourism.

The city of El Calafate, located in the department of Lago Argentino, constitutes the center of the region. The flow of investments received has generated a meaningful increase of the activity in the latest years, impacting on the employment rate of the sector, which has extremely particular characteristics.

Consequently, the objective of the present work is the analysis of the provincial tourist sector and its relationship with employment, besides the aspects to bear in mind for its sustainable development. It is necessary to analyse the existing comparative advantages as well as the structural problems that this sector has to face to achieve conditions of economic competition in the world tourist market. On the other hand, the analysis of the morphology of the structure of the companies will permit us to understand the existing ways of labour contract and their projection in time more thoroughly.

PALABRAS CLAVE

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
PATAGONIA AUSTRAL
TURISMO Y EMPLEO
MERCADO LABORAL

KEY WORDS

ECONOMIC TRANSFORMATION
SOUTHERN PATAGONIA
TOURISM AND EMPLOYMENT
LABOUR MARKET

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

1. Deberán presentarse dos copias, texto tipeado a doble espacio, en papel tamaño A4, no transparente, escrito de un solo lado, con márgenes razonables y sin enmiendas. Junto con las copias deberá incluirse un diskette o CD.
2. Extensión de los trabajos. Los artículos deberán redactarse procurando no superar los 35 originales. Las comunicaciones, 15 originales y la crítica de libros, 5 originales.
3. Los trabajos deberán acompañarse de un resumen del contenido, en inglés y en castellano, con una extensión máxima de 25 líneas de texto. Deberán presentarse, además, 4 palabras clave en castellano y en inglés.
4. Los mapas y gráficos se incluirán en hojas separadas del texto y se entregarán los archivos electrónicos originales (numerados y titulados correctamente y con indicación de las unidades en que se expresan los valores así como las fuentes correspondientes). Se sugiere evitar toda complejidad innecesaria en su elaboración. Deberán formularse en blanco y negro. Los gráficos o mapas se presentarán para su reproducción directa en alguno de los siguientes programas: Excell, Adobe Illustrator, Adobe PDF y/o Photoshop. En este último caso, la definición no deberá ser inferior a 300 dpi para un tamaño de 12 por 20cm aproximadamente.
5. No se admitirán agregados ni modificaciones una vez que los originales sean entregados a la imprenta.
6. Los trabajos deberán ser originales. Toda aclaración con respecto a versiones anteriores del trabajo (publicación anterior como documento interno, comunicaciones a Congresos, mención de colaboradores, etc.) se mencionará en la primera página, así como la institución de pertenencia del autor, sin numeración de cita al pie.
7. Las citas al pie de página deberán ser numeradas correlativamente, indicando exclusivamente autor y año si se trata de cita bibliográfica.
8. La bibliografía se incluirá al final del trabajo, ordenándose alfabéticamente por autor y colocando primero el apellido y luego el nombre, separando entre comas cada dato. Se observará el siguiente orden:
 - a) apellido y nombre del autor; b) año de publicación; c) título de la obra, en itálicas; d) volumen, tomo, etc., si lo hubiera; e) editor, si se desea; e) lugar y fecha de publicación; f) página, número.
 Si se trata de un artículo, éste irá entre comillas, marcándose en itálicas la obra o la revista en la que fue publicado. Ejemplos:
 1. ROFMAN, Alejandro y Luis A. ROMERO (1973), *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*, Amorrortu editores, Buenos Aires, pág. 40.
 2. LEITE, Marcia (2000), "Trabalho e sociedade em transformação", en *Sociologias Trabalho*, N° 4, año 2, jul/dic, pp. 66-87, Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
9. Para los colaboradores de la sección Reseñas Bibliográficas se sugiere observar las características de la presentación en la propia revista.
10. En ningún caso los originales serán devueltos. Los artículos presentados son sometidos a una evaluación del Comité Editorial y de árbitros anónimos.

Con la publicación del trabajo, el autor recibirá dos ejemplares de ESTUDIOS REGIONALES y MERCADO DE TRABAJO

**ESTA EDICIÓN CUENTA CON EL PATROCINIO DE LOS SIGUIENTES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:**

- Proyecto UBACyT S108. *Heterogeneidad estructural y desigualdad social. Estudio sobre la movilidad laboral de los mercados de trabajo en Argentina (1995-2005)*, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
- UBACyT S056. *Trabajo sin aportes previsionales, mercado de trabajo y transformaciones territoriales en la zona litoral*, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
- P-59903 *El mercado laboral de la provincia de San Luis*. Ciencia y Técnica-Universidad Nacional de San Luis.
- La situación social en el conurbano jujeño en los albores del Siglo XXI. El caso de Alto Comedero y Palpalá*. Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy (SECTER) y de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Departamento Académico San Salvador).
- Los procesos de exclusión en la región NEA*. Centro de Estudios Sociales-Secretaría de Ciencia y Técnica UNNE-Universidad Nacional del Nordeste. PIP 6468 (CONICET)
- La Patagonia austral y el mercado laboral en un contexto de transformación económica. Entre la profundización del modelo rentístico y las perspectivas de diversificación económica*. Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia.
- PAV-2003/00181 Préstamo BID 1201/OC-AR. *TIC's y educación en la Argentina. Caminos recorridos y desafíos pendientes*. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
- Circuitos económicos regionales antes y después de la devaluación*, Proyecto CONICET 5459/05.